

28


OSAL
 Observatorio Social
 de América Latina

Una década de movimientos populares en América Latina

Ecuador - F. Ramírez Gallegos | **Brasil** - R. Leher, A. Coutinho da Trindade, J. A. Botelho Lima y R. Costa | **Bolivia** - P. Chávez León, D. Mokrani Chávez y P. Uriona Crespo | **Argentina** - G. Antón, J. Cresto, J. Rebón y R. Salgado

Debates

K. Pirker y O. Nuñez - El golpe de Estado en Honduras | M. Sanzana Calvet - Los saqueos en Concepción tras el terremoto del 27 de febrero | S. Manigat - El movimiento social haitiano en 2010

Entrevista

Horizontes de la movilización popular en México y América Latina
 A. Bartra

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

H. Ouviaña - Traducción y nacionalización del marxismo en América Latina
 René Zavaleta - La burguesía incompleta y Ni piedra filosofal ni *summa* feliz

Memoria latinoamericana

R. Álvarez Vallejos - La Unidad Popular y las elecciones de 1970



CLACSO



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

OSAL Observatorio Social de América Latina

Año XI Nº 28 / publicación semestral / noviembre de 2010

Editores

Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO

Director

Massimo Modonesi

Secretario de Redacción

Carlos Yamir Bauer Lobos

Colectivo Editorial

Guillermo Marcelo Almeyra Casares, Rolando Álvarez Vallejos, Armando Chaguaceda Noriega, Luciano Concheiro, Massimo Modonesi, Dunia Mokrani Chávez, Lucio Fernando Oliver Costilla, João Marcio Mendes Pereira, Franklin Ramírez Gallegos, Julián Rebón, Agustín Santella, Carlos Abel Suárez

Consejo Consultivo Editor

Gerardo Caetano [Uruguay], Suzy Castor [Haití], Margarita López Maya [Venezuela], Carlos Walter Porto Gonçalves [Brasil], Pierre Salama [Francia], Boaventura de Sousa Santos [Portugal], Joan Subirats [España], Luis Tapia [Bolivia], Juan Valdés [Cuba]

Asistente del OSAL

Juan Chaves

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

- Argentina y Uruguay, coordinado por María Celia Cotarelo [Programa de Investigación del Movimiento de la Sociedad Argentina, PIMSA]
- Bolivia, coordinado por Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo [Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES-UMSA]
- Brasil, coordinado por Roberto Leher [Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, LPP-UERJ]
- Colombia, coordinado por Guillermo Correa Montoya [Escuela Nacional Sindical, ENS]
- Chile, coordinado por Juan Carlos Gómez Leyton [Departamento de Investigaciones de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, DI-UARCIS]
- Costa Rica, coordinado por Sindy Mora Solano [Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, IIS-FCS-UCR]
- Ecuador, coordinado por Mario Unda [Centro de Investigaciones CIUDAD]
- Guatemala, coordinado por Simona Yagenova [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de Guatemala, FLACSO-Guatemala]
- México, coordinado por Lucio Fernando Oliver Costilla y Massimo Modonesi [Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, FCPS-UNAM]
- Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras, coordinado por Marco A. Gandásegui, h. [Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosemena", CELA]
- Paraguay, coordinado por Quintín Riquelme [Centro de Documentación y Estudios, CDE]
- Perú, coordinado por Ramón Pajuelo Teves [Instituto de Estudios Peruanos, IEP]
- República Dominicana y Puerto Rico, coordinado por Octavio Figueroa [Centro de Estudios Sociales "Padre Juan Montalvo"]
- Venezuela, coordinado por Marco Antonio Ponce [Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA]

Escriben en este número

Rolando Álvarez Vallejos, Gustavo Antón, Reginaldo Costa, Alice Coutinho da Trindade, Armando Chaguaceda Noriega, Patricia Chávez León, Jorge Cresto, Roberto Leher, Jaqueline Aline Botelho Lima, Massimo Modonesi, Dunia Mokrani Chávez, Fernando Munguía Galeana, Omar Nuñez, Hernán Ouviaña, Kristina Pirker, Franklin Ramírez Gallegos, Julián Rebón, Rodrigo Salgado, Martín Sanzana Calvet, Pilar Uriona Crespo

Informes

Dirigirse a <www.clacso.org.ar/clacso/areas-de-trabajo/area-academica/osal> | <[www.clacso.org](mailto:osal@clacso.edu.ar)> | <osal@clacso.edu.ar> | <osal.redaccion@yahoo.com.mx>



Año XI N° 28 - noviembre de 2010

**Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales**

Divulgación Editorial Carlos Abel Suárez

Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO

Responsable Editorial Lucas Sablich

Director de Arte Marcelo Giardino

Responsable de Contenidos Web Juan Acerbi

Webmaster Sebastián Higa

Logística Silvio Nioi Varg

Diseño de Tapa y Producción Fluxus Estudio

Impreso en Gráfica Laf – Monteagudo 74, Villa Lynch, San Martín – Pcia. de Buenos Aires.

Tirada 700 ejemplares

Propietario: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO

ISSN: 1515-3282 – Impreso en Argentina – Noviembre de 2010

Copyright Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Domicilio de la Publicación

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 | piso 4º G | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | e-mail clacso@clacso.edu.ar | web www.clacso.org.ar



Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO cuenta con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional
de las Illes Balears



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

CLACSO cuenta con el apoyo de la
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI)



La Revista Observatorio Social de América Latina *OSAL* es indizada en Directory of Online Access Journals <www.doaj.org>, Directorio Latindex <www.latindex.unam.mx>, Unesco Social and Human Science Online Periodicals <www.unesco.org/shs/shsdc/journals/shsjournals.html>, Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe <www.clacso.org.ar/biblioteca/revistas/>, Latin Americanist Research Resources <<http://lanic.utexas.edu/larrp/laptoc.html>> e Hispanic American Periodicals Index <<http://hapi.ucla.edu>>.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

Dirección Nacional del Derecho de Autor: Expediente Nº 641.603

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Observatorio Social de América Latina (OSAL) y sus respectivos isotipos y logotipos son marcas registradas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Sumario

Editorial Massimo Modonesi	11
Experiencias: una década de movimientos populares en América Latina	
<hr/>	
Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010) Franklin Ramírez Gallegos	17
Os rumos das lutas sociais no período 2000-2010 Roberto Leher, Alice Coutinho da Trindade, Jaqueline Aline Botelho Lima y Reginaldo Costa	49
Una década de movimientos sociales en Bolivia Patricia Chávez León, Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo	71
Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina Gustavo Antón, Jorge Cresto, Julián Rebón y Rodrigo Salgado	95

Debates

- Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras
Kristina Pirker y Omar Núñez 119
- Desastre natural y acción colectiva de los sectores populares en
Chile: los saqueos en Concepción tras el 27/F
Martin Sanzana Calvet 145
- Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad política.
El movimiento social haitiano en 2010
Sabine Manigat 159

Entrevista

- Horizontes de la movilización popular en México y América
Latina. Entrevista con Armando Bartra
Massimo Modonesi 173

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

- Traducción y nacionalización del marxismo en América Latina. Un
acercamiento al pensamiento político de René Zavaleta
Hernán Ouviaña 193
- La burguesía incompleta / Ni piedra filosofal, ni *summa* feliz
René Zavaleta 209

Memoria latinoamericana

- La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en
Chile: la batalla electoral como vía revolucionaria
Rolando Álvarez Vallejos 219

Reseñas

El Estado. Campo de Lucha
Fernando Munguía Galeana

243

**La revolución en el bicentenario. Reflexiones sobre la
emancipación, clases y grupos subalternos**
Armando Chaguaceda Noriega

251

Lista de publicaciones recientes y recibidas

259

Editorial

OSAL: diez años y caminando

MASSIMO MODONESI

El primer número de la revista OSAL fue publicado en junio de 2000 bajo la dirección de José Seoane y se centraba en dos grandes movilizaciones que abrían la década y el siglo: la huelga estudiantil en la UNAM y la revuelta indígena en Ecuador. Entre los autores figuraban Pablo González Casanova, Ana Esther Ceceña, Raquel Sosa, Franklin Ramírez –que acaba de integrarse al Colectivo Editorial–, Pablo Dávalos y Pablo Ospina, todos ellos intelectuales destacados cuyas reflexiones marcaron la historia del pensamiento crítico y de CLACSO a lo largo de la década. Hoy la revista llega a su número 28 con diez años de vida.

OSAL nace con la década, en coincidencia con el despertar de un ciclo, una oleada de movilizaciones que encontraron en América Latina persistencia y consistencia. La revista contenía, en su primera etapa, las cronologías del conflicto social de los distintos países latinoamericanos que ahora se publica en la página del OSAL en el portal de CLACSO. El acierto de hacer cronologías en el 2000 fue refrendado, año tras año, por el crecimiento y la politización de las luchas en la mayoría de los países de la región y ahora, diez años después, este seguimiento cotidiano permite reconstruir el hilo rojo de una serie de procesos que marcaron la historia contemporánea latinoamericana y que sigue operando en el tiempo presente, en la coyuntura, en las disputas todavía abiertas, en los conflictos en los que se está jugando el futuro de las clases subalternas.

El trabajo y los éxitos acumulados por los directores que me antecedieron en los diez años de vida de la revista –José Seoane, Maristella Svampa y Guillermo Almeyra, todos ellos amigos queridos y compañeros imprescindibles– imponen un desafío para que la revista siga creciendo y mejorando en la continuidad.

Entre las novedades señalo algunos cambios humanos: la llegada de Carlos Bauer como secretario de redacción en la sede de México –quien se suma a la labor de Juan Chaves en Buenos Aires– y la incorporación de Dunia Mokrani,

Franklin Ramírez y Rolando Álvarez, lo cual amplía a Bolivia, Ecuador y Chile –además de Argentina, Brasil, México y Cuba– la composición latinoamericana del Colectivo Editorial. A este espacio también se sumará el mexicano Lucio Oliver en vista de la articulación con el otro pilar del OSAL, los Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana, de los cuales es coordinador general.

Un renovado énfasis marcará a este y a los próximos números en los contenidos de la revista. Ella será estrictamente de y para los movimientos sociales y políticos latinoamericanos, una revista dedicada a dar a conocer estudios y análisis sobre las experiencias de movilización que marcan el acontecer cotidiano de la región. En esta dirección, el primer número del año –el próximo número 29– será un anuario de la conflictualidad socio-política en América Latina, cuyos contenidos fundamentales serán balances y cronologías generales y por país de las movilizaciones del 2010. El segundo número del año, como este con el cual empieza mi tarea de director, estará dedicado a problemáticas generales y a visibilizar experiencias de lucha.

En este número 28, en la sección *Experiencias* el acento está puesto en el balance de la década 2000-2010, una década de movilizaciones y luchas que, a diferencia de las dos décadas anteriores, alcanzaron victorias importantes y abrieron brechas en las estructuras de dominación. La década, más allá de las particularidades nacionales, marca un triunfo incuestionable: el fin de la hegemonía neoliberal. Aun cuando el neoliberalismo no haya desaparecido, el fortalecimiento y la politización de la resistencia –junto a las cíclicas crisis económicas– quebraron el consenso sobre el cual reposaba y abrieron nuevos escenarios de disputa que de lo social subieron a lo institucional, tanto en la esfera gubernamental como en la configuración estatal. En esta ocasión, por medio de la mirada y la pluma crítica de tres miembros de nuestro colectivo (Dunia, Franklyn y Julián), centraremos la mirada en Argentina, Ecuador y Bolivia, tres países en los que durante la década se transformaron profundamente las relaciones políticas y donde la irrupción de fenómenos de rebelión popular quebró el orden institucional y abrió nuevos escenarios, por cierto actuales y objeto de intensas polémicas políticas e intelectuales. En la experiencia brasileña –analizada por el comité de seguimiento del conflicto en Brasil del OSAL encabezado por Roberto Leher– la transformación no pasó por una crisis y un quiebre político sino, a partir de 2003, por el recambio institucional y la llegada al gobierno de Lula y el PT, lo cual implicó un complejo cambio de escenario para las luchas y la resistencia social de trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. En la sección *Debates*, Kristina Pirker y Omar Nuñez problematizan el golpe de Estado en Honduras, un acontecimiento fundamental de fin de década cuyas implicaciones y consecuencias merecen ser analizadas y debatidas más allá de la denuncia. En otro rubro, Martín Sanzana cuestiona, desde Chile, la criminalización de las reacciones sociales al terremoto, mientras que Sabine Manigat analiza las tensiones que recorren al movimiento social haitiano después de la catástrofe ocurrida allí. La entrevista de este número es con Armando Bartra –destacado intelectual mexicano cuya obra merecería ser más conocida en América Latina– quien reflexiona sobre algunos tópicos generales que atraviesan el debate latinoamericano y profundiza en el análisis de la situación mexicana,

caracterizando al autoritarismo gubernamental y los movimientos de resistencia. En la sección de *Aportes del pensamiento crítico latinoamericano*, Hernán Ouviña recupera las contribuciones de René Zavaleta a la teoría política marxista y publicamos dos breves artículos del propio Zavaleta que no aparecen en la reciente antología compilada por Luis Tapia y publicada por CLACSO. En la sección *Memoria Latinoamericana*, 40 años después, Rolando Álvarez vuelve sobre la historia de la victoria de 1970 de la Unidad Popular y Salvador Allende. Finalmente las reseñas invitan a la lectura de publicaciones recientes de CLACSO relacionadas con la problemática de los movimientos y la conflictualidad social.

Con este número cerramos los primeros diez años de la revista del OSAL, una publicación que tiene futuro porque, como decía Antonio Gramsci, no podemos prever su desenlace pero sabemos que habrá conflicto.

Buena lectura.

Experiencias

Una década de movimientos populares en América Latina

Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)

Franklin Ramírez Gallegos

Os rumos das lutas sociais no período 2000-2010

Roberto Leher, Alice Coutinho da Trindade, Jaqueline Aline Botelho Lima y Reginaldo Costa

Una década de movimientos sociales en Bolivia

Patricia Chávez León, Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo

Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en Argentina

Gustavo Antón, Jorge Cresto, Julián Rebón y Rodrigo Salgado

Fragmentación, reflujo y desconcierto

Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)

FRANKLIN RAMÍREZ GALLEGOS

Profesor e investigador de FLACSO-Ecuador.

Resumen

Para entender la acción colectiva en el Ecuador de la primera década del siglo, es necesario atender a dos actores fundamentales: el movimiento indígena ecuatoriano y el movimiento construido en torno al liderazgo de Rafael Correa. En este artículo se realiza una retrospectiva histórica sobre la génesis e institucionalización del primero en las movilizaciones contra las medidas neoliberales a inicios de los años noventa y se da cuenta de su papel en los acontecimientos que marcaron la primera mitad de la presente década. Asimismo, se explica el surgimiento de la figura de Rafael Correa y su movimiento Alianza País a través del desgaste del movimiento indígena, arrastrado en la crisis definitiva de legitimidad del sistema de partidos surgido en los años setenta. En esta nueva coyuntura se analizan el triunfo de Alianza País en las presidenciales de 2006 así como el proceso constituyente al que dio lugar, sin dejar de lado los roces de Correa con el movimiento indígena y la naturaleza y alcances del posneoliberalismo correísta.

Abstract

To understand collective action in Ecuador in the first decade of the century, it is necessary to regard two central actors –the Ecuadorian indigenous movement and the movement built on Rafael Correa’s leadership. This article reviews the historical aspects of the Ecuadorian indigenous movement, including its inception and institutionalisation in demonstrations against neoliberal measures in the early nineties and notes the role it played during the defining events of the first half of the current decade. Additionally, it elaborates on the emergence of Rafael Correa’s figure and his Alianza País movement as the indigenous movement waned during the acute legitimacy crisis of the party system, which began in the seventies. In this context, the article explores the success of Alianza País in the 2006 presidential elections, as well as the resulting constitutional process that ensued, without excluding the friction between Correa and the indigenous movement and the essence and scope of Correa’s post-neoliberalism.

Palabras clave

Movimiento indígena, asamblea constituyente, acción colectiva, posneoliberalismo, multitud

Keywords

Indigenous movement, constitutional assembly, collective action, post-neoliberalism, multitude

Cómo citar este artículo

Ramírez Gallegos, Franklin 2010 "Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Introducción

El sinuoso desenvolvimiento del campo de los movimientos sociales en el Ecuador del siglo XXI está marcado por dos momentos contradictorios. Por un lado, la incorporación del movimiento indígena ecuatoriano (MIE) en las arenas de la política instituida y su mismo acceso al poder político en 2003 se producen en un momento en que la contundencia de la crisis de legitimidad del sistema de representación, agudizada en 2005, llega al punto de canibalizar a todos los actores que habían orbitado en torno suyo, incluso aquellos que, como el MIE, operaron, desde dentro y desde fuera del sistema, en procura de su transformación radical. La pérdida de la centralidad política que el movimiento indígena conquistara a lo largo de los años noventa y el reflujo de la movilización social aparecerían como correlatos de este momento.

Por otro lado, la estructura de oportunidades abiertas por la misma crisis del sistema político y la ilegitimidad de los partidos permitió la emergencia y consolidación de un liderazgo de vocación transformacional –Rafael Correa es electo presidente a fines de 2006– que, aun si ocupa prácticamente el mismo registro discursivo abierto por el MIE y sus aliados durante los años noventa, no integra a gran parte de dichas dinámicas en el centro del emergente bloque de articulaciones políticas que hoy en día impulsan un proceso de cambio en el país. Entre las coincidencias programáticas con dicho bloque y la relativa subsidiaridad en la conducción del tránsito post-neoliberal –cuestiones visibles en el transcurso de la Asamblea Nacional Constituyente (2007-2008)– las organizaciones sociales han resentido un profundo desconcierto y desacomodo en sus alineamientos, programas y formas de acción colectiva.

Entre uno y otro momento se dibujó un breve interregno de una emergente movilización social (2005-2006) que, sin sólidas estructuras organizativas, tomó la plaza pública en nombre de un discurso que combinaba la utopía de refundar la "República sin partidos" con la más sosegada voluntad de recomponer los fundamentos éticos de la democracia. Menos ruidoso pero más heterogéneo y urbano que en décadas pasadas, este activo segmento de ciudadanos indignados solo creía encontrar en su seno las reservas morales necesarias para transformar la política instituida. Nunca fue suficiente. Las demandas de reforma política de la impaciente *multitud anti-partidaria* quedaron represadas en medio del bloqueo de los partidos para abrir cualquier escenario de cambio que no fuese plenamente controlado desde los propios centros del sistema político. Se ampliaron entonces las opciones para que, en lo inmediato, ganen eco las agendas de cambio político radical.

La emergencia de Correa y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (2007) quebraron el dominio de las fuerzas del *establishment*, profundizaron las perspectivas para la despartidización del orden político y abrieron una fase post-neoliberal de organización del Estado y la economía. Al interior de estas coordenadas, las fuerzas progresistas y populares del país pujan –muchas veces entre sí– por fijar los contenidos específicos de los órdenes alternos. La derecha y los sectores neoconservadores, muy disminuidos electoralmente, apenas si han alcanzado a reconducir dicho campo de debate.

La debilidad de las élites tradicionales se prolonga desde mediados de los noventa¹. Tras el aparente consenso “modernizador”, el reordenamiento neoliberal no consiguió desactivar, y más bien estimuló, entre las fracciones dominantes, fuertes disputas por la orientación de las privatizaciones y el control de segmentos estratégicos del mercado. Así, incluso si la derecha controlaba los espacios de representación política –dominó la arena legislativa entre 1990 y 2006– no conseguía consistentes niveles de acuerdo político, entre los estratos y capas a los que representaba, para instaurar formas estables y coherentes de gobierno con la capacidad de irradiar y ser reconocidas por el resto de la sociedad. Dicha atrofia hegemónica (Zavaleta Mercado, 2008) exacerbó la turbulencia política, ralentizó el avance del neoliberalismo y extendió las oportunidades para que diversas organizaciones sociales desafiaron reiteradamente el *statu quo*.

Y es que desde el primer levantamiento indígena de 1990 y, sobre todo, luego de tres revueltas cuyo desenlace fue un derrocamiento presidencial (1997, 2000, 2005), la batalla entre fuerzas consolidadas –los partidos políticos que dominaron la escena democrática desde el retorno en 1979– y actores emergentes –nuevas organizaciones y movimientos políticos y sociales– se colocó como uno de los *diferendos constitutivos* de la democracia ecuatoriana. No se trataba de simples episodios de ingobernabilidad o de la fragilidad institucional de la arquitectura democrática, como una cierta ciencia política conservadora lo ha interpretado, sino de la vigencia de un ciclo de desacato y asedio social a las figuras dominantes del ordenamiento político (Ramírez Gallegos, 2005). Dicho diferendo ha estado en la base de las líneas de cambio político a lo largo de la última década.

Para Pablo Andrade (2005: 61), en efecto, durante este período se produce una “democratización de la democracia” en la medida en que nuevos movimientos y actores sociales ensayan una expansión de la esfera pública desde la cual pasan a disputar a los políticos el monopolio de las funciones de agregación de intereses y de representación mientras –habría que agregar– incrementan su dinamismo en las arenas extraparlamentarias. La movilización indígena y la creación en 1995 del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK)² –brazo electoral del MIE– supusieron así el desplazamiento de los partidos tradicionales de las administraciones locales, en zonas de predominio étnico, y abrieron paso a novedosas formas participativas de gestión del poder local.

La tensión entre partidos y nuevos actores sociales colocó, progresivamente, a las propias reglas del juego democrático en el centro de la contienda política: en una década se realizaron, en efecto, dos Asambleas Constituyentes activamente promovidas por movimientos sociales, fuerzas de izquierdas y el conjunto del campo popular. La sucesiva reconfiguración de la comunidad política evidenciaba

los problemas de partidos y élites dominantes para retener el control global de las instituciones políticas. Aun así, una coalición derechista dominó la Convención de 1998. Se consagraron, entonces, constitucionalmente el modelo privatista y la agenda neo-liberal. En medio de una débil representación de las izquierdas, los principales movimientos sociales reivindicaron como sus conquistas la extensión de los derechos sociales, el reconocimiento de los derechos colectivos y la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana.

De la mano de la popularidad del presidente Correa las izquierdas alcanzaron el pleno control de la Convención de 2007-2008. Aun en medio del declive de la movilización social, la nueva Carta Magna constitucionalizó la salida del neoliberalismo, amplió aun más el espectro de los derechos, consagró la plurinacionalidad del Estado, innovó en materia de derechos ambientales, extendió radicalmente los espacios de participación popular y, sobre todo, llevó más lejos que nunca las demandas por la des-partidización del orden político. Descontando la ratificación del presidencialismo –que la izquierda combatió diez años atrás–, el predominio de este conjunto de postulados expresaba que el conflicto social y la lucha política que antecedieron a la Convención consiguieron delinear un horizonte de comprensión común –que no una ideología similar– para vivir en, hablar de y actuar sobre órdenes sociales caracterizados por específicos modos de dominación. Aun en este contexto, las disputas entre el ejecutivo, la Asamblea y los movimientos sociales no fueron menores. La Constituyente consiguió no obstante integrarlas en su seno generando una fluida dinámica de interlocución y reconocimiento político entre las fuerzas progresistas.

Es, precisamente, la lógica del reconocimiento la que habría entrado en crisis en la transición post-constituyente (2009). Por un lado, la sobrecarga del poder legislativo, obligado constitucionalmente a aprobar más de once leyes fundamentales en un año, desincentiva cualquier debate público robusto dentro y fuera de las arenas parlamentarias. Por otro, la sólida implantación del liderazgo presidencial, apuntalado en un carrusel de éxitos electorales, acelera las tendencias gubernativas a subestimar el lugar de la acción colectiva autónoma en el proceso democrático. Los espacios de interpelación política entre las organizaciones sociales y el bloque en el poder tienden, así, a jugar un rol periférico en el tránsito institucional ecuatoriano. Ello ha redundado, más allá de la política redistributiva del régimen, en escenarios de confrontación que fragmentan el campo progresista y abren interrogantes sobre la consistencia del proceso de cambio que lidera Rafael Correa. La emergencia de nuevos terrenos de movilización –la conflictividad ambiental– anuncia, a su vez, el sentido de alguna de las contradicciones centrales de la ruta post-neoliberal.

El presente texto escarba, en suma, en las trayectorias de la acción colectiva democrática a lo largo de la última década a la luz de los factores del proceso político que, en el presente, han determinado un declive de su visibilidad e influencia en la disputa por el cambio y una cierta transformación de sus agendas de lucha.

Tan cerca y tan lejos (2000-2005)

Para inicios del siglo XXI, el movimiento indígena –y, en particular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)– se había colocado como el eje articulador del conjunto de organizaciones populares y fuerzas de

izquierdas en el país. La tortuosa modernización neoliberal, encaminada en medio de un intenso faccionalismo entre los sectores dominantes, había ampliado la estructura de oportunidad para la consolidación del MIE y para la extensión de su programa político más allá de las reivindicaciones étnicas. Su activismo anti-neoliberal hizo de la agenda india una compleja amalgama de demandas indentitarias, ciudadanas y clasistas. Ello facilitó cierta unidad de acción con viejas y nuevas organizaciones sociales y militantes de izquierdas.

Precisamente, luego de diversos intentos, la creación de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) en 1995 apareció como el acumulado de diversas formas de lucha que buscaban nuevas vías de coordinación política distantes de la "forma-partido". Además de la CONAIE, la CMS estaba integrada por la Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), el sindicato público aglutinado en la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC), movimientos de pobladores urbanos y organizaciones de mujeres y jóvenes. Se trataba del más ambicioso intento de articulación de la nueva corriente de organizaciones sociales. Su dinámica organizativa, más descentrada y compleja, difería de otras instancias de coordinación controladas por la vieja izquierda partidaria: el Frente Popular, que agrupa al profesorado público y a los gremios estudiantiles y universitarios, bajo la tutela del Movimiento Popular Democrático (MPD, línea pro-china); y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que articula a centrales sindicales y ha expresado históricamente a la izquierda socialista y comunista.

El protagonismo político de la CONAIE y de la CMS en la resistencia al ajuste neoliberal afirmó la opción de las organizaciones indígenas para crear su propia estructura de participación política. Las demandas de plurinacionalidad, autodeterminación y territorialidad, tres ejes del Proyecto de la CONAIE (1994), exigían reformas que debían ser procesadas desde dentro del sistema político. El crecimiento y liderazgo del MIE hacían inviable que pudiera continuar delegándose en partidos afines la tarea de avanzar en tales reformas: para 1995 se creó el Pachakutik. No era entonces –como ha planteado Claus Offe en su modelo sobre la institucionalización de los movimientos sociales (1992)– el agotamiento de la estrategia de confrontación lo que impulsó al MIE a transformar su naturaleza organizativa. Al contrario, la lucha extraparlamentaria había hecho del movimiento un actor político exitoso que empezaba a generar adhesiones y a representar intereses que iban más allá de su base original.

La consistencia del MIE y sus aliados se puso a prueba en la Asamblea Constituyente de 1998 convocada luego del derrocamiento presidencial de Abdalá Bucaram (en febrero de 1997). El cónclave enfrentó a dos agendas. Una alianza de derecha –liderada por el Partido Social Cristiano (PSC)– buscaba superar los escollos que contenía la Constitución de 1978 para dar viabilidad a la privatización de las áreas estratégicas, la consolidación de la agenda ortodoxa y la profundización del presidencialismo. A esta perspectiva se opusieron, con una representación minoritaria, el movimiento indígena, la izquierda y prácticamente todas las organizaciones sociales con una propuesta basada en la ampliación de derechos ciudadanos y en la defensa de la acción estatal. La Constitución de 1998 legitimó, finalmente, la agenda neoliberal³ y amplió el campo de los derechos⁴.

Para el MIE, los resultados fueron ambivalentes: si bien la Asamblea no declaró la plurinacionalidad del Estado, sí reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Su participación en la Asamblea reflejaba, en cualquier caso, algo más que la afirmación electoral de PK: el movimiento parecía definitivamente integrado al sistema político. Ello debía, a futuro, incentivar su rol como un actor político interesado en mantener el *statu quo* y en aprovechar las recientes innovaciones institucionales (Andrade, 2005). La “normalización” de la acción colectiva indígena estaría, sin embargo, lejos de llegar.

Coaliciones indígena-militares

El nuevo gobierno demócrata-cristiano (1998-2000) de Jamil Mahuad se sostenía en el mayoritario apoyo legislativo de los dos más importantes partidos de la derecha ecuatoriana, el PSC y la Democracia Popular (DP), a la que pertenecía el presidente. Tales partidos controlaron la Asamblea Constituyente de 1998 y aspiraban a concluir el ciclo de reformas neoliberales y a devolver la estabilidad política al país. Sus expectativas fueron rápidamente frustradas.

El plan económico de Mahuad, avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centró en enfrentar la fragilidad sistémica del sector financiero y la debilidad fiscal. El Estado se embarcó así en una operación de “salvataje” a las instituciones bancarias que, para fines de 1999, le costaba al país el 24% de su PIB (Romero, 1999). La creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, cuyo fin era administrar a los bancos quebrados por el uso indebido de los depósitos, sacó a la luz pública todo un engranaje de gestión bancaria ilegal y la sólida implantación de acuerdos oligárquico-mafiosos en la política económica del país. La desregulación financiera y la complicidad de las autoridades con las élites bancarias degeneraron en la extensión de la crisis a un número cada vez mayor de instituciones. En marzo de 1999, Mahuad decreta un feriado bancario y el congelamiento de los ahorros ciudadanos. Aun así, el Banco Central continuaba en su política de intensa emisión monetaria para proteger al sistema financiero. El gobierno asumía que la paralización de la inversión, el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo⁵ podían ser manejados como males menores. Una vez más, como a lo largo del proceso de ajuste, se priorizaba la estabilización financiera por sobre la reactivación productiva. Era la peor crisis económica del país desde su proclamación republicana⁶ (Ramírez Gallegos, 2000).

El país entró en una nueva espiral de conflicto. La CONAIE –liderada por el dirigente amazónico Antonio Vargas– y sus aliados urbanos conseguirían que el gobierno reestablezca el impuesto a la renta –suspendido a inicios del mandato de Mahuad–, imponga un tributo especial a los vehículos de lujo y reconsidere la suspensión de subsidios. Para el PSC se trataba de una excesiva concesión a la izquierda: rompió entonces con el gobierno. El faccionalismo intra-elitario proseguía. Las organizaciones indígenas invocaban, por su parte, la creación de un poder paralelo al del Congreso –los “Parlamentos de los Pueblos”–, la sustitución del poder ejecutivo por un gobierno revolucionario y la designación popular de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia⁷. Amenazado ‘desde arriba’ y ‘desde abajo’, la decisión de Mahuad de dolarizar la economía emergía más como una suerte de salvavidas político que como resultado de algún tipo de reso-

lución técnica a la crisis: la dolarización rearticuló, en efecto, al empresariado, la banca y al conjunto de la derecha.

Mientras los Parlamentos de los Pueblos se instalaban en diversas provincias, ciertos dirigentes de la CONAIE –sin conocimiento pleno de PK y del resto de organizaciones indígenas– mantenían reuniones con mandos medios del ejército para plantear la disolución de los tres poderes del Estado. En tales conciliábulos incidieron dirigentes urbanos de la CMS muy afines a ideas “putschistas” sobre el cambio político. Los nexos entre el ejército, los movimientos sociales y partidos de izquierda no eran nuevos. Ciertas convergencias anti-privatizadoras⁸ y la presencia militar en programas de desarrollo rural los habían acercado. Coincidían, además, en la defensa de las políticas desarrollistas de los setenta, la condena al sistema de partidos y el rechazo al empobrecimiento generalizado.

Los indígenas llegaron a la capital de la República, Quito, sede de los tres poderes del Estado, la noche del jueves 20 de enero y cercaron el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. La dimensión de la movilización era mucho más reducida que en anteriores ocasiones. Aun así, en la mañana del 21 de enero de 2000 cientos de indígenas ingresaron al Parlamento de la mano del ejército. El derrocamiento presidencial se consumó en horas de la noche. El coronel Lucio Gutiérrez, el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y el magistrado guayaquileño Carlos Solórzano, fueron los triunviros de la “Junta de Salvación Cívico Militar” que derrocó a Mahuad. La rebelión terminó en la madrugada del 22 de enero cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desconoció a la Junta y devolvió el poder al vicepresidente Gustavo Noboa en una secuencia de hechos cuyo trasfondo conspirativo aún no ha sido aclarado.

Para la izquierda tradicional, las fracciones “putschistas” de la CMS y ciertos dirigentes indígenas la insubordinación era la única forma de alcanzar el control estatal y el episodio de enero no era, en absoluto, un error estratégico. Otros sectores consideraban, al contrario, que haber ido “más allá” de las instituciones ponía en riesgo el prestigio del movimiento como fuerza democratizadora y restringía su campo de articulaciones. La acción conspirativa y poco consensuada de Vargas y sus aliados explicaba, de hecho, la débil movilización social (Barrera, 2004). Unos y otros, de todos modos, no hablaron nunca de “golpe de Estado” y sí de rebelión popular. Los insubordinados habían conseguido así “reintroducir en el lenguaje político nacional la figura de la revolución como transformación radical del orden político” (Andrade, 2005: 97). Mientras que al interior del movimiento se incrementaban las fricciones, las encuestas revelaban que el 70% de la población estaba de acuerdo con el derrocamiento. En las elecciones locales de mayo del 2000 el apoyo electoral a PK creció. La viabilidad de la estrategia dual del MIE parecía confirmarse (Ramírez Gallegos, 2008).

Del levantamiento indígena a la experiencia gubernativa

Gustavo Noboa ratificó la dolarización. La movida insurreccional apenas desacomodó por unas horas los nexos entre el poder político y el poder económico. En el contexto de la continuidad de la agenda ortodoxa, el nuevo gobierno elevó, en diciembre de 2000, los precios de los transportes públicos, de los combustibles y del gas de uso doméstico. No fue una decisión oportuna: la defensa

del precio del gas era, a esas alturas, todo un símbolo de la resistencia indígena a las políticas de ajuste.

La preparación del nuevo levantamiento permitió bajar las tensiones internas. Para las acciones de enero-febrero de 2001 la CONAIE alcanzó un acuerdo con todos los frentes y organizaciones indígenas y campesinas, mientras se distanciaba de los sectores urbanos concentrados en la CMS. Paradójicamente, el eje de la plataforma de lucha era marcadamente clasista y buscaba el respaldo, bajo el lema “nada solo para los indios”, de los sectores de medianos y bajos recursos económicos, independientemente de su adscripción étnica⁹. La movilización había sido preparada –a diferencia de aquella de enero de 2000– junto con las comunidades, organizaciones locales y autoridades indígenas electas. Ello explicaba su capacidad para reactivar la red organizativa del MIE en todo el territorio (Chiriboga, 2001). La fuerte represión gubernamental incrementó el malestar indígena y generó una importante adhesión ciudadana con los movilizados. El peso de la opinión pública y el mismo incremento de la violencia forzaron al gobierno y al MIE a acordar una agenda que reducía el aumento del precio del gas y reabría la discusión sobre otras medidas económicas impopulares (Barrera, 2001).

De cara a las elecciones generales de 2002 el MIE había recuperado parte de su capital político. Las fricciones internas, sin embargo, no parecían cesar. En el seno de la CONAIE, las tendencias más “indigenistas” y “pragmáticas” ganaron en protagonismo. La plena implicación de dirigentes e intelectuales indígenas en la gestión de cuantiosos proyectos de desarrollo financiados por el Banco Mundial, a cuenta de la deuda externa del Estado, facilitó la consolidación de dichas tendencias¹⁰. El II Congreso de PK (en septiembre de 2001), mientras tanto, expulsó a altos representantes de la CMS. La incidencia de la Coordinadora dentro del movimiento político disminuiría, en adelante, de modo considerable. Dirigentes históricos de las organizaciones indígenas y mestizos de izquierdas –ligados a los procesos de lucha por la legalización de asentamientos urbanos y la vivienda popular– quedaron al frente de PK. Sus diferencias con la nueva dirigencia de la CONAIE elevarían, en el futuro inmediato, el nivel de turbulencia a la hora de las decisiones electorales.

La postulación unilateral del ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, como candidato presidencial –bajo el apoyo de las organizaciones amazónicas y de la Federación de Indios Evangélicos (FEINE)– evidenciaba la fragilidad articuladora de la CONAIE y la dejaba en una difícil situación para las definiciones electorales. El planteamiento de Vargas y la creación de Amauta Jatari –brazo electoral de los evangélicos– parecían materializar la vieja aspiración amazónica de crear un partido exclusivamente indio. Una parte importante de los indígenas se distanciaba así de las corrientes más clasistas del movimiento.

Para evitar una mayor fragmentación, la CONAIE se abstuvo de postular un candidato indígena en las presidenciales de 2002. Dicha decisión llegó luego de que PK había resuelto sostener la candidatura de Auki Tituaña (alcalde indígena que ganó prestigio al promover la democracia participativa local). PK buscó entonces la formación de un polo electoral con fuerzas afines. Con un marco de alternativas limitadas, luego de frustradas conversaciones con socialdemócratas y socialistas, el movimiento llegó a un acuerdo con Lucio Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica, PSP), el coronel que lideró el derrocamiento de Mahuad. La coali-

ción indígena-militar incluía al MPD y adquiriría así un perfil izquierdista. Gutiérrez había sido invitado al Foro Social Mundial de Porto Alegre y era comparado con el liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela. Fidel Castro asistió a su posesión presidencial. Para PK se trataba, sin embargo, de una victoria inesperada: el comité ejecutivo de aquel entonces ha reconocido que con la alianza se buscaba, sobre todo, fortalecer la presencia del movimiento a nivel legislativo (Barrera, 2004). La emergencia de un *outsider*, de rasgos cholo-mestizos, que se pronunciaba contra la clase política, los catapultó, no obstante, al ejercicio del poder. No se había leído adecuadamente el desgaste de los partidos dominantes y la imposibilidad de las élites de conciliar un programa político creíble y de proyección nacional.

Tales sectores veían con asombro y rechazo cómo indios, militares nacionalistas y militantes de izquierda llegaban al poder. En el resto del campo progresista –aun cuando se veía con reservas la alianza con ex militares– se avizoraba, al menos, un cierto recambio en el modelo económico. Las expectativas se derrumbaron rápidamente. Gutiérrez formó un gabinete que dejaba en un rol secundario a PK: optó más bien por personajes cercanos a su círculo militar y a sectores bancarios y productivos en los ministerios claves. Solo Nina Pacari y Luis Macas –dirigentes históricos del MIE– fueron designados, respectivamente, como Canciller y Ministro de Agricultura. Por otro lado, las decisiones económicas, acordadas con el FMI, continuaron con la política fiscal ortodoxa. Gutiérrez optó, además, por alinear al país con los Estados Unidos en su política antinarcóticos derivada del Plan Colombia. En cuanto al estilo de su gestión, el nuevo gobierno asumió rápidamente rasgos patrimonialistas, autoritarios y clientelares. Las denuncias de corrupción y nepotismo crecían rápidamente.

Las críticas a las decisiones presidenciales de parte de los funcionarios gubernamentales de PK aumentaban cada día. Tal tensión carecía de instancias políticas de procesamiento. Los límites del presidencialismo para soportar gobiernos de coalición se hacían más latentes a medida que Gutiérrez se encerraba en su círculo íntimo. Por lo demás, mientras ciertas organizaciones amazónicas y evangélicas, e incluso algunas filiales de la CONAIE, se alineaban con el régimen, otros sectores más doctrinarios e izquierdistas pedían una ruptura inmediata de la coalición. Dichas divergencias obligaron a un largo proceso de deliberación interna que el presidente utilizó para reforzar su política de penetración en las comunidades indígenas. Varios dirigentes –Antonio Vargas entre los más destacados– ocuparon puestos clave en órganos estatales. Se creó, además, una federación india encargada de organizar las visitas de Gutiérrez y ‘sus’ ministros a las distintas comunidades. Las organizaciones indígenas apenas si pusieron límites a la hora de entrar en nexos clientelares con el régimen. La capacidad de movilización del movimiento había sido neutralizada. *La estrategia dual entraba en crisis*. Los vínculos entre el PSP y dirigentes indígenas aún pueden advertirse hasta el día de hoy.

Mientras, la decisión del MPD de romper con el gobierno dejaba a la alianza al filo del abismo. El episodio final llegó cuando el Parlamento rechazó, con los votos de PK, un proyecto de ley acordado con el FMI¹¹. El presidente destituyó entonces a los funcionarios de PK. Inmediatamente la CONAIE desconoció a Gutiérrez y Pachakutik puso fin a su presencia gubernamental. La alianza había durado apenas siete meses. Aunque la decisión presidencial de forzar el rompimiento de la coali-

ción permitió una salida relativamente cohesionada del movimiento, las relaciones internas quedaron en extremo fracturadas: se ahondaron las tensiones entre la CONAIE y PK, entre indígenas y mestizos y entre organizaciones serranas y amazónicas. La lectura oficial responsabilizaba a los miembros blanco-mestizos de PK de la ruptura con el gobierno y colocaba a los indígenas como sus víctimas. Aunque el discurso presidencial abrigaba una óptica racista y proseguía en sus intenciones de fragmentar al movimiento, evidenciaba los problemas internos que aquel había enfrentado a lo largo, y aun antes, de la coalición (Ramírez Gallegos, 2003).

Crisis política y descomposición organizativa

Desde su creación, en PK han convivido presiones ‘institucionalizantes’ y pulsiones ‘movimentistas’ que no han resuelto su ambigüedad constitutiva. ¿Es un movimiento de izquierda plurinacional de nuevo tipo o un simple brazo político del movimiento social? En los días de gobierno, esta indiferenciación institucional restringió el margen de maniobra de PK en su trabajo de articulación política y de acción parlamentaria –toda vez que debía pasar siempre por los filtros del movimiento social–, facilitó la penetración gubernamental de unas bases sociales que no se encontraban, para ese entonces, fácilmente disponibles para la movilización social y, en suma, aceleró el desgaste del conjunto del movimiento en medio de una crisis política que pulverizó la legitimidad de todos los actores políticos.

El frustrado paso por el gobierno modificó, en efecto, la percepción ciudadana sobre el MIE. Los indígenas pasaron a ser vistos como responsables del ascenso de un gobierno que no solo reiteró las tradicionales formas de acción política sino que frustró las expectativas de desmontar al neoliberalismo. La alianza con Gutiérrez lucía, para buena parte de la izquierda, como una decisión aventurada que había sobrestimado las capacidades políticas y organizativas del movimiento. Hacia el interior del MIE, mientras tanto, ganaba terreno el discurso “etno-radical”: los problemas del movimiento se originaban en el abandono de su agenda étnica y del proyecto de construcción del estado plurinacional. El protagonismo del brazo electoral, se insistía, había desviado los objetivos del movimiento social (Dávalos, 2004). Las tesis ‘movimentistas’ e ‘indigenistas’ salían a la luz desde las mismas estructuras de decisión política del movimiento y reforzaban el conflicto entre indígenas y mestizos. El argumento sobre la autenticidad étnica empezó a jugar más que nunca como una espada de Damocles sobre las opciones más pluralistas del movimiento. El “cierre étnico” tomó forma en la configuración de los nuevos cuerpos representativos de la CONAIE y de PK. La principal organización indígena designó nuevamente a Luis Macas como su coordinador. Su programa enfatizaba en la necesidad de retomar el proyecto de las autonomías territoriales y de volver al trabajo en las comunidades. La CONAIE afirmaba, además, su interés de recuperar el control de PK. El Comité Ejecutivo que había coordinado al movimiento durante su paso por el gobierno, comandado por mestizos de izquierda, fue relegado a un segundo plano.

Mientras tanto, y ya desde la oposición, el bloque legislativo de PK estableció un acuerdo con los dos más grandes partidos del país, el PSC y la Izquierda Democrática (ID, socialdemócratas), en un intento por enjuiciar al presidente por uso indebido de fondos públicos. Su acercamiento a tales partidos, considerados los “dueños del poder”, profundizaba el desprestigio de PK. La contraofensiva de

Gutiérrez supuso captar la mayoría legislativa –en parte a través de la compra de diputados– para tomar el control de la Corte Suprema de Justicia. Una verdadera “guerra sucia partidaria” se desarrolló desde entonces en el poder legislativo en procura de estabilizar o recomponer la correlación de fuerzas que había permitido el descalabro de la Justicia y la búsqueda de control de otras instituciones públicas. Amenazas, sobornos, difamación y golpes bajos resquebrajan las mínimas garantías para el ejercicio de la soberanía popular. Nunca antes el *modus operandi* del conjunto de la clase política había quedado tan expuesto a la luz pública. En ese escenario, una nueva movilización social volvía a irrumpir en la escena política para contestar no solo la intervención presidencial en la justicia sino la legitimidad del conjunto de los poderes constituidos.

Durante los diez días de protesta social que antecedieron al derrocamiento de Gutiérrez, en abril de 2005, el MIE *no estuvo en la calle*. Bajo la consigna “que se vayan todos” –escuchada también en las movilizaciones argentinas de 2001– miles de ciudadanos bailaron, cantaron, hicieron sonar sus cacerolas y formaron asambleas como inéditos repertorios contenciosos. A diferencia tanto de la destitución de Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones fueron encabezadas por los partidos y movimientos sociales –sobre todo la CONAIE–, como del derrocamiento de Mahuad, cuando los indígenas se enlazaron con mandos medios del ejército, las jornadas de abril de 2005 fueron resultado del *desborde ciudadano* a la tutela partidista y al comando de cualquier estructura organizativa. El tercer derrocamiento presidencial fue, así, fruto de un conjunto de demostraciones sin ninguna dirección política pre-estructurada. Jóvenes y amplios segmentos de las clases medias urbanas componían el núcleo central de la revuelta. Era la primera vez, desde el levantamiento indígena de 1990, que la movilización social no giraba en torno a, o no estaba liderada por, el MIE. Su lugar fue ocupado por una pluralidad de inexpertos marchantes y de neófitas iniciativas colectivas: un radical anti-partidismo acercaba a oleadas de heterogéneos manifestantes que, sin densas redes organizativas previas, lograron altos niveles de coordinación *mientras se movilizaban*¹².

La malograda experiencia de PK en el ejercicio del poder y la nula participación del MIE en las acciones que propiciaron la caída de Gutiérrez señalaban el *fin de un ciclo* de alto protagonismo político e intensa movilización indígena. El descentramiento de la hegemonía indígena en el campo progresista ecuatoriano parecía haber llegado. Sin su impulso, el conjunto de la conflictividad social entraba en declive (ver Gráfico 1). No estaban en juego la descomposición del movimiento –la CONAIE promovió una contundente movilización contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en marzo de 2006– o la pérdida de vigencia de su agenda política, sino simplemente que sus prácticas políticas y su discurso no alcanzaban ya a interpelar a una multiplicidad de nuevos actores disidentes u opositores al orden vigente. En medio de su pérdida de prestigio social, tampoco parecía ya ser de su interés procurar la articulación con tales nuevos desafíos ciudadanos al sistema político.

En diciembre del 2005 se proclamó la definitiva salida de PK de un importante grupo de dirigentes urbanos y organizaciones sociales que se contaban entre sus fundadores. Tales sectores defendían la tesis sobre la diferenciación institucional

entre el movimiento social y la dinámica político-electoral, y sobre todo la necesidad de una amplia política de alianzas. Sin su contingente, PK perdía una base organizativa urbana de larga experiencia militante. Se reducían así las opciones de sostener los nexos entre lo clasista y lo étnico al interior del movimiento. Quedaba muy poco ya del impulso articulador que inspiró la emergencia de la Coordinadora de Movimientos Sociales.

“...PK perdía una base organizativa urbana de larga experiencia militante. Se reducían así las opciones de sostener los nexos entre lo clasista y lo étnico al interior del movimiento”

Las tendencias hacia la fragmentación y el repliegue étnico de las organizaciones indígenas, hacia un progresivo distanciamiento entre estas y las menos consistentes dinámicas asociativas de los sectores urbanos y hacia la pérdida de credibilidad e influencia del conjunto de las organizaciones sociales que habían reconfigurado el espacio público democrático y desafiado el poder de las élites desde los años noventa se colocaban, en suma, como el complejo balance de su plena inmersión en las arenas de una política instituida en plena descomposición y crisis de legitimidad.

El breve interregno de la multitud (2005-2006)

La protesta social de abril del 2005 no cesó con la caída de Gutiérrez. Los alrededores de la Casa de Gobierno tampoco concentraron todas las demostraciones. El tiempo y el espacio de la revuelta plasmaron notables diferencias con respecto a los dos anteriores derrocamientos: había ya, y muy probablemente gracias a estos últimos, una comprensión más sofisticada sobre la mecánica del poder. Las sedes del Parlamento Nacional, de la representación diplomática de los países (Brasil, Estados Unidos) y organizaciones (OEA) concernidas en el desenlace de la crisis, las viviendas particulares de diversos políticos, entre otros lugares, vieron repetirse las protestas iniciadas con anterioridad. Las asambleas, que coordinaron en diversos puntos las acciones de protesta, prosiguieron también con sus dinámicas deliberativas luego de la caída del régimen. Otras se constituyeron en las semanas sucesivas. Hombres y mujeres, que se inauguraron a la vida pública en esos días, continuaron movilizados. Así, aun cuando se trataba de iniciativas moleculares, localizadas sobre todo en la ciudad de Quito y, dentro de ella, en ciertos estratos y espacios sociales, no se produjo –como en anteriores derrocamientos– un inmediato repliegue de la ciudadanía movilizada a la normalidad de lo privado.

Algunos han interpretado tal dinámica como expresión de la actividad de un movimiento social: el “movimiento de abril” o el “movimiento forajido”¹³. Tales tesis sobrestiman la convergencia *en la calle* de ciudadanos y organizaciones con heterogéneas procedencias y filiaciones políticas e ideológicas, y tienden a dotarlos de un horizonte político común. Desde un inicio de las acciones contenciosas, por el contrario, las razones, intereses y proyecciones de los manifestantes fueron

por vías disímiles y divergentes¹⁴. La identidad colectiva que, en el curso de la protesta, supo otorgar el mismo ex presidente a la multitud indignada cuando la bautizó como “forajida” fue disolviéndose y contestándose mientras emergía a la luz, precisamente, la diversidad –y las mismas contradicciones– de individuos, organizaciones, intereses y discursos que habían nutrido a la revuelta. Más que de una identidad, entonces, cabría hablar de un provisorio mecanismo de identificación colectiva útil para los fines tácticos de los manifestantes en los días de la cólera, para utilizar una expresión cara a Pérez Ledesma (1994). Nada más que eso.

Por lo demás, pasados algunos meses de la destitución presidencial, el espacio político quedó aun más marcado por la fragmentaria presencia de una serie de dinámicas asociativas y de iniciativas individuales que muy difícilmente encontraron formas de coordinación política convergentes. Los ya para entonces clásicos movimientos sociales –indígenas, mujeres– seguían cabizbajos y solo algunos de sus fragmentos trataban de orbitar en torno de la improvisada dinámica de movilización posterior a abril. Tal debilitamiento abría la ocasión, no obstante, para el surgimiento y la visibilización de nuevas dinámicas de movilización colectiva que, entre otros giros, hablaban de una cierta ampliación y/o desplazamiento de lo rural a lo urbano en términos de los actores y prácticas que, desde la sociedad civil, desafiaban la vigencia del orden político imperante.

Aunque de controvertido estatus sociológico, la noción de *multitud* recoge la amplitud de los fenómenos contemporáneos de exclusión e incertidumbre estructural en que incuban una diversidad de movimientos populares o algo así como una irreductible multiplicidad de expresiones políticas de carácter, a la vez, subjetivo y colectivo. Dichas expresiones procuran hacer valer la singularidad de sus intereses mientras producen nuevas formas de acción política más bien alejadas de la necesidad de construir articulaciones o una base común de acumulación política. Si bien la agregación espontánea de una pluralidad de acciones dispersas no supone la constitución de un campo de mediaciones políticas que soporten consistentes dinámicas de acción colectiva, la disponibilidad de la multitud para desenvolverse en escenarios contingentes amplía el espacio de lo posible (Bensaid, 2005). Sugerimos que tal imagen se corresponde de modo más adecuado con la evolución de una diversidad de dinámicas de movilización ciudadana y participación colectiva emergidas, en los “subsuelos de la política”¹⁵, en el marco de la profunda crisis de legitimidad de las instituciones democráticas del Ecuador a mediados de la primera década del nuevo siglo.

Aun en medio de las heterogéneas trayectorias y de las singulares formas de acción política de la multitud, sus marcos de significación devenían de un profundo malestar con la estructura de representación, con la voluntad de una recomposición ética de la política y con la demanda por una reforma política inminente. Las perspectivas más radicales apuntaban a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Entre 2005 y 2006 las trayectorias de la movilización estuvieron entonces atadas a un escenario en que las presiones y resistencias a la reforma política enfrentaban, otra vez, a la sociedad civil contra los partidos. Solo pequeños fragmentos organizativos apuntaban a consolidar específicos espacios autónomos de actividad política. Cuatro segmentos más o menos diferenciados pueden distinguirse, en cualquier caso, al interior de la heteróclita multitud que forjó abril.

Una primera constelación emergió en los mismos días de la revuelta con el objeto de coordinar acciones contestatarias e iniciar procesos de reflexión colectiva. La figura de las *asambleas* predominó como instancia de convocatoria y organización inicial. La idea de un espacio de participación y debate abierto, voluntario y horizontal, así como la ausencia de formas centralizadas de coordinación, aparecía entonces como la forma más adecuada para responder al desafío a la representación política. Universidades, estudiantes, barrios, redes de sociabilidad, colectivos, etc., activaron tales espacios de deliberación política. Muchas de estas asambleas no funcionaron más allá de unas cuantas semanas. Otras, sobre todo de carácter barrial, abrieron desde entonces una sostenida actividad organizativa en que concurrieron viejos y nuevos militantes cercanos a pequeños grupos de izquierda y al campo de los movimientos sociales. Su agenda rebasaba las preocupaciones sobre el sistema político. Se situaba más bien en la búsqueda de nuevas formas de acción colectiva y democracia directa en el marco de la afirmación de un sentido autónomo y radical de la política¹⁶. La ocupación de específicos territorios urbanos abrió una novedosa dinámica de politización del espacio público en que se problematizaban los problemas locales a la luz de las tensiones nacionales. Algunas de entre ellas, pocas, funcionan hasta la actualidad.

Un segundo tramo de la multitud alude a las iniciativas organizativas que vieron en abril la oportunidad de recomponer impulsos colectivos frustrados en los meses previos a la caída de Gutiérrez. Y es que desde fines del 2004, y bajo el paraguas de la Alcaldía de Quito, se constituyó la denominada “Asamblea de Quito” que trató de coordinar y liderar el proceso de contestación al gobierno. Su escasa voluntad para emprender acciones directas y su mismo origen “oficial-partidario” limitaron su potencial de articulación y propiciaron el desborde de la movilización por fuera de sus contornos. Pasados los días de mayor agitación, reemergieron o se constituyeron diversas asambleas y colectivos con eminente voluntad de incidir en el proceso de reforma política y, más aun, de proyectarse rápidamente hacia la política instituida¹⁷. En tales espacios convergieron, sobre todo, algunas figuras políticas, sectores medios, profesionales y estudiantes con cierta experiencia militante e imaginarios políticos más o menos radicales. En su discurso se advertía un interés en representar lo que a sus ojos se colocaba como la “agenda de abril”. Su persistencia en el tiempo tuvo distinta suerte. El bloqueo final de la reforma desincentivó la continuidad de algunas dinámicas asamblearias. Otras prosiguieron y algunas de sus figuras más visibles se proyectaron dentro de nuevas coaliciones electorales formadas de cara a las elecciones generales de 2006. Las menos siguieron de cerca el errático proceso de reforma y, en lo posterior, continuaron monitoreando desde el terreno de la sociedad civil la evolución de la dinámica política. Así por ejemplo, la Asamblea de Mujeres de Quito conformó una veeduría social para hacer el seguimiento de un dispositivo participativo –el Sistema de Concertación Ciudadana (SCC)– que el nuevo gobierno debió diseñar para procesar las propuestas ciudadanas desde las cuales debieron establecerse las preguntas de una Consulta Popular que orientaría la reforma política. A dicha convocatoria se había comprometido, en su accidentada posesión¹⁸, el nuevo presidente, Alfredo Palacio¹⁹. Esta y otras instancias de este segmento participativo tomaron también la calle en varias ocasiones en el curso del bloqueado proceso de reforma política.

Un tercer segmento provenía de una constelación de redes ciudadanas y figuras que, mucho antes de la caída de Gutiérrez, habían manifestado su malestar con la descomposición del orden democrático. En los últimos años, de hecho, habían encaminado iniciativas públicas de defensa del Estado de derecho a través de la puesta en marcha de mecanismos sociales de vigilancia de las instituciones políticas y de observación de los actos de gobierno y la agenda pública. En los días previos a la caída presidencial efectuaron diversas demostraciones públicas, nunca masivas, con alto contenido simbólico –como leer la Constitución de la República en las calles– y potencial de posicionamiento mediático. En otro lugar denominé a esta corriente participativa como “alta sociedad civil” para hacer referencia a un conjunto de actores sociales que incluyen nuevos movimientos políticos, pequeños colectivos, diversas Organizaciones no Gubernamentales –conectadas con la cooperación internacional y fundaciones políticas transnacionales– concernidas con temas de control institucional, rendición de cuentas y afirmación de la cultura democrática²⁰. Entre sus particularidades destacan las frágiles conexiones que mantienen con organizaciones populares y movimientos sociales, y la centralidad de liderazgos provenientes de círculos académicos y redes profesionales de élite que les dotan de un alto capital simbólico-cultural y los sitúan como parte de los estratos medio-altos de la sociedad. Dicho posicionamiento explicaría la atención privilegiada que les otorgaron los principales medios de comunicación así como su ingreso ‘por lo alto’ a la escena política. Articulando un discurso liberal de defensa de la institucionalidad democrática, gran parte de sus acciones políticas apuntaron a la denuncia, ante la opinión pública y los organismos pertinentes a nivel nacional e internacional, de la inconstitucionalidad de los actos de la clase política (Ramírez Gallegos, 2005: 38-39).

Ruptura-25, un movimiento político constituido por jóvenes universitarios y profesionales movilizados en torno a un trabajo de formación cívica en temas ligados a la cuestión democrática apareció, en esta coyuntura, como uno de los nuevos actores políticos más dinámicos de este segmento de la multitud. Amparados, desde sus orígenes, en un discurso de rechazo frontal a la política partidaria y a la evolución democrática de los últimos 25 años (1979-2004), dicho movimiento concitó una alta atención pública en el marco de las movilizaciones de abril y, en lo posterior, entró en articulación con algunas de las asambleas antes descritas. Su proyección política fue en ascenso en los años siguientes. La izquierda tradicional y la gran mayoría de las organizaciones populares han tendido a desconocer los puntos de confluencia con la acción crítica de este movimiento.

Por último se sitúa un más incógnito e incierto grupo de ciudadanos sin filiación asociativa ni pertenencia política que, luego de ocupar las calles en abril, exploraron diversos espacios y rutas para su implicación política: participaron en foros de debate político y en algunas asambleas, escribieron cartas a los periódicos, prosiguieron con sus llamadas a la radio en las que se identificaban como “forajidos” y buscaron nuevamente las calles en reacción a distintas decisiones del nuevo gobierno. Uno de los indicios de su participación pública puede ser encontrado en las más de 52 mil propuestas de reforma política –solo el 5% de las cuales fue emitida por actores colectivos– enviadas al Sistema de Concertación Ciudadana (SCC)²¹. La noción –de matriz republicana– de una “ciudadanía

activa”, que afirmaba en todo momento su particular indignación moral ante el devenir de la política nacional, puede describir adecuadamente a este segmento de la multitud.

Con la creación del SCC, el gobierno puso en funcionamiento un mecanismo institucional para conectar la participación social con el nivel de la decisión política –las propuestas ciudadanas serían la base de las preguntas de la Consulta Popular– y preservar así los márgenes de legitimidad necesarios para acometer la reforma. Aunque el dispositivo avanzó, no sin contradicciones, hasta el cumplimiento final de sus objetivos, los desacuerdos partidarios, así como la debilidad política del presidente, impidieron que la voz ciudadana pesara efectivamente en el desenlace del proceso.

En efecto, la ruptura de la socialdemocracia (ID) con el poder ejecutivo supuso el aislamiento de este con respecto a las fuerzas representadas en el poder legislativo. Sin una mínima coalición política en que sostenerse, el presidente reactivó el “espíritu de abril”: convocó a organizaciones y asambleas a apoyarlo en su cruzada por la reforma. El presidente buscó además la convocatoria a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la instalación de una Asamblea Constituyente. Muchas asambleas reactivaron entonces sus encuentros, forjaron documentos de reforma y organizaron foros de discusión. El debate público reverberaba. Los partidos, mientras tanto, procuraban concertar un paquete de reformas a ser procesadas por el mismo Congreso. Utilizando su control del órgano electoral bloquearon, finalmente, la consulta. Era un episodio más en una larga cadena de frustración social con la política instituida.

El zigzagueante trayecto del frustrado proceso de reforma política dejaba, en cualquier caso, señales precisas sobre el ‘nuevo pulso’ entre partidos y ciudadanos. Por un lado, se hacía evidente la impenetrabilidad de los partidos y del sistema político para viabilizar transformaciones institucionales que den cabida a las diversas formas de participación popular. Por otro lado se constataba que, aun a pesar de la ilegitimidad partidaria y de la persistencia de una novedosa movilización social, la molecularidad de la acción política de la multitud y su débil predisposición articuladora impedían la acumulación de la fuerza necesaria para ganar en influencia en la puja por abrir un escenario democrático de cambio. El silencio del MIE y su virtual desconexión con las constelaciones anti-partidarias restaron además potencia organizativa al breve interregno de la multitud. Las ruidosas protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), de marzo de 2006, recordaban al país que sin la movilización indígena –aun si fatigada– se reducía la resonancia de las demandas sociales en el espacio político. El rechazo al aperturismo comercial volvía a juntar, en cualquier caso, a los diversos fragmentos rurales y urbanos del campo popular. Las banderas anti-neoliberales articulaban otra vez, con relativa facilidad, a la izquierda social y política ecuatoriana.

El desacomodo del campo organizativo (2007-2010)²²

Marzo de 2010: la prensa publica detalles de reuniones entre la Junta Cívica de Guayaquil y dirigentes de la CONAIE. Los encuentros tenían como objetivo apun-

calar la oposición al gobierno de Rafael Correa. Según la junta, los dirigentes indígenas les habrían solicitado apoyo financiero para emprender acciones contra el gobierno de la *Revolución Ciudadana*²³. Pocos daban fe de la verosimilitud de la noticia: la radicalísima CONAIE sentada junto a quienes tradicionalmente han representado lo más conservador de la oligarquía. Diversas organizaciones populares, partidos de izquierdas e intelectuales críticos condenaron la maniobra. El gobierno rechazó, igualmente, tan bizarro acercamiento.

“El rechazo al aperturismo comercial volvía a juntar, en cualquier caso, a los diversos fragmentos rurales y urbanos del campo popular.”

El malestar al interior del propio movimiento fue también inocultable. Luis Macas censuró de modo tajante los hechos: “no tenemos nada en común con ellos (con la Junta) [...] no podemos sentarnos a conversar y si nos encontramos en la esquina hay que correr hacia el otro lado...” (*El Comercio*, 2010). Mientras, un editorial publicado en uno de los diarios quiteños enfrentados al gobierno encontraba en tales declaraciones un profundo sectarismo político. “Si lo hubiera pronunciado un mestizo, si lo hubiera dicho un dirigente empresarial, refiriéndose al movimiento indígena, habría merecido el repudio general por racista e insensato” (*Hoy*, 2010). El texto iba más lejos y sostenía que, al contrario del sentido común político, entre Guayaquil y la CONAIE existe un punto nodal de convergencia: la demanda por la autonomía y el derecho al auto-gobierno. Aunque la dirigencia indígena desconoció la validez de la reunión, anunció sanciones para quienes propiciaron los encuentros y dispuso la realización de una “limpia” (purificación ritual) de las oficinas de su sede donde habían permanecido los cívicos guayaquileños, no pudo revertir la percepción de que había confundido las cartas de navegación que la han ubicado, desde siempre, en las antípodas del poder establecido.

El episodio habla del complejo proceso de reconfiguración de la conflictividad sociopolítica abierto con el acceso de Correa al poder en 2007. Entre otra de sus características, dicha reconfiguración está atravesada por las tensas relaciones entre el presidente e importantes dinámicas de acción colectiva de la sociedad ecuatoriana. Tales tensiones se han incrementado luego de un período en que, alrededor de la Asamblea Constituyente (2007-2008), el proyecto político de Alianza País (AP)²⁴ generó algo más que “simpatía difusa” en el arco progresista. Múltiples organizaciones sociales y políticas operaron activamente, desde entonces, en el sostenimiento del proyecto de cambio. Algunos de sus militantes llegaron incluso a ser postulados como parte de las listas del oficialismo en las elecciones de 2008 y 2009. Ya antes, fragmentos de la multitud anti-partidista habían ingresado a la plataforma electoral que catapultó a Correa al gobierno.

No es raro escuchar, por ello, en boca de múltiples activistas que la Revolución Ciudadana se ha apropiado de su programa –“nos roban la agenda”– y que la participación electoral de algunos de sus “compañeros” ha repercutido en el funcionamiento habitual de las dinámicas asociativas. Y es que la emergencia de

Correa no solo aceleró el ocaso de los partidos que dominaron la escena política desde 1979, sino que *desacomodó* las líneas de articulación y los programas de acción de múltiples actores sociales.

Si un claro agotamiento de la movilización social antecedió al surgimiento de AP, el sólido posicionamiento del liderazgo presidencial y su escasa predisposición al reconocimiento de las dinámicas de acción colectiva autónoma han contribuido a un estrechamiento de sus márgenes de acción y a la intensificación del conflicto con el gobierno. En dicho escenario influirían, además, algunas diferencias programáticas en el procesamiento de la transición post-constitucional y, de modo menos visible, la desconfiguración de las redes sociales ligadas a los movimientos. La implicación de segmentos de las clases medias radicales –activas partícipes del campo organizativo que se opuso al neoliberalismo y al dominio partidario– en el nuevo bloque gobernante habría generado un cierto vaciamiento de los acumulados organizativos en las arenas estatales.

Las sinuosas relaciones entre el nuevo gobierno ecuatoriano y diversas organizaciones sociales pueden ser mejor observadas si se las ubica en el marco de tres específicos momentos del proceso de cambio político que vive el Ecuador: el surgimiento de AP, el proceso constituyente y la transición legal.

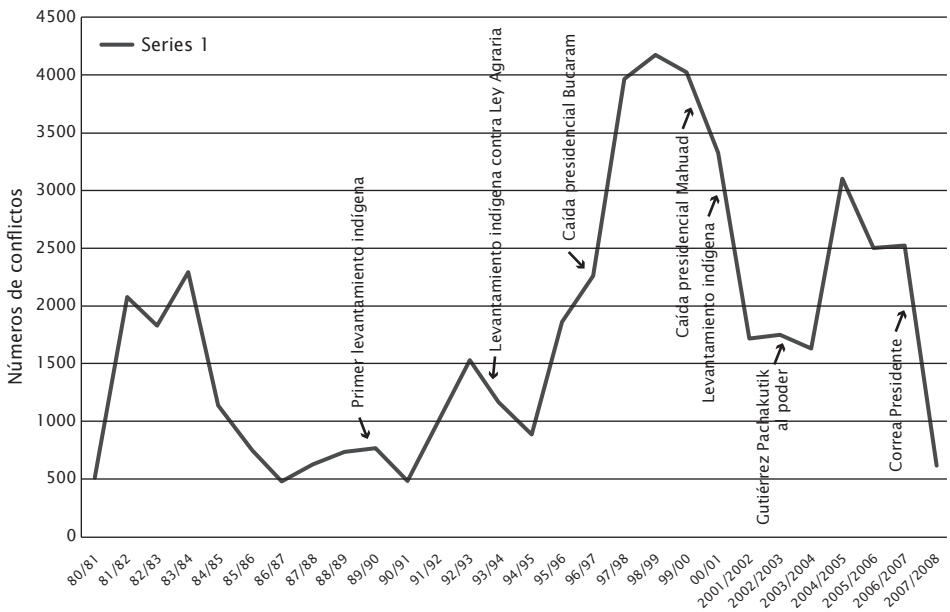
Desencuentros de origen

Desde la campaña electoral de fines del 2006, Correa y su recién nacido movimiento político –Alianza País– tomaron las banderas anti-partidarias heredadas de abril. Sus propuestas (y luego, decisiones) de convocar a una Asamblea Constituyente, descartar la firma del TLC, demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a los militares estadounidenses, revertir la primacía del neoliberalismo y privilegiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon prácticamente el mismo campo discursivo que el levantado por el MIE, otras organizaciones populares y pequeñas fuerzas de izquierdas durante las últimas décadas. La emergencia de Correa se colocaba, sin embargo, en medio de un reacomodo del campo progresista: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas sociales y organizaciones ciudadanas –de escasa trayectoria militante– y, como se ha visto, el declive del movimiento indígena en torno de cuya acción se re-articuló la izquierda ecuatoriana en los noventa. Los resultados electorales del 2006 recogían de algún modo dichas tendencias. La candidatura presidencial de Luis Macas (Pachakutik) apenas alcanzó el 2,19% de los sufragios, el peor resultado obtenido desde el inicio de la participación electoral del movimiento. El candidato del MPD llegaba tan solo al 1,3% de la votación. Correa pasó a disputar el *ballotage* con el 23% de los votos.

Alrededor del agotamiento indígena se asistía, a la vez, a una erosión del conjunto de la movilización social. La conflictividad desatada en torno al MIE contuvo diversas iniciativas regresivas, alteró profundamente los órdenes de poder y contribuyó a acelerar la crisis de legitimidad del sistema de partidos. Sin embargo, para el primer lustro de 2000, y salvo ciertos picos de agitación social –la caída de Gutiérrez y las protestas contra el TLC–, el espiral ascendente del conflicto comenzaba a detenerse (Gráfico 1). Ello coincidía además con el decrecimiento, desde el inicio del nuevo siglo, de las tendencias participativas y asociativas a nivel nacional y local²⁵.

Para cuando emerge AP resultaba difícil ignorar la erosión de las energías reivindicativas de la sociedad y las escasas opciones electorales de las izquierdas. Nadie pareció sorprenderse, entonces, con el triunfo del multimillonario Álvaro Noboa en el primer turno de las presidenciales. La victoria final de Correa fue, en este escenario, casi providencial y aludía más bien a la preeminencia de un voto de rechazo –lo que Rosanvallon (2007) denomina “de-selección”– a la figura del bananero.

Gráfico 1. Conflictividad sociopolítica 1982-2008



Fuente: CAAP.

Antes de ello, sin embargo, Correa procuró construir una fórmula presidencial conjunta con Pachakutik. El nuevo outsider, cuando joven, había realizado trabajo misionero (con los salesianos) en una de las parroquias indígenas más pobres del país. Conoció así de cerca las luchas campesinas y la iglesia popular, e incluso llegó a aprender kichwa: algo de lo que muy pocos intelectuales, incluso comprometidos, pueden jactarse (Ospina, 2009). Su salto a la arena política llegó de la mano de su nombramiento como Ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio. Se trataba del primer ministro del sector, en dos décadas y media, que no provenía de círculos empresariales ni estaba atado al canon fondomonetarista. Desde tales funciones reorientó los excedentes presupuestarios –provenientes de una renta petrolera creciente debido a los altos precios internacionales del crudo– hacia el gasto social, y tomó distancia de las recomendaciones de austeridad fiscal de los organismos multilaterales. Correa, y el círculo de economistas heterodoxos

cercanos a él, postulaban más bien la necesidad de una mayor presencia estatal en la economía y la urgente redistribución de la riqueza social. A pesar de su breve paso por el ministerio, tales decisiones y sus radicales proclamas anti-neoliberales le proyectaron como un promisorio liderazgo del campo progresista.

La disyuntiva de participar en las elecciones presidenciales dentro de una alianza con otras fuerzas de izquierda, como PK lo había hecho desde su origen, o de hacerlo con un candidato indígena “propio” activó una nueva pugna dentro del MIE. Con un altísimo nivel de tensión y sin llegar a unificar todas las posiciones, se impuso la segunda opción. Luego de la experiencia gubernativa, el escepticismo indígena con la reiterada presencia de figuras “externas” al movimiento desincentivaba cualquier tipo de alianza.

Cerrada esta opción, los ideólogos de AP privilegiaron antes que la construcción de un frente amplio o de una coalición de movimientos y partidos, la formación de una estructura de acumulación política *propia* y *diferenciada* de aquellos. Gustavo Larrea, uno de los fundadores de AP, señalaba al respecto:

Si entrábamos a esas disputas (con las organizaciones) no teníamos posibilidades de construir *fuerza política inmediata* ya que el movimiento obrero, el movimiento indígena, el afro ecuatoriano, el movimiento de mujeres, tienen liderazgos legítimos que se han ganado a lo largo de la historia y con los cuales no hay por qué disputar [...] Nuestra organización resuelve no realizar coaliciones con frentes sociales sino *trabajar territorialmente*. (Larrea, 2008: 129; énfasis del autor)

El núcleo fundador de AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de la izquierda tradicional, por intelectuales y activistas de la nueva izquierda social, por figuras provenientes de novísimas organizaciones ciudadanas (surgidas en abril), y por personajes sin trayectoria militante, cercanos al entorno personal del candidato presidencial. Emergía así una fuerza heteróclita amalgamada bajo el horizonte de un anti-partidismo extremo, la voluntad de superar el neoliberalismo y el peso de un liderazgo político *–marketing* mediante– sofisticadamente empaquetado. Dicho perfil y composición entrañaban no solo una ampliación del espectro de la representación social de las fuerzas de izquierda hacia lo que Quintero denomina “los sectores sociales auxiliares o las clases intermedias de la estructura global del país”²⁶, sino además una reorientación en sus lógicas de acción política y un reajuste en los equilibrios entre el liderazgo individual y las dinámicas de acción colectiva cercanas a la tendencia. El peso de estas últimas fue, desde los orígenes de AP, relativizado por los intentos de llegar al tejido micro-local de la sociedad:

[...] se resolvió promover un tipo de organización familiar [...] puesto que no se trabaja solo con los individuos. Son encuentros familiares de carácter geográfico. Esta definición generó un enorme contingente de compañeras y compañeros que en vez de dedicarse a pelear con otras fuerzas de izquierda se dedicó a construir fuerza en cada cantón, en cada parroquia, en cada barrio. (Larrea, 2008)

Desde la primera campaña, AP puso en marcha, en efecto, los denominados Comités Ciudadanos Locales o Familiares. A través de una perspectiva territorial, ello proyectaba la base del recién nacido movimiento *–más allá de cualquier constelación organizativa–* hacia el amplio espectro de ciudadanos no organizados.

La articulación con partidos y movimientos de mayor trayectoria organizativa fue siempre vista como innecesaria y potencialmente conflictiva. El acuerdo, más bien marginal, con el pequeño Partido Socialista Ecuatoriano ha sido la única salvedad. La debilidad del tejido organizativo, la desconfianza entre las fuerzas progresistas y el pragmatismo del nuevo movimiento hacían prever que, hacia futuro, se reforzaría tal lógica de construcción política.

Convergencias programáticas, tensiones productivas

La posibilidad de que llegue al poder uno de los máximos representantes de la derecha oligárquica (Noboa) acercó a múltiples organizaciones sociales y populares a la campaña de AP. La dinámica asamblearia forjada entre 2005 y 2006 también se movilizó activamente. Dicha sintonía se profundizó cuando, el día mismo de su posesión, Correa convocó a una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria (ANC).

Sin representación en el legislativo –para afirmar su vocación anti-partidaria AP no presentó candidatos parlamentarios– y con la derecha controlando la mayoría, la convocatoria al *referéndum* que diera paso a la ANC fue objeto de una intensa pugna entre los principales poderes del Estado. Si anteriores crisis políticas se resolvieron con las destituciones presidenciales de jefes de gobierno sin sólidos bloques parlamentarios y baja credibilidad social, en el 2007 sucedía lo inverso: un presidente cuyo único capital político era el robusto apoyo popular a su figura provocaba, sin estricto apego a derecho, la destitución –por parte del Tribunal Supremo Electoral– de 57 diputados acusados de obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta. La “caída parlamentaria” viabilizó el proceso constituyente.

En abril de 2007, el 82% de la población aprobó la instalación de la ANC. El conjunto del campo popular y progresista sostuvo el voto afirmativo. Ya en los días de mayor conflicto entre Correa y el Parlamento, diversos sectores sociales se habían movilizado, incluso de modos violentos, contra los legisladores de oposición. El 1 de mayo de 2007, en un hecho que no tenía precedentes en el vigente ciclo democrático, Correa encabezaba una multitudinaria marcha por el día de los trabajadores. La gran mayoría de organizaciones clasistas y populares caminaba junto al presidente. El sentido de los antagonismos trazados por Correa posibilitaba dicha confluencia: además de la confrontación con los partidos, su programa gubernativo le enfrentó con la banca, los grandes medios de comunicación, los gremios empresariales, la constelación de agencias transnacionales que sostuvieron el neoliberalismo y, sobre todo, con la poderosa élite guayaquileña cercana a Jaime Nebot, tres veces electo alcalde como parte del principal partido de la derecha ecuatoriana.

Las elecciones de los constituyentes, en septiembre de 2007, favorecieron largamente al “campo del cambio”. AP obtuvo 80 curules de las 130 en disputa. El resto de las izquierdas (PK, MPD, ID) se acercó al 10%. Las alianzas entre ambos segmentos se dieron de modo marginal en pequeñas provincias. Se ratificaba así la opción de AP de privilegiar el apuntalamiento de su propia fuerza: el ciclo de éxitos electorales reforzaba dicha apuesta. Las listas del oficialismo incluyeron ya, en cualquier caso, a algunos segmentos del movimiento popular²⁷ y de las nuevas organizaciones ciudadanas portadoras de un discurso ético sobre la política: el caso emblemático ha sido el de Ruptura-25. AP adquiriría así el perfil de una coa-

lición de fracciones en que coexistían sectores de centro-derecha, vertientes del ecologismo, organizaciones de mujeres, expresiones de las iglesias progresistas (y no), militancias de izquierdas, ciudadanos inexpertos y políticos oportunistas de larga trayectoria.

Si en la Constitución de 1998 la izquierda y las organizaciones sociales alcanzaron el reconocimiento de la figura de los derechos colectivos y el fortalecimiento del espectro de los derechos sociales, en el proceso de 2007-2008 se empeñaron en sostener y ampliar dichas conquistas pero en el contexto de una disputa más global por la transformación del modelo de desarrollo. El horizonte aspiracional de la ANC combinó, en efecto, la superación del orden neoliberal y el desmonte de la dominación partidaria. Desde su origen, AP había colocado enfáticamente dichos lineamientos en el debate público. Tal entorno ideológico trazaba el terreno de la participación social.

En Montecristi²⁸ se verificó una activa e innovadora pero no tan ruidosa movilización popular. Además de la debilidad del campo organizativo, la localización de la sede de la Convención –alejada de los centros urbanos más importantes– conspiraba contra formas masivas de participación colectiva en su torno. Las organizaciones debieron modificar sus habituales tácticas de influencia: enviaron asesores permanentes, se desplazaron en los momentos decisivos, realizaron un trabajo de *lobby* con los distintos bloques. Se constituyeron entonces redes temáticas mixtas (sociedad-estado) para discutir tramos de la reforma constitucional en distintas áreas de política pública. La complejidad de las agendas propuestas y el desarrollo de específicas destrezas de negociación revelaban importantes niveles de profesionalización entre los activistas. Allí reside hoy en día, al igual que en otros países, una de las líneas de transformación del campo organizativo ecuatoriano. El rol de las ONG y la cooperación internacional ha sido clave en este aspecto. Las asociaciones consiguen desafiar así con mayor consistencia la definición “*top-down*” de las decisiones políticas: una suerte de ‘contra-experticia militante’ disputa la construcción de la agenda pública con los tradicionales decisores. Foros públicos, plantones, marchas y conciertos completaban el arco de repertorios de presión con que, desde sus particulares agendas, se posicionaban los distintos actores sociales en la Convención. Esta puso también en marcha específicos mecanismos participativos que incluían foros nacionales e itinerantes, comisiones generales y dispositivos virtuales²⁹.

La cercanía en las trayectorias militantes de múltiples asambleístas y dirigentes sociales facilitó el desarrollo de sus conexiones. La apertura del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, a la participación de los movimientos les confería, a su vez, mayor visibilidad política. A pesar de que los episodios de tensión no fueron pocos, el proceso constituyente supuso un momento de alta fluidez en las relaciones entre los procesos sociales y las instancias de representación democrática. Así, tanto por las formas de participación como por los contenidos constitucionales, la última ANC puede ser considerada como un punto en que, desde lo social y lo político, se encontraron aquellos sectores que se consideraban excluidos de los centros de poder y que habían asumido la forma de organizaciones de carácter reivindicativo y contestatario (León, 2009).

Entre el dinamismo participativo y las presiones del Ejecutivo para que el pro-

ceso ganara en celeridad –Correa ha tendido, regularmente, a contraponer eficacia y participación–, AP decidió invitar a los assembleístas de las bancadas afines –Pachakutik, MPD, e ID– a sus deliberaciones internas. Se formó así un “mega bloque” de 90 constituyentes. Tales reuniones funcionaron como instancias de debate y decisión partidaria. En su seno se coordinaban –bajo la hegemonía de AP– las resoluciones que luego serían votadas en conjunto. Los disensos podían aparecer en esta instancia pero no debían expresarse en las sesiones plenarios. La unidad del bloque se preservaba con sigilo al costo de evitar la amplificación de ciertos debates en el pleno de la Asamblea.

La recurrencia de las fricciones al interior de AP se colaba, de todos modos, en la opinión pública. Los debates sobre la cuestión ecológica dejaron ver, más que cualquier otro tema, la intensidad de las disputas. Acosta y los assembleístas leales a Correa mantuvieron intensos duelos en relación a los límites ambientales de la explotación minera, a la declaración del agua como derecho humano fundamental y a la necesidad de consultar a las poblaciones y comunidades indígenas (tesis de Correa) u obtener su consentimiento previo (de Acosta), cuando el Estado dispusiera la explotación de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan. La influencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba con el respaldo del bloque de PK, permitió que las tesis ecologistas salieran bien libradas en los dos primeros debates. Dio paso, además, a la *sui generis* consagración de los “derechos de la naturaleza”. El consentimiento previo fue, sin embargo, descartado. La dureza del debate dejó malogradas las relaciones entre las dos figuras más visibles de la Revolución Ciudadana, y entre Correa y el movimiento indígena. Las primeras deserciones en AP vendrían, sin embargo, por otras razones. Algunas de sus facciones propendían hacia una modernización de la Carta Magna en materia de sexualidad. El activo rechazo de grupos cercanos a las cúpulas eclesiásticas y al Opus Dei aupó, entonces, la renuncia de dos assembleístas que decían defender la moral católica del país. Múltiples organizaciones de mujeres condenaron la timidez con que el oficialismo encaró el tema. El caso es, sin embargo, que la influencia de estas últimas en el debate público ha sido eclipsada, durante los últimos años, por el dinamismo de sectores católicos ultra-conservadores. Ya en 2006 avanzaron campañas contra la venta de pastillas anticonceptivas de emergencia y contra la educación para la sexualidad. Luego, procuraron penalizar el aborto terapéutico. En Montecristi rechazaron incluso el uso de nociones como “identidad de género”. La visibilidad de este segmento asociativo dejaba entrever no solo la pérdida del dominio de los sectores contestatarios sobre la movilización de la sociedad civil (Ibarra, 2008), sino la fragilidad de los movimientos sociales en la disputa por la hegemonía cultural de la sociedad. Solo el dinamismo de un grupo de assembleístas mujeres (AP) identificadas con la causa y su conexión con jóvenes militantes feministas lograron contener, *in extremis*, los embates retardatarios de tal sector del asociacionismo católico.

Similares controversias y articulaciones se dieron en relación a otros tópicos. Si la promoción de la participación ciudadana o la recuperación de la regulación estatal sobre la economía generaban menos controversias, la declaración del Estado como plurinacional –demanda histórica del MIE– evidenciaba la influencia de las posturas “movimientistas” y pro-indígenas dentro de AP en medio de las

tribulaciones presidenciales y los recelos de sus allegados. De igual modo sucedió con cuestiones relativas a las demandas de los maestros y sindicatos públicos por ciertos derechos colectivos, o a la gratuidad de la educación universitaria. Los nexos del ala izquierda del bloque con las organizaciones sociales y con ciertos segmentos del ejecutivo dejaban abierta la discusión de formulaciones promisorias. Ni la propensión decisionista de las interferencias presidenciales, ni la beligerancia de ciertas relaciones desmontaron, pues, el espacio de interlocución política que había forjado la ANC. Honneth (1996) ha argumentado que los espacios públicos pueden estructurarse a través de conflictos en que actores con identidades e intereses diversos, e incluso contrapuestos, tienden a reconocerse políticamente. La convención entreveró en dicha lógica al nuevo bloque gobernante, a una gran variedad de organizaciones populares y a diversas iniciativas ciudadanas. La ampliación de los derechos, el incremento de los sujetos sociales que los portan³⁰ y de los ámbitos que atingen³¹, recogían la productividad de su presencia y de las disputas allí encaminadas. El proceso constituyente supuso el afianzamiento de las expectativas sociales de cambio y la expansión del espacio de reconocimiento político.

“Con la instalación del nuevo parlamento, por otro lado, la ‘política de puertas abiertas’ de la constituyente se revertió”

Así, aun a pesar del remezón que causó en la izquierda y en los movimientos sociales el pedido de AP para que Acosta dejara la dirección de la ANC a un mes de su terminación³², diversas organizaciones sociales, el MIE y Pachakutik optaron por respaldar el proyecto constitucional. Posicionaron, sin embargo, la tesis del “sí crítico”. Remarcaban, de este modo, sus distancias con el poder ejecutivo pero reconocían los avances del proyecto constitucional. El MPD, el socialismo y las organizaciones clasistas más tradicionales sostuvieron, llanamente, la opción afirmativa. Una reducida fracción de sindicatos públicos (petroleros), pequeños grupos de izquierda y disminuidos partidos centristas postularon la tesis de la abstención, del voto nulo o incluso del no. Su posición reflejaba la necesidad estratégica de una nítida diferenciación con respecto a Correa y un rechazo a las irregularidades procedimentales en la aprobación de la Carta Magna.

Nueva polarización

En abril del 2009 se convocó a elecciones generales en el marco de las nuevas reglas políticas delineadas por la Carta Magna. Esta dispuso, además, la elaboración inmediata de múltiples leyes fundamentales que echaran a andar los principios constitucionales. En ambos escenarios se verificaron las dificultades del gobierno para procesar las relaciones con importantes dinámicas de acción colectiva autónoma y para estabilizar un campo de alianzas con actores sociales y políticos más o menos afines.

Dichas inconsistencias pesaron en el balance electoral que algunos calificaron como una amplia victoria del movimiento gobernante. A pesar de la histórica reelección de Correa en primera vuelta y de la consolidación de AP como la más

importante fuerza política a nivel nacional y local, el oficialismo no alcanzó la mayoría parlamentaria absoluta, sus candidatos fueron derrotados para la alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayas –las grandes circunscripciones electorales del país– y estuvo lejos del 63% con el que se aprobó la Carta Magna en septiembre 2008. El 52% de respaldo a la reelección evidenciaría que la agenda de cambio no es visualizada como bandera de un solo movimiento político. El MPD y PK recuperaron, en este marco, sus cotas de representación parlamentaria y local.

Antes y después de las elecciones generales, la tensión y beligerancia entre Correa y, sobre todo, las organizaciones indígenas, se mantuvo constante. Los primeros embates se dieron, en enero de 2009, luego de que sectores indígenas y ambientalistas anunciaran su resistencia a la minería y acusaran al gobierno de neoliberal. Correa respondió violentamente. Habló de los peligros que representa el “izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil” para el proyecto nacional de cambio político. En adelante, la estrategia gubernamental pareció reorientar la polarización hacia la dirigencia indígena.

Con la instalación del nuevo parlamento, por otro lado, la “política de puertas abiertas” de la constituyente se revertió. La impaciencia revolucionaria de Correa y AP en Montecristi obligó a la función legislativa, electa en abril de 2009, a aprobar más de once leyes en un año. Se trataba de un claro desincentivo institucional para la deliberación pública y para la búsqueda de acuerdos sustantivos entre AP y las minorías cercanas. Por lo demás, contener los problemas de heterogeneidad, diferenciación e incluso antagonismo al interior de la renovada bancada oficialista aparecía, más bien, como la prioridad de sus coordinadores. En el nuevo bloque mayoritario se cuentan menos legisladores cercanos al campo de las organizaciones populares. La ruptura de la coalición política –desapareció el “mega-bloque”– tejida en Montecristi redujo, además, las opciones para que estas últimas puedan incidir en el debate parlamentario. Tal descomposición articuladora, que refleja e incuba recurrentes episodios de volatilidad programática, estimuló la reactivación del conflicto.

Así, además de los sectores que confrontaron al gobierno ‘por derecha’ y desde el arranque mismo del gobierno, desde 2009 se observa una serie de protestas provenientes de sectores organizados más o menos cercanos al arco progresista. En la configuración de tal escenario han pesado no solo diferendos programáticos en la orientación de las leyes, sino la baja disponibilidad del oficialismo para entablar procesos de interlocución política incluso con aquellos sectores que le han sido globalmente afines. Las diversas líneas de oposición social a los proyectos de ley y las dificultades de coordinación al interior del bloque de AP han retrasado su procesamiento³³. El ritmo de cambio político de la Revolución Ciudadana se ha desacelerado en medio de la exasperación de un presidente al que la gran industria mediática califica como todopoderoso.

El punto más alto del conflicto, luego de tres años del gobierno de AP, llegó a fines de 2009, cuando convergieron las movilizaciones indígenas en rechazo a ciertos artículos del proyecto de Ley de Aguas, las protestas del gremio docente en contra de la evaluación académica de los maestros y aquella de profesores y estudiantes universitarios en oposición al proyecto de ley que regularía la educación superior. La intensa cobertura mediática de las protestas no conseguía ocultar, sin embargo, la atomización de la acción colectiva y la des-implicación de una ciudadanía que, del

todo distante de la política, aún no retira la confianza a su nuevo presidente. Aunque tales sectores han mantenido específicas críticas al gobierno y a los proyectos de ley presentados por AP, comparten entre sí un malestar similar por la subestimación política y la ausencia de interlocución con el oficialismo. Correa parece creer que en la dinámica de redistribución material –que su gobierno presenta como uno de sus principales logros³⁴– está contenida la dimensión de reconocimiento moral y político con la que los sujetos consiguen inscribirse, de modo íntegro, en el proceso democrático de formación de la voluntad popular. El énfasis en la ampliación de los derechos sociales sin efectivo reconocimiento del valor público de las identidades políticas y de la contribución histórica de las fuerzas sociales a la producción y a la reproducción social tiende, no obstante, a restringir el margen de validez normativa de las pretensiones igualitarias de la agenda gubernativa.

El diálogo con el MIE –que desde 1990 se había “sentado” con todos los gobiernos de turno– solo fue posible, sintomáticamente, una vez que la beligerancia de la protesta, sobre todo en la Amazonía, llegara a tal nivel que hubo de registrarse la muerte de un manifestante. Ya en los diálogos, uno de los principales reclamos que la dirigencia indígena planteó al presidente fue su falta de respeto al movimiento. El nuevo canal de televisión pública transmitió en vivo la dura crítica indígena. Por primera vez en tres años de gobierno, Correa era obligado a reconducir su estilo de gestión política, más bien decisionista, a favor de la puesta en marcha de un proceso de negociación. Para inicios de 2010, sin embargo, las conversaciones fueron interrumpidas. Para la CONAIE, el gobierno no tomó en serio el proceso ni acogió sus principales demandas. El gobierno, por su parte, ha argumentado que la dirigencia indígena se atrinchera en una agenda parcial que no toma en cuenta la globalidad del proceso político ni la orientación general de las políticas públicas.

En efecto, las élites empresario-bancarias refutan la idoneidad de la reforma tributaria, de la ilegalización de la terciarización laboral, del incremento del gasto público y de las remuneraciones, de la regulación bancaria, del arancelamiento a ciertas importaciones y de las mismas coaliciones geopolíticas del país –Correa se ha acercado al eje Brasilia-Caracas-Buenos Aires-La Paz– como medidas gubernamentales que no propician un entorno seguro para la inversión extranjera. En medio de los problemas de generación de empleo que ha enfrentado el Ecuador en 2009, en el contexto de la crisis global del capitalismo, pujan entonces por una vuelta a la agenda ortodoxa y rechazan la recuperación de las capacidades estatales para planificar, promover y regular la economía y el desarrollo nacional.

Aunque con ciertos matices, los actores movilizados tienden a reconocer los avances de esta constelación de políticas post-neoliberales. Resienten sin embargo, por un lado, del activismo gubernativo y del relativo incremento del volumen de intervenciones públicas que no requieren necesariamente de la intermediación del mundo asociativo. La voluntad gubernamental de ampliar la cobertura de las políticas públicas y de entrar en directa conexión con la sociedad desestructuran, así, las agendas políticas y organizativas de unas dinámicas de acción colectiva que, hasta hace poco, ponían por delante tácticas puramente reivindicativas en procura de algo más de protección y presencia estatal en los territorios. Por otro lado, y en el marco de las mismas tensiones abiertas por el retorno del Estado, indígenas, maestros y universitarios –entre otros– condenan una línea de reforma que apuntaría a la

descorporativización de las instituciones públicas. En su perspectiva, la autonomía de las organizaciones sociales se juega en la preservación de los espacios de representación conquistados en determinados segmentos de la administración pública. Defienden entonces la legitimidad de la presencia de intereses e identidades políticas y gremiales *dentro* del Estado. Al así hacerlo toman distancia del universalismo de la Revolución Ciudadana y de su tendencia a colocar al ciudadano abstracto y a los actores organizados en un mismo plano de reconocimiento político.

En otro andarivel, empieza a expandirse una retórica contraria a un patrón de desarrollo –aun cuando sea post-neoliberal y redistributivo– que se centra en formas convencionales de explotación de los recursos naturales. Sus planteamientos han abierto un prolífico e inédito debate entre diversas tendencias de la izquierda, gubernativa y no, sobre los modelos de desarrollo. El post-extractivismo está en el horizonte de estas tendencias. La discusión se centra en qué tipo de vías se escogen, en el presente, para viabilizar un nuevo eje de acumulación en las próximas décadas. La opción minera espanta incluso a altos funcionarios gubernamentales. Correa no parece ver más alternativas inmediatas a mano. La protesta anti-minera, fundada en dinámicas comunitarias de base campesina e indígena y articulada en redes ecologistas transnacionales, tenderá entonces a cobrar mayor ímpetu en los próximos años. Las coaliciones socio-políticas que abran la ruta del post-desarrollo están, sin embargo, muy lejos de su cabal implantación.

Así, la implicación social en el debate sobre la más ambiciosa propuesta ambiental del gobierno, la iniciativa ITT, no termina de despegar. La sociedad mira con relativa distancia las fracturas gubernamentales³⁵ provocadas por las diferentes perspectivas con que se procesa la propuesta de no explotar el campo petrolero Ispingo-Tambococha-Tiputini (ITT) a cambio del aporte financiero de la comunidad internacional por la contribución del país a la conservación de una de las reservas de biosfera más importantes del planeta (el parque nacional Yasuní)³⁶. Luego de tres años del lanzamiento de la propuesta, apenas cuatro de cada diez ciudadanos “han oído hablar” de la iniciativa³⁷. Incluso las agendas gubernativas de nítido signo progresista tienen problemas para anclarse en procesos de movilización colectiva que, desde la sociedad, puedan otorgarles mayor legitimidad y fuerza política a la hora de encarar los conflictivos procesos de negociación que deben encarar dentro y fuera de un gobierno atravesado por una marcada heterogeneidad.

Para fines de la primera década del siglo XXI, en suma, el combate a la “partidocracia” y al neoliberalismo habría dejado de funcionar como nodo articulador del campo progresista. Ciertas inconsistencias programáticas del gobierno, el unilateralismo político de su líder y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales lo desmigajan y confrontan entre sí. Dicha confrontación exacerba la incertidumbre estratégica en que se mueven todos los actores sociales y políticos en el proceso de transición hegemónica que vive el Ecuador. El errático comportamiento de los movimientos, de los cívicos guayaquileños y de cierta dirigencia indígena se sitúa en tal entorno de elevada incertidumbre. La incapacidad presidencial para reconocer cuánto del camino que hoy pisa fue despejado, hace poco, por diversas iniciativas colectivas democráticas no hace sino profundizar el desconcierto. Walter Benjamin creyó encontrar trazos autodestructivos en las visiones del progreso que licuaban la memoria de las víctimas de las generaciones pasadas en su pura apuesta por el futuro.

Bibliografía

- Acosta, Alberto *et al.* 2009 "Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido. Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT" en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N° 23.
- Andrade, Pablo 2005 "¿Populismos renovados? Ecuador y Venezuela en perspectiva comparada" en Andrade, Pablo (ed.) *Constitucionalismo autoritario: los regímenes contemporáneos en la Región Andina* (Quito: UASB/CEN).
- Barrera, Augusto 2001 "Nada solo para los indios: a propósito del último levantamiento indígena" en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Barrera, Augusto (ed.) 2004 *Entre la utopía y el desencanto. Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez*. (Quito: Planeta)
- Bensaid, Daniel 2005 "Multitudes ventrílocuas" en *Viento Sur* (s/d) N° 79, marzo.
- Birk, N. 2009 "The Participatory Process of Ecuador's Constituent Assembly 2007/2008", tesis de maestría en la Universidad de Amsterdam.
- Bretón, Víctor 2007 "La deriva identitaria del movimiento indígena en los Andes ecuatorianos o los límites de la etnofagia", ponencia presentada en el 50° Congreso de FLACSO-Ecuador, del 29 al 31 de octubre.
- Chiriboga, Manuel 2001 "El levantamiento indígena ecuatoriano de 2001: una interpelación" en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Dávalos, Pablo 2004 "Izquierda, utopía y movimiento indígena en el Ecuador" en Rodríguez, César *et al.* (eds.) *La nueva izquierda en América Latina* (Bogotá: Grupo Norma).
- Echeverría, Julio 2005 *El desafío constitucional: crisis institucional y proceso político* (Quito: ILDIS-Abya Yala).
- El Comercio* 2010 (Quito) 17 de abril.
- Hidalgo, Francisco; Corral, Luis y Alfaro, Eloy 2005 "El que se vayan todos y las asambleas populares en el Ecuador" en *Herramienta* (Buenos Aires) N° 29.
- Honneth, Axel 1996 "La dynamique sociale du mépris. D'ou parle une théorie critique de la société?" en Bouchindhomme, Christian y Rochlitz, Rainer (dirs.) *Habermas, la raison, la critique* (París: Cerf).
- Hoy* 2010 (Quito) 25 de marzo.
- Hurtado, Edison 2005 "Lo que pasó en CIESPAL. Apuntes etnográficos sobre el poder, los medios y los sin-sentidos de la violencia." en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 23.
- Ibarra, Hernán 2008 "Notas sobre las clases medias ecuatorianas" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 74.
- Larrea, Gustavo 2008 "Alianza País: una apuesta política novedosa" en Ramírez Gallegos, Franklin (ed.) *La innovación partidista de las izquierdas en América Latina* (Quito: ILDIS).
- León, Jorge 2009 "A nova Constituição do Equador, 2008" en Serafim, Lizandra y Moroni, José Antonio (orgs.) *Sociedade civil e novas institucionalidades democráticas na América Latina* (San Pablo: Instituto Pólis-INESC).
- Moreano, Alejandro *et al.* 1998 *La Nueva Constitución: escenarios, actores, derechos* (Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD).
- Offe, Claus 1992 *La gestión política* (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

- Ospina, Pablo 2005 "El abril que se llevó al Coronel que no murió en el intento" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 65, agosto.
- Ospina, Pablo 2009 "Historia de un desencuentro: Rafael Correa y los movimientos sociales en el Ecuador" en Hoetmer, Raphael (coord.) *Repensar la política desde América Latina. Cultura, Estado y movimientos sociales*. (Lima: UNMSN).
- Pérez Ledesma, Manuel 1994 "Cuando lleguen los días del cólera" en *Zona Abierta* (Madrid: Fundación Pablo Iglesias) N° 69.
- Quintero, Rafael 2007 "Los socialistas de cara al próximo gobierno" en *La Tendencia* (Quito: Fundación Friedrich Ebert Stiftung) N° 4.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2000 "Equateur: la crise de l'État et du model néolibéral de développement" en *Problèmes d'Amérique Latine* (París: La Documentation Française) N° 36, enero-marzo.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2002 "¿Hegemonías emergentes? Golpismo, política y resignificación democrática. Un contrapunto ecuatoriano-venezolano" en *Las FFAA en la región andina: ¿actores deliberantes o subordinados?* (Lima: Comisión Andina de Juristas/Embajada de Finlandia).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2003 "El paso del movimiento indio y Pachakutik por el poder" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IV, N° 11.
- Ramírez Gallegos, Franklin 2005 *La insurrección de abril no fue solo una fiesta* (Quito: Taller El Colectivo/CIUDAD/Terranueva/Abya-Yala).
- Ramírez Gallegos, Franklin et al. 2006 *Participación ciudadana y reforma política. El caso del Sistema de Concertación Ciudadana* (Quito: Taller El Colectivo/PDDL-GTZ).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2008 "Le mouvement indigène et la reconstitution de la gauche en Equateur" en Vommaro, Gabriel (ed.) *La Carte rouge d'Amérique Latine* (París: Du Croquant).
- Ramírez Gallegos, Franklin 2010 "Desencuentros, convergencias, polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales" en *Nueva Sociedad* (Quito: Fundación Friedrich Ebert Stiftung) N° 227, marzo-abril.
- Rheingold, Howard 2005 *Multitudes Inteligentes: la próxima revolución social* (Barcelona: Gedisa).
- Romero, M. 1999 "Coyuntura nacional: se profundiza la recesión y la incertidumbre" en *Ecuador Debate* (Quito: Centro Andino de Acción Popular) N° 47.
- Rosanvallon, Pierre 2007 *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. (Buenos Aires: Manantial).
- Saint-Upéry, Marc 2001 "El movimiento indígena ecuatoriano y la política del reconocimiento" en *ICONOS* (Quito: FLACSO-Ecuador) N° 10, abril.
- Seligson, Mitchell 2008 *Cultura política de la democracia en Ecuador 2008* (Quito: Vanderbilt University/Cedatos).
- Senplades 2009 *Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el buen vivir* (Quito).
- Silva, Erika 2005 "El coronel y los forajidos" en *Renovación* (Cuenca: s/d) N° 7, mayo.
- Tapia, Luis 2001 "Subsuelo político" en García Linera, Álvaro et al. *Pluriverso. Teoría política boliviana*. (La Paz: Muela del Diablo).

Tilly, Charles 2005 "Los movimientos sociales entran en el siglo XXI" en *Política y Sociedad* (Madrid: Universidad Complutense) Vol. 42, N° 2.

Unda, Mario 2005 "Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VI, N° 16.

Zavaleta Mercado, René 2008 *Lo nacional-popular en Bolivia* (La Paz: Plural Editores).

Notas

1 El enjuiciamiento político en 1996 del ex presidente y empresario conservador León Febres Cordero—uno de los políticos más influyentes del país—a su ex ministro, co-ideario y para entonces vicepresidente de la República, Alberto Dahik, inició un período de intenso faccionalismo intra-elitario que impediría, por ejemplo, la privatización de las empresas telefónicas y eléctricas. Ver Diario *Hoy* 2002 "Modernización: diez años de frustraciones y pocos resultados" (Quito) suplemento *Blanco y Negro*, 1 de junio.

2 En 1994, por medio de una Consulta popular, se aprobó la posibilidad de que ciudadanos no pertenecientes a los partidos políticos (los "independientes") puedan postularse como candidatos a cualquier elección popular. PK sería uno de los primeros y más exitosos movimientos en aprovechar tal apertura institucional.

3 Se eliminó la noción de áreas estratégicas y de las formas de propiedad estatal y comunitaria y se dio paso a "una propiedad nominal sobre los recursos naturales no renovables cuya exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas" (Moreano, 1998).

4 Se ampliaron los derechos y garantías ciudadanas de mujeres, niños, jóvenes, ambientalistas, consumidores, gays, personas de la tercera edad y otros grupos sociales.

5 En 1999 se cerraron 2.500 empresas que incluían sectores dinámicos como el bananero, el camarero y el pesquero. El desempleo abierto pasó así de 9.2% en marzo de 1998 a 17% en julio de 1999 (Romero, 1999).

6 La década cerraba con un promedio de la tasa de crecimiento anual *per cápita* igual a 0%, según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en su versión 3.0.

7 Véase "Levantamiento de los Pueblos crece" en *Boletín de Prensa de la CONAIE*, 19 de enero de 2000.

8 Entre 1992 y 1996 se desarrollaron acuerdos, en los comités directivos de ciertas empresas públicas, entre sindicatos cuyos dirigentes formaban parte de la CMS, movimientos sociales y militares en contra de los proyectos de privatización. En el Ecuador los militares han sido accionistas o propietarios de algunas de tales empresas (Ramírez Gallegos, 2002).

9 Un destacado intelectual indígena planteó, sin embargo, que si bien comprendía las razones co-

yunturales de la agenda "no india", había que tener cuidado con una inflexión programática que olvide el proyecto histórico de la plurinacionalidad (Saint-Upéry, 2001: 57).

10 Se trataba del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE). Para Bretón (2008) dicho proyecto contribuyó a acelerar la fragmentación entre indígenas y campesinos. PRODEPINE—ícono de la política neoliberal de desarrollo para los pueblos indígenas—fue implementado con la participación de las élites locales y nacionales de las organizaciones étnicas. El Estado no disponía de ningún mecanismo de fiscalización sobre el proyecto.

11 El proyecto establecía el aumento de las horas de trabajo de 40 a 48, facilidades para la remoción de empleados públicos y el congelamiento de los salarios.

12 Internet y el teléfono móvil contribuyeron a la convergencia de sectores del todo dispares. Howard Rheingold (2005) analiza las movilizaciones previas a la destitución del presidente filipino J. Estrada en 2001 y acuña la expresión "multitudes inteligentes" para referirse a la centralidad de las tecnologías de la comunicación en la coordinación de las redes de acción colectiva. Charles Tilly (2005) advierte, sin embargo, contra los peligros de un determinismo tecnológico en el análisis de los cambios en los movimientos sociales.

13 Véase, por ejemplo, Julio Echeverría (2005), sobre todo el Capítulo 5.

14 En ello coinciden diversos análisis: Unda, 2005; Hurtado, 2005; Silva, 2005; Ramírez, 2005.

15 Con tal expresión Tapia (2001) hace referencia a los ámbitos políticos de baja visibilidad pública.

16 Se pueden citar como ejemplos a las asambleas de La Floresta, Parque Italia, Plaza Grande, Conocoto, entre otras. Ver al respecto Hidalgo *et al.* (2005).

17 Destacaron la Asamblea de la Salesiana, la Asamblea de Mujeres de Quito (aún vigente) y el Colectivo Democracia Ahora (donde participaron figuras de las organizaciones urbanas antes adscritas a PK).

18 Sobre las fracciones asamblearias en la violenta transmisión de mando a Palacio, véase Edison Hurtado (2005).

19 Fue vicepresidente de Gutiérrez. Una vez proclamada su destitución, se dio paso a la sucesión constitucional.

20 Se trata de proyectos vinculados al control del gasto electoral, el monitoreo de medios, observatorios de política pública, etcétera. Los directores de ONG como Participación Ciudadana, Corporación Latinoamericana de Desarrollo, entre otras, adquirieron intenso protagonismo público en aquellos días. Algunos de sus líderes, tiempo después, pasaron a la escena electoral en el marco de coaliciones con diferente signo político.

21 Según datos del informe final del SCC, el sistema recibió 230.930 “participaciones ciudadanas” y 52.415 propuestas ciudadanas entre junio y agosto de 2005. Sobre el frustrado proceso de reforma política y el funcionamiento del SCC véase Ramírez Gallegos *et al.* (2006).

22 Este segmento del texto contiene parte de los argumentos desarrollados en Ramírez Gallegos (2010).

23 Así se autodefine el gobierno de Correa.

24 Nombre del movimiento político liderado por Correa. P.A.I.S. significa Patria Altiva I Soberana.

25 En 2001, el 34% de los ecuatorianos manifestaron haber participado en “comités pro-mejoras de la comunidad”; en 2008 este indicador se ubicaba en el 26%. La tendencia se repite para otras instancias asociativas. La participación ciudadana en los gobiernos locales decayó, igualmente, del 10,8 en el 2001 al 5,7 en el 2008 (Seligson, 2008).

26 Se trata de “los sectores sociales intermedios, urbanos y rurales, los trabajadores asalariados no proletarios, la pequeña burguesía urbana y rural, intelectuales, burócratas, profesionales urbanos y rurales, pequeños y medianos comerciantes, transportistas, obreros en activo y muchos empresarios individuales –no corporativizados– con ideas nacionalistas” (Quintero, 2007: 41).

27 Dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), del Seguro Social Campesino, del Foro Urbano, ex militantes del Pachakutik, entre otros, terciaron por AP.

28 Pequeño cantón de la provincia de Manabí, al norte del litoral ecuatoriano, donde se desarrolló la Asamblea. Allí nació el general Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal que a inicios del siglo XX consagró la separación entre la iglesia y el Estado y el

derecho a la educación laica y gratuita. Es uno de los referentes de Correa.

29 La ANC recibió alrededor de 70 mil personas entre movilizaciones y eventos. Los 23 Foros Nacionales contaron con la participación de 11.500 ciudadanos. Más de 3.100 propuestas fueron, además, enviadas por la ciudadanía (Birk, 2009).

30 Se hace referencia, entre otros, a los ecuatorianos residentes en el exterior, a las personas con discapacidad, montubios (campesinos de la Costa) y extranjeros. En una formulación post-liberal, además, la Carta Magna reconoce a individuos y colectivos (pueblos, nacionalidades, organizaciones) como sujetos de participación.

31 Los denominados “derechos del buen vivir” incluyen dimensiones ambientales, tecnológicas, comunicativas y culturales.

32 La crisis del oficialismo provenía de las diferentes posiciones en relación al fin de la Asamblea. Acosta no quería sacrificar la calidad del debate en nombre de los tiempos políticos. Planteó extender las deliberaciones. Las encuestas evidenciaban, sin embargo, un acelerado desgaste del proceso. Correa y el comando central de AP leyeron la propuesta como un suicidio político.

33 Por mandato constitucional hasta fines de 2009 debían aprobarse 16 leyes que viabilizaran el proceso de transición institucional y el cambio de régimen de desarrollo. Hasta marzo de 2010 solo habían sido aprobadas 5.

34 La reforma tributaria de carácter progresivo, el consistente aumento de la inversión en política social y el incremento de la cobertura del ingreso familiar con relación a la canasta básica aparecen como elementos nodales de la agenda redistributiva del gobierno. Véase Senplades, 2009.

35 Fander Falconí, uno de los fundadores de AP, renunció como Canciller en enero de 2010 por controversias con el presidente sobre el manejo del fideicomiso que regentaría los aportes internacionales por el ITT.

36 Los detalles de la propuesta pueden encontrarse en el trabajo de Acosta *et al.*, 2009.

37 Véase el informe mensual Perfiles de Opinión de enero de 2010.

Os rumos das lutas sociais no período 2000-2010

**ROBERTO LEHER, ALICE COUTINHO DA TRINDADE,
JACQUELINE ALINE BOTELHO LIMA E REGINALDO COSTA**

Integrantes del Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Brasil del OSAL, con sede en el Laboratorio de Políticas Públicas de la UERJ.

Resumen

El estudio analiza las luchas sociales de la primera década del dos mil a partir de las cronologías de OSAL-Brasil y de indicadores agregados por DIEESE, la CPT y DATALUTA. Los indicadores empíricos cuantitativos son indagados buscando aprehender las grandes tendencias de las luchas sindicales y de los movimientos sociales en dos períodos: 2000-2002 y 2003-2009.

Abstract

The article reviews social struggle during the first decade of the twenty-first century based on the timelines prepared by the Brazilian committee for OSAL, DIEESE indicators, CPT and DATALUTA periodical. Empirical indicators are examined to try to comprehend marked tendencies in union struggle and social movements during two extended periods: 2000-2002 and 2003-2009.

Palabras clave

Brasil, movimientos sociales, movimiento sindical, lucha social

Keywords

Brazil, social movements, unionism, social struggle

Cómo citar este artículo

Leher, Roberto; Coutinho da Trindade, Alice; Botelho Lima, Jacqueline Aline y Costa, Reginaldo 2010 "Os rumos das lutas sociais no período 2000-2010" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Crise do neoliberalismo ortodoxo e a governabilidade para o capital

Para compreender as lutas sociais na primeira década do novo século no Brasil é indispensável considerar o estado geral das lutas do final dos anos noventa, a correlação de forças entre as frações de classes e as perspectivas estratégicas mais marcantes dos principais protagonistas sociais. Do ponto de vista dos setores

dominantes, em particular das frações que operam o capital portador de juros, o agronegócio, o setor de *commodities*, bem como as que atuam na complexa e heterogênea base industrial, os últimos anos da década foram de forte instabilidade em decorrência da crise que vinha convulsionando a América Latina, particularmente a partir da Crise Mexicana de 1994. O agravamento da crise abriu caminho para que os setores dominantes lançassem o Plano Real em julho de 2004. O principal desdobramento político do plano foi a eleição de um governo neoliberal, mas sem o rosto da direita como fora o governo Collor de Mello. O novo presidente, Fernando Henrique Cardoso (FHC), expressava a tentativa de saída de uma duradoura crise de hegemonia do bloco de poder que vinha se estendendo desde a Crise da Dívida de 1982. Nos termos de Fiori (1995): “[...] o Plano Real não teria sido concebido para eleger FHC, mas, na ordem inversa, a candidatura FHC teria sido gestada pelas novas elites dominantes para viabilizar, no Brasil, a coalizão de poder capaz de dar sustentação de permanência ao programa de estabilização hegemônico”. Fiori argumenta que a gestão do Plano Real necessitaria de condições renovadas de governabilidade da ordem social e do próprio bloco de poder. Mas ao longo dos anos a combinação das turbulências na economia com a persistência de lutas sociais, ainda que mais corporativas do que na década anterior, erodiu a sua capacidade de manejo da governabilidade e de conduzir um novo bloco hegemônico, deixando inconclusa a crise hegemônica das duas últimas décadas.

O acompanhamento, nos principais jornais voltados para os negócios, dos discursos das frações burguesas dominantes estrangeiras e no Brasil que circularam em 2002, revela uma situação até então impensável: significativas lideranças do grande negócio admitem que veem com bons olhos a eleição de um antigo e importante antagonista, Lula da Silva, desde que houvesse a garantia prévia da manutenção das regras do jogo neoliberal –responsabilidade fiscal, metas de inflação e autonomia do Banco Central (Leher, 2003). No diapasão da tese do alívio à pobreza em nome da governabilidade do Banco Mundial, os setores dominantes passaram a reconhecer a necessidade de maior “responsabilidade social”, desde que sem alterações macroeconômicas e sem qualquer saudosismo com o velho Estado de Bem Estar Social, agora relexicalizado como “populismo”.

Essa equação política aparentemente inusitada –em que frações do capital saíram em defesa do alívio à pobreza e da eleição de candidatos provenientes da esquerda– estava referenciada em um corpo teórico sistematizado por Anthony Giddens: a Terceira Via. Na América Latina já havia o precedente do governo do “socialista” Ricardo Lagos, no Chile (2000-2006), e da própria *Concertación* que lhe deu sustentação.

Existem fortes indícios de que a coalizão de classes mais internacionalizada tornou-se orgânica no governo Lula da Silva, incorporando segmentos burgueses regionais (Partido do Movimento Democrático Brasileiro –PMDB–), sindicatos (Central Única dos Trabalhadores –CUT–, Força Sindical, Central dos Trabalhadores Brasileiros) e movimentos sociais. Cabe citar o apoio dos setores internacionalizados à sua reeleição em 2006, a despeito das ácidas denúncias de frações burguesas minoritárias à corrupção em seu governo e no Partido dos Trabalhadores (PT), provocando enorme estrago em seu partido

(Leher, 2005). Todos os principais partidos conservadores, à exceção do Partido dos Democratas (DEM), em acelerado processo de esvaziamento político eleitoral, e do partido de Cardoso (PSDB), estão na base de apoio de Lula da Silva, inclusive os ex-presidentes José Sarney (PMDB) e Fernando Collor de Mello (PTB). Todas essas forças sustentam a candidata de Lula da Silva no pleito de 2010, Dilma Rousseff.

Se a inflexão das frações burguesas dominantes era impensável há uma década, mais complexo é compreender como o PT e seu principal braço sindical, a CUT, se moveram nesse contexto. São muitos os determinantes e acontecimentos desse transformismo, particularmente relevante na CUT¹. Além da crise do socialismo já mencionada, outras dimensões relevantes foram a recepção da tese do fim da centralidade do trabalho² e da perda do potencial transformador da classe trabalhadora³.

Lutas sociais nos anos 2000-2002

O contexto de perda de legitimidade do governo Federal, de crise energética, de instabilidade econômica, de avanço na contra-reforma do Estado e a expectativa eleitoral positiva de grande parte dos movimentos e sindicatos dirigidos pelo PT, tornou o governo Cardoso um alvo permanente. Embora tenha ocorrido uma queda muito significativa das greves no período 1995-2002, isso não significa ausência de lutas relevantes, como pode ser visto (tabela 1) pelo número de trabalhadores envolvidos e pelas horas de trabalho perdidas em virtude das paralisações.

Tabela 1. Greves, trabalhadores envolvidos e horas paradas (1995 a 2002)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Greves	1.056	1.242	633	546	507	526	420	304
Trabalhadores	2.283.114	2.482.528	808.495	1.241.080	1.301.656	3.819.586	847.639	1.217.865
Trabalhadores x dias parados	181.512.130	170.509.149	50.326.733	133.957.622	37.741.869	228.464.771	72.293.144	116.220.031

Fonte: DIEESE, "Tabulações do sistema de acompanhamento de greves no Brasil 1995-2007".

No início da presente década ocorreu um arrefecimento das lutas sindicais, após um pico de greves em 2000. Neste ano, os sindicatos que convocaram as greves foram de grande porte, o que explica que o número de trabalhadores envolvidos tenha sido praticamente o triplo do verificado nos últimos anos da década anterior. As horas paradas corroboram a proposição de que as greves foram longas e de alta adesão, ao menos para os padrões dos anos noventa. Neste período, o protagonismo dos servidores públicos foi marcante como reação contra o aprofundamento da "Reforma do Estado" acordado com o FMI por ocasião da crise de 1998. A greve de 2001 dos docentes das universidades federais, organizada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), com duração de mais de três meses, foi representativa do biênio analisado. Embora o

desfecho econômico, em termos de correção salarial, tenha sido abaixo do reivindicado, houve êxito na defesa do Regime Jurídico Único (RJU). Com efeito, dos 95 conflitos sindicais registrados na cronologia resumida do OSAL (2000-2002), 66% foram de entidades de servidores públicos.

“O índice de GINI sobre a concentração fundiária segue na mesma faixa desde 1985 (atualmente é de 0,854), comprovando a força do agronegócio”

As lutas dos movimentos sociais do campo foram muito intensas no período, particularmente as protagonizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)⁴. Mesmo com a redemocratização, a concentração de terras no Brasil não se alterou. O índice de GINI sobre a concentração fundiária segue na mesma faixa desde 1985 (atualmente é de 0,854), comprovando a força do agronegócio.

O estancamento da reforma agrária em virtude da crescente centralidade do agronegócio no padrão de acumulação vigente tornou a questão agrária dramaticamente conflituosa. Nos três últimos anos do governo Cardoso, conforme a Comissão Pastoral da Terra (CPT), os conflitos de terra foram ascendentes: 564 (2000) para 625 (2001) e 743 (2002), envolvendo expressivo número de ocupações (393, 194 e 184), e também de acampamentos (65, 64 e 285)⁵ nos anos respectivos. Frente às mobilizações do MST, em 2000, Cardoso editou uma medida duramente repressiva contra a luta pela reforma agrária, determinando que terras ocupadas seriam indisponíveis para fins de reforma agrária por quatro anos. Nesse contexto, o MST realizou o seu IV Congresso, o maior de sua história, com mais de 11 mil participantes. Cabe destacar o protagonismo das mulheres camponesas que realizaram massiva manifestação, a Marcha das Margaridas, logo na sequência do congresso, reunindo mais de 15 mil militantes. Nesse ano, o Grito dos Excluídos organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e por movimentos sociais próximos ao MST reuniu, em todo país, 100 mil manifestantes (situação que se repetiu em 2001 e 2002). No final de 2001, o MST ocupou uma terra de propriedade do filho do presidente Cardoso. Em 2002, novamente, outra fazenda de propriedade compartilhada por Cardoso foi ocupada por mil militantes, confirmando o uso de formas de luta mais impetuosas pelo movimento. Resultaram desta ação 16 presos. No período, os movimentos camponeses e de trabalhadores rurais totalizaram expressivos 71 registros do OSAL, equivalente a 80% do total de greves sindicais dos setores público e privado.

No início da nova década o movimento indígena ganhou força, como é possível depreender das marchas indígenas de 2000 (Movimento Brasil, Outros 500) em defesa da identidade dos povos originários, criticando as celebrações da “descoberta” do Brasil e denunciando massacres e usurpações de terras. A culminância dessas lutas foram as manifestações em Porto Seguro, Bahia, reunindo além dos povos indígenas, o MST, os estudantes, a CUT, entre outras entidades. A repressão contou com 5 mil policiais, resultando em 131 detidos e 30 feridos. No período, foram registrados na cronologia resumida 13 conflitos envolvendo os povos indígenas.

Vale destacar também a maior presença do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLN) que protagonizou 10 conflitos na referida cronologia resumida.

Em 2001, o ano iniciou com um concorrido FSM, reunindo mais de 20 mil manifestantes. Durante o Fórum, o MST e a Via Campesina destruíram plantações de soja transgênica da Monsanto, ilegalmente plantada no Brasil, esboçando uma mudança importante na estratégia do MST: a luta contra as corporações do agronegócio. Em 2002, também em Porto Alegre, foi realizado um grande fórum confirmando o vigor das lutas altermundistas.

Também a mobilização dos educadores organizados em diversas entidades sindicais e acadêmicas prosseguiu sendo relevante na conjuntura, destacando a realização dos Congressos Nacionais de Educação (CONED). Nos 1º e 2º congressos foram aprovadas as bases do “Plano Nacional de Educação: Proposta da Sociedade Brasileira”. Em abril de 2002, em São Paulo, foi realizado o 4º Congresso Nacional de Educação, com cerca de 4 mil participantes, que discutiu as estratégias para manter a agenda do PNE: Proposta da Sociedade Brasileira, após o governo Cardoso ter derrotado o referido projeto (2001). Esse tipo de convocatória pluriorganizacional foi relevante no primeiro biênio da década, correspondendo a 18 registros na cronologia, indicando avanços na estratégia da unidade de ação, reunindo movimentos sindicais, sociais e estudantis. A iniciativa mais relevante de 2002 foi o Plebiscito contra a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), que contou com a participação de mais de 10 milhões de votantes, um êxito considerando que foi auto-organizado pelos movimentos.

Lutas sociais no social-liberalismo (2003- 2009)

A partir da análise empírica dos indicadores das lutas sociais que sustentam o presente artigo é possível desenvolver uma linha de argumentação próxima à realizada por Boito, Galvão e Marcelino (2009) a partir dos indicadores do DIEESE. No período Lula da Silva não houve estancamento das lutas sindicais, apesar de o número de greves ser menor do que o dos anos noventa. Somando todas as greves no período 2003-2008 sequer chegaríamos à metade das greves de 1989 (mais de 4 mil, conforme Mattos, 2005). Com os indicadores do OSAL-Brasil foi possível evidenciar que, mais do que as sindicais, as lutas dos movimentos sociais não sofreram um refluxo significativo, mas assumiram configurações distintas das dos anos oitenta que serão discutidas ao final.

Lutas sindicais e trabalhistas

Conforme os indicadores agregados do Departamento Intersindical de Estadística e Estudios Socioeconômicos (DIEESE), o quadro de greves pode ser sintetizado nas duas tabelas a seguir.

Tabela 2. Greves, trabalhadores envolvidos e horas paradas (2003 a 2008)						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Greves	340	302	299	320	316	411
Trabalhadores envolvidos	1.949.747	1.291.332	2.026.500	1.360.013	1.437.769	2.043.124
Trabalhadores X dias parados	468.561.087	150.473.940	231.291.330	181.611.267	237.128.232	143.412.185

Fonte: DIEESE, “Tabulações do sistema de acompanhamento de greves no Brasil 1995-2007” e “Balanço das Greves em 2008”, nota à imprensa, São Paulo, 23 de julho de 2009.

Tabela 3. Número de greves nas esferas pública e privada (2004 a 2008)

	2004	2005	2006	2007	2008
Esfera / Setor	nº %	nº %	nº %	nº %	nº %
Esfera Pública	185 61,3	162 54,2	165 51,6	161 50,9	184 44,8
Esfera Privada	114 37,7	135 45,2	151 47,2	149 47,2	224 54,5
Esfera Pública e Privada (1)	3 1,0	2 0,7	4 1,3	6 1,9	3 0,7
TOTAL	302 100	299 100	320 100	316 100	411 100

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG) - DIEESE.

Nota: (1) Greves empreendidas conjuntamente por trabalhadores das esferas pública e privada.

Apesar da relevância das greves dos trabalhadores do serviço público, a participação do setor privado foi decididamente crescente, passando de 37,7% (2004) para 54,5% (2008), ano em que, pela primeira vez, temos a supremacia deste setor quando mais de 2 milhões de trabalhadores entraram em greve, tendência que se manteve nos indicadores do OSAL em 2009. No que se refere ao tempo de greve no serviço público e nas empresas públicas, o quadro não se alterou no novo governo, pois as greves seguiram de longa duração. A greve foi um instrumento eficaz, pois muitas categorias acabaram logrando recuperar parte das perdas inflacionárias ou obter alterações na carreira. Como a análise qualitativa dos “motivos” (OSAL/DIEESE) permite constatar, suas agendas estavam centradas em pautas econômico-corporativas, visto a redução sistemática das lutas unificadas (sempre inferiores a 2% das greves) e, principalmente, em torno de pautas políticas e antissistêmicas.

As entidades cutistas do setor público, dirigidas por forças que compunham a base do governo, lograram êxito em esvaziar a Coordenação Nacional de Entidades dos Servidores Públicos Federais (CNESEF), ação que foi coordenada com a estratégia do governo de impor negociações carreira-a-carreira, evitando negociações unificadas (e com pautas políticas) com o setor público federal. Objetivando enfraquecer a representação do setor público da CUT, o presidente da República interferiu na sucessão da central indicando Luiz Marinho, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para o cargo de presidente em 2003, preterindo o ex-presidente, João Felício. Em 2004, Marinho foi nomeado Ministro do Trabalho, evidenciando os fortes nexos da CUT com o governo.

Como os indicadores de greve de 2003 e 2004 demonstram, o início do governo Lula da Silva foi altamente conflituoso com os sindicatos do serviço público. Uma das principais demandas do capital portador de juros era o acesso aos recursos previdenciários dos servidores públicos, até então estatais. Esse intento foi apoiado pelo setor majoritário da CUT, interessado no fortalecimento e na ampliação dos bilionários fundos de pensão, até então restritos às empresas públicas. Para isso, Lula da Silva teria de avançar sobre um terreno que seu antecessor não conseguira conquistar, a (contra) reforma da previdência dos servidores públicos, determinando que: a aposentadoria dos novos servidores fosse mista, parte pelo regime de repartição, parte pelo regime de capitalização; as pensões seriam reduzidas, os aposentados seguiriam recolhendo a contribuição previdenciária, e que a

idade mínima e o tempo para aposentadoria seriam aumentados. O novo governo optou por enfrentar os sindicatos dos servidores, até então filiados à CUT, que deflagraram relevante greve contra a reforma previdenciária em 2003.

Embora a pauta das lutas de 2003 tenha sido aparentemente econômico-política é possível sustentar, a partir da análise empírica dos conflitos, que o acento político foi marcante, não apenas pela agenda, mas também pelas formas de luta adotadas, como as marchas dos servidores públicos contra a Reforma da Previdência, que reuniram, em dois momentos, respectivamente 20 mil e 70 mil manifestantes em Brasília, e a ampla greve realizada, abrangendo cerca de 400 mil servidores, incluindo universidades, seguridade social, Receita Federal, Ministério Público, entre outros. A votação da reforma da previdência ocorreu em um contexto fortemente repressivo, pois o governo federal determinou o cercamento do parlamento pela força policial. O governo saiu vitorioso, abrindo uma crise no PT. Em novembro de 2003, o Diretório Nacional do PT, por 55 a 27 votos, expulsou quatro parlamentares petistas: a senadora Heloísa Helena (AL) e os deputados federais Babá (PA), Luciana Genro (RS) e João Fontes (SE), por terem votado contra a reforma da previdência. Também intelectuais se desligaram do partido, a maior parte para fundar um novo partido de esquerda, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

É possível concluir que, de fato, ao longo da década, ocorreu um maior protagonismo de sindicatos do setor privado, em particular categorias de peso na economia e na luta sindical brasileira, como metalúrgicos⁶, bancários⁷, petroleiros⁸ e, em menor proporção, categorias que não vinham tendo protagonismo relevante, como construção civil⁹, policiais¹⁰ e, no caso das empresas públicas, dos correios¹¹. No caso do serviço público, os destaques são previdência, universidades¹² e educação básica¹³, entre outros.

A inflexão entre os setores privado e público ocorreu no período de agravamento da crise, em 2008 e 2009. Muitas greves assumiram um caráter defensivo e somente em 2009, em algumas atividades apoiadas com isenções tributárias, as pautas de ampliação de direitos e de reposição de perdas salariais voltou a aparecer de modo significativo. Muitos sindicatos que, até então, vinham logrando relativo êxito na recomposição parcial de perdas inflacionárias, aceitaram redução relevante de salário (10% a 20%) em troca de estabilidade por três meses ou, no melhor dos casos, por um semestre. Também sindicatos metalúrgicos pactuaram redução da jornada de trabalho com redução de salário¹⁴ ou até mesmo a demissão de parte dos trabalhadores, como foi o acordo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado à CUT, com a Volkswagen¹⁵.

Entre as lutas em torno da legislação sindical, as mais relevantes foram protagonizadas por setores que romperam com a CUT, notadamente as organizadas pela Coordenação Nacional de Lutas (CONLUTAS) e pela Intersindical. Em março de 2004, o Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST) –que reúne 17 confederações nacionais e 6 centrais sindicais, grande parte da base governista– mobilizou 20 mil pessoas em uma manifestação em Brasília contra a reforma sindical proposta no Fórum Nacional do Trabalho. Entretanto, reivindicou a atual legislação defendendo aspectos combatidos pelo chamado Novo Sindicalismo, como o imposto sindical obrigatório e a unicidade sindical. Pouco depois, outra manifestação contra as reformas sindical e trabalhista, reunindo mais de 8 mil participantes, foi

organizada pela CONLUTAS em Brasília. Em virtude da confluência contraditória de interesses, de um lado, entre o sindicalismo apegado ao imposto sindical e à unicidade e, de outro, entre as entidades que combateram a proposta do FNT pela esquerda, criticando a verticalização compulsória da estrutura sindical, o projeto do governo acabou não avançando no parlamento.

As duas centrais sindicais mais expressivas seguiram sendo a Força Sindical, que migrou para a base de apoio do governo, e a CUT. Em determinados contextos a CUT atuou ao lado da Central de Movimentos Populares (CUT, MST, Movimento dos Trabalhadores sem Teto –MTST–, etc.). Suas principais lutas foram em defesa do crescimento econômico como forma de ampliar os empregos, combatendo a política de juros elevados do Banco Central e, com apoio das organizações dissidentes da CUT, pela redução da jornada de trabalho, reivindicação não apoiada pelo governo federal. Cabe sublinhar que nenhuma das manifestações dessas centrais, excetuando as festas do 1º de Maio (que assumiram um caráter festivo e de entretenimento), foi capaz de ultrapassar 25 mil manifestantes. Em 2004, a CUT promoveu manifestações em 22 capitais contra a política econômica do governo federal, intitulado de “Dia Nacional de Mobilizações e Lutas”, reunindo cerca de 10 mil pessoas em nove capitais. Em 2007, aproximadamente 20 mil pessoas participaram do “Dia Nacional de Mobilização” em Brasília (DF), proposto pela CUT, defendendo a manutenção do veto do presidente à Emenda 3, que impediria os fiscais do Trabalho de autuar empresas por contratações irregulares, como vínculo sem carteira assinada ou trabalho escravo, a ratificação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que garante a negociação coletiva no serviço público e o fim do Interdito Proibitório, usado para restringir as greves em frente ao local de trabalho. No mesmo ano, cerca de 25 mil trabalhadores da CUT, Força Sindical, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, União Geral dos Trabalhadores e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil manifestaram-se na 4ª Marcha da Classe Trabalhadora, em Brasília (DF), em defesa da redução constitucional imediata da jornada de trabalho com aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que ainda em julho de 2010 tramita no Congresso Nacional, incluindo metas graduais de redução até atingir as 36 horas semanais.

O abandono das lutas massivas cobrou seu custo no contexto do aprofundamento da crise de 2008. Nesse ano, apenas 1,5 mil trabalhadores participaram na capital federal da 5ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora (cujo tema foi Desenvolvimento e Valorização do Trabalho) em defesa do emprego, da garantia de renda e contra os efeitos da crise financeira internacional. No ano seguinte, cerca de 3 mil pessoas participaram de um ato político em São Paulo, organizado pelas mesmas seis centrais sindicais e por movimentos sociais, reivindicando a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, investimentos em políticas sociais, além de protestar contra as demissões advindas da crise. No final desse ano, em Brasília, 20 mil pessoas participaram de uma marcha, reivindicando a redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, o monopólio do petróleo pela Petrobrás e o reajuste de salário para os servidores federais.

Outras lutas foram muito significativas no período¹⁶, embora mais pontuais, incidindo sobre problemáticas vitais que introduzem setores populares nas lutas

sociais. Entre estas, destacaram-se: a) os trabalhadores desempregados organizados no Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD); e b) os movimentos por moradia, como as manifestações do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em 2007, que organizou 5 mil pessoas em passeata até o Palácio dos Bandeirantes (sede do governo estadual), em São Paulo, reivindicando moradia popular. Nesse ano, os movimentos de luta por moradia realizaram uma série de manifestações em 15 cidades de 14 estados, no Dia Nacional da Reforma Urbana. Em 2008, 5 mil pessoas ligadas ao MTST realizaram marcha para reivindicar moradia em São Paulo. Ainda nesse ano, organizados no Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU), entidades como a União Nacional por Moradia Popular (UNMP), a Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), a Central de Movimentos Populares (CMP), o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLN), o Fórum Nacional de Reforma Urbana e Fóruns Estaduais e Regionais pela Reforma Urbana protagonizaram a Jornada de Luta pela Reforma Urbana e pelo Direito à Cidade. Em 2009, o MTST realizou quatro ações simultâneas no estado de São Paulo (região Sudeste), trancando rodovias e vias públicas em São Paulo, Campinas, Guarulhos e Osasco, no contexto da mobilização nacional contra o desemprego e por políticas populares contra crise.

Esses movimentos possibilitaram iniciativas importantes de organização popular como a Plenária dos Movimentos Sociais no Rio de Janeiro. Uma das mais originais iniciativas para retomar o sentido original do 1º de Maio aconteceu em 2009, quando os movimentos sociais do Rio de Janeiro realizaram um ato com mais de mil participantes contra a Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na região Sudeste do estado, percorrendo as ruas dos bairros atingidos pela nova siderúrgica. Outro exemplo significativo dessas iniciativas aconteceu em 2008, quando mais de 5 mil pessoas participaram da 13ª edição da “Marcha dos Sem” e da Jornada de Lutas por Soberania Alimentar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reivindicando a adoção do piso nacional dos professores e protestando contra a criminalização dos movimentos sociais.

A reestruturação das formas de organização dos trabalhadores foi um intento permanente, complexo e tortuoso. Após a reforma da previdência alguns sindicatos de servidores públicos iniciaram um processo de afastamento da CUT e, parte deles, passou a atuar na CONLUTAS, criada em 2004 como um espaço de unidade de ação entre sindicatos e, em menor proporção, movimentos sociais. Outras entidades optaram pela criação da *Intersindical*, com maior presença de militantes do PSOL. A construção da CONLUTAS como entidade de caráter sindical e popular avançou em 2006 com o Congresso Nacional de Trabalhadores (CONAT). Participaram do evento 3.500 delegados e observadores ligados a movimentos sindicais, estudantis e populares.

Objetivando avançar na unidade de ação para enfrentar as (contra) reformas do governo Lula da Silva, em 25 de março de 2007 foi convocado o Encontro Nacional Contra as Reformas, em São Paulo, para construir a unidade e organizar a luta em defesa da aposentadoria e dos direitos sociais, sindicais e trabalhistas, contando com a participação de 5 mil pessoas de 626 organizações sindicais, populares e estudantis ligadas a CONLUTAS, a Intersindical, ao Movimento Terra e Liberdade (MTL), ao MTST, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e Pastorais Sociais de

São Paulo e a mais de uma dezena de entidades representativas de trabalhadores e do movimento estudantil. O encontro contou com a saudação de dirigentes do MST (Gilmar Mauro), da Assembleia Popular, da Corrente Classista da CUT e de outras organizações que, pela primeira vez, juntaram suas forças para consolidar uma agenda unificada de lutas. Entretanto, os efeitos práticos do encontro foram muito reduzidos. A unidade de ação somente foi possível em temas pontuais, caso-a-caso. Entre os motivos, a luta interna pela supremacia da direção afastou movimentos e sindicatos que não são orgânicos ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e a determinadas correntes do PSOL.

A autoconstrução da CONLUTAS avançou com o 1º Congresso da CONLUTAS (Betim, Minas Gerais) com o lema ‘Se muito vale o já feito, mais vale o que será’ e reuniu 3.500 pessoas, com 2.805 delegados, representando 175 sindicatos ou oposições sindicais que aprovaram o caráter da coordenação como uma entidade de caráter sindical e popular. A dificuldade de expansão da coordenação e o aprofundamento das consequências sociais do padrão de acumulação reacenderam a busca de unidade de ação. Em novembro de 2009, mais de 1.000 trabalhadores se reuniram na sede do Sindicato dos Bancários, em São Paulo, durante o Seminário de Reorganização Sindical. O principal tema foi a unificação de diversos setores sindicais em uma única central. Estavam a CONLUTAS, a Intersindical, o MTST, o MTL, entre outras. Ao final do encontro, os participantes decidiram pela realização de um congresso para oficializar uma nova central sindical. O Congresso da Classe Trabalhadora foi marcado para os dias 3, 4 e 5 de junho de 2010. Este congresso contudo terminou em impasse. A insistência da CONLUTAS, majoritária no congresso, em manter sua denominação na nova entidade foi interpretada pela base da Intersindical –cujos militantes não priorizaram a eleição de delegados em virtude da disputa pela definição do candidato do PSOL a presidência– e das entidades independentes, como um movimento de absorção das demais entidades pela CONLUTAS e não como a criação de uma entidade nova, produto de uma síntese original. Desse modo, até julho de 2010 a problemática da unidade de ação dos setores que romperam com a CUT segue inconclusa.

Lutas contra as expropriações: trabalhadores do campo e povos indígenas como protagonistas cruciais das lutas do século XXI

A tabela 4 organizada pela CPT (2010) sumariza o quadro das lutas no campo no período 2000-2009.

A análise dos indicadores agregados pela CPT comprova que os movimentos sociais do campo não deixaram de fazer luta no governo Lula da Silva. Ao contrário, os conflitos aumentaram em virtude das expectativas de solução dos mesmos pelo novo governo. As lutas dos cinco primeiros anos adquiriram nuances relevantes que expressaram as contradições do fortalecimento do setor de *commodities* manejado pelas classes dominantes que operavam no país. Mesmo no período em que a quantidade de conflitos pela terra foi reduzida, como em 2008 e 2009, persistiu o enfrentamento dos grandes nódulos do poder dominante no campo.

Tabela 4. Comparação dos Conflitos no Campo (2000 a 2009)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Conflitos de Terra										
Ocorrências de Conflito	174	366	495	659	752	777	761	615	459	528
Ocupações	390	194	184	391	496	437	384	364	252	290
Acampamentos		65	64	285	150	90	67	48	40	36
Total Conf. Terra	564	625	743	1.335	1.398	1.304	1.212	1.027	751	854
Assassinatos	20	29	43	71	37	38	35	25	27	24
Pessoas Envolvidas	439.805	419.165	425.780	1.127.205	965.710	803.850	703.250	612.000	354.225	415.290
Hectares	1.864.002	2.214.90	3.066.46	3.831.45	5.069.39	11.487.072	5.051.348	8.420.083	6.568.755	15.116.590
Conflitos Trab. (1)										
Conflitos pela Água (2)										
Outros * (3)										
Total (4)										
Nº de Conflitos	660	880	925	1.690	1.801	1.881	1.657	1.538	1.170	1.184
Assassinatos	21	29	43	73	39	38	39	28	28	25
Pessoas Envolvidas	556.030	532.772	451.277	1.190.578	975.987	1.021.355	783.801	795.341	502.390	628.009
Hectares	1.864.002	2.214.930	3.066.436	3.831.405	5.069.399	11.487.072	5.051.348	8.420.083	6.568.755	15.116.590

Fonte: Setor de Documentação da Secretaria Nacional da CPT.

* Outros: Conflitos em Tempos de Seca, Política Agrícola e Garimpo.

(1), (2), (3) e (4) não reproduzidos nesta tabela adaptada pelos autores.

No período do governo Lula da Silva as lutas do campo percorreram algumas nervuras axiais e interligadas, como: a) a luta pela terra, por meio de ocupações; b) as lutas cujo antagonista é o Estado, objetivando a desapropriação da terra, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a presidência, o judiciário e o parlamento; c) as lutas por crédito agrícola em condições compatíveis com a realidade da agricultura camponesa, focando o sistema bancário, alvo de inúmeras ocupações, e reivindicando melhoria do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); d) as lutas contra o agronegócio e todo o seu complexo, como os transgênicos, agroquímicos, a repressão e a violência; e) as lutas contra a política econômica dos setores dominantes no âmbito do Estado (Banco Central, Ministério da Fazenda); f) as lutas pelos direitos sociais, em particular pela educação básica e superior e pela saúde (em particular nos povos indígenas); g) a luta pela formação política; h) as lutas por um outro modelo de organização da agricultura (agro ecologia); e i) as lutas com outras frações da classe trabalhadora buscando articular o conjunto dos que vivem no campo (Via Campesina) em uma perspectiva internacionalista e a articulação entre trabalhadores do campo e da cidade, em diversos espaços.

As lutas por desapropriações, desde 2003, estão cada vez mais imbricadas com os embates contra as corporações do agronegócio. Isso significa uma inflexão tática, pois originalmente o principal movimento do campo, o MST, concentrava sua luta na desapropriação do latifúndio improdutivo, reserva de valor de frações burguesas locais. Cada vez mais, o MST é obrigado a enfrentar as corporações, visto que a extraordinária expansão desse setor virtualmente inviabiliza a consolidação de uma agricultura de modelo da pequena agricultura. Essa frente de luta contra o modelo dominante tem como referência um modelo alternativo cujo objetivo é a soberania alimentar dos povos, daí a busca de alternativas que incorporem os conhecimentos científicos na agricultura de alimentos por meio da agro ecologia. Tudo isso requer o rompimento das cercas do latifúndio do conhecimento, por isso a proeminência da luta pela educação, pois esta, nesse escopo, é parte da estratégia política dos movimentos.

Em 2003, o MST e a CPT mobilizaram cerca de 3 mil pessoas e destruíram uma plantação de milho transgênico da empresa Monsanto no Paraná. No mesmo período houve a tentativa de ocupação do Ministério da Agricultura em protesto contra os transgênicos. Em 2007, em uma das ocupações de áreas com transgênicos, importante liderança do MST (Valdir Mota de Oliveira, Kenô) foi assassinada em área de conflito com a Syngenta no Paraná.

A ofensiva contra as corporações do agronegócio adquiriu enorme visibilidade em 2004, quando 3.500 famílias ligadas ao MST derrubaram quatro hectares de plantação de eucalipto usado na produção da multinacional Veracel Celulose. O mesmo ato aconteceu em 2009 com igual repercussão. Um dos atos de maior reverberação ocorreu em 2008, quando mulheres ligadas a Via Campesina ocuparam uma unidade de pesquisa biotecnológica da multinacional Monsanto no município de Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, e destruíram um viveiro de mudas e um campo experimental de milho transgênico. Em 2008, mais de mil trabalhadores do campo e da cidade realizaram a Jornada Nacional de Lutas Contra o Agronegócio e as Transnacionais e ocuparam a transnacional de alimentos Bunge, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul.

A luta pela reforma agrária teve seu momento mais marcante na presente década com a Marcha Nacional pela Reforma Agrária dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (2005) organizada com militantes dos 23 estados do país onde o MST está presente. Ao longo de 17 dias os trabalhadores percorreram 200 quilômetros, entre Goiânia e Brasília, para forçar o governo a colocar em prática o Plano Nacional de Reforma Agrária. Cabe dar destaque ao grande protagonismo das mulheres nessas lutas. Em 2003, cerca de 50 mil mulheres realizaram a Marcha das Margaridas, em Brasília, com a principal reivindicação de pressionar para maior agilidade na reforma agrária. Em agosto de 2007 as mulheres que participaram da 2ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e realizaram a Marcha das Margaridas, na Esplanada dos Ministérios no Distrito Federal, Brasília, reuniram cerca de 50 mil trabalhadoras rurais para reivindicar políticas direcionadas às mulheres, garantia dos direitos adquiridos e mais crédito para as trabalhadoras do campo.

“A luta pela reforma agrária teve seu momento mais marcante na presente década com a Marcha Nacional pela Reforma Agrária dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (2005)...”

Um momento de grande tensionamento foi o ato dos militantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) que ocuparam, em 2006, a Câmara dos Deputados em Brasília. A repressão foi violenta. A polícia de Brasília autuou e prendeu 537 militantes que responderam por crimes de formação de quadrilha, danos ao patrimônio público e corrupção de menores, já que 42 crianças e adolescentes acompanhavam o grupo que contabilizava 579 pessoas. Buscando acentuar os nexos da questão agrária com as corporações o MST e a Via Campesina, em 2007, ocuparam a estrada de ferro Carajás, da CVRD, em Parauapebas, no sudeste do Pará (região Norte).

A ofensiva das corporações da mídia aliada (ou sócia) do agronegócio assumiu grave proporção quando integrantes do MST ocuparam terras que seriam de propriedade do Suco Cítrico Cutrale, no interior de São Paulo. A mídia foi taxativa em classificar a derrubada de alguns pés de laranja como ato de vandalismo, omitindo que a titularidade das terras da empresa é contestada pelo Incra e pela Justiça. Em outubro de 2009, o presidente Lula da Silva criticou o movimento por esta ocupação, exigindo o respeito às leis. O objetivo da ofensiva midiática foi impedir a revisão dos índices de produtividade agrícola –cuja versão em vigor tem como base o censo agropecuário de 1975– e viabilizar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o MST, que acabou sendo aprovada no parlamento e até julho de 2010 ainda não foi concluída, embora o relator da CPMI tenha concluído inexistir qualquer irregularidade nas contas do movimento.

Em decorrência das mobilizações de agosto de 2009, quando 3 mil integrantes do MST e de outros movimentos sociais de 23 estados e do Distrito Federal participaram de um grande acampamento pela Reforma Agrária em Brasília e organizaram protestos em 12 estados, o governo federal sinalizou com concessões relevantes, mas, diante da pressão dos ruralistas e do agronegócio, não as encami-

nhou. Nesta Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária, o MST exigiu ainda o descontingenciamento de R\$ 800 milhões do orçamento do Incra para este ano e a atualização dos índices de produtividade –inalterados desde 1975– e investimentos para o fortalecimento dos assentamentos na área de habitação, infra-estrutura e produção agrícola.

As lutas pela democratização do acesso à terra organizadas em articulação com outras entidades e instituições têm no Grito dos Excluídos um marco muito relevante, pois aproxima a problemática agrária de círculos ligados à Comissão Pastoral da Terra e às Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. O ato mais importante aconteceu na 11ª edição do “Grito dos Excluídos”, reunindo cerca de 200 mil pessoas. O engajamento de setores da Igreja com as lutas do campo marcou a década. Em 2005, após ficar 11 dias em greve de fome em protesto contra a transposição do Rio São Francisco, o bispo Dom Luis Flávio Cappio terminou seu protesto no interior da Bahia. O Vaticano desaprovou veementemente seu gesto, exigindo o fim da greve de fome. Antes da mensagem do Vaticano, contudo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) prestou solidariedade à decisão do frei de iniciar a greve de fome. Em 2007, em virtude do prosseguimento das obras e do fato de que as medidas para proteger os pequenos camponeses sinalizadas pelo governo não se efetivaram, Cappio retomou uma greve de fome para pedir o cancelamento do projeto de transposição do Rio São Francisco. Foi realizada uma romaria que levou caravanas de oito estados a Sobradinho com 4 mil participantes em apoio ao bispo Cappio que, entretanto, foi bloqueada por homens do Exército. Depois de 24 dias de jejum, o frei, bastante debilitado e fraco, suspendeu a greve.

No que se refere à educação e à formação política, o principal marco foi a inauguração, em janeiro de 2005, da Escola Nacional Florestan Fernandes em Guararema, São Paulo, a universidade popular do MST. As lutas pela educação mais importantes foram contra o fechamento das Escolas Itinerantes do MST no Rio Grande do Sul.

Como é possível depreender da análise da Tabela 4, o avanço do agronegócio vem acompanhado de elevado número de assassinatos no campo. A proporção de mortos por conflito segue aumentando, confirmando que as expropriações violentas não são um resquício do passado. Os assassinatos têm tido como alvo importantes lideranças do MST, como Keno, já mencionado, e em agosto de 2009, de Elton Brum da Silva, executado pela Brigada Militar em São Gabriel, Rio Grande do Sul, durante o despejo da Fazenda Southall. Cerca de mil pessoas participaram de marcha em protesto pela morte de Elton Brum da Silva. A coerção não se dá apenas pelas armas, mas também pelo aparato judicial que trava a reforma agrária, criminaliza os que lutam por ela, inclusive com prisões arbitrárias. As corporações da comunicação criam um ambiente ideológico que favorece essas coerções, como visto no caso emblemático da Cutrale, manejado pela Confederação Nacional da Agricultura para viabilizar a CPMI contra o MST.

Os conflitos das corporações, latifundiários e fazendeiros em geral com os povos indígenas têm sido muito recorrentes na década. O conflito de maior destaque foi a luta pela demarcação contínua da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, em Roraima, firmada em 2005 pelo presidente Lula da Silva. Contudo, os fazendeiros tentaram reverter essa medida no Supremo Tribunal Federal que, após muita mobili-

zação dos povos indígenas, reafirmou a demarcação em 2009. Os povos indígenas protagonizaram diversos protestos contra as corporações de minério, a construção de hidroelétricas, algumas vezes em conjunto com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Em 2005, 280 índios da comunidade Xicrin ocuparam o núcleo urbano de Carajás, no Pará (região Norte), onde vivem 3 mil empregados da Companhia Vale do Rio Doce, objetivando pressionar a empresa a conceder benefícios que estariam acordados com a comunidade. O uso do bloqueio de rodovias e o sequestro de representantes dos governos igualmente foram recorrentes.

Houve avanços organizativos dos povos indígenas. Em 2007 foi realizado o 2º Encontro da Aliança dos Povos da Floresta, em Brasília (DF), contando também com seringueiros, ribeirinhos, pescadores, quebradeiras de coco e representantes de organizações da sociedade civil. Fundada nos anos 80, a Aliança dos Povos da Floresta retomou a sua agenda de lutas, embora ressignificada no escopo do desenvolvimento sustentável da Amazônia, tese distinta da preconizada por Chico Mendes, articulador do primeiro encontro e defensor da reforma agrária coletiva, expressa nas reservas extrativistas. No mesmo ano, 250 indígenas participaram do III Fórum Permanente dos Povos Indígenas da Amazônia, em Porto Velho, no estado de Rondônia (região Norte). O encontro foi marcado por um protesto dos indígenas contra a construção do complexo hidrelétrico do Rio Madeira. Além do problema territorial específico, muitas lutas reivindicaram melhor tratamento de saúde dos povos originários. A extensão do problema pode ser evidenciado pelos atos protagonizados por povos indígenas, particularmente do Mato Grosso do Sul. Em 2007 realizaram ocupações e o sequestro de dirigentes da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e de representantes da saúde em protesto com o descaso com a saúde dos indígenas. Neste mesmo ano, cerca de 500 índios da aldeia de Rio das Cobras bloquearam a rodovia BR-277 no município de Nova Laranjeiras, Paraná. Eles reivindicam a presença de um representante da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), de Brasília, para negociar melhores condições na área de saúde para as aldeias da região.

No plano político, uma das principais lutas dos povos foi a aprovação do novo Estatuto dos Povos Indígenas, que tramitou no Congresso há quase 15 anos. Em 2009, cerca de mil índios realizaram uma caminhada e um ato público durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado, em Brasília, para reivindicar garantia de direitos e agilidade na aprovação do novo estatuto que permitiria os indígenas ter poder de veto sobre os projetos de exploração de recursos minerais em suas terras e o fim da tutela, deixando de serem considerados incapazes.

Em virtude do complexo minerador-hidrelétrico, o Movimento dos Atingidos por Barragens ganhou destaque na década. Entre seus atos de maior visibilidade cabe destacar a ocupação da Unidade Termelétrica Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, em 2007, como parte da Jornada de Lutas do dia 14 de março –data que marca o dia internacional de luta contra as barragens. No mesmo ano, 700 integrantes do MAB, com a Via Campesina, ocuparam a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em São Paulo (região Sudeste), em protesto contra a hidrelétrica de Tijucu Alto, cuja energia produzida será utilizada exclusivamente pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do Grupo Votorantim.

Lutas unificadas para além da esfera econômica-corporativa

No contexto das lutas contra o ALCA e a Organização Mundial do Comércio (OMC), as mobilizações contra os tratados de livre comércio foram relevantes até 2005. Nesse ano, 8 mil militantes do MST, pastorais da CNBB, movimentos do campo e movimentos urbanos se reuniram em Brasília na marcha “Assembleia Popular: mutirão para um novo Brasil”. Os manifestantes criticavam o imperialismo americano, a política econômica nacional, o modelo de dependência imposto pelo capital internacional a serviço do capital financeiro, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em frente à embaixada dos Estados Unidos, os manifestantes criticaram a presença do presidente Bush na América Latina e sua visita ao Brasil.

“... a questão racial ganhou maior dimensão no país, impulsionada pelo debate das cotas para acesso à educação superior”

A visita do presidente George W. Bush ao Brasil em 2007 foi repudiada por manifestações em 18 estados do país. Em São Paulo, a Marcha Mundial de Mulheres, o MST, o PSTU da Conlutas, o Partido Comunista do Brasil (PC do B), a CUT, PT, PSOL e várias ONGs fizeram uma passeata em protesto contra a visita, reunindo 20 mil pessoas.

A luta contra as privatizações de Cardoso, inalteradas por Lula da Silva, motivou uma das maiores iniciativas de luta unificada da década. Em 2007, mais de 60 entidades e movimentos sociais promoveram um plebiscito sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, objetivando pressionar o Poder Judiciário a se posicionar sobre a legalidade do leilão de venda da companhia, realizado em maio de 1997. O plebiscito teve início com pelo menos 4 mil urnas distribuídas em locais públicos com grande movimentação de pessoas, como rodoviárias, shoppings, metrô e universidades. Os movimentos, que realizaram a pesquisa em 3.157 municípios do país, lutam pela anulação da venda da companhia por meio da reabertura das ações que tramitam nos tribunais. Cerca de 94,5% dos 3.729.538 votantes que participaram do plebiscito disseram “não” a pergunta “A Vale deve continuar nas mãos do capital privado?”.

Também as lutas contra os efeitos da reforma neoliberal do Estado seguiram vivas, embora com participação inferior as dos anos noventa. Em 2007, 15 mil pessoas realizaram a Marcha Nacional na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, organizadas pelo PSOL, PSTU, conlutas, movimentos pastorais sindicais e estudantes, contra a reforma da previdência, a reforma universitária, em defesa da aposentadoria e de outras políticas públicas, do não pagamento das dívidas interna e externa, a transposição do Rio São Francisco, o leilão da Vale do Rio Doce, a corrupção e outros temas.

Também a questão racial ganhou maior dimensão no país, impulsionada pelo debate das cotas para acesso à educação superior. A manifestação de 2007, reunindo 50 mil pessoas em São Paulo no Dia da Consciência Negra, foi um dos marcos importantes dessa luta.

Tendo em vista a crescente expansão de corporações originadas no Brasil em diversos países latino-americanos e de outras regiões, bem como de corporações multinacionais de *commodities* no Brasil, movimentos atingidos por essas corporações têm buscado melhor articulação para que as lutas sejam mais eficazes. Exemplo importante dessas iniciativas aconteceu em 2008. O Tribunal Internacional dos Povos, reunido em Lima, no Peru, condenou a Vale do Rio Doce e a empresa alemã ThyssenKrupp por crimes ambientais e violação dos direitos humanos e trabalhistas. As duas empresas são sócias na Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA). A CSA está promovendo a construção de uma termelétrica a carvão, altamente poluente, e de um porto na Baía de Sepetiba, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na região Sudeste do estado.

A solidariedade internacionalista gerou mobilizações na ocupação do Iraque pelos EUA, na invasão do Líbano por Israel, em defesa dos processos da Venezuela e da Bolívia, ameaçados por golpes e, de modo destacado, contra o golpe em Honduras. Somente em 2009, destacaram-se diversos atos contra a invasão israelense, um deles reunindo mais de 5 mil pessoas em São Paulo. Neste mesmo ano, diversas entidades (MST, Via Campesina, PSTU, PSOL, CUT, Força Sindical, CONLUTAS, Intersindical, CTB, entre outras) realizaram vários atos públicos, visitas à embaixada e subscreveram manifestos em apoio ao presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya e, sobretudo, a resistência popular ao golpe.

As manifestações realmente massivas que ocorreram na década foram as Paradas Gay, realizadas anualmente em todo país. Em geral, a pauta política está relacionada ao reconhecimento social, aos direitos civis e à luta contra a violência que os gays sofrem no país. São grandes manifestações de luta pela identidade, em geral desvinculadas dos movimentos sociais e partidários da esquerda que, via-de-regra, não são bem recebidos pela coordenação das medidas. A maior da década foi a 12ª Parada Gay, realizada em maio de 2008 com a consigna “A Homofobia Mata – por um Estado Laico de Fato”, reunindo cerca de 5 milhões de pessoas. O ato foi considerado a maior manifestação do gênero no mundo.

Tendências e perspectivas

O que os indicadores do OSAL-Brasil nos interroga sobre o estado das lutas sociais e as perspectivas futuras dos conflitos sociais? A resposta dificilmente pode ser unívoca. Algumas tendências podem ser sugeridas, merecendo, contudo, novos estudos. Os indicadores quantitativos e qualitativos sugerem que o ciclo de lutas antissistêmicas protagonizado pelos sindicatos a partir de 1978 perdeu força. Mesmo considerando o fato da crise que transtorna a economia mundial de modo mais agudo a partir de 2008, as greves atuais não chegam a 20% das verificadas nos anos oitenta. O problema não é apenas de ordem quantitativa, pois o foco das greves está fundamentalmente dirigido para o momento econômico-corporativo. Ademais, ocorreram mudanças muito profundas nas organizações sindicais que, se não encolheram como em alguns países, contam atualmente com muito menor protagonismo da base na condução das lutas. Houve uma hipertrofia do papel dos dirigentes profissionalizados e uma crescente institucionalização dos conflitos. A diferenciação política entre as maiores centrais é sutil.

Entretanto, esse movimento não desaguou em novas formas de organização dos trabalhadores que se caracterizassem pela sua capacidade de convocatória e de mobilização social. Tensionada pela disputa de concepções com forte viés partidário, a nova central sindical e popular reivindicada pelas entidades que romperam com a CUT encontra-se em uma situação de impasse, incapaz, até o momento, de servir de instrumento para a unidade de ação dos que vivem do trabalho e são explorados. Uma das consequências desse estado geral é a naturalização das políticas de alívio a pobreza minimalistas e a proliferação de uma miríade de políticas sociais focalizadas, encaminhadas, em grande parte, por meio de parcerias público-privadas, inclusive com entidades da sociedade civil indistintamente empresariais, harmonizando capital e trabalho. Mais de 40 milhões de pessoas sobrevivem com miserável bolsa família. Como as medidas mais duras contra a crise somente serão encaminhadas após o pleito eleitoral de 2010, é inevitável indagar se será possível reverter esse quadro em curto espaço de tempo. Existe um grande contingente de trabalhadores sindicalizados, entidades bem estruturadas, mas pouca formação política de base, o que é relevante, tendo em vista a difusão, inclusive pelos sindicatos, de um *ethos* favorável ao chamado novo espírito do capitalismo.

Os achados da pesquisa sugerem que as lutas dos movimentos sociais do campo, particularmente do MST, do MAB e dos povos originários, possuem um caráter distinto do verificado nas lutas sindicais, pois, neste caso, é a realidade que impõem a luta contra o padrão de acumulação. O setor de *commodities* expande com a exploração e a expropriação e, por isso, produz conflitos muito ásperos. As ações diretas por meio de ocupações de terras, atos contra as corporações do agronegócio e do setor mineral foram ascendentes. Se, de um lado, as ocupações de latifúndios podem ter sofrido uma redução, de outro, quando ocorre ocupação de áreas de interesse imediato das corporações, os enfrentamentos são mais duros e violentos. Dai a tendência de criminalização das lutas sociais. O confronto com os setores dominantes que operam as *commodities*, cada vez mais imbricados com o capital rentista, tem levado a uma redefinição da tática e da estratégia dos movimentos mais diretamente engajados nas lutas, nas quais a alternativa democrático-popular vem sendo vivamente questionada em pro de lutas com caráter abertamente socialista.

A análise dos conflitos permite pontuar um problema crucial. A estagnação da reforma agrária, as dificuldades de viabilizar economicamente os assentamentos e o estrangulamento dos recursos públicos para os programas dos sem terra, acrescido das políticas de alívio a pobreza e ao avanço do pentecostalismo no campo e nas periferias das grandes cidades, são fatores que podem estar contribuindo para o enfraquecimento das bases dos movimentos. As lutas dos pequenos, mas importantes movimentos, que organizam a juventude e as mulheres das periferias das megalópoles, estão sendo afetadas pelos fatores listados e pela difusão do medo empreendida pelo aparato coercitivo formal e informal.

Todo esse complexo quadro aponta desafios teóricos cruciais. O que é o padrão de acumulação subjacente ao chamado neodesenvolvimentismo? Como o mesmo altera o sistema de Estados que maneja o imperialismo? Qual a nova morfologia da classe trabalhadora? Em que consiste a auto-organização da classe e

como este processo pode assegurar unidade de ação dos subalternos? Quais os horizontes emancipatórios e estratégicos que estão antagonizando o chamado neodesenvolvimentismo? Essas são algumas indagações que pensamos poder extrair do estudo do caso brasileiro.

Bibliografia

- Anderson, Perry 1992 *O Fim da História. De Hegel a Fukuyama* (Rio de Janeiro: Jorge Zahar).
- Antunes, Ricardo 1999 *Os sentidos do trabalho* (São Paulo: Boitempo).
- Boito, Armando; Galvão, Andréia e Marcelino, Paula 2009 “Brasil: o movimento sindical e popular na década de 2000” em *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 26.
- Boltanski, Luc e Chiapello, Ève 1999 *Le nouvel esprit du capitalisme* (Paris: Gallimard).
- Canuto, Antonio; Silva, Cássia R. da; Luz, Isolete W. (coords.) 2010 *Conflitos no campo. Brasil 2009/ CPT* (São Paulo: Expressão Popular).
- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 2008 “Tabulações do sistema de acompanhamento de greves no Brasil 1995-2007”, disponível em <http://www.dieese.org.br/projetos/MTE/SACC/METAI/III/tabulacoesGrevesBrasil1995_2007.pdf>, acesso em 1 de julho de 2010.
- DIEESE 2009 “Balço das Greves em 2008”, disponível em <<http://www.dieese.org.br/esp/cju/balGreves2008.xml>>, acesso em 1 de julho de 2010.
- Fiori, José Luiz 1995 *Em busca do dissenso perdido* (Rio de Janeiro: Insight).
- Leher, Roberto 2003 “O governo Lula e os movimentos sociais” em *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 10.
- Leher, Roberto 2005 “Opção pelo mercado é incompatível com a democracia: a crise no governo Lula da Silva e no PT e as lutas sociais” em *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 17.
- Mattos, Marcelo Badaró 2005 “Novas bases para o protagonismo sindical na América Latina: o caso brasileiro” em Leher, R. e Setubal, M. (orgs.) *Pensamento crítico e movimentos sociais: diálogos para uma nova práxis* (São Paulo: Cortez).
- Offe, Claus 1989 *Capitalismo desorganizado* (São Paulo: Brasiliense).
- Secretaria Nacional do MST 2010 “MST, lutas e conquistas” (São Paulo) 2ª edição.

Notas

1 A CUT, fundada em 1983, central sindical classista, autônoma diante do Estado e dos governos e comprometida com o socialismo. Nos anos noventa, a tendência majoritária da CUT e do PT, a Articulação Sindical (a qual pertencia Lula da Silva), defendeu a conversão do sindicalismo classista e combativo em sindicalismo cidadão (ou propositivo), filiando-a Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL) em 1992. No III Congresso (1988) o estatuto da central foi modificado de modo a reduzir a participação da base nos seus eventos deliberativos. O sindicalismo cidadão concebe o de-

semprego como decorrente da falta de qualificação dos trabalhadores, nos mesmos termos de Fukuyama (Anderson, 1992). A CUT passou a se engajar, diretamente, na formação profissional, buscando ajustar os trabalhadores ao “novo espírito do capitalismo” (Boltanski e Chiapello, 1999), flexível e desregulamentado. A despeito das dissidências, a Central seguiu expandindo, alcançando, em 2009, cerca de 3,3 mil entidades filiadas (de um total de 8,34 mil entidades registradas no Ministério do Trabalho e Emprego) e 7,1 milhões de sindicalizados e 21 milhões na base, mas que pouco mobiliza (Mattos, 2005).

2 Tese defendida por Claus Offe em *Capitalismo desorganizado* (São Paulo: Brasiliense) 1989. Entre os autores mais citados, André Gorz e Alain Touraine, entre outros.

3 Ver Ricardo Antunes 1999 *Os sentidos do trabalho* (São Paulo: Boitempo).

4 Criado formalmente em 1984, o MST está organizado atualmente em mais de mil acampamentos, abrigando 90 mil famílias, cerca de 400 mil pessoas (“MST, Lutas e conquistas”, São Paulo, 2ª edição, 2010).

5 Cfr. “MST, Lutas e conquistas”.

6 Entre as principais greves por salário e pela manutenção dos empregos dos metalúrgicos: Volkswagen de São Bernardo do Campo, São Paulo (2005); Volkswagen, três fábricas da montadora de automóveis em São Bernardo do Campo e Taubaté em São Paulo e São José dos Pinhais no Paraná (2006); General Motors (GM) de São José dos Campos, São Paulo (2006); Volkswagen-Audi e Renault, de São José dos Pinhais, região Curitiba, Paraná (2008); Bosch, maior indústria do setor metalúrgico no Paraná (2008); General Motors (GM) em São José dos Campos, protesto contra as demissões de trabalhadores temporários (2009); 10 mil metalúrgicos (CUT) se manifestam em São Bernardo do Campo, São Paulo contra o desemprego e a proposta dos empresários de reduzir a jornada de trabalho e o salário (2009); Volkswagen em São Bernardo do Campo, São Paulo, paralisação, Dia Nacional de Luta pelo Emprego e pelo Salário, convocado pela CUT (2009); Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), em São José dos Campos, São Paulo, participam de um ato em protesto contra às 4,2 mil demissões anunciadas pela empresa (2009); Volkswagen-Audi, Volvo, Renault-Nissan, greve por tempo indeterminado, em São José dos Pinhais, Curitiba, Paraná (2009); Volkswagen e da Ford, paralisação em Taubaté, São Paulo (2009). No final do ano, as isenções tributárias do governo para a compra de automóveis reaquece a produção levando os trabalhadores da Ford, Mercedes-Benz, Scania, Rassinini, Mahle Metal Leve e Karmanghia a realizar paralisação para pedir aumento real de salário em São Bernardo do Campo, São Paulo (2009); os da General Motors (GM), em São José dos Campos, São Paulo, fazem três paralisações de 24 horas reivindicando perdas salariais (2009); os da Empresa Brasileira de Aeronáutica SA (Embraer) paralisam a produção em São José dos Campos, São Paulo, em protesto contra o cálculo da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) (2009), e trabalhadores da Lorenzetti deflagram greve em São Paulo reivindicando reajuste de 10% no salário-base, 140 cláusulas sociais e piso salarial.

7 Os bancários realizaram fortes greves nacionais reivindicando reajuste salarial e aumento na participação nos lucros e resultados em 2005, 2006, 2008 e 2009.

8 Trabalhadores petroleiros de 33 plataformas e navios de perfuração da Petrobrás aderem à greve

iniciada pelo sindicato na Bacia de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, reivindicando reajuste salarial, segurança nos locais de trabalho e mudança no regime de folgas (2008); greve nacional dos petroleiros. O desfecho da greve não foi consensual. A Federação Única dos Petroleiros (FUP), mais próxima do governo, aceitou um acordo que não contemplou os 6 sindicatos da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), que representa 11 sindicatos (2009); a FNP, que afirma representar cerca de 28 mil dos 56 mil empregados próprios da Petrobras, inicia greve por tempo indeterminado. A greve ocorre em São José dos Campos –São Paulo–, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Alagoas, Maranhão e Pará. Os petroleiros reivindicam reajuste salarial de 4,4%, ganho real de 10% e reposição das perdas desde 1994, estimadas em 23%. Cabe destacar a greve dos trabalhadores que atuam na Petrobrás com contratos terceirizados em 2008. A greve foi protagonizada por 12 mil trabalhadores da Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos, São Paulo. Entre as conquistas da categoria, estão 10% de reajuste salarial, participação nos lucros (PLR) de R\$ 1.500, melhoria no percentual de horas extras, abono da terça-feira de Carnaval, estabilidade de 90 dias e reembolso da passagem, a cada 120 dias, para trabalhadores que moram a mais de 200km de São José. Os trabalhadores conseguiram reverter as 800 demissões que haviam sido feitas em represália à greve.

9 Na construção civil, as greves foram dispersas em diversos pontos do país. Cabe destacar as passeatas, reunindo expressivo número de trabalhadores em São Paulo, Salvador e Belém, entre outras capitais.

10 Cabe destacar as mobilizações dos policiais em 2008, que revelaram a capacidade de articulação das suas entidades em todo país.

11 Greves nacionais da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT): 2008, reivindicando o cumprimento de um termo de compromisso que previa um adicional de 30% nos salários dos carteiros; 2009, em virtude da greve nacional da categoria, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresa de Correios e Telégrafos e Similares mantivesse 30% dos funcionários em cada uma das unidades da ECT, caso contrário, seria aplicada uma multa diária de R\$ 50 mil.

12 Em relação às greves na educação superior, como já foi dito, em 2003 as lutas estiveram centradas na previdência social. Em 2004 aconteceram relevantes greves nas universidades, representadas pelo Andes-SN, com destaque para a greve das três universidades estaduais paulistas –Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual de São Paulo (UNESP)– que reivindicaram reajuste salarial de 16% e o aumento de 9,57% para 11,6% do repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No caso das universidades federais, o Andes-SN não aceitou a proposta salarial do governo de reajustes diferenciados para a categoria e entre ativos e apo-

sentados, reivindicando a paridade entre os mesmos. Deflagrou uma difícil greve que não contou com a adesão plena da categoria. Em 2005, a greve nacional também logrou adesão parcial, em particular na pós-graduação e na pesquisa, sugerindo a existência de diferenciações no seio da categoria. A pauta desta greve priorizou a correção de 18%, correspondente às perdas inflacionárias do governo Lula, a incorporação das gratificações e a reestruturação da carreira. Após 112 dias a greve foi suspensa e a categoria não obteve a conquista de suas reivindicações. A correção que o governo impôs é diferenciada e não ultrapassa, em média, 9%. Em virtude da radicalidade do movimento cabe destacar a greve das universidades estaduais do Ceará em 2008 que durou mais de três meses e, em 2009, a greve dos professores da USP que durou 25 dias (e dos técnicos e administrativos, 47 dias). É perceptível a redução das greves nas universidades federais após 2005. Mudanças na categoria, a política de concessão de reajustes diferenciados e o empreendedorismo acadêmico certamente são dimensões importantes. A suspensão do registro sindical do Andes-SN e mesmo de receber as contribuições de seus sindicalizados demandaram mobilizações como a realizada em 2008 com mais de 2 mil participantes e a busca de apoio entre outras entidades autônomas frente ao governo. Em 2009 o registro sindical foi restabelecido parcialmente.

13 No caso da educação básica, as lutas estiveram centradas na reivindicação da aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico

(FUNDEB) (2004/2005) e na conquista do piso salarial nacional, como ocorreu em 2007 quando 10 mil manifestantes, a maioria docentes, convocados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pressionaram o governo para que o referido piso contemplasse os princípios defendidos pela Confederação.

14 No contexto da crise, em 2009, diversos trabalhadores firmaram acordos defensivos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e de Mogi das Cruzes informou que, apenas em sua base, chega a 24 o total de acordos formalizados entre trabalhadores e empresas com o objetivo de preservar empregos.

15 Em 2006, a VW anunciou a demissão de 1.800 trabalhadores da unidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. A categoria entrou em greve por tempo indeterminado, mas o acordo entre o sindicato e a diretoria da VW, confirmado pela matriz, acabou prevendo a demissão de 3.600 dos 12.000 trabalhadores até 2008. Em contrapartida, a montadora se comprometeu a investir na produção de dois modelos novos. A ameaça subjacente era o fechamento da unidade.

16 Embora não seja o objeto do presente estudo, pois isso implicaria em um estudo sistemático sobre a problemática da criminalização dos pobres, as inúmeras lutas contra a violência policial – e em defesa dos direitos humanos – têm sido recorrentes, indicando o grau de violência do aparato policial que frequentemente resultam em morte de crianças e jovens, sobretudo negros.

Una década de movimientos sociales en Bolivia

PATRICIA CHÁVEZ LEÓN

Socióloga, investigadora del Centro de Estudios Andino-amazónicos y Mesoamericanos (CEAM).

DUNIA MOKRANI CHÁVEZ

Politóloga, investigadora del CEAM; ex becaria de CLACSO. Coordinadora del Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del OSAL.

PILAR URIONA CRESPO

Politóloga, maestrante en Política y Filosofía, CIDES-UMSA. Coordinadora del Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia del OSAL.

Resumen

Desde el paradigma de la inclusión, las autoras rastrean la resistencia en Bolivia al orden neoliberal, que tiene por base al sujeto indígena que desde tiempos de la colonia ha nutrido al campesinado, a la clase obrera minera y al resto del proletariado –aquella prole estatuida–, relegado a lo subalterno y excluido de la intervención directa en la política impuesta por la élite blanca y luego también mestiza. En esta respuesta a la última ofensiva de los grandes propietarios, que en la era contemporánea incluyen al capital transnacional, se ha reavivado el impulso de auto-organización del movimiento originario-campesino, que pugna por ser reconocido en la Constitución en su calidad de indígena y por ser representado por el gobierno nacional, ante lo cual se topa con la lógica dominante de las instancias estatales, que encausan su incidencia por la vía indirecta y con la reacción de los propietarios, que bloqueó el impulso democratizador en la Asamblea

Abstract

In the context of the inclusion standard, the writers track resistance to neoliberal order in Bolivia, anchored in the native inhabitant who, since colonial times, has largely provided for the need of peasants, miners, and the rest of the proletariat (that offspring taken by the state) and been relegated to a role of submission and excluded from direct political participation by the ruling white elite at first, and later also by the mixed indigenous groups. In this response to the latest assault led by large property holders, which today is represented by transnational capitals, the self-organised originary-peasant movement has gained impetus and now strives to achieve recognition in the Constitution as an indigenous community and to be represented by the national government only to encounter rejection from the dominant logic at government levels, all of which concentrates its efforts through an indirect approach and results in the reaction of property holders. All of this hinders the democratic drive in

Constituyente, intenta deslegitimar al gobierno del MAS, ataca a su base de apoyo en la Media Luna y comienza a relacionarse con él de un modo que apunta a aprovecharse de su necesidad de refrendar el mandato constitucional para obstruir su objetivo político.

the Constitutional Assembly, attempts to challenge the legitimacy the ruling MAS, undermines its foundation in the "Media Luna" region, and has begun to try to take advantage of the need to endorse the constitutional government to obstruct its political objective.

Palabras clave

Bolivia, colonialismo, movimientos sociales, inclusión social, representación

Keywords

Bolivia, colonialism, social movements, social inclusion, representation

Cómo citar este artículo

Chávez León, Patricia; Mokrani Chávez, Dunia y Uriona Crespo, Pilar 2010 "Una década de movimientos sociales en Bolivia" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Hacer un balance de las luchas de los movimientos sociales en Bolivia, bajo la perspectiva de que las mismas son parte de un proceso histórico de politización que terminó transformándose en el elemento catalizador para impulsar y posicionar una concepción de la acción y del discurso políticos como instrumentos para alcanzar la inclusión social, supone considerar tres elementos importantes que definen el contexto boliviano a lo largo de la última década: a) el hastío social frente a la incapacidad partidaria para involucrarse con las necesidades vitales de los representados; b) el hecho de que la fuerza de los movimientos sociales deriva de su capacidad para manejar un discurso de reivindicación de una política cotidiana, es decir, de una política que va más allá de los esquemas partidarios de acción y organización; una política que rechaza la homogeneización social y cultural que se ha ido construyendo desde una mirada liberal de principios como igualdad y libertad, sin reconocer las diversas percepciones, concepciones y significados que a ambos términos les atribuyen las múltiples sociedades y subjetividades que conviven en Bolivia; en suma, una política que se construye no como un lugar para institucionalizar nuevos monopolios durables, desde una institucionalidad pensada desde el orden liberal de representación, ni para cerrar procesos, sino como un espacio para crear las condiciones de reinención de la propia política y de los espacios sociales de auto-organización; y c) la ruptura con un viejo tipo de la relación entre lo estatal y lo social, entre el gobierno y las organizaciones sociales, acompañada de un proceso de articulación de alianzas entre diversos sectores de la sociedad que se inventan, crean y recrean, y que promueven acciones populares orientadas a redefinir de forma más autónoma los alcances de la participación directa y la autodeterminación social para dar respuesta a sus propios requerimientos.

En esta vía, pensar una década de movimientos sociales en Bolivia supone problematizar la hipótesis predominante según la cual el gobierno de Evo Morales

sería la forma más acabada de cristalización de la acción colectiva desplegada desde diversos escenarios de lucha desde el año 2000. En este sentido, el esquema más simplista para abordar el tema sería presentar una descripción de los cinco primeros años de lucha social para luego señalar el modo en que el gobierno actual “toma la posta” para continuar este proceso bajo el esquema gubernamental.

Alejándonos de dicho esquema, en las páginas que siguen nos proponemos realizar un balance que, además de tomar distancia de la visión anterior, también entra en polémica con las afirmaciones que, al dar cuenta del actual proceso político, señalan que el actual gobierno sería un simple usurpador del proceso de lucha abierto por los movimientos sociales.

Con ello, planteamos la necesidad de hacer un balance desde una mirada crítica, de manera tal que la lectura de una década de movimientos sociales en Bolivia no se reduzca a una descripción lineal de hechos que se suceden unos a otros hasta alcanzar lo que hoy se vive y se entiende como *proceso de cambio*. Más bien, nos inclinamos a visibilizar la complejidad de los acontecimientos que se han ido desarrollando a partir de varios horizontes, en diálogo pero también en pugna, y por lo tanto no exentos de contradicciones y paradojas. Nos parece importante aportar desde esta mirada, ya que existe una tendencia, que se da principalmente a nivel internacional, a no escuchar y a deslegitimar algunas voces críticas respecto a la forma en que el proceso está siendo conducido en Bolivia, desde argumentos que las califican de “conservadoras”, que las acusan de “hacerle el juego a la derecha” o que las ubican en un supuesto debate entre aquellos que sí habrían demostrado la habilidad de tomar el poder para transformar las relaciones de desigualdad, frente a una suerte de ingenuos que siguen pensando que “se puede cambiar el mundo sin tomar el poder”.

Consideramos que en el fondo del debate en Bolivia lo que está en cuestión no es si se tomó o no el poder, sino si el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) es la expresión última de una década de lucha o un elemento más de un amplio proceso que no termina en el ejercicio gubernamental, sino que debería mantener abiertos diferentes cauces de expresión de las luchas que se proponen transformar y desmontar los diversos núcleos de desigualdad, desde diferentes horizontes políticos.

El artículo está dividido en tres partes. La primera muestra los hitos de la movilización social y los horizontes políticos habilitados por los mismos antes de la llegada al poder político-estatal de Evo Morales, en el año 2005. La segunda parte reflexiona acerca del proceso constituyente y las formas de participación en él desplegadas, desde sus continuidades y quiebres con el proceso insurreccional previo. En un tercer acápite presentamos los momentos de mayor polarización política, en una evaluación de las resistencias al *proceso de cambio* y la ofensiva de la derecha en los primeros años del gobierno de Evo Morales. Finalmente, a modo de conclusión se plantean hipótesis sobre la coyuntura actual, sus perspectivas y desafíos.

Los horizontes políticos de la ola insurreccional de los años 2000 y 2005

Desde el año 2000, Bolivia vivió una ola de movilizaciones sociales que se caracterizó por poner en entredicho el orden institucional neoliberal impuesto desde

1985 –así como sus consiguientes prácticas y nociones de democracia– y por ofrecer, fundada en su propia experiencia insurreccional y de resistencia, otras formas de ejercer la representación y la participación políticas, así como otro horizonte nacional opuesto al neoliberal. Tanto en la organización inmediata de la movilización como en la posterior cristalización de las consignas de lucha en propuestas públicas, fue concentrándose y al mismo tiempo concretizándose la llamada “Agenda de Octubre”, o “Agenda de los Movimientos Sociales”, en que las demandas de “Nacionalización de la producción de hidrocarburos” y la realización de una “Asamblea Constituyente” marcaban y resumían el carácter del proyecto popular que allí emergía y se configuraba. Así como de la Revolución Nacional boliviana de 1952 se dijo que estuvo signada por la presencia activa y la predominancia política del proletariado minero (Zavaleta, 1990), el proceso político boliviano reciente estuvo dominado por el protagonismo campesino-indígena. Su preeminencia e iniciativa dentro del bloque popular insurgente, no solo como fuerza movilizada, sino como horizonte político posible, vino a jugar el papel que antes tuvieron los sindicatos obreros, desarticulados por la economía de libre mercado impuesta por las reformas de los gobiernos neoliberales. Se trata de un bloque popular con hegemonía campesino-indígena, donde se articulaban diversas luchas, horizontes políticos y estructuras de movilización que denunciaban la desigualdad nacida de diversos núcleos de opresión, como el colonial y el capitalista, expresados respectivamente en una institucionalidad jerarquizada en torno a un componente blanco y mestizo y en una política de libre contratación de la fuerza de trabajo y de privatización de las principales empresas hasta ese momento estatales.

En plena euforia del neoliberalismo, cuando las anteriores formas organizativas de la sociedad sufrían el desconocimiento y la persecución gubernamentales, se iban tejiendo lentamente lazos organizativos y corporativos como los dados en el sector “cocalero” del Chapare o en la amplia red de activistas rurales y urbanos existente por ejemplo en los barrios de las ciudades de Cochabamba (a través de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba) y La Paz (con las juntas vecinales), y en las provincias y pueblos del altiplano boliviano (con las federaciones y confederaciones campesinas). A esta reorganización hay que sumar las fuerzas de los pueblos indígenas del oriente y de tierras bajas del país que desde la década del noventa protagonizaron una serie de marchas históricas que buscaban el reconocimiento de sus territorios y la ampliación de su participación política a través de la realización de una Asamblea Constituyente, así como hacer parte del conocimiento público los conflictos acumulados con grupos de ganaderos, hacendados y empresarios madereros y agroexportadores, constituidos como interlocutores privilegiados de los diferentes gobiernos en las regiones Oriente y Sur del país. Además, estas movilizaciones enriquecieron el horizonte popular, porque hicieron evidente la diversidad y complejidad del mundo indígena que hasta ese momento era identificado casi de manera exclusiva con las culturas *aymara* y *quechua*, predominantes en las tierras altas de Bolivia. Haciendo un pequeño paréntesis, es necesario señalar que actualmente este avance en el reconocimiento de la pluralidad de la acción política de los pueblos indígenas está en peligro de sufrir un retroceso, debido a que el régimen electoral transitorio, aprobado para

realizar las últimas elecciones presidenciales de diciembre de 2009, ha otorgado siete diputaciones de “circunscripciones especiales” a los pueblos de tierras bajas, que en primer término no dan cuenta de todas las culturas existentes en esos territorios –que oscilan, según los investigadores, en entre 32 y 36 pueblos indígenas– y que en segundo término dividen lo indígena de manera artificial entre pueblos “mayoritarios” –aymaras y quechuas– y pueblos “minoritarios” –el resto de las culturas–, reduciendo a una cuestión de números y densidad poblacional lo que de hecho en el ciclo de luchas sociales se propuso en términos políticos de igualdad entre naciones. Es decir, independientemente de la densidad poblacional de cada pueblo, este tiene igual derecho que el resto a contar con mecanismos de representación e intervención en los asuntos generales de la colectividad boliviana. A lo anterior se suma como límite el hecho de que las candidaturas en las circunscripciones especiales indígenas se presentan a través de partidos políticos y no de manera autónoma.

“... estas movilizaciones (...) hicieron evidente la diversidad y complejidad del mundo indígena que hasta ese momento era identificado casi de manera exclusiva con las culturas aymara y quechua ...”

Retomando el hilo de nuestra exposición, diremos que durante los años 2000 y 2005 se dieron por lo menos cuatro momentos de insurrección popular que, tomados en conjunto, abrieron varios horizontes políticos de transformación: la Guerra del Agua (2000), el Febrero Negro (2003), la Guerra del Gas (octubre de 2003) y el ciclo movilizatorio de 2004 y 2005, en que se sucedieron de manera turbulenta los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé y que culminó con la convocatoria a elecciones a fines de 2005, en que ganó Evo Morales.

La Guerra del Agua se da en abril del año 2000 debido a las acciones privatizadoras y encarecedoras del consorcio Aguas de Tunari, constituido por International Water Limited (Gran Bretaña), Edison (Italia), Bechtel (Estados Unidos), la empresa constructora y de ingeniería Abengoa (España) y dos compañías bolivianas, ICE y SOBOCE. A causa de una serie de irregularidades, como el alza desmedida de tarifas en el servicio de agua o el intento de privatización de los pozos de agua que los habitantes cochabambinos habían abierto con su propio esfuerzo, se inició una insurrección que hizo tambalear al gobierno de turno, dirigido en ese entonces por Hugo Banzer Suárez. Fue un momento crítico, pues se trató de la experiencia de expulsión de empresas transnacionales –en especial la Bechtel– y del cuestionamiento del modelo económico neoliberal dominante. La fuerza que le dio a la Guerra del Agua la amplia participación de sectores populares urbanos, campesinos regantes, cocaleros del Chapare, profesionales, entre otros, a través de una amplia diversidad de formas organizativas, permitió plantear la necesidad de un tipo de representación social en la Asamblea Constituyente que fuera más allá de las estructuras partidarias y además fue un núcleo de politización social, pues dio a los movilizadores la certeza de que es posible hacer política en momentos amplios de deliberación colectiva.

De esa forma, la experiencia de la Guerra del Agua dio lugar a la conformación de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida en el año 2000, como una instancia *sui generis* de articulación de luchas, que tenía básicamente los rasgos de una red de organizaciones e individuos que se reunían a deliberar acerca de las acciones a tomar frente a las políticas de privatización de los servicios básicos y frente a la represión del gobierno banzerista. La coordinadora significó un hito en el horizonte de reforma política, que implicaba la participación activa de la población en la toma de decisiones y en la gestión de lo público, así como el desborde de las formas liberales partidarias y de las formas tradicionales corporativas del sindicalismo paraestatal. En este período también es visible la impresionante movilización de las comunidades indígenas del altiplano, con su epicentro en el paradigmático pueblo de Achacachi, ubicado en el departamento de La Paz. Uno de los momentos más interesantes de este período es la conformación del llamado “Cuartel Indígena de Qalachaka”, en el pueblo de Achacachi, como una fuerza militar alterna a la del ejército regular boliviano y que en realidad estaba constituida por representaciones de las comunidades indígenas de las provincias del norte altiplánico a través de un complejo sistema de rotación y de turnos. Pero además, toda la trascendencia de las movilizaciones indígenas de 2000 y 2001 puede medirse en la pérdida de validez de la presencia y la fuerza física del Estado y sus organismos, cuando ni el ejército ni la policía podían retomar el control de las carreteras y los espacios territoriales copados por las fuerzas indígenas, que fueron las que, a través de los bloqueos, la vigilia en los cerros y los puestos de control en los caminos terminarían poniendo en entredicho la institucionalidad republicana y practicando su propio control sobre el territorio que ocupaban mientras se movilizaban.

Así ingresamos al segundo y tercer momento de la ola insurreccional boliviana: febrero (Febrero Negro) y octubre de 2003 (La Guerra del Gas), que están signados por el desarrollo del discurso indígena de denuncia que alude a “las dos Bolivias”, la indígena y la blanca, lanzado públicamente desde el año 2000 por Felipe Quispe –secretario ejecutivo de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en ese momento–. Lo que sucedió en febrero de 2003 fue que el gobierno de Sánchez de Lozada decide aplicar un impuesto sobre los salarios de los trabajadores bolivianos. Curiosamente, entre los movilizadores más activos para resistir este “impuestazo” están los policías, que terminan enfrentándose al ejército. El saldo sangriento de esta confrontación profundiza la movilización de los sectores populares, que en multitudinarias manifestaciones piden la anulación del decreto y protestan por la represión gubernamental quemando y saqueando las sedes de los partidos políticos en el poder. La fractura social abierta en este momento no se cierra hasta la llegada del llamado Octubre Negro o Guerra del Gas, en que el mismo Sánchez de Lozada aprueba la exportación de gas a través de un puerto chileno. Esta medida es dramáticamente resistida por una movilización que se centra en las ciudades de El Alto y La Paz y en las provincias altiplánicas, hasta extenderse en el transcurso de días a todo el territorio boliviano. La microscópica red de activistas sociales, independientes o ligados a organizaciones comunitarias y corporativas, que se movilizó de manera permanente desde el año 2000 difundiendo información destinada a reforzar un sentido general de crítica

hacia la manera cuasi-secreta, elitista e ineficiente con que los distintos gobiernos habían encarado la gestión de los recursos naturales (agua, gas, petróleo, minerales, etc.) había producido una nueva interpretación del proceso neoliberal que en la cima de su poder se había presentado a sí mismo como un exitoso paradigma modernizador y de vinculación con la economía mundial. El sutil trabajo de estos activistas, sumado a la labor más visible de líderes, intelectuales y organizaciones sociales, más la memoria histórica del despojo marítimo sufrido por nuestro país en la Guerra del Pacífico (1879) con Chile, en que Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico, hicieron que la negativa popular al proyecto de exportación de gas por Chile y a Chile cobrara cuerpo rápidamente y se transformara en una eficaz consigna movilizadora.

Lo más interesante de la Guerra del Gas es cómo la sociedad civil propuso, no solo en el campo discursivo sino en su misma acción, la alternativa política a las formas de organización y representación liberales. En las asambleas de barrio, los cabildos, los turnos entre vecinos para garantizar la fuerza de la movilización, las estrategias de abastecimiento de alimentos, gas y agua y la forma cuasi-militar de organización de la defensa de la ciudad asediada por el ejército los movimientos sociales se presentaron a sí mismos como la fuente fáctica de un modo diferente de hacer política, con posibilidades reales de enfrentar y cuestionar las maneras partidario-electorales que hasta ese momento habían sido impuestas como las únicas posibles. También el “Cuartel Indígena de Qalachaka” volvió a rearticularse, con la expectativa de avanzar sobre las ciudades de La Paz y El Alto si la represión recrudecía, hecho que finalmente no sucedió debido a la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de ese año; aunque eso no evitó que llegaran avanzadas del mismo que ingresaron a la ciudad de El Alto en ordenadas columnas. Recordamos este hecho aquí porque añade un elemento más a las potencialidades reales que tenía el horizonte de crítica al orden neoliberal y colonial. Durante esos años las movilizaciones dieron lugar a una entidad como la Coordinadora del Agua, a la emergencia de una fuerte organización vecinal y comunal, y a la cuasi constitución –con el ejército de Qalachaka– de una fuerza militar “propia”. Estas fueron las potencialidades más radicales constituidas en el proceso mismo de lucha.

Ahora bien, esto no implica que se descarten, entre las demandas, los procesos electorales y consultas populares vía *referéndum*, que son de hecho otro de los horizontes de la movilización. Por eso, el cuarto momento de esta descripción, el correspondiente al período comprendido entre los años 2004 y 2005, tiene que ver con la sucesión presidencial que siguió a la insurrección de Octubre y que puso en la jefatura del Estado boliviano a Carlos Mesa (vicepresidente de Sánchez de Lozada). Esta gestión gubernamental arrastró toda la desconfianza y aprehensión que el sistema político había acumulado anteriormente. La ruptura entre el extemporáneo sistema de representaciones y las expectativas de los movimientos sociales provocó un sentimiento de insuficiencia e inconclusión del proceso, que solo se cerraría con la renovación de la parte más visible y cuestionada de la estructura de gobierno y del poder legislativo. En este marco, en un ambiente de gran movilización nacional que exigía la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la Asamblea Constituyente, se da la segunda renuncia presidencial, la de Carlos Mesa, en una sucesión constitucional que deja a la cabeza del gobierno al enton-

ces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé, quien asume la presidencia y convoca a las elecciones de diciembre de 2005. En este punto, es interesante ver cómo las expectativas de la movilización popular estaban también dirigidas hacia el horizonte electoral, pues se exigía la realización de elecciones en diciembre de ese año para dar pie a una salida constitucional al conflicto. Es también interesante notar cómo, simultáneamente, en el parlamento de ese entonces, la presencia indígena no era mayoritaria –aunque era la segunda fuerza en el Congreso Nacional, con un 20,9% de los votos de las elecciones de 2002– pero sí era una presencia importante por su capacidad de acción política, pues cuestionó, denunció y algunas veces logró frenar la aprobación de las leyes impulsadas por el oficialismo. En realidad, esta representación indígena acompañó, con sus acciones de protesta en el congreso, las luchas sociales en las calles. En síntesis, ¿cuál es el resultado de todo este momento movilizador que va del año 2000 al año 2005? Como hemos visto, el proyecto originario de estas, que fue constituyéndose en la lucha, sobrepasaba en sus aspiraciones y en algunos de sus mecanismos prácticos –como la “Coordinadora de el Agua” (2000) en Cochabamba, el “Cuartel Indígena” de Qalachaka (2001) en Achacachi, los “gobiernos microbarriales” (Mamani, 2005) de las movilizaciones de la “Guerra del Gas” (2003), etcétera– al horizonte social liberal y colonial. En sus momentos más radicales y dramáticos, los levantamientos pusieron en entredicho la forma estatal de gobierno, la mediación partidaria y el proyecto económico de alianza con los capitales extranjeros (la llamada “capitalización” de las empresas estatales). Esta cualidad de plantear la posibilidad de ir más allá del capital, nacida en momentos de emergencia social y mantenida durante la misma, no pudo hallar caminos para persistir en el tiempo y convertirse en una alternativa frente al modelo económico y político capitalista. En momentos de “estabilidad institucional”, la organización de la sociedad se realizó en torno al modelo estatal (Gutiérrez Aguilar, 2008). Entre los horizontes abiertos por la movilización vale mencionar como dato que la fuerza social y política que cuestionaba de manera más radical al orden social de las cosas fue quedando relegada en el camino y, simultáneamente, fue abriéndose paso un proyecto más contemporizador, pero sin duda con potencialidades transformadoras. Pensar en el poder era pensar en el poder del Estado, por eso gran parte de la expectativa popular pasó a centrarse en los tiempos electorales. Fruto de eso, se dio el surgimiento de una interesante mediación partidaria –el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), conjunción principalmente de sindicatos campesinos e indígenas y agrupaciones urbanas populares– que luego se constituyó en el Movimiento al Socialismo. Este alcanzó a tener presencia importante en el parlamento en el año 2003 y se hizo gobierno con las elecciones presidenciales de fines de 2005. También hubo otros partidos, como el Movimiento Indígena Pachakuti, liderado por Felipe Quispe, que tuvo menos suerte en el terreno electoral pero que ejemplifica la fuerza de este horizonte.

La actual configuración de las fuerzas políticas en nuestro país plantea la necesidad de proponer la recuperación de la riqueza y la pluralidad de actores y proyectos que en la actualidad se pretende alinear detrás de un solo actor (el MAS) y un solo escenario (el partidario electoral), lo que contraviene la raíz y el origen del actual momento de transformación política que vive Bolivia.

Una mirada al proceso constituyente desde sus continuidades y quiebres con el proceso insurreccional previo

Antecedentes del proceso constituyente en la agenda de los movimientos sociales

La Asamblea Constituyente, no solo como demanda política esencial incorporada hace una década en la agenda reivindicativa de los movimientos sociales indígenas, campesinos y urbano-populares en Bolivia, sino como un horizonte político construido en diferentes momentos de insurrección y acción colectiva, logra finalmente implementarse como un espacio posible de construcción de un nuevo pacto social el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre.

La inauguración del trabajo de la misma, que supuso la apertura de instancias de participación, deliberación y decisión políticas, tenía como fin postular la refundación del Estado boliviano, impulsando como paradigmas la descolonización, la profundización de la democracia y la inclusión social. Re-pensar la forma en que la sociedad civil articularía sus demandas, expectativas, opiniones y propuestas en la consolidación de la norma máxima para luego trasladarlas al ámbito político condujo a reconocer la legitimidad de las reivindicaciones de las y los diferentes actoras y actores sociales que la integran (colectivos, comunitarios, organizados, individuales, institucionales) abriendo el espacio discursivo para ir forjando otra concepción sobre la ciudadanía y sus alcances y de las subjetividades sociales como receptoras de derechos a los que la misma hace referencia.

La formulación de los contenidos que debía adoptar esta otra concepción de Estado y ciudadanía, sin embargo, no se da por primera vez en el debate constituyente impulsado desde el gobierno de Evo Morales, que asumió su puesta en marcha como compromiso y mandato popular. Por el contrario, dichos contenidos y alcances fueron pensados y presentados en el ámbito público a lo largo de casi dos décadas de acción de los movimientos sociales en su vertiente indígena, campesina y popular.

Haciendo una recapitulación histórica de este proceso vemos como uno de sus importantes antecedentes a la marcha de los pueblos indígenas del oriente “Por el Territorio, la Vida y la Dignidad”, organizada en 1990 por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)¹, mediante la cual se buscaba la aprobación de una propuesta de ley ante el Congreso Nacional orientada a que los pueblos indígenas fueran finalmente reconocidos como actores visibles, protagónicos e impulsores de un proceso de cambio. Así se plantea la exigencia del reconocimiento de lo particular de las identidades indígenas de 35 pueblos y naciones, de sus cosmovisiones y de sus formas de organización, que no están separadas de su relación con el territorio, derivando en el cuestionamiento de las formas en que a lo largo de la historia republicana estos sujetos sociales han sido excluidos de la participación política pública.

A pesar de contar en ese entonces con más de cien mil firmas de respaldo, se rechazó la aprobación de esa Ley Indígena, por lo que las movilizaciones sociales continuaron sucediéndose y alcanzaron a ejercer la suficiente presión sobre las instancias estatales. Así, en 1994, el derecho a la diferencia de los pueblos indígenas logró constitucionalizarse mediante la reforma del Artículo primero de la

norma máxima de 1967, en el que se caracterizaba a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural, y del Artículo 171, en el que se estableció de forma expresa que los derechos de los pueblos indígenas debían ser reconocidos como tales.

Ahora bien, este tipo de reconocimiento tiene, al menos, dos grandes límites. El primero tiene que ver con su aplicación, ya que no sirvió para garantizar que los gobiernos que ejercieron el poder entre 1994 y 2000, los cuales se adherían al ejercicio de un tipo de democracia de corte representativo y neoliberal, promovieran la apertura de instancias de participación social, incorporando la visión de sectores que –pese a haber demostrado que eran mayoritarios, que tenían gran poder de convocatoria y de organización y que por ello podían desplegar acciones de movilización que reafirmaban su fuerza– seguían estando excluidos de los espacios de decisión en los que se definían las políticas, los métodos y los procedimientos de gestión y administración social, económica y cultural. El segundo se refiere a que la introducción del reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del Estado boliviano no trastoca significativamente el orden de dominación vigente. Sin embargo, y a pesar de estos límites, no se puede negar que estos logros posibilitaron la profundización del proceso de luchas sociales por la refundación del Estado, tanto por el hecho de que la demanda fue retomada y resignificada en otras luchas posteriores (durante la “Guerra del Agua” y la “Guerra del Gas”, por ejemplo) como porque posibilitó la propia profundización de la lucha de estos pueblos.

En consecuencia, la apertura de espacios de concertación de pactos entre el gobierno y los movimientos sociales de origen campesino, indígena y popular, que entre 2000 y 2003 interpellaron al Estado poniendo en evidencia que la faceta representativa de la democracia estaba en crisis, solo pudo lograrse mediante la irrupción violenta, irrefrenable, súbita e irreversible de “otredades” que hasta el momento habían ocupado el lugar de lo subalterno. De ahí que en el año 2000 haya nacido la propuesta de la Asamblea Constituyente como mecanismo deliberativo mediante el cual los pueblos indígenas podrían asegurar su participación efectiva, con voz propia, en el diseño de un estado plurinacional y multiétnico, siendo estos una vez más los sujetos que colocaron el asunto en la agenda pública.

Para el año 2004, tras el conflicto socio-político que derivó en la crisis de representación y legitimidad surgida tras la Guerra del Gas en 2003, durante el gobierno de Carlos Mesa se termina por “constitucionalizar” la Asamblea, mediante la modificación del Artículo 232, que atribuye a la misma la potestad privativa de reformar totalmente la norma suprema del Estado.

¿Cómo organizar la Asamblea? Tensiones en torno a la Ley de Convocatoria

Organizar la Constituyente en un país como Bolivia, donde conviven realidades sociales cargadas de matices, contrastes y significados diversos, involucró cuestionar y desarticular la idea de que re-presentar a nivel político supone asumirse como “la voz autorizada para hablar por otro que se piensa sin voz” (Spivak, 1988). Pensar una estrategia de reversión del poder existente, que fijaba a los sujetos subalternos en una posición excluida, suponía entonces iniciar un proceso de recuperación de su propia expresión para poder hilvanar un discurso orientado a visibilizarse como actores políticos con potencialidades para participar en dicho

poder, introduciendo sus propuestas y dialogando para consensuar qué tipo de Estado se aspiraba a implantar y qué derechos fueron, son y serán irrenunciables y que, por lo mismo, debían figurar en el texto de la nueva Constitución.

A nivel operativo, promover la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente suponía definir una Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LECAC), donde se determinarían la modalidad electiva, el número de representantes a escoger y su composición en función a determinados criterios, como población, territorio, equidad e igualdad. Sin embargo, en el proceso de negociación del texto de la LECAC se terminó acordando que la postulación de candidatos y candidatas a la Asamblea se realizaría reconociendo como actores y actoras a asambleístas representantes de partidos o agrupaciones ciudadanas y no a representantes que actuarían autónomamente llevando la voz de sus organizaciones sociales. Con ello, lo partidario nuevamente desplaza a otras modalidades de representación, como la basada en los usos y costumbres de los pueblos indígenas, en la práctica organizacional de los sindicatos o en formas asambleísticas empleadas al interior de los movimientos sociales, haciendo que la Constituyente asuma un carácter derivado y no originario, es decir, como un espacio de debate que “deriva” del poder constituido, enmarcado en los mandatos de la Constitución que en ese momento estaba vigente y que intentaba dar a la Asamblea la forma de “parlamento”, copiando o adaptando el reglamento de debates de la Cámara Baja y enarbolando el principio de los dos tercios como cuota base de aprobación de cada uno de los artículos de la nueva Constitución.

En este sentido, cabe apuntar de manera contundente que la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, a pesar de ser una de las primeras medidas orientadas a dar curso a la agenda política de los movimientos sociales, terminó constituyéndose en uno de los principales límites para una refundación profunda del Estado. Esta ley estableció a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas como las únicas instancias capaces de proponer asambleístas constituyentes (Art. 7). En tanto la definición legal de lo que para la Corte Nacional Electoral es un “pueblo indígena” no es sino una variante de las formas partidarias de intermediación política clásicas, esto significó un dique a la aspiración de participación y representación política autónoma de una extensa porción de la sociedad boliviana organizada de otras maneras –la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, las diversas formas de articulación de los pueblos indígenas o de las juntas vecinales, etcétera. Este límite se expresa en el reconocimiento *de facto* de un sistema de partidos fuertemente quebrantado y por lo tanto significa una reducción del espacio político abierto por los movimientos sociales en los años de lucha anteriores, tanto por los actores que incluye como por las formas de hacer política que deja afuera.

Asimismo, la partidización de la Asamblea generó en su interior una dinámica de correlación de fuerzas que concentró la atención en la confrontación entre, por un lado, los partidos (Unidad Nacional, Poder Democrático Social, Movimiento Nacionalista Revolucionario) y otras fuerzas socio-políticas de oposición (comités cívicos, gobiernos prefecturales) que abogaban por un proyecto constitucional donde se garantizaran aun sus prerrogativas y privilegios de clase en torno a la redistribución de recursos y la autonomía y, por otro, el partido de gobierno, el

MAS, que terminó presentándose a sí mismo como la voz monopólica del cambio. Aquí parece importante apuntar una paradoja: el hecho de que la derecha sí haya tenido que pensar en formas de acción política más allá de las partidarias, como necesidad para reinventarse a sí misma e intentar revertir su largo proceso de deslegitimación, mientras que el MAS, que venía de una historia de luchas y formas de desborde del sistema tradicional de partidos, se cierra cada vez más a la forma partidaria.

“... la LECAC, al privilegiar la forma partidaria de representación, benefició a la derecha con una fórmula electoral que termina por sobre-representarla”

Tras su instalación el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, la Asamblea Constituyente se abocó a la tarea de definir la normativa para organizar y poner en marcha la deliberación para escribir la nueva Constitución mediante la elaboración del Reglamento de Debates, labor que se dilató por siete meses, casi el 60% del plazo establecido por la LECAC para el período de su vigencia.

Acordar los contenidos de un Reglamento de Debates, tratando de conciliar las posiciones que representan los y las asambleístas, se convierte en el primer ensayo de lo que sería iniciar la discusión sobre cómo enfrentar la consolidación de lo que Veena Das define como el momento plural de la vida social (Das et al., 1997), es decir, cómo una vez que las clases y grupos subalternos han ocupado legítimamente un espacio de expresión discursiva lo gestionan para consolidar una legalidad alternativa, respetando la simultaneidad de demandas y aspiraciones de todos los sujetos y sujetas participantes, comprendiendo que los mismos pueden inter e intra relacionarse dando cuenta de su multiplicidad. Además, cabe mencionar que la LECAC, al privilegiar la forma partidaria de representación, benefició a la derecha con una fórmula electoral que termina por sobre-representarla. De esta manera, la derecha boliviana, carente de un proyecto político de transformación real y escudada en su demanda de autonomía departamental tiene la posibilidad real, como se verá en un análisis posterior, de ejercer una estrategia de bloqueo constante de las propuestas de cambio en el seno del foro constituyente.

La necesidad de crear un “momento plural”, a pesar de los límites ya apuntados, exigió definir cómo participar y tomar decisiones en los debates. Así, el reglamento propuso organizar el trabajo incorporando una estructura orgánica integrada por la Plenaria, la Directiva, las Comisiones y Subcomisiones, las Representaciones Departamentales y las Representaciones Políticas, y es justamente en las comisiones y subcomisiones donde se instala el debate permanente en torno a las temáticas propuestas por las actoras y los actores sociales y políticos para que sean incorporadas al texto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Paralelamente, con el fin de garantizar algún tipo de inclusión de las demandas ciudadanas no auto-representadas, en el proyecto del nuevo texto constitucional se establecieron las audiencias públicas como instancias de inter-relacionamiento en el seno de cada comisión al menos una vez a la semana, para que las organiza-

ciones sociales, la ciudadanía en general y otros grupos sociales den a conocer sus proyectos de artículos. Asimismo, se dispuso la articulación de representaciones departamentales conformadas por constituyentes de un mismo distrito para gestionar foros territoriales en los cuales pudieran escucharse las propuestas, consultar a los sectores que las presentan y coordinar con los mismos en un ejercicio constante de retroalimentación entre representantes y representados, manteniendo un vínculo fundado en la igualdad.

Con esto, se plantea un escenario limitado pero posible para ir forjando como práctica deliberativa una nueva modalidad de debate público en la cual los y las representantes asumen su papel como sujetos y sujetas que ante todo deben canalizar las propuestas de todos aquellos sectores populares que les han dado el mandato.

El Pacto de Unidad: garante de la participación social

Revertir la subalternidad mediante la organización de un espacio en el que los sujetos y las sujetas sociales comienzan a aceptar que es posible estar presentes, hablar, auto-representarse e ir construyendo y ocupando un lugar enunciativo reconocido como tal en la esfera política, tal ha sido la meta a que los movimientos sociales aspiraron llegar desde que comenzaron a visibilizar sus demandas en lo público. Así, a pesar del monopolio partidario de la representación en la conformación de la Asamblea Constituyente, nuevamente desde la sociedad organizada y movilizadora se potencia el debate político en este escenario. En este marco se dan las acciones de organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Indígenas, Originarias y Campesinas “Bartolina Sisa” (FNMIOC-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Bolivia (MST-B) y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS).

Todas estas organizaciones, a fines de 2005 y en la ciudad de Santa Cruz, consolidaron una alianza estratégica, conocida bajo el nombre de Pacto de Unidad, que tenía por objeto impulsar demandas de reivindicación étnica y social comunes, garantizando la amplia participación social en la Asamblea como espacio institucional desde donde impulsar reformas profundas a la estructura del Estado boliviano. Planteando como estrategias la movilización, la vigilia y la articulación de propuestas conjuntas en temas esenciales que hacen a la reconfiguración del poder, como la autonomía y la redistribución de los recursos naturales, el Pacto de Unidad fue la primera instancia social desde donde se impulsaron acciones para viabilizar la Constituyente a la brevedad posible, formulando una propuesta de ley de convocatoria y presionando para que el Congreso aprobara una norma especial que incluyera su visión y sus demandas.

Dicha visión asumía a la Constituyente como un espacio de expresión particular de las organizaciones indígenas, campesinas y urbano-populares, que buscaban que la misma funcionara incluyendo lo étnico, lo demográfico y lo territorial,

haciendo visible la diversidad social y la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y aspirando a no reproducir los mecanismos de exclusión propios de una democracia netamente representativa y delegativa.

Así, el referente del Pacto para gestionar sus acciones fue el principio de reconocimiento cultural y de inclusión social, que debía vincularse a la problematización de lo que para los sectores excluidos significaba estar en el mundo, es decir, saberse parte de una realidad fáctica cruzada de relaciones, jerarquías, necesidades y formas de interpretar los tejidos de relaciones que vinculan a cada actor social con otros mundos culturales y con otras “diferencias”. Sin embargo, a lo largo del proceso constituyente, el Pacto también consideró en sus discusiones aquello que debía ser el alcance de las acciones del MAS como instrumento político del cambio efectivo.

Para el Pacto, las negociaciones al interior de la Asamblea no debían perderse en la simple confrontación ideológica entre posiciones de izquierda y de derecha expresadas desde lo partidario. Ir más allá de las mismas, dando mayor jerarquía a las reivindicaciones históricas y estratégicas de sus sectores debía ser el objetivo político esencial que permitiría establecer modalidades participativas capaces de abrir espacios de poder efectivo para garantizar el respeto al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y originarios, definiendo y nombrando con su propia voz en qué consisten los mismos.

Exigir que el MAS, desde su posición en un Estado heredado al que hay que transformar, tome posición constante respecto a las demandas específicas de los movimientos sociales constituyó una estrategia política para redefinir el poder y la ubicación diferenciada en el ejercicio del mismo. Con ello, el Pacto de Unidad evidenció que la capacidad de potenciar la igualdad tiene que ver con la concertación de consensos, con el pacto de alianzas que permiten transitar de lo que se asume como el “poder para” a lo que viene a ser el “poder con”, gracias al cual se aumenta la capacidad de impacto que puede alcanzar una movilización.

En este sentido, además de las miles de propuestas que llegan a la Asamblea desde diferentes espacios de la sociedad civil, el Pacto de Unidad logra, de alguna manera, revigorizar este escenario político, aunque no revertir del todo los límites auto-impuestos por la LECAC. Así, la Asamblea Constituyente se desarrolla en un contexto en que, al tiempo que delibera sobre los cambios a introducir en la nueva carta magna, tiene que defenderse de los continuos asedios de una derecha articulada en torno a las prefecturas departamentales y comités cívicos, quienes bajo un supuesto discurso de defensa a la democracia recurren constantemente a acciones violentas contra la población de sus departamentos y en defensa de sus privilegios de clase.

La resistencia al *proceso de cambio* y la ofensiva de la derecha en los primeros años del gobierno de Evo Morales

En este ejercicio de análisis sobre los movimientos sociales en la última década en Bolivia merece especial atención la revisión de algunos de los principales momentos de polarización vividos en el país, que dan cuenta de la estrategia de grupos de poder de la derecha boliviana para resistir e intentar revertir el proceso de trans-

formaciones sociales iniciado desde la acción colectiva. En este punto interesa presentar, de forma sintética, algunos elementos recurrentes que se plantean de manera más visible y concreta en momentos de mayor ofensiva de la derecha, no solo contra el gobierno de Evo Morales, sino y principalmente contra los actores y espacios de resistencia y rebelión que se van articulando en los departamentos denominados de la Media Luna, donde la derecha crea su trinchera de resistencia y ofensiva. En este último acápite nos concentraremos en la dinámica de polarización que se va tejiendo a partir del análisis de los actores involucrados, sus formas de articulación y los principales hechos que protagonizan. Finalmente, y a modo de conclusión, analizaremos el paso de un momento de intensa polarización hasta el momento actual, que puede caracterizarse como una suerte de despolitización electoralista.

Empecemos, entonces, por revisar brevemente, en las líneas que siguen, algunos de los momentos más álgidos de la polarización desde la asunción de mando del presidente Evo Morales². Para ello nos concentraremos en tres momentos y espacios. El primero, durante el conflicto denominado “Enero Negro”, en Cochabamba a inicios de 2007; el segundo referente a todo el proceso de polarización en el período de elaboración y aprobación del texto constitucional y el tercero relacionado al denominado Golpe Cívico-Prefectural.

La crisis de “Enero Negro”

Uno de los hitos de inicio de la confrontación más abierta fue la denominada crisis de “Enero Negro”, ocurrida en Cochabamba en el año 2007, donde se registran enfrentamientos civiles con un saldo de tres muertes y más de un centenar de heridos. Sobre los actores, discursos y hechos principales de esta confrontación podemos observar que tenemos, por un lado, al bloque reunido principalmente en torno al sindicato cocalero, que aglutinó a otros sindicatos de carácter más urbano, como los fabriles, y a otras organizaciones como las de los regantes, la Federación Nacional de Mujeres Indígenas y Originarias “Bartolina Sisa”, el Movimiento Sin Tierra, gremialistas y vecinos y vecinas de los sectores periurbanos de la ciudad de Cochabamba. Puede decirse que, en general, los sectores movilizados en torno a este bloque eran los mismos –excepto algunos sectores urbanos medios de la sociedad cochabambina– que se sumaron a la demanda de recuperación de la gestión del agua durante la denominada Guerra del Agua del año 2000, pero que debido principalmente al crecimiento de la influencia de los proyectos autonomistas, al tipo de demanda y a la agudización y rebrote de los prejuicios racistas no se adhirieron aquella vez a la movilización popular. La protesta popular surgió a raíz de que el entonces prefecto y candidato del principal bloque opositor en las elecciones de 2009, Manfred Reyes, planteó la convocatoria a un nuevo referéndum sobre autonomías, que suponía el desconocimiento de otro anterior, de carácter departamental, en que ese proyecto hubo perdido. Las movilizaciones de este bloque estuvieron marcadas por las diferencias de criterio existentes entre gran parte de las mismas bases cocaleras, que no estaban dispuestas a detenerse hasta no haber logrado la renuncia del prefecto cochabambino, y la élite dirigenal, que siguiendo directrices del partido de gobierno se niega a provocar la salida de una autoridad “elegida en democracia”, ya que así se ponía en riesgo

un argumento electoral que sostenía la misma presidencia de Evo Morales y la presencia del MAS en el gobierno. La tensión existente entre ambas posiciones terminó poniendo en discusión, entre los mismos sectores movilizados, la relación de dependencia o independencia y las diferencias de su horizonte político propio respecto al horizonte estatal de la dirección partidaria. Del otro lado del conflicto, de manera gruesa, estuvieron los actores que siguen. El primero era el propio prefecto Reyes Villa, sus colaboradores y seguidores políticos directos y los funcionarios prefecturales. El segundo, la Asociación Jóvenes por la Democracia, principal autora de la convocatoria a una marcha que derivó en la embestida contra los sectores sociales que cumplían su segundo día de vigilia en la plaza principal de Cochabamba. Por el tipo de convocatoria y los hechos violentos en que desembocara la marcha, un cierto nivel de organización, que se evidencia por el uso uniforme de bates de *baseball* en una cantidad desproporcionada en relación a la baja popularidad de este deporte en el país y sobre todo por el discurso racista de sus portavoces, se los ha asociado a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), principal grupo de choque de la derecha más radical en Santa Cruz. El tercer actor es la masa de ciudadanos que acude a la convocatoria, que responde a diferentes motivaciones. Algunos ven en el creciente poder de las organizaciones sociales y en su potencial hegemónico la pérdida de su derecho a disentir. Otro grupo, el más numeroso, aglutina a personas que responden a la convocatoria desde una estructura de prejuicios de clase y raciales, en los que encuentran legitimidad para salir a las calles a restaurar “su paz”, rota por la presencia indígena y campesina en la ciudad. En medio de la masa también se identifica un grupo de gente armada, que provoca la muerte de un cocalero y deja un saldo de seis personas heridas por impacto de bala, algunos con antecedentes policiales delincuenciales. El último fueron los medios de comunicación, identificados por muchos analistas como uno de los promotores de la confrontación, alineados a este bloque y condenados y atacados por organizaciones sociales.

La polarización en el proceso de elaboración y aprobación del texto constitucional

En el marco de este escenario, un hecho fundamental que nos interesa resaltar es lo ocurrido el 24 de mayo de 2008, cuando para evitar la concurrencia de grupos de campesinos, indígenas y sectores populares a un evento de entrega de ambulancias por parte de las autoridades gubernamentales nacionales una muchedumbre enardecida en la ciudad de Sucre somete a vejaciones inhumanas a un grupo de mujeres y hombres indígenas en la plaza central de dicha ciudad, obligándolos a arrodillarse y besar la bandera del departamento. En este hecho cualquier aparente intención de inclusión real y creíble del problema indígena dentro del discurso del bloque interinstitucional se ve desbaratada. A pesar de que hubo intentos de borrar la imagen anticampesina del bloque interinstitucional, con la postulación a la candidatura de una mujer indígena para el cargo prefectural y pese al triunfo electoral de la misma, no se consiguió que se neutralizara la disociación existente entre dicha candidata y la base rural del departamento de Chuquisaca.

Es importante también acotar que los conflictos suscitados en Chuquisaca, en especial en su capital, Sucre, no pueden comprenderse si no se hace referencia

al contexto nacional, que se caracterizaba por el despliegue y la pugna entre dos fuerzas y dos proyectos políticos opuestos. En este marco, el proyecto autonómico, centrado especialmente en el departamento de Santa Cruz, percibe en el conflicto chuquisaqueño una oportunidad de expansión a través de una estrategia de avance sobre un territorio político y electoralmente favorable al partido de gobierno. Por su parte, el Comité Interinstitucional vio conveniente aliarse a la demanda autonomista para así contar con mayores fuerzas que aumentarían sus posibilidades de poner en agenda su demanda de capitalía plena³. Chuquisaca era, pues, conceptuado como uno de los departamentos en disputa, cuya ganancia o pérdida en términos políticos facilitaba o frenaba la potencialidad de ampliación del proyecto autonomista.

A nivel general, durante el largo proceso de la Asamblea Constituyente y en otros múltiples escenarios de conflicto a nivel nacional algunos de los actores principales o más visibles de la oposición al gobierno de Evo Morales fueron los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conformaron el denominado Consejo Nacional Democrático (CONALDE). Esta articulación se pretendía defensora de una institucionalidad democrática que denunciaba como amenazada. Frente a ello se da una articulación de organizaciones sociales matrices a nivel nacional bajo la denominación de Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), que disputa este sentido de democracia para poner énfasis en que la democracia tiene que ver con la defensa del proceso de cambio y no con la institucionalidad heredada. En este marco, la CONALCAM se convierte en un instrumento de lucha y presión para que las definiciones del poder constituyente no sean bloqueadas por el denominado poder constituido, expresado principalmente en un parlamento en el que la oposición controlaba la Cámara Alta, con una fuerte capacidad de bloqueo a las iniciativas legislativas del oficialismo. Una vez aprobado el texto constitucional, tras un enfrentamiento en la Escuela Militar de la Glorieta y la posterior aprobación de la propuesta de nuevo texto constitucional en el departamento de Oruro⁴, la CONALCAM realizó una multitudinaria marcha desde diferentes puntos del país hasta la sede de gobierno para presionar al Congreso para que aprobara la ley de convocatoria al referendo constituyente y dirimidor de tierras. El texto constitucional puesto a consideración de la población en el referéndum realizado el 25 de enero de 2009 no es el aprobado en Oruro, sino uno previamente reformado en una Comisión Especial de Concertación con fuerzas partidarias opositoras. Finalmente, a nivel nacional, es aprobado el nuevo texto constitucional, logrando un 61,4% de votos positivos. A nivel departamental, el mayor apoyo ciudadano a la implementación de una nueva Constitución se registró en los departamentos de La Paz (78,1%), Potosí (80,07%), Oruro (73,6%) y Cochabamba (64,9%). En los departamentos cuyas dirigencias departamentales integran el CONALDE los resultados fueron los siguientes: en Chuquisaca el porcentaje de votación por el "sí" alcanza el 51,5%, mientras que el "no" triunfó en Tarija (56,6%), en Santa Cruz (65,2%), en Beni (67,3%) y en Pando (59%). A pesar de estos resultados, se mantuvo la tendencia a la polarización debido a que el CONALDE pretendía rebatir la legitimidad del triunfo nacional de aprobación de la nueva CPE a partir de lecturas sobre el significado de los resultados regionales de la votación. Los más radicales planteaban que la nueva constitución sería reconocida y acatada solo si era aprobada en cada uno de los nueve departamentos del país. El gobierno, por

su parte, rebatía estos argumentos desde la posición de que los resultados de la consulta son nacionales y que, por lo tanto, no se aceptarían lecturas regionales, advirtiendo que la minoría debía acatar la decisión de la mayoría, pues así son las reglas de la democracia.

El “Golpe Cívico-Prefectural”

La masacre de campesinos ocurrida en la localidad de El Porvenir, en el departamento de Pando, el 11 de septiembre de 2008, y el denominado Golpe Cívico-Prefectural, efectivizado con la toma de instituciones en el departamento de Santa Cruz y los atentados contra gasoductos y refinerías en Tarija por integrantes y simpatizantes del movimiento cívico de la Media Luna son uno de los puntos culminantes de una serie de conflictos derivados de la resistencia de los grupos más duros del poder económico contra el proceso de transformaciones políticas y sociales que se vive en el país.

La característica de este escenario de polarización fue, una vez más, la violencia desatada en Pando, Tarija y Santa Cruz y la ampliación de la misma al departamento del Beni, bajo la forma de amedrentamiento y amenaza a los líderes sindicales y organizaciones afines al partido de gobierno, lo que constituía una estrategia más para medir las fuerzas y la capacidad de mantener presencia y posesión territorial en las zonas convulsionadas.

Este escenario se dio como una medida extrema y desesperada de la derecha frente a los resultados del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular del 10 de agosto de 2008, que había sido empleado como un recurso del gobierno nacional para buscar una salida a la polarización política por medio de la consulta en las urnas. En esta nueva consulta el mandato de Evo Morales fue ratificado con el 67,4% de los votos, mientras que también las autoridades departamentales del núcleo opositor de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron reconfirmadas, alcanzándose la siguiente votación: 66,4% en Santa Cruz, 64,2% en Beni, 56,2% en Pando y 58% en Tarija. Con estos resultados no se modificó sustancialmente el tablero de fuerzas y se inició una nueva disputa por la interpretación del voto. En Santa Cruz tuvo lugar una campaña violenta para desconocer la ratificación de Evo Morales. Es curioso cómo el discurso de legitimación de las medidas violentas asumidas por la derecha se sustenta en la supuesta existencia de un “otro pueblo”, que busca la descentralización administrativa mediante la profundización de la autonomía departamental como base del desarrollo regional. Este discurso democratizador encontró sus límites de legitimación en los acontecimientos violentos provocados por grupos de choque de la UJC, las agresiones a la institución policial y a las Fuerzas Armadas (FFAA) y la toma y destrucción de instituciones del gobierno nacional y de la infraestructura energética.

En este escenario de polarización los actores principales eran, por un lado, el denominado CONALDE, los Comités Cívicos Departamentales y otras instancias de representación de intereses empresariales. También fueron parte de esta articulación la UJC y las agrupaciones similares conformadas y promovidas por esta en los departamentos de Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca. La relación orgánica del CONALDE con estas agrupaciones juveniles se hizo convenientemente difusa en el discurso a medida que sus acciones e intervenciones públicas se hacían

más violentas. Es entonces cuando se diluyó la responsabilidad de los actos de estas agrupaciones, principalmente bajo dos figuras: la “espontaneidad del pueblo cansado del centralismo” o la intervención de “infiltrados” de la oposición para “deslegitimar las luchas”.

“... la resistencia al cambio no apunta solo a la desestabilización de un gobierno, sino y principalmente a dismantelar las estructuras de resistencia y autoorganización al interior de los departamentos ...”

Ahora bien, ¿quiénes son los actores al otro lado del conflicto? Desde la caracterización del conflicto como un Golpe de Estado Cívico-Prefectural, el actor principal es el gobierno nacional, al cual se busca desestabilizar. La toma de instituciones, determinada por una resolución del CONALDE como una medida sujeta para ejecutar los estatutos autonómicos, se manifestaba en los hechos en el avasallamiento y saqueo a las instituciones del gobierno nacional en las regiones, en la interrupción de la señal de los medios de comunicaciones estatales y alternativos y en los daños ocasionados a la infraestructura energética en el Chaco, con la toma de válvulas e incendio de gasoductos. Todos estos hechos evidenciaban, por un lado, la incapacidad de los sectores opositores de plantear un proyecto político democrático alternativo y develaban que su accionar se había limitado al bloqueo de las iniciativas gubernamentales y principalmente a las populares. Ahora bien, nos interesa aquí destacar una suerte de tercer actor, que en la mayoría de los análisis no es visibilizado por fuera o de manera independiente al gobierno nacional. Este actor es la masa de población que en los departamentos resiste cotidianamente la violencia de los grupos opositores: las y los vecinos del Plan 3000 en Santa Cruz (barrio popular de migrantes de origen quechua y aymara), las organizaciones sociales, campesinas e indígenas en los departamentos y las propias bases del MAS a nivel departamental, cuyas sedes han sido continuamente avasalladas. Hacemos esta distinción para evidenciar que la resistencia al cambio no apunta solo a la desestabilización de un gobierno, sino y principalmente a dismantelar las estructuras de resistencia y autoorganización al interior de los departamentos a través de la imposición de un régimen de violencia y terror. Así, las organizaciones, las propias estructuras departamentales del partido en función de gobierno e inclusive las mismas delegaciones presidenciales en estos departamentos viven de manera más directa la embestida de la derecha más radical. A lo anterior se suma el hecho de que la presencia de la estructura gubernamental central tiene un carácter intermitente en estos lugares de conflicto, no solo por la dificultad que supusieron las acciones de los grupos de choque de la derecha, llegando incluso a impedir el aterrizaje de aviones de las más altas autoridades nacionales a estos departamentos, sino porque no existen indicios, de parte del gobierno, de una interacción con las diferentes experiencias de resistencia y de democratización en las regiones más allá de los límites partidarios y electorales. Uno de los ejemplos significativos de esta capacidad de propuesta social es el sugerido por el colectivo

“Los Igualitarios” del Plan 3000, que retomando el pensamiento de Andrés Ibáñez interpela al discurso autonomista de la élites por no problematizar suficientemente la noción de igualdad al interior de los departamentos. Este tipo de expresiones políticas no tiene eco en el gobierno nacional, que en este tema se ha limitado a hacer suya la bandera autonómica de la derecha, sin problematizarla.

La derecha no fue únicamente desnudada, de manera contundente, en sus afanes de desestabilización de la democracia –a pesar de su discurso de supuesta defensa a la institucionalidad democrática– durante el intento de Golpe Cívico-Prefectural, sino también a través de un operativo gubernamental para dismantelar una “célula terrorista” descubierta en la ciudad de Santa Cruz. Más allá de los confusos hechos policiales, judiciales y legales que se dieron durante el mencionado operativo⁵, el hecho develó de manera más clara que estaba en marcha un plan separatista, impulsado y financiado por algunos grupos empresariales y que tenía como base de operación la articulación de grupos fascistas fuertemente armados y violentos, cuyo objetivo era llevar la polarización al extremo.

A manera de conclusión. La coyuntura actual: de la polarización a la despolarización electoralista

La falta de consistencia del discurso de democracia del grupo más conservador de la derecha fue puesta en evidencia cuando se develaron sus planes separatistas y anti-democráticos. Este hecho dio lugar a un momento de distensión de la polarización que caracterizó a los primeros años de gobierno. Uno de los efectos inmediatos fue que muchos de los líderes más visibles de la oposición en las regiones se concentraron en tomar distancia de las formas más radicales de las expresiones separatistas; por otro lado, los grupos de choque empezaron a dispersarse en el escenario político. Asimismo se dieron indicios de grupos empresariales que comenzaron a mostrar su simpatía con el gobierno y viceversa. Todo esto se da en el contexto del inicio de un año signado por una dinámica pre-electoral, de cara a las nuevas elecciones generales de diciembre de 2009. En esta nueva coyuntura se aprueba la Ley de Régimen Electoral Transitorio, cuyo contenido da cuenta una vez más, como en el caso de la Asamblea Constituyente, de una falta de apertura de los operadores políticos a un tipo de representación gestada desde espacios autónomos más allá de las estructuras partidarias, a pesar de que el nuevo texto constitucional reconoce, además de la democracia liberal representativa, otras formas de democracia, la directa, la participativa y la comunitaria. En ese marco, inclusive las innovaciones como el establecimiento de circunscripciones especiales indígenas, creadas con el objetivo de otorgar representación directa a los pueblos originarios, terminan siendo planteadas a través de candidaturas postuladas por los partidos políticos.

En este escenario de distensión de la polarización, otro hecho digno de resaltar son las alianzas electorales del partido en función de gobierno con actores institucionales y con candidatos antes claramente ubicados en las filas de la derecha. Merecen especial mención la alianza con las cabezas más visibles de la UJC, así como con líderes y ex autoridades de agrupaciones y partidos opositores o pertenecientes al esquema tradicional de partidos. Frente a este tipo de alianzas se dan algunas críticas importantes desde sectores que lucharon contra las estructuras de

choque de la derecha en los momentos más álgidos de la conflictividad, que se cuestionan de manera muy pertinente hasta dónde conviene entrar en el juego del cálculo electoral en este tipo de alianzas con la derecha como una estrategia para desarticular a la oposición y dónde comienza a desestructurarse un proyecto propio con la llegada de gente que estuvo directamente ligada con los conservadores más recalitrantes del país⁶.

En la última contienda electoral el MAS logra un nuevo triunfo con un porcentaje, a nivel nacional, del 64,2% de apoyo. Fruto de estos resultados, el MAS obtiene en la nueva Asamblea Plurinacional una mayoría aplastante, que desde una lectura de construcción de hegemonía acorde a los momentos de luchas que abrieron este proceso debería llevar a recuperar el espacio de debate necesario, amplio y plural, entre las fuerzas que propiciaron las condiciones para el proceso de cambio, posibilidad que fue arrebatada en los primeros años de gobierno por la estrategia de bloqueo y por la ofensiva violenta de la derecha. Sin embargo, las primeras actuaciones de la Asamblea Plurinacional muestran indicios de que este espacio, lejos de ser un espacio plural de debate, se está convirtiendo en un instrumento funcional a las decisiones asumidas en el Ejecutivo, cerrando la posibilidad de que la aplicación del nuevo texto constitucional sea producto de un proceso de politización similar al que se vivió en los primeros años de lucha de los movimientos sociales.

Actualmente nos encontramos frente a un nuevo proceso electoral a través del cual en abril próximo se configuran los nuevos gobiernos departamentales y locales. En esta etapa se reproduce el tipo de alianzas antes descritas con un nuevo elemento digno de análisis, el hecho de que el MAS pretende mostrarse con más claridad como la última expresión del proceso de cambio, señalando abiertamente que el que no está con el MAS no está con el proceso de cambio. En este sentido se da una contradicción en el hecho de que por un lado el MAS recibe en sus filas y recicla cuadros de la derecha a la vez que promueve el voto de castigo contra antiguos aliados, ya sean de organizaciones sociales o partidos que hayan decidido presentar candidatos por fuera de las estructuras masistas y plantear miradas alternativas en el marco del propio proceso de cambio.

Consideramos que la estrategia del MAS de presentarse como el único actor legítimo para enarbolar las banderas del cambio tiene que ver mucho más con sus cálculos electoralistas que con los desafíos planteados por el nuevo texto constitucional, cuyo reto principal está en asentar de forma crítica el cambio de toda la normativa en que se refuerzan patrones coloniales, excluyentes y patriarcales formalizando las coincidencias que se dan entre las reivindicaciones de clase, género y pertenencia cultural, para que la igualdad no se limite a ser un concepto utilitario destinado a ganar adhesiones y legitimar el nuevo proyecto de país, sino que más bien contribuya a que la diferencia deje de ser un elemento de dominio para transformarse en referente y propuesta de pensamiento donde existen muchas expresiones de política, no una sola que aspire a ser hegemónica y que asigne identidades singulares a las mismas reproduciendo esquemas de poder sustentados en el temor a la diferencia.

Queda pendiente por tanto la deconstrucción de códigos simbólicos y prácticos de exclusión que influyen en el mantenimiento de estructuras de poder jerár-

quicas, a través de una transformación radical de la política en que la autocrítica y la transcítica (Tapia, 2006) sean instrumentos fundamentales de lucha. Es decir, plantearse cómo aprovechar los beneficios y la experiencia ganada durante el tiempo constituyente, en los momentos en que distintas miradas tuvieron la posibilidad de hablar y expresarse desde sus diversas posiciones subjetivas y prácticas, rompiendo los esquemas que las definen como presencias vulnerables, dependientes y desprotegidas, para resaltar su capacidad de articular propuestas como agentes sociales que deciden por sí mismos. Ello supondrá a la larga cuestionar también cómo las organizaciones y los movimientos sociales planean intervenir en el nuevo proyecto de descolonización estatal, que supone revertir los cánones de exclusividad y privilegio que daban solo a unos cuantos el derecho de tomar decisiones e influir en el destino de la política. Es decir, ir mucho más allá de un recambio de élites.

Bibliografía

- Arnold, Denise 2004 *Pueblos indígenas y originarios de Bolivia. Hacia su soberanía y legitimidad electoral* (La Paz: CNE).
- Barragán, Rossana 2006 *Asambleas Constituyentes* (Bolivia: Muela del Diablo).
- Calla, Andrés y Kantuta, Muruchi 2008 "Transgresiones y racismo" en *Observando el racismo* (La Paz: Presencia).
- Ceceña, Ana Esther 2004 *La Guerra por el Agua y por la Vida* (Cochabamba: Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida).
- Costas, Patricia; Chávez, Marxa y García, Álvaro 2004 *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia* (La Paz: Diakonía/Oxfam).
- Crabtree, John 2005 *Perfiles de la protesta. Política y movimientos sociales en Bolivia*. (La Paz: PIEB/UNIR).
- Cuellar, Elva Teresa 2004 *De la Utopía Indígena al Desencanto: Reconocimiento Estatal de los Derechos Territoriales Indígenas* (Santa Cruz: CEJIS/PIEB).
- Das, Veena; Kleinman, Arthur y Lock, Margaret (eds.) 1997 *Social Suffering* (Los Ángeles: Prensa de la Universidad de California).
- Do Alto, Hervé; Monasterios, Karin; Stefanoni, Pablo (eds.) 2007 *Reinventando la Nación en Bolivia: Movimientos sociales, Estado y poscolonialidad* (La Paz: Plural/CLACSO).
- García Linera, Álvaro et al. 2000 *El Retorno de la Bolivia Plebeya* (La Paz: Muela del Diablo).
- García Linera, Álvaro et al. 2001 *Tiempos de Rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).
- García Orellana, Alberto (resp.) 2003 *La Guerra del Agua. Abril de 2000, la crisis de la política en Bolivia*. (La Paz: PIEB).
- Gómez, Luis 2004 *El Alto de pie. Una insurrección aymara en La Paz* (La Paz: Indymedia/Comuna).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel 2008 *Los Ritmos del Pachacuti* (La Paz: Textos Rebeldes).
- Hoffmann, Sabine et al. 2006 *La Reconstrucción de lo Público: Movimiento Social, Ciudadanía y Gestión del Agua en Cochabamba* (La Paz: Muela del Diablo/

AOS/IUED/NCCR).

Mamani, Pablo 2005 *Microgobiernos barriales* (La Paz: CADES/IDIS).

Mamani, Pablo et al. 2006 *Sujetos y Formas de la Transformación Política en Bolivia* (La Paz: Tercera Piel Editores).

Molina, Carlos Hugo (coord.) 2008 *El Movimiento Cívico frente al proceso de descentralización y autonomía (1994-2006)* (Santa Cruz de la Sierra: El País/JACS Sud América/CEPAD).

Patzi, Félix 1998 *Insurgencia y sumisión. Movimientos indígena-campesinos (1983-1998)* (La Paz: Comuna).

Prada, Raúl 2006 *Horizontes de la Asamblea Constituyente* (La Paz: Yachaywasi).

Prado, Fernando; Seleme, Susana y Peña, Claudia 2007 *Poder y elites en Santa Cruz. Tres visiones sobre un mismo tema*. (Santa Cruz: El País).

Spivak, Gayatri Chakravorti 1988 "¿Puede hablar el sujeto subalterno?" en Nelson, C. y Grossberg, L. (comps.) *Marxismo y la interpretación de la cultura* (Basingstoke: Macmillan Educación).

Tapia, Luis 2006 *La invención del núcleo común: ciudadanía y gobierno multisocietal* (La Paz: Autodeterminación/Muela del Diablo).

Willka 2007 "Evo Morales: entre entornos blancoides, rearticulación de las oligarquías y movimientos indígenas" (El Alto: Centro Andino de Estudios Estratégicos) Año 1, N° 1.

Zavaleta, René 1990 (1967) *La formación de la conciencia nacional* (Cochabamba: Los Amigos del Libro).

Zegarra, Karim 2008 "La Asamblea Constituyente: una trampa para enmudecer" en *Observando el racismo* (La Paz: Presencia).

Notas

1 Esta es la primera de cuatro grandes marchas protagonizadas por los pueblos indígenas del Oriente. En 1996 se da la segunda marcha, denominada Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas; en el año 2000 se realiza la Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales y en el año 2002 una nueva gran movilización denominada Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales.

2 Para el desarrollo de este acápite utilizamos información recogida en el proceso de investigación del trabajo denominado "Poder y Cambio en Bolivia. 2003-2007. Transformaciones en las relaciones de poder en las concepciones de democracia y en el modelo de gobernabilidad", realizado en el año 2008 para el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia por un equipo conformado por Patricia Chávez, Dunia Mokrani y Luis Tapia. Una versión resumida de esta investigación ha sido publicada por la mencionada institución en el año 2009.

3 La demanda de capitalía plena fue una de las principales estrategias de bloqueo a la Asamblea Constituyente y consistió en la demanda de traslado

de la sede de Gobierno desde La Paz, que es la capital histórica de Bolivia.

4 La Glorieta es un cuartel militar ubicado cerca de la ciudad de Sucre adonde se habían trasladado los asambleístas, principalmente del oficialismo, debido a que al momento de aprobar la propuesta constitucional existía un clima de violencia en dicha ciudad, propiciado principalmente por el Comité Interinstitucional y la oposición, con el objetivo de que no se diera la sesión aprobatoria. El clima de enfrentamientos se trasladó hasta La Glorieta, por lo que los asambleístas terminaron aprobando el texto constitucional en el departamento de Oruro.

5 Durante este operativo ocurre la muerte de uno de sus presuntos cabecillas, Eduardo Rószsa, de nacionalidad húngara y mercenario en Croacia, además de otros dos implicados de nacionalidad rumanos e irlandesa.

6 Reflexiones hechas durante una serie de entrevistas a activistas, participantes de la lucha del Plan 3000 y del cerco a Santa Cruz en 2008, que fueran realizadas por Marxa Chávez en diciembre de 2009.

Una década en disputa

Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina

GUSTAVO ANTÓN

Sociólogo, becario doctoral CONICET-IIGG, doctorando en Ciencias Sociales (UBA).

JORGE CRESTO

Sociólogo, becario doctoral CONICET-IIGG, doctorando en Ciencias Sociales (UBA).

JULIÁN REBÓN

Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Investigador del CONICET. Director del Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

RODRIGO SALGADO

Sociólogo, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, UBA. Becario doctoral CONICET-IIGG.

Resumen

El presente trabajo aborda la evolución de las luchas sociales en la Argentina durante la última década, en su relación con las transformaciones ocurridas en dicho período en el contexto político y económico.

A su vez, a partir del estudio de casos emblemáticos, busca ejemplificar las principales tendencias de las mismas durante el período. En tal dirección, los autores analizan el comportamiento expresado por los trabajadores ocupados y los trabajadores desocupados, así como también el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, el proceso de luchas en defensa del medioambiente, las movilizaciones en demanda de "seguridad" y, por último, el conflicto desarrollado entre el Gobierno nacional y los propietarios agropecuarios.

Abstract

The article reviews social struggle development in Argentina over the past decade, as regards economic and political transformations that came about over the same period. In addition, on the basis of the examination of notable examples, dominant trends of such transformations over the past decade are presented. In this regard, the writers study the behaviour of workers and the unemployed, as well as the process by which workers recover possession of companies, the process in favour of environmental protection, demonstrations to demand "safety" and, finally, the conflict between government and farmers.

Palabras clave

Argentina, movimientos sociales, conflictividad, acción directa, cambio social

Keywords

Argentina, social movements, conflict, direct action, social change

Cómo citar este artículo

Antón, Gustavo; Cresto, Jorge; Rebón, Julián y Salgado, Rodrigo 2010 "Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Introducción

La sociedad argentina experimentó en los últimos años una serie de transformaciones de gran importancia. Ingresó a la década del dos mil en medio de una grave crisis política y económica, cuyo momento más álgido se registró hacia finales de 2001 y comienzos de 2002, cuando los índices de desocupación, pobreza e indigencia se incrementaron significativamente en medio de una fenomenal depresión económica y se sucedieron cinco presidentes en menos de dos semanas. Sin embargo, luego de atravesar el momento más agudo de esta profunda crisis, el país experimentó un proceso de recomposición institucional, política y económica hasta comienzos de 2008. Hacia finales de la década, la sociedad ingresó en una nueva crisis política –de menor importancia en comparación con la experimentada a comienzos de la década– y en un proceso de desaceleración del crecimiento económico.

En paralelo –y en relación con estas mutaciones– la movilización social vivió una serie de transformaciones. La protesta social generalizada y el heterogéneo proceso de autonomización que caracterizaron a la lucha social durante los momentos más intensos de la crisis evolucionarán, a partir de la recomposición institucional, hacia una conflictividad de carácter menos intensa, más institucionalizada y con un renovado protagonismo del movimiento de los trabajadores organizados. Finalmente, hacia fines de la década se intensificarán la protesta y la autonomización en un contexto de emergencia de protestas con características regresivas y politización del conflicto.

El presente trabajo explora descriptivamente la evolución de las luchas sociales de la década en su vinculación con las transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas en la Argentina. En esta dirección, primero se expone una periodización de la evolución de la lucha social. Posteriormente, se analiza la evolución de los procesos de movilización y protesta de los actores más dinámicos del período entre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los trabajadores desocupados. Por otra parte, también se analizan procesos considerados emblemáticos de la conflictividad de las distintas etapas: las recuperaciones de empresas, los movimientos socio-ambientales y los procesos de movilización con carácter social regresivo. Finalmente, se plantea una serie de interrogantes sobre el carácter social que expresa la evolución de las luchas y la totalidad social a ellas

vinculada, planteando tensiones y desafíos que se presentan en la perspectiva de la construcción de una estrategia emancipatoria.

Las fuentes de datos utilizadas en el presente trabajo incluyen una revisión de las cronologías del conflicto social elaboradas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL), de CLACSO, sobre la base de la prensa escrita, el análisis de datos estadísticos sobre *hechos de rebelión*, que elabora el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), basados en dichas cronologías –los cuales nos fueron generosamente facilitados por este programa–, la incorporación de diferentes avances investigativos que los autores hemos desarrollado en el marco del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (PICASSO), con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, así como el análisis de avances investigativos de otros autores pertinentes a la temática.

Periodización

La década no encuentra una continuidad en cuanto a la evolución de la protesta y disconformidad social. A grandes rasgos, pueden distinguirse al menos tres períodos que guardan estrecha relación con la evolución política y social del país.

Como se observa en el Cuadro 1, el primer período puede situarse hasta 2002 inclusive¹. Está enmarcado por el agotamiento del modelo resultante de la reestructuración capitalista regresiva de los noventa –denominado “neoliberal” por la doctrina que lo nutrió– y el desarrollo de una inusitada crisis que se generalizó en todo el orden social. La agudización de la crisis promoverá la renuncia del gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), de la Alianza (un frente conformado por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario), en un contexto de saqueos y protestas generalizadas que incluyó en la Ciudad de Buenos Aires una de las movilizaciones de carácter semi-espontáneo más masivas en la historia del país. Este período está caracterizado por el malestar y la protesta social generalizada y creciente, y la emergencia de nuevos movimientos sociales –movimientos de empresas recuperadas por sus trabajadores, asambleas barriales, movimientos de ahorristas bancarios– y el desarrollo de otros movimientos surgidos previamente como los movimientos de trabajadores desocupados o piqueteros. Se desarrolla un proceso de autonomización de diferentes personificaciones sociales que no están dispuestas a delegar la defensa de sus intereses en las heteronomías políticas y sociales y en los canales institucionales. El desarrollo inusitado de la acción directa –las configuraciones de acciones no mediadas por los canales institucionales dominantes para el procesamiento de los conflictos– es un claro indicador de este proceso. Es un período caracterizado también por el enfrentamiento a procesos expropiatorios y sus resultantes en distintas dimensiones. La creciente politización del país se va a expresar en demandas de cambios económicos y políticos, estos últimos representados emblemáticamente en la consigna “que se vayan todos”, popularizada hacia fines de 2001. A pesar de los distintos procesos de unificación de la heterogénea protesta y autonomización emergente, en el momento de mayor intensidad de la conflictividad la movilización tenderá a expresar diversas fracturas y contradicciones, no pudiendo constituirse desde los sectores populares una direccionalidad estratégica que la articule.

El segundo período podría delimitarse entre 2003 y 2007. Está contextualizado por el desarrollo y la consolidación del proceso de recuperación económica y de recomposición política iniciado a mediados de 2002. La descomposición del anterior modelo de acumulación abre espacio a una situación de disputa en la cual la expansión productiva desplaza al anterior peso de la valorización financiera y, dentro de ella, la industria y el agro ganan peso frente al sector de servicios. En el campo político, se consolida una nueva alianza social en el gobierno del Estado nacional que produce rupturas políticas y económico-sociales significativas con los gobiernos de la década anterior². Con el correr de los años, se producirá un cambio en la morfología de las luchas populares. Ante el nuevo contexto, algunos actores del período anterior tenderán a desaparecer –las asambleas barriales, por ejemplo– y otros a desmovilizarse crecientemente, como, por ejemplo, los piqueteros. Reemergerá con nuevo protagonismo el movimiento obrero y sindical. La lucha se desplazará de enfrentar procesos expropiatorios a la confrontación de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. En paralelo a estas tendencias y desplazamientos se produce una marcada institucionalización de las acciones de lucha. No obstante, la acción directa seguirá siendo significativa, sobre todo para actores no institucionalizados³. También emergen nuevos movimientos sociales, como los movimientos contra la inseguridad, o los socioambientales, mientras que el movimiento por los derechos humanos renueva su dinámica de movilización⁴.

Por último, en 2008 se abre un nuevo período en la evolución de la conflictividad social. Estará caracterizado por una ralentización del crecimiento económico y el desarrollo de una crisis política de la alianza en el gobierno. Nuevamente crecen las acciones de lucha y la propensión a la acción directa, pero la novedad será su conducción por sectores de la burguesía en sus diferentes personificaciones sociales. Emerge una renovada politización del conflicto que tiende a polarizarse a favor o en contra del gobierno nacional. En particular, el denominado conflicto del campo expresará un intenso proceso de autonomización y movilización personificado centralmente por corporaciones con metas regresivas en lo político y lo económico. Aún en desarrollo, la duración y características de esta etapa dependerán de la evolución económica, la dinámica de las confrontaciones políticas y la capacidad del sistema político para procesar institucionalmente a estas últimas.

A continuación, presentamos la evolución de los procesos de movilización y protesta de los actores más dinámicos del período entre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los trabajadores desocupados o piqueteros. Asimismo, presentamos una breve descripción de los procesos emblemáticos de la primera y segunda etapa de la conflictividad, los denominados procesos de recuperación de empresas y los movimientos socio-ambientales. Por último, exponemos el desarrollo de los procesos de movilización con carácter social regresivo, que como ya hemos señalado alcanzan su cúspide en la última etapa de conflictividad que hemos delimitado.

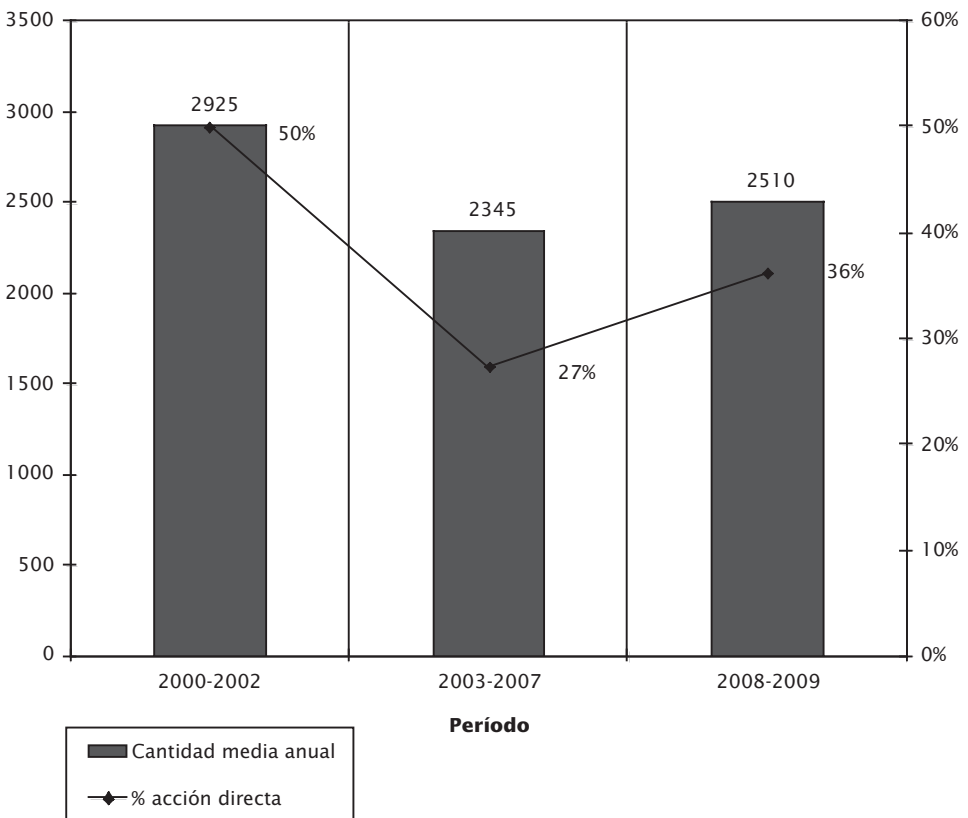
Cuadro 1. Periodización de la década y principales características asociadas a la conflictividad social

Dimensiones	Períodos		
	2000-2002	2003-2007	2008-2009
Contexto social	Crisis del modelo de valoración financiera: recesión y depresión. Crisis política: renuncia de De la Rúa. Gobiernos provisorios. Inestabilidad e ilegitimidad. Crisis social.	Salida de la crisis: fuerte crecimiento económico y lenta recomposición política. Legitimidad de gobiernos electos validados en las urnas.	Crisis política y desaceleración del crecimiento económico. Unificaciones de la oposición política y social, divisiones en el oficialismo.
Caracterización general del conflicto	Politización. Protesta social generalizada. Autonomización descorporativizada y diversificada en sus destinatarios. Contenido progresivo, con peso importante del carácter defensivo en la lucha corporativa.	Institucionalización y corporativización moderada del conflicto. Emergencia de nuevos movimientos. Contenido progresivo, con aumento del peso ofensivo en la lucha corporativa.	Politización y polarización. Autonomización corporativa y regresiva con el gobierno nacional como destinatario.
Cantidad de acciones de lucha	Punto más alto de las acciones de lucha.	Descenso y estabilización a niveles más bajos.	Crecimiento con el punto más alto en 2008, pero sin alcanzar los niveles de 2000-2002.
Formas de lucha	Fuerte intensidad de las acciones directas; en 2001 predominan frente a las indirectas. Las formas de acción directa son lideradas por el corte, pero también alcanzan fuerte intensidad el ataque, la ocupación y los saqueos. La generalización de la protesta conduce a un pico absoluto de movilización.	Descenso de acciones directas y ascenso de las indirectas. La actividad huelguística alcanza sus picos absolutos y relativos. La movilización alcanza su pico relativo.	Aumento paulatino de la acción directa y descenso de la indirecta, aunque con predominancia de la segunda. El crecimiento de las acciones directas se da principalmente a partir del crecimiento de los cortes.
Personificación social	Tendencia al aumento del peso de los desocupados, llegando en 2002 a ser el actor más significativo. La tregua sindical disminuye el peso de los asalariados ocupados a partir de 2002. Es el momento de mayor articulación en acciones de lucha entre ocupados y desocupados.	Reemergencia del conflicto laboral a partir de 2004; aumento y consolidación del peso de los asalariados ocupados. Descenso paulatino y sostenido de la participación de los desocupados. A partir de 2004 adquieren peso los familiares y víctimas de la inseguridad y accidentes. Vinculado a los movimientos socio-ambientales, desde 2006 adquieren importancia los vecinos y pobladores.	Aumento de peso de los propietarios. Durante 2008 superan a los asalariados. Estabilización de la intensidad de la categoría "vecinos y población". Descenso del peso de los asalariados ocupados. Leve ascenso en la participación de los desocupados, aunque con un peso muy poco significativo.
Demandas	En 2001 se da el punto más intenso de la lucha contra el modelo económico y un pico en la exigencia de la renuncia de funcionarios y en defensa de los ahorros. Los salarios adeudados, el empleo, los subsidios y las condiciones de vida son demandas significativas en todo el período.	Asalarización de la conflictividad: crecimiento del reclamo por aumento salarial y por mejoras en las condiciones de trabajo. Disminución marcada de las demandas políticas. Relevancia de demandas de justicia y referentes al medioambiente; estas últimas alcanzan su punto más alto en 2006 y 2007.	Vinculado al conflicto del campo se da un pico intenso de demandas referentes a los impuestos. Descenso de las demandas salariales. En 2009 hay un aumento de las demandas por empleo. Aumento de las demandas políticas.
Destinatarios	Politización: importante peso del gobierno como destinatario pero no en tanto que empleador. Peso significativo de las empresas como destinatario de demandas.	El crecimiento del conflicto laboral da mayor peso al gobierno en tanto que empleador y un aumento significativo del peso de las empresas privadas.	Repolitización: fuerte aumento del peso del gobierno nacional. Emergencia de destinatarios políticos. Hay una disminución del peso de las empresas como destinatarias de demandas en 2008 y un aumento en 2009.

Dimensiones	Períodos		
	2000-2002	2003-2007	2008-2009
Principales hechos de masas	Jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.	Marcha contra la inseguridad (2004), marchas de Gualeguaychú (2007), acto del gobierno del 25 de mayo (2006) y marcha por la aparición con vida de Julio López (2006).	Principales concentraciones a favor y en contra del aumento de las retenciones durante el llamado conflicto del campo (2008).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA y en las cronologías del OSAL.

Gráfico 1. Cantidad media anual de acciones de lucha y porcentaje de acciones que asumen carácter directo por período



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA.

La lucha de los trabajadores asalariados ocupados

En el nuevo contexto social de recomposición política, recuperación económica y mejoramiento de los indicadores laborales –en particular un marcado descenso del desempleo–, surgido tras la crisis de 2001, los trabajadores de la Argentina recuperaron, desde 2004, el dinamismo demostrado históricamente. De esta ma-

nera, los trabajadores ocupados comenzaron nuevamente a desempeñar el rol de vanguardia en las luchas sociales, luego de varios años de fuerte protagonismo de los movimientos de trabajadores desocupados (años 2002 y 2003)⁵.

El renovado dinamismo expresado por los trabajadores ocupados en este nuevo contexto puede constatarse a través de los valores que han registrado al menos dos indicadores: la conflictividad laboral y la negociación colectiva.

Los primeros años de la década estarán marcados por una intensificación de la conflictividad, un marcado carácter defensivo y la unificación del movimiento obrero en varias huelgas generales frente a las medidas de ajuste del gobierno de De la Rúa. Como se desprende del Gráfico 2, la lucha de los asalariados en los años 2002-2003 alcanza niveles históricos sumamente bajos. Este descenso es producto del contexto desfavorable del mercado de trabajo y de la tregua practicada por distintas fracciones sindicales a partir de los procesos de apertura de los gobiernos de Duhalde (2002-2003) y luego de Kirchner. En cambio, a partir de 2004, se experimentó un crecimiento de la conflictividad laboral, alcanzando su punto más alto hacia 2005 (MTSS, 2007; Etchemendy y Collier, 2007).

Esta mayor conflictividad laboral registrada a partir de la recomposición política y económica es expresión en parte de un pase a la ofensiva de la fuerza de trabajo en su lucha corporativa. Si durante la década inmediatamente anterior y en los años 2001 y 2002 fueron mayoritarios, en la perspectiva obrera, los conflictos defensivos, enfrentando particularmente los intentos expropiatorios del capital (salarios adeudados, despidos, reducciones salariales, por ejemplo), en la etapa abierta posteriormente lo dominante fueron los conflictos ofensivos. Esto ha sido así en gran medida debido a los reclamos por incrementos salariales, que han superado los niveles de inflación experimentados durante el período. En 2004, el 62,6% de los conflictos se dio por cuestiones salariales, mientras que en 2005, estos llegaron a ser el 76,3% (Etchemendy y Collier, 2007). Así también, se han registrado numerosos y prolongados conflictos por mejoras en las condiciones de trabajo y de contratación⁶. Este nuevo contexto estará también enmarcado por la inexistencia de huelgas generales que articulen al conjunto del movimiento obrero contra el gobierno nacional.

De igual forma que en los noventa, la conflictividad laboral ha estado dominada por la conflictividad registrada en el sector público de la economía. Por ejemplo, en 2006, del total de conflictos registrados, el 59% se produjo en el sector público, mientras que el resto, el 41%, se dio en el ámbito privado (MTSS, 2007). En la conflictividad de este sector se ha destacado el dinamismo expresado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), enrolada en la alternativa Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y, en menor medida, por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ligada a la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT).

Los sindicatos han sido quienes han conducido mayoritariamente los conflictos laborales. Empero, una serie de conflictos que han concitado la atención de amplias capas de la población y la intervención del Estado nacional –como los diversos conflictos suscitados en los subterráneos de Buenos Aires– han estado conducidos por cuerpos de delegados, comisiones internas o seccionales opositoras a las conducciones nacionales de los sindicatos.

En el caso de los subterráneos, el cuerpo de delegados ha sido la instancia que ha conducido a la fuerza social de los trabajadores en los distintos conflictos, a pesar de la resistencia implementada por el sindicato que los representaba formalmente (la Unión Tranviarios Automotor – UTA). En los últimos años, los trabajadores del subterráneo –conducidos por su cuerpo de delegados– han obtenido mejoras en sus salarios, la reducción de la jornada de trabajo y la reversión de la política de subcontratación, entre otras cuestiones, y se han transformado en un verdadero poder alternativo dentro de la empresa.

Al lograr revertir una porción significativa de los efectos negativos instalados en los subterráneos a partir de la privatización del servicio en los noventa –extensión de la jornada de trabajo y subcontratación, por ejemplo–, estos trabajadores se han transformado en una ejemplificación de la posibilidad de reversión de las consecuencias del neoliberalismo en el ámbito laboral.

Estas experiencias organizativas han despertado fuertes expectativas en determinadas identidades, quienes han visto en ellas espacios a partir de los cuales generar una renovación de las conducciones sindicales.

Desde el punto de vista cuantitativo, la incidencia de los conflictos conducidos por estas instancias ha sido marcadamente minoritaria. Así, para el año 2006, el 83% de los conflictos laborales registrados fue impulsado por un sindicato y el resto se reparte por igual entre el frente gremial y las otras organizaciones, que incluyen a los cuerpos de delegados y las comisiones internas (MTSS, 2007). No obstante, estos conflictos, junto a la permanencia de la CTA y el desarrollo de nuevas organizaciones, marcan una tendencia hacia una mayor pluralidad política y organizativa en la vida sindical.

Con respecto a las formas de lucha instrumentadas en el desarrollo de los conflictos, a diferencia de lo sucedido durante la década anterior, cuando se extendió el uso de las declaraciones de alertas y las movilizaciones en las calles, el paro ha vuelto a ocupar un lugar relevante en este período. Esta forma de lucha tuvo su pico en 2005, alcanzando niveles que duplican el promedio de la década de los noventa. El paro, en varias ocasiones, ha sido implementado en combinación con cortes, bloqueos u ocupaciones de establecimientos.

Esta revitalización de los trabajadores –al menos cuantitativamente– puede también observarse por medio del aumento de las negociaciones colectivas desde 2003, pero especialmente a partir de 2005, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La negociación colectiva ha sido impulsada por el Estado nacional con el objetivo de institucionalizar los diferendos entre el capital y el trabajo, regulando las demandas salariales de los trabajadores. Las pautas salariales sugeridas por el gobierno han sido generalmente acompañadas –no exentas de negociaciones– por el movimiento obrero, particularmente por la Confederación General del Trabajo (CGT), muy próxima a los gobiernos de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina Fernández después.

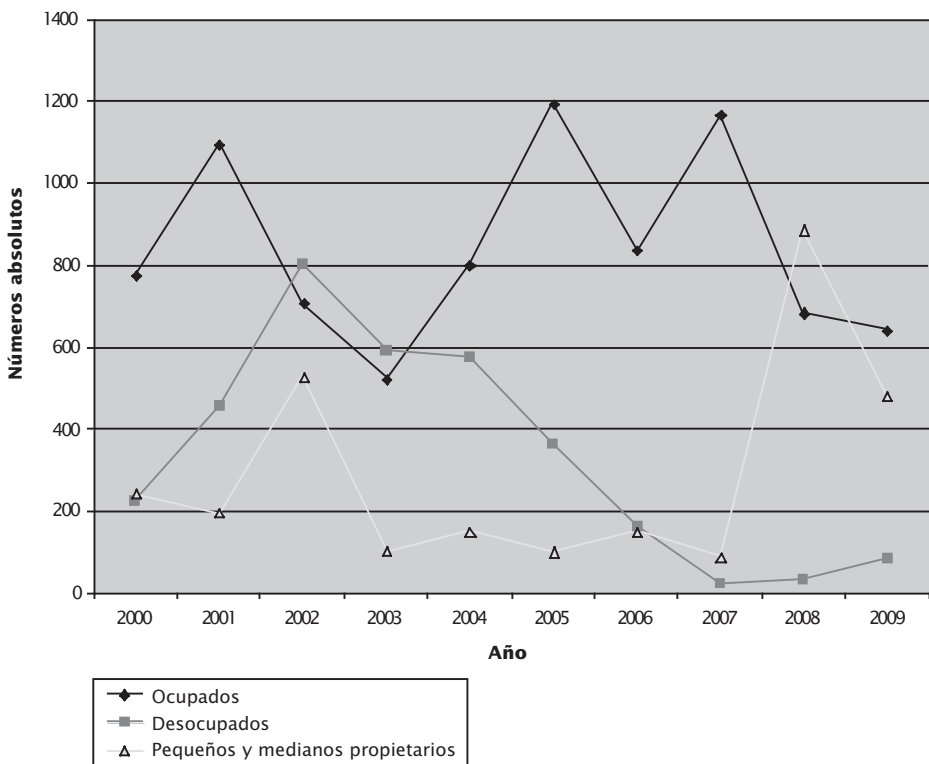
Sin embargo, este crecimiento de la negociación colectiva no ha anulado la conflictividad laboral. De hecho, muchas de las negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo han sido precedidas o mediadas por conflictos.

Entre 2004 y 2008 se han firmado casi 4 mil convenios colectivos, si se cuenta entre ellos a los acuerdos puntuales. Durante estos años, han crecido significativamente los acuerdos y convenios por actividad, que prácticamente habían desaparecido en la década de los noventa. Sin embargo, siguen siendo dominantes los convenios y acuerdos por empresa. En promedio, entre 2004 y 2008, el 66% de las negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación correspondió al ámbito de empresa, mientras que el 34% al de la actividad.

En las negociaciones colectivas también se pueden observar las relaciones entre el capital y el trabajo desde la recuperación económica y política del país. En este sentido, cabe destacar que, entre 2004 y 2008, el 86% de las negociaciones colectivas homologadas contemplan cláusulas de incrementos salariales.

En suma, en un nuevo contexto económico y político –más favorable en comparación con la década anterior– los trabajadores ocupados de la Argentina han desarrollado una creciente movilización y recuperado el dinamismo demostrado en épocas previas.

Gráfico 2. Evolución de las acciones de lucha de las tres principales personificaciones sociales del período, Argentina, 2000-2009



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA.

Evolución y transformaciones de los movimientos de trabajadores desocupados

Durante la década, en paralelo al cambio del contexto social y político, los movimientos y organizaciones de desocupados, conocidos popularmente como “piqueteros”, experimentarán transformaciones y cambios profundos, atravesando momentos de movilización, rearticulación de fuerzas y reacomodamientos ante el escenario planteado por los nuevos actores de la esfera política.

Al inicio de la década, las distintas organizaciones se encontraban fortalecidas. Larga y penosamente, se habían constituido desde mediados de los noventa, a partir de la movilización en las calles y en su cotidiano trabajo barrial, logrando personificar a sectores pauperizados de la clase trabajadora en procura de la mejora de sus condiciones de vida. Enfrentaban, de diversos modos, los efectos del proceso expropiatorio sobre la fuerza de trabajo resultantes de la reestructuración capitalista que signó dicha década. Su meta originaria fue el reclamo por “trabajo genuino” pero, ante la falta de respuestas del Estado, esta demanda comenzó a ser desplazada por los planes laborales y sociales que el gobierno estaba más dispuesto a otorgar (Svampa y Pereyra, 2003). Inscriptas en una lógica de movilización y protesta propia, que encontraba en el corte de vías de tránsito su herramienta emblemática, nutrieron sus filas de la existencia creciente de trabajadores desocupados sin posibilidad de verse representados sindicalmente y del debilitamiento de las redes de los partidos políticos tradicionales en los barrios populares. En este contexto, las organizaciones piqueteras se transformaron en un verdadero lugar de contención y diálogo, de intercambios y resistencia, de elaboración de proyectos comunitarios y de puesta en práctica de estrategias de acción contra el hambre, la desocupación y la exclusión. La evolución de su accionar en las calles –a lo largo de la década que aborda el presente trabajo– varía en paralelo a los cambios en la situación política, económica y social.

En los primeros años, la dinámica de movilización de las organizaciones piqueteras crece constante y significativamente hasta alcanzar su punto máximo de convocatoria en 2002. Este momento de gran movilización y capacidad de articular con otros sectores sociales en pos de sus reivindicaciones particulares y de metas políticas más trascendentes es también el período en el cual comienzan a intensificarse las contradicciones al interior del movimiento. Hasta la crisis de 2001, aun en la marcada heterogeneidad política e ideológica que expresaban las organizaciones, existían tendencias convergentes en la dinámica de confrontación que hacían posible hablar del “movimiento piquetero”⁷. A partir de la crisis de finales de 2001 y de la renuncia del presidente De la Rúa se acentuarán las tendencias divergentes. Muy tempranamente se intensificaron los distanciamientos, emergiendo divergencias acerca del carácter de la crisis política y las estrategias a seguir. A medida que fue cambiando la situación económica y política, las contradicciones al interior del movimiento se acrecentaron.

Hacia 2003 el movimiento piquetero se encontraba fuertemente establecido en la lógica de movilización y conflicto, aunque su capacidad de convocatoria comenzaba a declinar. Su principal forma de lucha –el corte o piquete en las vías de tránsito– comenzaba a impacientar y desarrollar ma-

lestar en sectores de capas medias urbanas que otrora prestaran un limitado apoyo y cierta tolerancia. Los piqueteros debieron soportar en aquellos días la más dura oposición mediática a sus prácticas de lucha. Sin embargo, aun sin alcanzar la intensidad de 2002, las acciones de lucha de estas organizaciones mantuvieron un fuerte nivel. Recién a partir de 2005 el cambio de etapa impactará cuantitativamente en sus acciones de protesta, iniciándose un marcado y sostenido descenso hasta alcanzar prácticamente un estado de desmovilización en 2007.

La actitud del presidente Néstor Kirchner frente a la cuestión piquetera se tornó evidente desde el comienzo de su mandato. Nunca se mostró dispuesto a pagar el costo político de la represión. Si durante la década anterior las tácticas implementadas por los gobiernos hacia los movimientos fueron de deslegitimación y represión, desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner la perspectiva se transformó. El nuevo gobierno abrió el camino del diálogo y la negociación con las organizaciones. Su estrategia apuntaba a abrir canales de recursos a las organizaciones, en especial a aquellas más afines, y apostar a que el problema de la desocupación se resolviera con crecimiento económico y creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se inicia una política por parte del gobierno que tiende a limitar el uso de la represión ante acciones de protesta –poniendo especial atención a la legitimidad social del uso de la fuerza– y a “dejar actuar” al sistema judicial *a posteriori*.

La búsqueda del gobierno nacional se centraba en poner en marcha, rápidamente y con las organizaciones, proyectos de trabajo que tornaran sin sentido la lógica del corte de calles. Su política de puertas abiertas a los reclamos y de diversificación de la política social pronto profundizarían, aún más, las contradicciones al interior del movimiento. Desde la perspectiva de las organizaciones más críticas –en su mayoría vinculadas a partidos y organizaciones de izquierda– los primeros pasos dados por el presidente fueron catalogados de insuficientes. Las señales de ruptura con algunas de las políticas de los noventa, que pronto se dieron desde el ejecutivo, se comprendieron como insertas dentro de una lógica de doble discurso. Para estas organizaciones, Kirchner venía a continuar el trabajo de Menem y De la Rúa. Estos sectores buscaron y buscan en la actualidad continuar con la lógica de movilización y protesta que durante los noventa les arrojó resultados satisfactorios, colocándolos como representantes legítimos en la lucha social de un sector de los excluidos⁸.

Pero el ciclo económico de recuperación que ya se había iniciado hacia fines de 2002 –y que mostrará un crecimiento constante durante los años siguientes– incidirá en el movimiento piquetero de una forma original: socavando las bases de su reclutamiento, el ejército de desocupados. La capacidad de convocatoria de las organizaciones ya no conocería los niveles del pasado inmediato.

De esta forma, otras organizaciones tomaron conocimiento de la necesidad de definir una relación nueva con los actores políticos. Quienes se sumaron al diálogo y redefinieron pronto su postura frente al nuevo gobierno comenzaron a ser vistos como traidores por sus anteriores compañeros de lucha. Las contradicciones al interior del movimiento piquetero se irían profundizando a medida que el kirchnerismo buscaba fortalecerse y resolvía asincrónicamente muchas de las tensiones

que lo atravesaban. Así, sectores del movimiento se integrarán al gobierno de muy diversas formas como base de apoyo social, y no pocos en puestos de gestión gubernamental. Un amplio espectro de organizaciones, en particular aquellas provenientes de tradiciones políticas vinculadas al nacionalismo popular, desarrollarán acciones en apoyo a políticas planteadas desde el gobierno, trasladándolas a las calles y actuando como un factor de presión hacia empresas, medios de comunicación y políticos de la oposición⁹.

Muchas situaciones políticas durante la década podrían ejemplificar las distancias abiertas entre las organizaciones y las políticas que cada una llevó adelante. Pero quizás el denominado conflicto con el campo ejemplifique mejor que ninguna otra las contradicciones abiertas entre las organizaciones piqueteras. Mientras algunas se movilizaron en apoyo a la postura del gobierno y se transformaron en su sostén en las calles, otras se encolumnaron con las entidades del campo, estableciendo una alianza con los propietarios y las corporaciones rurales bajo el argumento de defender los intereses de los pequeños productores rurales. Las demás organizaciones, sin mayor repercusión, buscaron revertir la polarización de la confrontación apostando infructuosamente a abrir una tercera alternativa¹⁰.

Más recientemente, a fines de 2009, la estructura de oportunidad abierta por el conflicto entre el gobierno y la oposición social y política colaborará en una moderada revitalización de la movilización de distintos grupos piqueteros. Aprovechando la difusión proporcionada por grupos mediáticos enfrentados con el gobierno –algunos de los cuales en su momento fueron artífices de la estigmatización de los piqueteros– retomarán la protesta en las calles en procura de conseguir ser incorporados en programas de trabajo del gobierno nacional, denunciando su discriminación a expensas de la estructura territorial del partido en el gobierno del Estado.

En suma, el movimiento irá perdiendo paulatinamente el protagonismo que otrora supo tener en la conflictividad. La pérdida de capacidad de movilización se dará en paralelo a la apertura de nuevos canales institucionales. Esta nueva situación otorgará en muchos casos un peso creciente a los emprendimientos en los barrios, en la dinámica de la organización, a expensas o desligados de la lucha en la ruta, desdibujándose algunas de las características movimientistas de las organizaciones. Finalmente, la década muestra los rumbos divergentes que tomaron las organizaciones piqueteras en relación con el gobierno y la interpretación de la situación política.

Fábricas recuperadas por sus trabajadores

La recuperación de empresas es la conceptualización con la cual se ha denominado a un conjunto heterogéneo de procesos, en los cuales empresas en crisis son puestas a producir por sus trabajadores. Durante la década, miles de asalariados en todo el territorio de Argentina se han hecho cargo de empresas en crisis.

Inicialmente, la difusión de las recuperaciones expresó una de las respuestas esbozadas por los trabajadores ante la posibilidad de la pérdida del trabajo, en el contexto inédito de crisis económica, política y social que mostraron los años 2001 y 2002. Este contexto de crisis permitió la construcción de una estructura de oportunidades para la conformación de una serie de articulaciones y alianzas

sociales que viabilizaron las recuperaciones. El trabajo como valor social, en un país con tasas inéditas de desempleo, otorgó legitimidad para que un conjunto de trabajadores lograra preservar, por su propia cuenta, su espacio en el mercado laboral (Rebón, 2007).

“...la personificación central del proceso de recuperación de empresas expresa *fuerza de trabajo* que avanza en una embrionaria relación de posesión con los medios de producción”

Al desobedecer al desempleo avanzando sobre la dirección de la producción, los trabajadores de estas empresas recuperadas produjeron cambios e innovaciones en los espacios físicos y sociales que entraron en su posesión. Este avance tuvo en lo inmediato una implicancia sustantiva: conformó un proceso de igualación y democratización creciente frente a la empresa fallida. Diversos indicadores y datos observables daban cuenta de estas transformaciones: la igualación en las formas de apropiación y retiro de la cuenta de utilidades, los criterios y las formas democráticas en las tomas de decisiones, la función de la dirección personificada por el colectivo laboral y las fuertes articulaciones no-mercantiles con el entorno social de la empresa.

Pese a muchos pronósticos pesimistas, aun transformado el contexto de su emergencia, el proceso ha podido desarrollarse sostenidamente, tanto en su forma ampliada (la extensión a nuevas unidades productivas) como en su forma simple (la capacidad de sostenimiento productivo de las empresas recuperadas sin alterar su forma social inicial). Actualmente, estimamos en todo el país la existencia de alrededor de 270 empresas recuperadas. Esta capacidad reproductiva posee dos elementos sustantivos. En primer lugar, el cierre empresarial como inherente a la expansión de la formación social de carácter capitalista y sus efectos en términos de desempleo. En segundo lugar, la difusión de la recuperación como alternativa viable, realizable, para enfrentar dichos efectos, es decir, la incorporación de dicha alternativa a la “caja de herramientas” de los trabajadores (Rebón, 2007; Rebón y Salgado, 2009). Así, en tanto la desaparición de empresas es un elemento estructural del capitalismo, una vez que esta alternativa se instala socialmente –aun cuando se revierta parte de los factores que conformaron su génesis– su difusión puede continuar mientras permanezcan niveles significativos de desempleo y las condiciones políticas no se vuelvan abiertamente hostiles a la experiencia (Rebón y Salgado, 2009).

Sin embargo, más allá de la capacidad de ampliación de las recuperaciones y de la capacidad del sostenimiento productivo evidenciado por estas experiencias, muchas de las innovaciones sociales no han podido consolidarse. Con el desarrollo de la vida productiva de estas empresas, la lucha por poder competir en un mercado en condiciones de dominio capitalista limita las capacidades innovadoras del proceso. Más allá de sus limitaciones y su magnitud, estas experiencias han implicado una mayor influencia directa de los trabajadores sobre la esfera de la “economía” y, por lo tanto, grados crecientes de empoderamiento

social sobre la propiedad privada, el uso y el control de recursos y actividades económicas (Rebón y Salgado, 2009). En este sentido, la personificación central del proceso de recuperación de empresas expresa *fuerza de trabajo* que avanza en una embrionaria relación de posesión con los medios de producción. Representa, frente al punto de origen, un empoderamiento social al conformar una nueva relación con sus medios de producción, a partir de una nueva articulación, al interior y al exterior de la unidad productiva, con otras personificaciones sociales.

La lucha socio-ambiental

La expansión capitalista en diferentes actividades extractivas e industriales con fuerte impacto ambiental fue resistida por la conformación de nuevos movimientos sociales. Las distintas resistencias al avance de la minería a cielo abierto y el masivo movimiento emergente en la ciudad de Gualaguaychú contra la instalación de papeleras en Fray Bentos, Uruguay, configuran sus ejemplificaciones emblemáticas.

Diferentes cambios institucionales acaecidos durante los noventa favorecieron la expansión de procesos de explotación minera a cielo abierto por parte de empresas transnacionales. El desarrollo de estos enclaves extractivos ha tenido un fuerte impulso durante la década en estudio, contando con medidas favorables por parte del gobierno nacional en alianza con los gobiernos locales. Dicha expansión implicó un verdadero proceso expropiatorio de los recursos naturales –por las condiciones leoninas a favor de las empresas– y provocó graves costos ambientales –contaminación, uso irracional de otros recursos naturales, desertificación– que alteraron otras actividades económicas, como han sido las agropecuarias y turísticas.

El carácter depredatorio de estos enclaves ha sido enfrentado –en diferentes territorios– por diversas alianzas sociales que lograron éxitos parciales, como la no apertura de minas –en la ciudad de Esquel en el año 2003–, leyes limitativas de la minería –en las provincias de Chubut en 2003, Río Negro en 2005, La Rioja, Tucumán, Mendoza y La Pampa en 2007, Córdoba y San Luis en 2008–, y la conformación de una red de territorios en resistencia –la Unión de Asambleas Ciudadanas– que se articularon asambleariamente y coordinaron acciones de diverso tipo.

La lucha defensiva de estos movimientos y organizaciones no ha logrado detener la expansión capitalista en este campo, aunque sí le ha puesto ciertos límites, obligando a las empresas y gobiernos a nuevas estrategias para resolver estos obstáculos.

Las resistencias contra la minería han tenido mayor éxito en aquellas provincias con mayor heterogeneidad social, económica y cultural. Por el contrario, en aquellas con matrices más jerárquicas, escasa diversificación económica y cultural y altos índices de pobreza –como las del Noroeste del país– la capacidad de resistir el poder de la minería en conjunción con el poder político local ha sido más desfavorable. En estos últimos territorios no se lograron leyes que limiten dichos desarrollos o, cuando se lograron, fueron luego revertidas, como en el caso de La Rioja (Svampa y Antonelli, 2009).

Otro conflicto que instaló la dimensión socioambiental fue el protagonizado por la asamblea ciudadana ambiental de Gualaguaychú. Esta se constituyó hacia 2005, luego de una gran movilización contra la instalación de dos fábricas papeperas en la vecina localidad de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay.

El conflicto logró instalar socialmente a nivel nacional el problema de la contaminación que podían producir dichas plantas, con base en una intensa movilización y recurrencia a la acción directa –entre ellas el corte casi permanente del puente internacional que une Fray Bentos con Gualaguaychú. La demanda ambiental se cruzó con la cuestión nacional y local. Precisamente, el movimiento se desarrolló en el lado de la frontera que no iba a recibir los beneficios de las plantas (trabajo y dinamismo económico) y sí sus costos (contaminación).

El movimiento provocó que el gobierno nacional se posicionara sobre el tema recurriendo a tribunales internacionales y que procurara revertir y/o modificar la instalación y funcionamiento de las plantas. Como resultado del proceso, se logró evitar la instalación de una de las mismas.

La movilización social de carácter regresivo

Los procesos de movilización social de carácter regresivo han sido una de las novedades del período. El retroceso político-institucional de sectores de las clases dominantes –en particular su desplazamiento parcial del gobierno nacional a partir de 2003– condujo a la emergencia de procesos sociopolíticos basados en la movilización de masas en defensa de sus intereses. La pérdida de poder institucional fue contrarrestada en diferentes momentos con la activación y apelación a acciones que excedían los canales institucionales. En particular por su relevancia, masividad e impacto político, deben ser destacados dos procesos que tienden a la reestructuración regresiva del poder social¹¹.

El primero lo encontramos en 2004, en pleno ascenso del gobierno de Néstor Kirchner, con el movimiento liderado por Juan Carlos Blumberg en pos de un endurecimiento de las normas penales como forma de lucha contra la “inseguridad ciudadana”¹². Padre de una víctima de un secuestro que culmina en asesinato, Blumberg, con la ayuda de diversos medios de comunicación y del poder político y económico, logra convertirse socialmente en la personificación del ciudadano-víctima de la delincuencia. Consigue movilizar a un importante conjunto de la población –en particular de los estratos sociales más acomodados– a través de marchas y peticiones. En los hechos, protagoniza la principal acción de masas durante el gobierno de Kirchner; su primera movilización en la ciudad de Buenos Aires es acompañada por alrededor de 150 mil personas. El movimiento logra promover la sanción de leyes que implicaron un significativo endurecimiento del sistema penal. Por un lado, se agravaron las penas de ciertos delitos penales y, por el otro, se dificultaron las condiciones para la obtención del beneficio de la libertad condicional. La mayoría de los proyectos de ley definitivamente sancionados fueron presentados con anterioridad al inicio de las movilizaciones. La génesis de estos proyectos forma parte de una agenda previa sobre la temática de la seguridad realizada por sectores mediáticos y políticos, que encuentra en el movimiento encabezado por Blumberg la fuerza

social para su avance (Calzado y Van Den Dooren, 2009)¹³. Si bien el proceso tiene una dimensión política, nunca logra trascender la temática puntual de la “inseguridad”, ni logra antagonizar con un gobierno nacional en ascenso que se comporta de forma ambigua frente al mismo.

“La lucha contra las retenciones involucró y alineó al conjunto de la población, conformando una dualidad de poder que paralizó al país y desabasteció a los principales centros urbanos”

El segundo proceso es mucho más relevante tanto por su masividad como por sus implicancias políticas. Nos referimos al denominado “conflicto del campo”. Dicho conflicto logra politizar, movilizar y polarizar a la sociedad como ningún otro en la década¹⁴. En marzo de 2008, meses después de haber asumido, la presidenta Cristina Fernández decide elevar la alícuota de retenciones a la exportación de diversos granos, en especial a la soja, y vincular su variación a la del precio internacional de los productos. La medida se da en un contexto de elevada rentabilidad de su venta al exterior. Más aun, dicha medida altera la rentabilidad futura pero sin disminuir la rentabilidad con respecto al año previo. Sin embargo, y para sorpresa del gobierno, que toma la medida sin imaginar sus consecuencias políticas, las principales entidades corporativas de los propietarios y patrones del agro se unifican en reclamo de la derogación de la medida. La Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria deciden no comercializar granos ni carne estableciendo verdaderos controles de las rutas –“cortes”– para garantizar la efectivización de la medida¹⁵. Se inicia así un intenso conflicto en el cual los propietarios agrícolas, a semejanza de diversos movimientos sociales de los sectores populares, van a centrar su movilización en la acción directa –cortes y escraches, por ejemplo– y en la práctica asamblearia. El conflicto unificará a los distintos estratos de la propiedad rural tras un proyecto hegemonizado por sus sectores más concentrados¹⁶. Si bien se trata de población perteneciente a los deciles superiores del país en lo referente a la magnitud de los ingresos percibidos, existen entre los integrantes de esta fuerza significativas diferencias por las magnitudes de sus propiedades y función productiva, así como por sus historias sociales y políticas. Los pequeños productores primarán en la composición social movilizada a la vera de las rutas, aunque nunca lograrán hegemonizar el conflicto ni escindir su propio interés del de los sectores más concentrados. El gobierno, pese a sus tardíos intentos, en ningún momento podrá quebrar la unidad alcanzada por esta alianza social.

El conflicto es promovido desde el primer día por los principales oligopolios mediáticos y va a lograr condensar el malestar social acumulado, principalmente, por las medidas reformistas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Todos aquellos sectores de las clases dominantes y sus personificaciones políticas y corporativas que sintieron afectados sus intereses –más políticos que económicos– aprovecharán la oportunidad para atacar y debilitar al gobierno. Tendrán su base de apoyo en la cultura de la propiedad privada –contra la confiscación del Estado– y en la conciencia antiperonista de las capas medias –sector histórico del antiperonismo–

y contarán con la complicidad de algunos destacamentos de izquierda que apostaban al debilitamiento del gobierno como paso previo a un proceso de radicalización política. También se apoyarán en el prematuro desgaste de un gobierno que no lograba frenar una creciente inflación que minaba la recuperación salarial lograda en los años previos por los trabajadores y se exponía constantemente al ridículo público al falsear el índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), minando así la credibilidad de su palabra. El conflicto del “campo” se fue convirtiendo en una disputa por la direccionalidad política del país. La lucha contra las retenciones involucró y alineó al conjunto de la población, conformando una dualidad de poder que paralizó al país y desabasteció a los principales centros urbanos. El conflicto expresó el más intenso proceso de movilización posterior a 2001. Cada fuerza cortó transversalmente la pirámide social con diferentes composiciones. Mientras las movilizaciones del “campo” tuvieron una composición social en la cual tuvieron un fuerte peso, además de los sectores vinculados a los propietarios rurales, los estratos altos y medios altos de los centros urbanos, el gobierno basó su movilización en los trabajadores organizados gremialmente y en los pobres urbanos, junto a grupos de intelectuales progresistas¹⁷. Pero la magnitud de la fuerza de masas fue diferente. Pese a la masividad de sus movilizaciones, la fuerza liderada por el gobierno no logra contar con una adhesión espontánea de las masas; el entramado organizativo del Partido Justicialista, sindicatos y movimientos sociales afines pierde en las calles y en las rutas frente a la fuerza del “campo”. La falta histórica de una propia política organizativa de masas y la carencia de coherencia política en su determinación reformista le restan claridad y consistencia en los sectores populares. La derrota en las calles precede y se articula con la derrota institucional: la medida no logra contar con la adhesión del Congreso Nacional, votando el propio vicepresidente en su contra. Se inicia así un nuevo período de crisis política, con un gobierno debilitado por las fuerzas políticas y sociales regresivas. Un año después, el gobierno ve disminuido marcadamente su caudal electoral en las elecciones legislativas, perdiendo la mayoría parlamentaria. No obstante, la pérdida de la “batalla del campo” no puede ser confundida con una derrota estratégica de la fuerza que ocupa el gobierno del Estado. Al contrario, el gobierno lanzará con posterioridad varias de sus medidas más progresivas, entre ellas la estatización de la jubilación privada, una nueva ley de medios de comunicación de carácter antimonopólico y la asignación universal por hijo.

La década en disputa

El período que hemos descripto en este trabajo plantea evoluciones novedosas en las luchas sociales de los sectores populares. Dichas evoluciones expresan, pero también configuran, las transformaciones sociales y políticas ocurridas en la Argentina reciente.

La década se inicia con la crisis del modelo de acumulación resultante de la reestructuración regresiva de la sociedad argentina. El agotamiento de dicho modelo se expresó en una profunda crisis social. La protesta y disconformidad social generalizada no fue ajena al establecimiento de límites políticos a dicho modelo. La caída del gobierno de De la Rúa, enmarcada en las jornadas de intensa movilización y autonomización de diciembre de 2001, es clara expresión de ello¹⁸. La crisis

política, observada desde el espacio público de las calles, rutas y plazas representó un intenso proceso de movilización, politización y autonomización que expresó el malestar de heterogéneos sectores sociales. A pesar de diversos intentos, dicha movilización no logró ser articulada en una direccionalidad estratégica por sus propios protagonistas. La salida a la crisis capitalista asumió un carácter capitalista. La salida a la crisis política fue liderada por sectores de la “clase política”. Sin embargo, dichas afirmaciones no pueden dejarnos de señalar la emergencia de puntos de inflexión. Se constituye, y lentamente se consolida, una nueva alianza social en el gobierno del Estado que establece significativos puntos de ruptura en el campo económico, político y social con el período anterior. Esta alianza reconstituye el orden político y social prestando particular atención al clima de movilización y de malestar previo. En los hechos va a retomar selectivamente parte de su agenda y tener en cuenta en su accionar el horizonte de potencial “estallido” que obstaculizaba ciertas posibilidades de acción e impulsaba otras. Estos cambios, aun sin lograr revertir los niveles de desigualdad consolidados en el período previo, lograron mejorar las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores sociales. Sin permitir hablar de la existencia de una Argentina “posneoliberal”, plantearon algunas reversiones y transformaciones de los cambios regresivos de épocas previas. Sin que se “fueran todos”, también produjeron el desplazamiento de parte de las personificaciones políticas e institucionales más regresivas del período anterior. El carácter parcial de los cambios nos plantea diversos interrogantes. ¿Expresa el gatopardismo de un gobierno que obtura la posibilidad de una transformación más profunda? ¿Representa su falta de voluntad de transformación? ¿Es simplemente la resultante de su carencia de la suficiente fuerza social para llevarlos a cabo? ¿Es resultante de la dinámica de confrontación que en parte trasciende la voluntad previa de sus protagonistas? Si esto último es así, ¿en qué direccionalidad opera en cada momento? Futuras investigaciones del período podrán desentrañar con mayor rigor el peso relativo en la realidad de las tesis presentes en los interrogantes planteados.

Este nuevo contexto político y social, como hemos mostrado, produjo cambios significativos en las luchas sociales y en los movimientos y organizaciones que personificaban a las clases populares. Al desarrollo de las tensiones que hemos planteado en la direccionalidad del gobierno, se producen realineamientos al interior del movimiento popular; algunos establecen alianzas y treguas de diferentes características con el mismo. En el otro extremo, otros continúan como si nada hubiera pasado. Así también cambia el carácter de clase de las confrontaciones sociales analizadas. De las luchas por detener los procesos expropiatorios ejecutados en la perspectiva de diferentes identidades sociales dominantes en los primeros años, se pasa a una etapa en que asume nuevo impulso la lucha por la mejora en las condiciones de explotación en la perspectiva de la fuerza de trabajo. En paralelo a la recomposición política y a la asunción del gobierno de parte de la agenda democrática, se produce un proceso de institucionalización y corporativización de la lucha social. No obstante, con nuevas características, la lucha social y sus emergentes organizativos siguen teniendo una rica e importante diversidad. Entre ellos podemos señalar los movimientos contra la impunidad del pasado o del presente o la sociogénesis de movimientos que cuestionan –con diferente intensidad– el impacto ambiental del carácter productivista de la renovada expansión capitalista.

Por último, un fenómeno novedoso es el desarrollo de procesos de movilización social regresivos. La autonomización parcial del gobierno con respecto a sectores de la clase dominante configura una situación original. Sectores sociales que sienten haber perdido poder institucional apelan a la vía extra institucional y a dinámicas características de movimientos sociales procurando la acumulación de fuerzas para la realización de sus intereses corporativos y políticos. La emergencia y consolidación de estos sectores, la posibilidad del desplazamiento de la fuerza en el gobierno y la posible reversión de algunos de los cambios progresivos alcanzados actualizan la pregunta sobre la relación entre los movimientos sociales y el gobierno, entre lo social y lo político, entre la autonomía y la disputa de la direccionalidad política, entre la lucha democrática y la anticapitalista. Tensionada entre la necesidad de preservar la autonomía necesaria para la defensa de sus intereses de clase y la necesidad de intervenir en las confrontaciones políticas centrales del período –dado que no les son ajenas en sus resultantes–, se debate para los sectores populares la posibilidad de construir una estrategia que viabilice la profundización de la lucha democrática, paso necesario para cualquier estrategia de transformación radical del orden social. Debates y tensiones por cierto no ajenos, con sus particularidades e intensidades, a otros territorios de nuestra América Latina.

Bibliografía

- Aronskind, Ricardo 2008 "Interés general o renta particular" en *Página 12* (Buenos Aires) Suplemento del vigésimoprimer aniversario, 26 de mayo.
- Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicolás 2009 "Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles" en Arceo, Enrique; Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicolás *La crisis mundial y el conflicto del agro* (Buenos Aires: CCC/Página 12/UnQui).
- Calzado, Mercedes y Van Den Dooren, Sebastián 2009 "¿Leyes Blumberg? Reclamos de seguridad y reformas penales" en *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*. (Buenos Aires: IIGG/Ediciones de la Universidad Nacional del Litoral) N° 27. En prensa.
- Cotarelo, María Celia 2005 *Aproximación al análisis de los sujetos emergentes en la crisis de 2001-2002 en Argentina* (Buenos Aires: PIMSA) Serie "Documentos y comunicaciones".
- Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth 2007 "Golpeados pero de pie: resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina. 2003-2007" en *Politics & Society* (Thousand Oaks: Sage Publications) Vol. 35, N° 3.
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel 2007 "La rebelión de 2001: protestas, rupturas y recomposiciones" en Giarracca, Norma (comp.) *Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos". Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia/GEMSAL).
- Gómez, Marcelo 2009 "La acción colectiva sindical y la recomposición de la respuesta política estatal en la Argentina. 2003-2007" en Neffa, Julio; De la Garza, Enrique y Muñiz Terra, Leticia (comps.) *El mundo del trabajo en América Latina. Permanencia, Diversidad y Cambios*. (Buenos Aires: CLACSO/CEIL-PIETTE) Vol. II.

- Maneiro, María 2009 “La doble vía de la experiencia en los movimientos de trabajadores desocupados” en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.) *Resistencias Laborales: Experiencias de re-politización del trabajo en Argentina* (Buenos Aires: Aleph/Insumisos).
- Massetti, Ástor 2009 *La década piquetera (1995-2005). Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos*. (Buenos Aires: Nueva Trilce).
- Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán y Schuster, Federico 2008 *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. (Buenos Aires: Ediciones al Margen).
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTSS) 2007 *Estadísticas de conflictos laborales*.
- Rebón, Julián 2007 *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción*. (Buenos Aires: Colectivo Ediciones/Ediciones PICASO).
- Rebón, Julián 2009 “Acción directa y procesos emancipatorios” en *Proyecto. Conceptos Fundamentales de Nuestro Tiempo*. (México: IIS-UNAM) inédito.
- Rebón, Julián y Salgado, Rodrigo 2009 “Empresas recuperadas y procesos emancipatorios” en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.) *Resistencias Laborales: Experiencias de re-politización del trabajo en Argentina* (Buenos Aires: Aleph/Insumisos).
- Schuster, Federico et al. 2006 *Transformaciones de la protesta social en Argentina. 1989-2003*. (Buenos Aires: IIGG-UBA).
- Svampa, Maristella 2005 *La sociedad excluyente* (Buenos Aires: Taurus).
- Svampa, Maristella 2008 “Argentina: Una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IX, N° 24, octubre.
- Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta 2009 *Minería Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros*. (Buenos Aires: Biblos).
- Teubal, Miguel 2008 “La culpa es de la soja” en *Página 12* (Buenos Aires) Suplemento del vigésimoprimer aniversario, 26 de mayo.

Notas

1 Los límites de los períodos se han delimitado en años por restricciones en las fuentes con las cuales contamos. Si bien podrían hacerse subperiodizaciones en cada etapa, no las consideramos pertinentes para los fines descriptivos de las principales tendencias que posee este trabajo.

2 Nos referimos a los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y, posteriormente, al de Cristina Fernández –quién asume en 2007–, pertenecientes al Frente para la Victoria –fuerza de centro izquierda con eje en el Partido Justicialista. El cambio de la política de gobierno planteará un conjunto de confrontaciones progresivas. Dichas confrontaciones, ejercidas con particular intensidad en los momentos de mayor debilidad política de la fuerza en el gobierno, recrearán

el espacio de la política configurando nuevos márgenes de autonomía frente a los sectores más concentrados de la clase dominante y de los centros de poder internacional, promoviendo con relación a la década previa una mayor integración parcial de intereses de las clases subalternas a la política de gobierno. De este modo, se desarrolla una renovación parcial de ciertas instituciones –la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las Fuerzas Armadas, por ejemplo–, un avance sobre algunos asuntos pendientes de la agenda democrática –la promoción de los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar y la ley de servicios audiovisuales– y una política internacional que fortaleció la autonomización regional. También se desarrolla una

política económica más heterodoxa, que incluyó una mayor intervención del Estado sobre la economía, junto a una política laboral y social que, en articulación con la política económica, promovieron una recuperación del salario, el descenso de la pobreza y la desocupación, y la ampliación de la cobertura de los sistemas de protección social y previsional. La agenda reformista tuvo distintos avances y retrocesos a lo largo de ambos gobiernos y no estuvo exenta de medidas contradictorias o de estar prácticamente ausente en diversas áreas fundamentales. Por otra parte, no logró modificar significativamente los niveles de desigualdad social, ni el desmantelamiento del Estado desarrollado en las décadas previas. Menos aun logró transformar progresivamente a los actores e instituciones políticas; en este campo, pese a la existencia de distintos momentos de apertura, existió un marcado continuismo.

3 Precisamente una de las improntas que deja culturalmente la etapa precedente, en la caja de herramientas de la lucha de diversas identidades sociales, es la difusión de formatos directos de confrontación. Este cambio cultural será uno de los nutrientes de una significativa propensión a la acción directa que marca a toda la década.

4 Una porción sustantiva de la agenda histórica de los organismos de derechos humanos será convertida en la política del gobierno. Esto producirá, por una parte, un apoyo de la mayoría de dichos organismos; por la otra, distintas respuestas de los sectores enjuiciados por la nueva política, entre ellas la desaparición de Jorge Julio López, testigo de una de las causas realizadas contra los acusados por el genocidio producido durante la última dictadura militar.

5 Cabe destacar que el carácter corporativo de las principales estructuras sindicales en la Argentina las incapacitó para organizar a los trabajadores expropiados de su inserción laboral. Así, los movimientos de trabajadores desocupados y de fábricas recuperadas crecerán por fuera de las estructuras sindicales dominantes y en muchas ocasiones sin relación alguna con las centrales o corrientes sindicales.

6 La lucha contra la precarización laboral por parte los trabajadores y los cambios en la política laboral, en un contexto de crecimiento industrial, lograron—contrastando con las tendencias de la etapa previa—comenzar a disminuir el trabajo no registrado.

7 La fragmentación política y social de los sectores populares es una característica central de la Argentina reciente que se expresará de modo particularmente intenso en los movimientos y organizaciones desarrolladas en el campo de los trabajadores expropiados de su inserción salarial. Tanto entre los desocupados como entre los trabajadores de fábricas recuperadas cada destacamento político tenderá a la construcción de un movimiento propio retroalimentando inercialmente la fragmentación preexistente.

8 Cabe destacar que este éxito en la representación en la lucha social nunca logra validarse políti-

camente en elecciones; por el contrario, los intentos electorales que realizan algunas organizaciones—afines u opositoras al gobierno—fracasaron estrepitosamente.

9 Los resultados de la apertura del gobierno hacia los movimientos fueron conceptualizados por distintos analistas como “institucionalización”, “cooptación” y “estatalización” del movimiento piquetero. Desde nuestra perspectiva, si bien la disminución de la recurrencia a la acción directa y la apertura de diversos canales a las instancias de gobierno podrían ser conceptualizados como institucionalización, no debe olvidarse el carácter parcial de dicho proceso, dado que no se constituyó ningún diseño institucional específico que reconozca formalmente a las organizaciones otorgándoles derechos y obligaciones. Menos precisos nos parecen los señalamientos de cooptación y estatalización. Difícil es hablar de cooptación—al menos de forma generalizada—cuando muchos de los grupos que se incorporan al gobierno guardan márgenes de autonomía importantes que los llevan en ocasiones a dimitir de los puestos de gobiernos por diferencias con la política oficial. Por otra parte, esta mirada despectiva soslaya las afinidades electivas que existen entre las tradiciones políticas del gobierno y la mayoría de dichas organizaciones, así como la existencia de coincidencias programáticas. Más desafortunada aun es la categorización de estatalización, dado que a algunos de los considerandos anteriores se le suma el error de no distinguir entre gobierno y Estado, distinción central para entender el período.

10 La consigna de esta tercera tendencia será: “Ni con las patronales del campo ni con el gobierno K”.

11 Entendemos que un proceso tiene un carácter social regresivo cuando procura ampliar o conservar privilegios sociales de determinados grupos en detrimento de sectores menos aventajados (Rebón, 2009).

12 Durante la década, la temática vinculada a la denominada inseguridad urbana dio lugar a formas de lucha con disímiles caracteres sociales. Se desarrollaron diferentes acciones, desde las movilizaciones de vecinos reclamando justicia hasta los violentos ataques a casas de presuntos victimarios en barrios populares. En el campo de los trabajadores organizados, en especial del transporte, se realizaron huelgas, cortes y movilizaciones para protestar frente a robos, asesinatos y vejaciones de diverso tipo. Sin embargo, el proceso personificado por Blumberg es el único que logra producir impacto nacional durante un período significativo.

13 Unos años más tarde Blumberg dejó de ser un referente masivo luego de haber sido denunciado por usurpar el título de ingeniero y de fracasar estrepitosamente en su presentación como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

14 Precisamente el otro gran momento de politización y movilización de la población se da a fines de 2001 y principios de 2002, al compás del momento

más intenso de la crisis. No obstante, a diferencia de este conflicto, no se produce una polarización y una embrionaria dualidad de poder. Al contrario, los procesos de autonomización y protesta que canalizan en aquel entonces el malestar social nunca logran coordinarse en una direccionalidad estratégica. Pese a la voluntad de muchos destacamentos, la autonomización no logra polarizar el ordenamiento social configurando la posibilidad de la dualidad de poder.

15 Estas entidades conforman una "Mesa de Enlace" que se atribuirá la representación del "campo". No obstante, otros actores de la vida rural aprovecharán la oportunidad para expresar públicamente sus contradicciones con los intereses allí representados. En particular, nos referimos a los campesinos y pueblos originarios vinculados a la producción familiar, que durante toda la década resistieron la expansión capitalista en las áreas rurales y los procesos expropiatorios que la misma implicó.

16 Estratégicamente, estos sectores procuraban incrementar sus beneficios definiendo un patrón de acumulación que subordinase a los asalariados y a la

industria a los propósitos de su expansión (Basualdo y Arceo, 2009).

17 Cada fuerza, al cortar transversalmente la estructura social, contará con apoyos en los sectores en que menos peso relativo tiene. Por ejemplo, el conflicto produce una escisión en la Confederación General del Trabajo (CGT), que apoyará al campo. También algunos movimientos piqueteros, buscando la "rebelión de los chacareros" y "la reforma agraria", se sumarán a la fuerza social regresiva. Por el contrario, el gobierno encontrará más dificultades en alinear a los sectores capitalistas beneficiados con su política económica; la rentabilidad extraordinaria obtenida durante el período precedente no será motivo suficiente para apoyar sin ambigüedades a un gobierno que viven como políticamente ajeno y que tiene más margen de autonomía de los lobbies empresariales de la que estos están dispuestos a aceptar.

18 No obstante, esto no debe dejar de soslayar la participación decisiva que han tenido diferentes personificaciones políticas de las clases dominantes en la caída de dicho gobierno (Rebón, 2007).

Debates

Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras

Kristina Pirker y Omar Núñez

Desastre natural y acción colectiva de los sectores populares en Chile: los saqueos en Concepción tras el 27/F

Martín Sanzana Calvet

Atrapado entre sociedad civil y sociedad política. El movimiento social haitiano en 2010

Sabine Manigat

Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras

KRISTINA PIRKER

Investigadora de Fundar - Centro de Análisis e Investigación y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

OMAR NÚÑEZ

Profesor e investigador de la UACM y del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

Resumen

Los autores hacen un balance del gobierno fracasado de José Manuel Zelaya Rosales, en Honduras, para lo cual analizan su estrategia y la correlación de fuerzas que hubo interactuado para terminar en el golpe de Estado de junio de 2009. Asimismo, plantean que hay esbozos de un impulso social democratizador que apunta a combatir la corrupción institucional, la inequidad social y la violencia cotidiana mediante la participación de una ciudadanía incipiente.

Abstract

The writers take stock of José Manuel Zelaya Rosales' failed administration in Honduras by assessing his strategy and the interaction of forces that ended in a coup d'état in June 2009. In addition, they note the presence of a nascent democratic and social impulse to fight institutional corruption, social inequality and daily violence, as evidenced by the early stages of citizen participation.

Palabras clave

Golpe de Estado, Honduras, democracia, participación ciudadana, movimientos sociales

Keywords

Coup d'état, Honduras, democracy, citizen participation, social movements

Cómo citar este artículo

Pirker, Kristina y Nuñez, Omar 2010 "Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Si hubo un sentimiento compartido que provocó el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue el de sorpresa. Con la finalización de las guerras civiles en Centroamé-

rica, los estudios sobre las fuerzas armadas, el pretorianismo y el militarismo dejaron de ser temas de interés central tanto en los medios de comunicación como en círculos académicos en esta región. El regreso de los ejércitos a los cuarteles, una importante reducción de efectivos y de presupuesto militar y la ausencia de asonadas militares (incluido el fracasado autogolpe de Jorge Serrano Elías en Guatemala en 1993) en América Central –y en Honduras en particular– constituyeron algunos indicadores con los cuales se sustentaron discursos y enfoques que hablan sobre la consolidación de los procesos de democratización y de la subordinación militar gracias a la expansión de controles civiles. En parte, el predominio de estas posturas explica que los acontecimientos de fines de junio de 2009 en Honduras hayan resultado sorprendidos para diferentes actores y que las lecturas que han hecho de estos eventos giren en torno a hipótesis convencionales que sirven de poco a la hora de comprender las motivaciones, los procesos enmarcadores y la dinámica social y política que posibilitaron la reemergencia del golpismo en Honduras.

El desconocimiento sobre la naturaleza y la dinámica que condujeron al golpe de Estado se expresa en que los procesos inmediatos que llevaron a la destitución forzada de José Manuel Zelaya Rosales, así como los actores e instituciones involucrados, rápidamente fueron reconstruidos y difundidos bajo la óptica de lo político-coyuntural. En cambio, es notable el vacío respecto a explicaciones más profundas e históricas que permitirían ligar la coyuntura del 28 de junio con los procesos políticos y socioculturales de las últimas dos décadas y que llevaron al agotamiento de las reglas establecidas del juego político que datan desde 1982, lo que se expresó tanto en la búsqueda de nuevos aliados por parte de Manuel Zelaya, internamente como en el extranjero, como en la respuesta extra-institucional llevada a cabo por la alianza golpista.

La insatisfacción con las explicaciones coyunturalistas del golpe y el reconocimiento del propio desconcierto con lo sucedido fueron las primeras motivaciones para formular las hipótesis que se presentan a continuación. Su propósito es, por una parte, mostrar las insuficiencias de las explicaciones centradas exclusivamente en las dinámicas de las instituciones formales de la democracia representativa para entender la reciente crisis política y, por otra, contribuir al debate sobre los alcances y limitaciones de los procesos de democratización en Centroamérica.

Hipótesis 1: La coyuntura que se abrió en junio de 2009 en Honduras es un parteaguas para las sociedades, los enfoques analíticos y los sistemas políticos en América Latina.

Si algunas cosas quedaron aun más erosionadas con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, una de ellas ha sido el consenso transitológico que ha dominado a la política y a la academia latinoamericana desde los años ochenta del siglo pasado. Entendido como una estrategia que posibilitaría transitar desde las dictaduras militares hacia gobiernos civiles, su carácter negociado, el hecho de que dependiera de la correlación de fuerzas de los actores partícipes y el de que la noción de democracia manejada tuviera –en la práctica– un carácter instrumental más que sustantivo significaron que los rasgos que moldean al autoritarismo en Amé-

rica Latina quedaran mayormente intocados en sectores clave de las sociedades latinoamericanas.

Resultado del malestar por las recurrentes crisis sociales y económicas, la emergencia de gobiernos con un abierto cuestionamiento al orden neoliberal ha ido de la mano con un incremento en las tensiones políticas e ideológicas entre los actores sociales en pugna (situación, por lo demás, que no se observaba con tanta intensidad desde el fin de la Guerra Fría). En este sentido, el golpe de Estado en Honduras parece anunciar una nueva era en la política latinoamericana, en donde la reemergencia de discursos, tópicos e imaginarios propios del anticomunismo de ayer –como los observados en los sectores golpistas de este país– ha terminado por cuestionar aquellas alocuciones que afirmaban el fin de las luchas ideológicas y la consolidación de la democracia política como espacio de resolución de los conflictos sociales.

La temprana defensa que formulaba Norbert Lechner para que las instituciones, el Estado democrático de derecho y el respeto a las reglas del juego político actúen como mecanismos para la resolución de conflictos en el campo político, expresaba la creencia de que con la transformación institucional se abría un camino para la democratización de las prácticas políticas en América Latina. Nutrido de enfoques analíticos como el institucional y el *rational choice* –y en sintonía con aquellas posturas que creen en la fuerza de las instituciones multilaterales y del derecho internacional en un mundo global– esta perspectiva dominante en la política y en las ciencias sociales ha terminado por constituir un lente oscuro que otorga, por un lado, excesiva racionalidad a los actores y, por el otro, tiende a minimizar la siempre latente conflictividad política e historicidad de los fenómenos sociales. Un ejemplo de estos análisis se encuentra en un artículo de Joseph L. Klesner sobre las dinámicas electorales en el 2006 –año en el cual también Manuel Zelaya asumió el gobierno– quien señaló que “[donde] los sistemas de partidos son relativamente estables, incluso el cambio del liderazgo presidencial rara vez puede alterar drásticamente la dirección política actual y las políticas de desarrollo. [...] El sistema bipartidista de Honduras, el más estable en la región, contrasta escasamente en cuanto a políticas entre los partidos y los candidatos de izquierda reciben muy pocos votos. [...] Por lo tanto, es probable que la política hondureña sufra pocos cambios con la presidencia de Zelaya” (Klesner, 2006).

Por su parte, David Pion-Berlin dejaba traslucir –a un año del golpe en Honduras– sus certezas sobre la fortaleza de las instituciones en la región, como su creencia en que la realidad política impone un comportamiento racional a los actores: “[en] el futuro cercano no creo que se produzcan amenazas militares serias a la democracia y el control civil de las Fuerzas Armadas en América Latina. Los costos de una intervención militar son muy altos y los beneficios demasiado escasos” (Pion-Berlin 2008).

La incapacidad para leer las tensiones sociales contribuyó a que estos enfoques de tipo institucional se vieran sorprendidos por la dinámica de los acontecimientos en Honduras, pero además evidencian los límites para analizar los procesos políticos, dada la racionalidad que atribuyen a los actores políticos insertos en el sistema político formal, en contraposición a los actores sociales que se encuentran al margen o fuera de este último (considerados como expresiones de “nostalgias

populistas, clientelistas, corporativistas o partidistas y, en casos de extrema descomposición, caudillismos neopopulistas”) (Garretón, 2002: 21). Dichos enfoques tienen el inconveniente de no lograr captar los dispositivos históricos, sociales y culturales, así como los marcos contextuales que moldean y posibilitan la reemergencia del autoritarismo y que llevan a los actores políticos y sociales a cuestionar “las reglas del juego democrático” cuando las circunstancias lo exigen.

La propia naturaleza de las modalidades de transición contribuyó a estos desfases entre teoría y fenómenos sociopolíticos. La correlación de fuerzas establecida en los momentos de la transición democrática significó que los sistemas políticos estuviesen moldeados –entre muchos otros factores– por el deseo de las fuerzas armadas de preservar su autonomía y otorgar impunidad o evitar juicios por la violación a los derechos humanos, o por el interés de los poderes fácticos –particularmente empresariales– en limitar el peso político y la capacidad de presión de los movimientos sociales (el obrero en particular), partidos de izquierdas o de grupos populares organizados. Pese a sus distintas trayectorias, los casos de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Honduras o Uruguay (pero también procesos menos convencionales como los de México, Venezuela, República Dominicana o Colombia) atestiguan la existencia de un impulso democratizador atemperado –minimalista– que cuestiona el real alcance de las prácticas políticas democráticas. Lo anterior se tradujo en que la democracia haya terminado por reducirse a una dimensión de carácter procedimental, donde el aislamiento de toda movilización y presión social por parte de las instituciones representativas y de gobierno constituye –paradójicamente– una necesidad para que la misma democracia “funcione”.

En términos políticos, no cabe duda de que esta dinámica regional empezó a cambiar a partir de la formulación del proyecto chavista del “Socialismo del Siglo XXI”, el cual empezó a tensar los límites de las democracias procedimentales al ofrecer una propuesta continental a movimientos populares y dirigentes políticos que buscaban referentes y orientaciones fuera del modelo neoliberal, por un lado, y activar una serie de temores, imaginarios y discursos propios de la Guerra Fría en diversos sectores de los empresarios, iglesias, fuerzas armadas o clases medias, por el otro. Sin embargo, esta explicación exógena –y con marcados tintes conspiracionales– tiene el límite de no percibir las dinámicas que se desarrollan y tejen dentro de las sociedades nacionales y que explican la naturaleza y particularidad de los conflictos existentes y su trayectoria. Por lo tanto, para entender lo que está sucediendo en la actualidad en América Latina resulta central reconstruir cómo esta nueva dinámica regional se articula con lógicas de acción política y dinámicas de conflictos nacionales.

En este sentido, la suerte de la administración de Manuel Zelaya en Honduras evidencia los límites de los gobiernos reformistas aparecidos en la última década y que pretenden impulsar una agenda de cambios (que incluye la revalorización del papel social y económico del Estado) pero que deben convivir con la presión de los viejos y nuevos bloques de poder existente (oligarquías, nuevo empresariado, fuerzas armadas y medios de comunicación). Justamente, la violenta reacción iniciada en el 2002 en Venezuela por algunos de estos sectores, como las acciones desestabilizadoras encabezadas por la oposición provincial en contra del presi-

dente de Bolivia, Evo Morales, o los intentos por articular un bloque de derecha que se opone a la agenda de los gobiernos de los Kirchner en Argentina dan cuenta de un nuevo ciclo de radicalización política e ideológica que parece estar centrada entre una oposición de derecha empresarial y un heterogéneo movimiento de base popular (Durand, 2006).

En el caso estudiado, el hecho que existieran motivaciones ideológicas (miedo al “castro-chavismo” o al “chavismo-comunismo”) y un contexto de intereses en pugna entre los poderes de Estado posibilitó que los sectores golpistas legitimaran un acto de fuerza, negaran las propias normativas constitucionales, incumplieran las reglas internacionales y desdeñaran las condenas de organismos multilaterales como aconteció con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas. Sin embargo, la prensa y los artículos de coyuntura sobre Honduras no han abordado un elemento básico que ayuda a explicar esta polarización: la transición de Manuel Zelaya de ser un candidato y presidente de “centro-derecha” a un gobernante que se autodenominaba de “centro-izquierda”, cercano a Evo Morales, Hugo Chávez y Daniel Ortega¹. La reconstrucción de la trayectoria de su gobierno permite formular una segunda hipótesis.

Hipótesis 2: El cambio de orientación política del gobierno de Manuel Zelaya fue resultado de lo que podríamos denominar una “toma de consciencia” sobre la situación real en la cual se encontraba el Estado hondureño, que a ojos de su administración hacía casi imposible el gobernar.

La frase alemana “Wir haben keine Chance, also nützen wir sie” (“No tenemos ninguna chance, entonces, aprovechémoslo”) hace referencia a una situación que no ofrece salidas, por lo cual los agentes sociales se ven obligados a *crear* nuevas opciones de acción. En cierto sentido, la frase podría describir las motivaciones que llevaron a José Manuel Zelaya Rosales y su equipo a reorientar estratégicamente sus alianzas, su programa de gobierno y tomar la consigna de la Asamblea Constituyente como sinónimo de transformación de las reglas del juego político. Esta reorientación se vio condicionada, por una parte, por la pérdida de legitimidad que habían sufrido las instituciones estatales, las diferentes ramas de gobierno y el sistema de partidos en los últimos años y, por la otra, por la emergencia de movimientos de protesta que expresaron en el espacio público el difuso malestar ciudadano. Ambos procesos modificaron la *estructura de oportunidades políticas* que caracterizaba al sistema político de Honduras desde la década del ochenta, entendida como el conjunto de relaciones que articulan las instituciones estatales, las ramas de gobierno y el sistema de partidos y el grado de autonomía del aparato estatal respecto de las presiones emergentes de la sociedad civil. Dicho de forma más precisa, este concepto da cuenta de las condiciones de posibilidad (ideológicas, materiales, políticas y simbólicas) que permiten o impiden la acción política a un actor en un contexto determinado.

El enfoque de las oportunidades políticas se ha centrado, por lo general, en estudiar el significado de dichas estructuras para las demandas y dinámicas de los movimientos sociales. Sin embargo, referirnos a esta noción para explicar el com-

portamiento de Manuel Zelaya y su grupo de asesores permite destacar que las acciones de un gobierno también están condicionadas por los límites que imponen las relaciones de fuerza al interior del Estado y de sus instituciones. En este sentido, este concepto constituye una herramienta que posibilita adentrarnos en los factores y en las razones que llevaron al ex mandatario liberal a buscar respuestas prácticas a los desafíos que presentó la profunda crisis del Estado hondureño dentro de un contexto internacional, el cual –por primera vez en tres décadas– permitió visualizar nuevas alternativas políticas para la gestión gubernamental.

Punto de inicio para comprender la evolución política e ideológica del gobierno de Manuel Zelaya lo constituye el hecho de que este y su equipo manejaban un diagnóstico crítico sobre la realidad política, económica e institucional del país desde antes de su asunción –donde la corrupción era visualizada como el principal flagelo que impedía el desarrollo del país. Estando ya en el gobierno, la percepción que se tuvo sobre la crisis integral del Estado hondureño, de las instituciones y de la economía nacional volvió imperativo impulsar una profunda reorganización del aparato público, de las instituciones y del sistema político, medidas no contempladas en el programa original de gobierno. En este sentido, la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que fungiera como un acto de refundación de las bases institucionales y que posibilitara negociar nuevas reglas del juego político constituyó la opción manejada por el ex mandatario y su círculo de asesores para dar solución al crítico estado de las cosas. Dicha lectura tiene asidero en el desborde de la violencia social, criminal y política en el cual se encontraba sumido este país, resultado de la profunda crisis socio-económica, de la descomposición de las instituciones de Estado y de la amplia deslegitimación del sistema político y sus actores –en particular por sus prácticas patrimonialistas y clientelistas, a lo que se suma la propia necesidad política de revertir el escaso apoyo social que las encuestas previas al golpe arrojaban al gobierno.

Un primer componente para comprender la crisis de legitimidad estatal tiene que ver con las secuelas a mediano y largo plazo del huracán Mitch, que azotó Centroamérica en 1998. Con una cifra de muertos y desaparecidos cercana a las 18 mil personas, este fenómeno climático que afectó particularmente a Nicaragua y Honduras significó para este último país la pérdida del 30% de la tierra cultivable, la destrucción del 70% de los cultivos, daños en el 80% de la infraestructura de transporte y comunicaciones y la pérdida de sus viviendas para el 20% de la población (aproximadamente 1,4 millones de los 7 millones de habitantes) traduciéndose en una merma económica estimada en 4 mil millones de dólares para una economía que hoy bordea tan solo los 12,2 mil millones en moneda norteamericana². Si a esto se agrega la inflación interna y el encarecimiento de los alimentos en el mercado internacional en los últimos años, y que afectan a economías pequeñas y carentes de recursos estratégicos propios –como ciertamente es la hondureña–, sin duda estos factores constituyen un serio obstáculo para abordar los históricos rezagos así como para satisfacer las demandas de los movimientos sociales activadas por el impacto del Mitch (solo mitigadas por el incremento en el flujo de remesas desde Estados Unidos).

Otro componente se origina en las dificultades fiscales para hacer frente a los rezagos sociales y viabilizar las precarias bases con las cuales se sustenta la

economía hondureña, las cuales se vieron constreñidas al heredar del ex presidente Ricardo Maduro los problemas financieros y estructurales ocasionados o amplificadas por el huracán y que dejaron en evidencia la ineficiencia de las instituciones de Estado para atender situaciones de crisis. Adicionalmente, la capacidad de acción del gobierno se vio limitada por la inicial estrategia económica –de orientación neoliberal–, por la falta de manejo del presidente y de sus asesores a la hora de negociar acuerdos económicos y financieros, por el aislamiento o la incapacidad de construir alianzas para el logro de estos objetivos y, en particular, por las dificultades políticas para acceder a recursos económicos nuevos y en condiciones ventajosas en un contexto internacional volátil a partir de la segunda guerra en Irak. Lo último quedó evidenciado con el fracaso político que significó para Zelaya el no obtener las inversiones requeridas por vía del CAFTA (Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica) en los inicios de su mandato, pese a que la gestión fuera realizada por el propio presidente hondureño en los Estados Unidos entre 2006 y 2007.

El fracaso de las negociaciones está relacionado con la crítica coyuntura económica que el nuevo gobierno encontró al inicio de su gestión y la forma en que fue encarada por las autoridades. A los pocos días de asumir la presidencia, Zelaya Rosales decretó el “estado de emergencia energética” como resultado de la bancarrota financiera en que se encontraba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (que arrojaba pérdidas anuales superiores a los 3500 millones de lempiras en el 2006, unos 160 millones de dólares de ese año) y de la incapacidad de la misma para abastecer a toda la demanda nacional. La crisis energética en ciernes, que motivó al ejecutivo a asumir directamente el control de la empresa en febrero de 2007, convergió y se potenció con el incremento de los precios internacionales del petróleo observados desde 2002, el cual amenazó con paralizar al dependiente sistema eléctrico hondureño³. La inminente crisis no solo hizo extremadamente difícil plantear una reactivación económica como la prometida por el entonces entrante mandatario, también puso en peligro los recursos nacionales disponibles para el pago de la deuda externa de este país⁴.

En este sentido, debido a que la búsqueda de capitales para la reactivación económica se realizó en paralelo con la puesta en marcha de una conflictiva estrategia de licitación de combustibles para adquirir a menor precio hidrocarburos en el mercado internacional, la obtención de nuevas inversiones se vio dificultada por el conflicto suscitado entre el ejecutivo y las compañías petroleras que controlan el mercado nacional. La implementación de este mecanismo fue resultado de las “recomendaciones” que elaboró una comisión técnica (la Comisión de Notables) designada por el legislativo hondureño para enfrentar la crisis energética, la cual tuvo por objetivo mejorar la distribución de gasolina y abaratar el precio de la misma para el consumidor hondureño⁵. Tales metas implicaban romper el monopolio de la importación, distribución y comercialización de crudo que han tenido las petroleras Esso y Texaco, de capital estadounidense, y la angloholandesa Shell. La decisión del gobierno hondureño de adquirir combustibles por medio de una licitación internacional (en la cual la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. –PDVSA– confirmó su participa-

ción) no solo causó malestar en las compañías citadas sino también en la propia embajada de los Estados Unidos, donde su titular –Charles Ford– explícitamente salió en defensa de los intereses de las corporaciones al declarar que “las reglas del juego han cambiado de la noche a la mañana” para la inversión extranjera. En esa oportunidad el embajador efectuó un “‘llamado’ a un debate nacional sobre el tema, sugiriendo que algunos sectores podrían quedar inconformes con las recomendaciones” de la comisión o de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, sobre todo si se realizaban en una etapa de la historia de Honduras representada por la puesta en marcha del CAFTA⁶.

La presión ejercida por la delegación diplomática estadounidense, las multinacionales petroleras y los empresarios locales en contra de lo que se consideró “una medida intervencionista del Estado” sin duda contribuyó a desacreditar la imagen del mandatario en círculos gubernamentales externos, disminuir el interés de los capitales e inversionistas por hacer negocios en Honduras y alertar al empresariado local sobre las reales intenciones que tenía este gobierno –como se desprende de la advertencia que hiciera el influyente presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, el cual señaló al Ejecutivo “la inconveniencia” de llevar adelante la licitación internacional de carburantes, en razón de que las transnacionales petroleras que operan en territorio Hondureño estarían “en su derecho” de demandar al Estado por una suma de 300 millones de dólares.

La respuesta formulada por el propio ex-presidente es indicativa de la naturaleza del conflicto emergente, del grado de tensión tempranamente alcanzado entre el Ejecutivo y los poderes fácticos y del desplazamiento discursivo que posteriormente caracterizará a este gobierno, es decir, de una primera defensa del mercado abierto hacia la promoción de un nacionalismo económico en contra de los monopolios multinacionales: “Estas transnacionales –señaló Zelaya– están opuestas a que esta licitación se lleve a cabo, porque estaban acostumbradas a gozar de privilegios, a mantener ese control que les ha permitido no competir en la exportación y comercialización de los derivados del petróleo. [...] Me extraña también que algunos empresarios que deben ser voceros del libre mercado y de la competencia estén opuestos a que Honduras salga al mercado internacional para buscar mejores precios para la compra de combustibles” (Zelaya, 2006).

Por lo tanto, si la estrategia de reactivación y crecimiento económico dependía tanto de la adquisición en el mercado internacional de nuevas inversiones como del abaratamiento en los precios de los combustibles, esta quedó restringida por los obstáculos políticos formulados en el CAFTA, por la presencia de un mercado oligopólico que no escatimó esfuerzos en presionar para velar por sus intereses privados y por el escaso apoyo brindado por el empresariado nacional al gobierno. Visto desde esta perspectiva, la agenda gubernamental de origen neoliberal encontró sus límites al quedar en evidencia las dificultades políticas para acceder a un mercado internacional abierto y competitivo, al chocar con los intereses de los grandes capitales y carecer de los necesarios respaldos políticos nacionales. En este sentido, el camino hacia la “toma de consciencia” y el cambio de paradigma que condujo a este gobierno y su presidente del neoliberalismo a

un difuso nacionalismo económico se asienta, irónicamente, en una defensa del consumidor y del libre comercio global; al tiempo que la incapacidad para conseguir apoyos o construir alianzas –sea dentro de su propio partido, sea en sectores estratégicos del país– evidenció que sin ellas es difícil avanzar en una agenda de reformas económicas, políticas y sociales. Con base en estos antecedentes, no caben dudas sobre el hecho de que la coyuntura de los años 2006 y 2007 constituyó un parteaguas en la transición política e ideológica por la cual el gobierno hondureño redefinió sus alianzas y sus prioridades; pero para que este proceso tomara fuerza fue clave la percepción de que el país se encontraba al borde de un colapso institucional y político.

“...la coyuntura de los años 2006 y 2007 constituyó un parteaguas en la transición política e ideológica por la cual el gobierno hondureño redefinió sus alianzas y sus prioridades...”

En este sentido, un tercer componente a tomar en cuenta para entender la profunda crisis de legitimidad política ha sido la imposibilidad del Estado hondureño de proveer a la sociedad de seguridad en un amplio sentido y conservar para sí el monopolio de la violencia. El desborde de las instituciones públicas por el incremento de la delincuencia organizada se manifestó en el incremento de las extorsiones, secuestros, ajusticiamientos y masacres cotidianas, que se tradujeron en el asesinato de 5.253 personas para el año 2009 –lo que hizo saltar la cifra de homicidios diarios de 10 personas en 2007 a una de 14 para el 2009 (léase Pineda, 2010). Frente al socavamiento de los cuerpos policiales por la delincuencia, la impotencia del Estado en contener al crimen organizado ha contribuido a una privatización de la seguridad pública, expresada en el crecimiento del número de compañías privadas de vigilancia (muchas de ellas fundadas por militares retirados) y en la organización de comités de protección locales en los barrios (formados por policías, alcaldes, miembros de la Cámara de Comercio e incluso feligreses de iglesias evangélicas) que a ojos de sus propios integrantes permite “seguridad por mano propia”. La crisis de seguridad alcanzó al propio entorno del presidente Manuel Zelaya con el asesinato de uno de sus tres edecanes militares, Alejandro Motiño, pariente del propio mandatario muerto en la mañana del viernes 21 de junio de 2007. Los innumerables casos de violencia y complicidad llevaron a diversos autores a formular la hipótesis de que se estaba ante la consolidación de un “Estado criminal”, en razón del elevado grado de impunidad con el cual se cometen crímenes y por los evidentes vínculos tejidos entre las instituciones policiales y la criminalidad organizada. Estos vínculos constituyen una expresión de la elevada descomposición política, institucional, económica y social en la cual se ha sumido este país, escenario que constituye un espacio propicio para que los poderes fácticos manejen directa o indirectamente las formas y los mecanismos de la política y del poder.

El malestar social con estos espurios lazos alcanzó un punto central con la huelga de hambre entablada por un grupo de fiscales en el propio palacio legis-

lativo el 7 abril de 2008, los cuales denunciaron la falta de independencia de los magistrados nacionales y las connivencias existentes entre estos y las actividades criminales. El apoyo social a esta causa se tradujo en la formación del Movimiento Amplio Popular por la Dignidad y la Justicia (MAPDJ), que aglutina a organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, gremiales, religiosas y patronales, y que tuvo como propósito luchar contra la corrupción en todos los niveles e incidir en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, al igual que en los procesos electorarios para la presidencia, alcaldes y diputados al Congreso Nacional, para así democratizar y transparentar la designación de sus integrantes. Teniendo por principios la resistencia pacífica y ciudadana, el MAPDJ se erigió en los hechos en una instancia de contraloría ciudadana “al funcionamiento de las autoridades de las instituciones públicas vinculadas al sector de la justicia”⁷.

Los problemas de seguridad y de descomposición de las instituciones de Estado tienen su correlato en la profunda crisis de legitimidad del sistema político y de sus partidos. En opinión del analista político Ismael Moreno, el creciente abstencionismo electoral que ha caracterizado a este país es resultado del “desencanto ante la práctica deshonesto y oportunista de los actuales partidos”. Recogiendo una encuesta elaborada por una universidad estadounidense, señala que el 52% de los consultados se ha desafiado de los partidos políticos en los previos seis años, al tiempo que los mismos entrevistados no aceptarían sumarse a un nuevo conglomerado partidario.

“Con unos 30 años de elecciones y alternabilidad en el poder de liberales y cachurecos –sinónimo para los militantes del Partido Nacional– la gente sigue sin lograr entender ni poder explicar qué es la democracia. Para los hondureños, los partidos políticos y el sistema de justicia son las instituciones con menos credibilidad. Sin embargo, los líderes políticos y los jueces se hicieron un racimo en torno a la elección de las autoridades responsables de impartir justicia. Las elecciones primarias de los partidos en noviembre de 2008 dejaron una advertencia: cerca del 70% de las personas con derecho a votar no se acercó a las urnas y de acuerdo a la investigación de la misma universidad un 70% dijo que no irá a depositar su voto en las elecciones generales que se celebrarán en noviembre de 2009. Los líderes políticos conocen estos datos. Sin embargo, siguen como los perros mañosos: quemándose su propio hocico”⁸.

En consecuencia, la debilidad de las instituciones del Estado y la crisis de legitimidad del sistema político implicó que los elementos permanentes que inciden en el juego y en la estructura de oportunidades políticas cedieron espacios a los componentes variables del mismo, es decir, aquellos que dan cuenta de la cohesión de las élites, la posibilidad de realineamientos electorales, la disponibilidad de alianzas, las dinámicas de interacción entre gobierno y ciudadanos, las estrategias de resolución de conflictos, el ambiente internacional o la interacción entre movimientos sociales y los actores políticos formales, lo que abrió la posibilidad al Ejecutivo de buscar alternativas políticas, sociales e ideológicas para enmendar y redireccionar el rumbo de su gestión. Esta hipótesis permite formular una adicional relacionada con las modificaciones de la estructura de oportunidades políticas⁹:

Hipótesis 3: Un rasgo decisivo de las modificaciones de la estructura de oportunidades políticas fue la emergencia de un conjunto de movimientos sociales que, desde 2001 y 2002, ganaron cada vez más presencia en el espacio público e incidieron en la redefinición política y económica del gobierno de Manuel Zelaya.

Las dimensiones de la crisis de legitimidad estatal señaladas en la sección anterior hicieron que el creciente pero heterogéneo malestar ciudadano se tradujera en la emergencia de un movimiento social a partir de 2001 y 2002. En más de una oportunidad, Zelaya, como los presidentes anteriores, tuvo que hacer frente a las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) –organización que aglutina a diversas entidades sindicales, campesinas, magisteriales, estudiantiles e indígenas, entre otras– que exigía al gobierno un petitorio amplio que incluía la derogación de las leyes de minería que favorecen a las grandes compañías y de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento, aprobada en 2003, que estipulaba la municipalización del servicio y su privatización. Además, esta organización social planteó la necesidad de que el Estado estableciera un control de precios ante el encarecimiento de los productos básicos que experimentaba el país, así como la suspensión de todos los proyectos de construcción de represas hasta que se definiera una propuesta que se sostuviera sobre la protección del medio ambiente, entre muchas otras demandas (Léase CNRP, CUTH y CGT, 2007: 69). Se agregaron reclamos históricos del movimiento sindical del sector público por la puesta en práctica del Estatuto del Docente y del Estatuto del Médico Empleado instituido por el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997), los cuales, sin embargo, nunca se implementaron por falta de recursos fiscales. En este sentido, la movilización nacional del 27 y 28 de agosto de 2007, como la del 12 de octubre subsiguiente, se inscribieron en ese proceso de reorganización y movilización social que tiene su punto de arranque en la denominada Marcha de la Dignidad, ocurrida en Tegucigalpa en agosto de 2003¹⁰.

Si bien el mandatario hizo caso omiso a las movilizaciones sociales más de una vez –e incluso la policía reprimió algunas de las marchas convocadas– la necesidad de hacer frente o de dar respuestas a algunas de las problemáticas que buscaba atender la difusa agenda gubernamental provocó una temprana tensión entre el Ejecutivo, los intereses empresariales y el Poder Legislativo. Por ejemplo, a inicios de 2007 miembros de cuarenta organizaciones agrupadas en la Alianza Cívica por la Democracia realizaron movilizaciones a fin de que el gobernante liberal tomara cartas sobre los daños medioambientales provocados por la explotación minera a cielo abierto. Las medidas de presión también estuvieron dirigidas a exigirle al Congreso Nacional la derogación del Decreto 292/98 que contiene la Ley General de Minería, al tiempo que se solicitaba la aprobación de una nueva legislación que estableciera el pago de impuestos, la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental y la prohibición de expropiar terrenos para entregárselos a las empresas mineras¹¹. El gobierno de Manuel Zelaya hizo eco a esta demanda y rechazó en repetidas oportunidades las solicitudes de la industria minera para otorgar nuevas concesiones a las empresas en tanto no existiera una ley que obligara a las compañías a realizar estudios sobre los impactos medioambientales –pese a

que en el año 2005 el Congreso del país planteó la posibilidad de permitir nuevas concesiones a la minería metálica a través de reformas legislativas.

En este sentido, la búsqueda de nuevas opciones de acción política también parece ser el resultado, por un lado, de una modificación en los patrones que inciden en la interacción entre los diversos sectores y de estos últimos con las instituciones y, por otro, de un cambio en los factores que imponen una lectura del contexto político o que otorgan un sentido común al orden sociopolítico. Dicho de otra manera, si las alianzas entre las nuevas y viejas organizaciones populares son un reflejo de la deslegitimación de las instituciones públicas, esta crisis de representación puede traer aparejado un cambio en la correlación de fuerzas de la sociedad con las instituciones y entre las instituciones, así como una modificación de los imaginarios y las matrices ideológicas de sus integrantes. Justamente, es este cambio en la percepción del estado de las cosas lo que posibilita ensanchar los límites políticos, programáticos e ideológicos hasta entonces consensuados o hegemonizados por los actores formales del sistema de representación ciudadana, pero también traspasar las fronteras de la política convencional (lo políticamente correcto) al estimular la radicalización de los discursos, fomentar prácticas políticas alternativas o generar nuevas alianzas sociales.

En consecuencia, a medida que la realidad nacional fue imponiendo una lectura nueva sobre cómo gestionar la crisis económica y de Estado, la promoción de un cambio en el sistema político y sus instituciones, en las prácticas políticas tanto formales como informales o en el modelo económico constituyó el horizonte alternativo que la estructura de oportunidades políticas puso a disposición de los actores cuando se modificaron los marcos de referencia que hasta entonces otorgaban ciertos límites a la acción política. Quizá sea esta hipótesis la que en parte explique por qué un Ejecutivo con una inicial agenda neoliberal optara por redireccionar política y económicamente el destino del país y que para la consecución de estos fines requiriera de la constitución de un nuevo bloque de aliados nacionales como de inesperados respaldos políticos internacionales, aun a sabiendas de que tales medidas tensionarían su relación con la clase política, el Congreso Nacional, los empresarios, los capitales externos, las fuerzas armadas e incluso con las iglesias católica y evangélicas.

Si bien la construcción de este nuevo bloque de aliados parecía difícil, dados los conflictos que la propia administración de Zelaya tuvo con los grupos populares organizados, la construcción de una nueva coalición de gobierno parecía posible por los intereses comunes que existían con varias de estas agrupaciones y por el hecho de que las mismas se encontraban en conflicto con los poderes formales y fácticos del país, lo cual potencialmente las transformaba en aliadas estratégicas. Esta opción implicaba enviar señales claras de un nuevo compromiso del Ejecutivo hacia los sectores populares organizados y la izquierda hondureña, entre las que podemos nombrar el creciente acercamiento del gobierno a las administraciones antineoliberales de Centro y Sudamérica, la participación de Honduras en Petrocaribe y la adhesión de este gobierno a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), al igual que medidas de gran impacto social como fue el incremento del salario mínimo de hasta un 60%, promulgado por la vía del decreto ejecutivo después de que los empresarios y trabajadores no

pudieran ponerse de acuerdo en las negociaciones para fijar el techo de ingresos a fines de 2008¹². Estas medidas políticamente conflictivas inevitablemente contribuirían a tensionar aun más la relación del gobierno con los poderes políticos y fácticos, pero su puesta en marcha reflejó la redefinición de los marcos políticos e ideológicos hasta entonces consagrados.

Empero, la búsqueda del gobierno de Manuel Zelaya de nuevas alternativas que permitieran atender los problemas acumulados paradójicamente no fue el resultado de una correlación de fuerzas favorable al gobierno, sino de una situación de aislamiento social y político solo posible de ser aprovechada debido a la extrema rigidez y cerrazón del sistema político, el alto grado de deslegitimación de los actores políticos formales y las divisiones que cruzan a las élites y sus partidos. En efecto, para explicar la opción tomada de acceder a recursos financieros y en especie, como el petróleo, al igual que apoyos políticos, en una instancia como es la ALBA y su instrumento medular, Petrocaribe, resulta clave comprender que las opciones abiertas por la estructura de oportunidades políticas pasaban por una reinterpretación de los factores que imponían límites ideológicos o que encuadraban el sentido común del orden sociopolítico y su modelo económico imperante, por la percepción de que el país se encontraba en una situación de crisis extrema que requería de un viraje político estratégico y por la aparición de un mercado alternativo que posibilitaba el acceso inmediato y en condiciones ventajosas a los urgentes recursos demandados¹³.

Curiosamente, esta problemática también la observamos durante el gobierno del ex presidente hondureño Ricardo Maduro (2002-2006), quien llegó a un diagnóstico similar al formulado por Manuel Zelaya, pero al igual que el ex presidente argentino, Fernando de la Rúa, fue incapaz de trascender los paradigmas político, económico e institucional para direccionar estratégicamente al país. Perteneciente al Partido Nacional, Maduro llegó a la presidencia con la promesa de realizar los cambios que el país demandaba, incluida una transformación del sistema político-electoral y sus instituciones, pero a poco andar su gestión quedó entrampada por la oposición de la clase política atrincherada en el poder Legislativo, el escenario económico adverso y la propia inanición del Ejecutivo. Además de heredar el grave estado de las finanzas dejado por la administración de Carlos Flores (1998-2002), este gobierno atestiguó el incremento en la percepción ciudadana de la corrupción en el país y el aumento en el malestar social por la crisis económica –amplificada, como se señaló, por el paso del Mitch– y por enfrentar un conflicto con el Fondo Monetario Internacional en relación con las condiciones que este organismo imponía para acceder a recursos financieros externos. En opinión de Manuel Torres Calderón, aceptar las condiciones era para esta administración “[...] pasar de las brasas al fuego: una de las exigencias era reducir el 10% del gasto destinado a la burocracia, pero ello implica dejar en la calle a miles de empleados públicos; otra de las demandas era eliminar los estatutos laborales que regulan el pago a maestros y médicos, pero ambos gremios se resisten a ser víctimas de un sacrificio que no ofrece nada a cambio. Para Maduro el desacuerdo con el Fondo no es de contenido, sino de aplicación”. A este conflicto se sumó la creciente oposición entablada por el Congreso Nacional a cualquier intento de reforma política y social que este gobierno in-

tentó promover, fuese vetando las iniciativas, fuese alterando su contenido, fuese postergando el debate de tal forma que los tiempos legislativos las volvieran políticamente inviables. Teniendo por objetivo “aislar a la sociedad política” de la “sociedad civil”, las acciones del Legislativo y de la clase política significaron que reformas claves como la introducción de las figuras del plebiscito y referendo, las elecciones de diputados por distrito, la disminución de requisitos a las candidaturas independientes o la promoción de mecanismos para facilitar las alianzas políticas y profundizar la democracia en el país quedarán postergadas. “A estas alturas –concluye Manuel Torres Calderón– es evidente que Maduro no pudo o no intentó romper con esa visión y esa argolla del poder, y al renunciar a ese objetivo redujo su propio espacio de acción. [...] Cambiar este cuadro ameritaba un golpe de timón por parte de Maduro en la conducción político-económica, pero esta acción no se produjo. El presidente en cambio optó por más de lo mismo...” (Torres Calderón, 2003: 16-18).

“...el programa reformista de Modesto Rodas refleja los cambios en la cultura política y en la correlación de fuerzas sociales provocados por la huelga de los 69 días de los trabajadores de la Tela Railroad Company –antigua United Fruit Company– en 1954”

La trayectoria y la lectura seguida por el gobierno de Ricardo Maduro tiene similitudes con la realizada por Manuel Zelaya y su gabinete, pero a diferencia del contexto que marcó la gestión del mandatario liberal, la administración nacionalista no tuvo en disposición una estructura de oportunidades políticas que estimulara u ofreciera salidas a su entrapada gestión. Si bien en sus inicios la administración de Zelaya no priorizó la construcción de un nuevo equilibrio político, como sí lo hiciera la de Néstor Kirchner, el bajo respaldo ciudadano con el cual fue elegido (que a todas luces le otorgaba un mandato político débil, sobre todo si estaba entre sus objetivos el aplicar reformas) y el aislamiento creciente frente a la clase política y a los poderes legislativos y fácticos volvió imprescindible la construcción de una alianza que hiciera posible el cumplimiento de los objetivos de gobierno y su estabilidad¹⁴.

Sin embargo, para que este presidente optara por acercarse a los sectores populares organizados, aliarse con los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, y afiliarse a la ALBA –en vez de intentar reproducir las recetas neoliberales–, también tenían que existir ciertas disposiciones ideológicas que lo posibilitaran. De ellas trata la siguiente hipótesis.

Hipótesis 4: La opción del gobierno de Manuel Zelaya tiene que ver con la trayectoria política de una corriente interna del Partido Liberal que lo acompaña: Los Patricios.

La reorientación ideológica y política del gobierno de Manuel Zelaya no se puede explicar sin considerar el papel jugado y la trayectoria previa de un grupo clave

de asesores del depuesto presidente: Los Patricios. Surgidos como una corriente al interior del Partido Liberal, esta fracción integrada por Arístides Mejía (ex vicepresidente designado de Honduras), Milton Jiménez (ex ministro de Relaciones Exteriores y ex comisionado de Bancos y Seguros), Enrique Flores Lanza (ex ministro de la Presidencia) y Raúl Valladares (ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones), entre otros, debe su nombre al liderazgo que ejerce Patricia Isabel Rodas Baca, quien fuera presidenta de la organización partidaria y última canciller del gobierno de Manuel Zelaya. Hija menor del caudillo liberal Modesto Rodas Alvarado, su formación y socialización política están marcadas por el impacto familiar que significó el golpe militar del 3 de octubre de 1963 para evitar que su padre ganara la contienda presidencial de ese año. Visto como una respuesta autoritaria del Partido Nacional, de las élites más conservadoras, del Ejército y de las compañías estadounidenses al programa de reformas sociales y económicas encabezadas por su padre, la trayectoria de Patricia Rodas se inscribe en la corriente ideológica dominante en la historia del Partido Liberal e instituida en los propios estatutos de este grupo político: el “liberalismo social”.

Emparentada con el “gaitanismo” de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado en Colombia, el programa reformista de Modesto Rodas refleja los cambios en la cultura política y en la correlación de fuerzas sociales provocados por la huelga de los 69 días de los trabajadores de la Tela Railroad Company –antigua United Fruit Company– en 1954. Esta huelga, pese a su derrota, se convirtió en un referente simbólico importante para los movimientos sociales y la izquierda hondureña debido a que el movimiento obrero logró dar un impulso a la modernización en las relaciones sociales, al lograr el reconocimiento a la libertad y el derecho a la sindicalización y al posibilitar la conquista y ampliación de derechos sociales y políticos (de hecho, el voto femenino fue otorgado en 1955). Estos logros se tradujeron en la promulgación de un Código Laboral y una Ley de Seguridad Social y de Reforma Agraria y en la creación de instituciones como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otras iniciativas (Torres Calderón, 2009). Promovidas bajo el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales (1957-1963), en su elaboración y defensa tuvo un papel importante la figura de Modesto Rodas, quien adoptara una postura que le permitió posicionarse políticamente para ser el seguro ganador en las fallidas elecciones de fines de 1963¹⁵.

El exilio de Rodas en Nicaragua posibilitó a su hija –años más tarde– simpatizar con la lucha social entablada en contra de la dictadura de los Somoza y acercarla a las ideas de los movimientos de liberación nacional. A principios de los ochenta –de regreso del exilio– participa en las luchas estudiantiles universitarias hondureñas, apoya la revolución sandinista y enarbola la bandera por la recuperación de la unidad centroamericana promovida históricamente por los líderes liberales de stirpe morazanista. Sin embargo, dos elementos incidirán en las motivaciones y en la evolución política de la futura canciller: la “traición” del ex presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986) al programa político para la Honduras post autoritaria visualizado por el histórico líder liberal¹⁶ y el hecho de apoyarse este mandatario en los sectores más conservadores de su partido a la hora de dirigir el país, medida que incluyó al ex ministro del Trabajo del ex presidente Ramón

Villeda Morales, Oscar A. Flores, cómplice del golpe de 1963 y padre del ex mandatario Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002), también partícipe del golpe de junio de 2009. “Para Patricia Rodas –señala Ismael Moreno– todos eran unos impostores: un presidente que ocupaba un lugar que se debía a su padre y un ministro de la Presidencia en la silla que se debía al menos a alguien de la estirpe directa de Modesto Rodas” (Moreno 2007). Es probable que este acontecimiento revele un “resentimiento” de la hija de Rodas hacia una parte de la clase política –lo que explicaría, en opinión de este autor, su radicalismo ideológico– pero leído desde otro punto de vista, este señalamiento deja traslucir la importancia de las redes familiares en las élites partidistas para condicionar trayectorias políticas y que, en un caso individual como el de Patricia Rodas, se expresa en su motivación de llevar a cabo el proyecto de país doblemente abortado de su padre.

De esta manera se explica por qué la entrada de Patricia Rodas al campo de la política formal se realizó desde el Partido Liberal y no desde la izquierda. Papel clave en este acercamiento le correspondió a Carlos Roberto Reina, representante del ala progresista de este partido y presidente del país entre 1994-1998, quien en 1993 reclutó a un grupo de profesionales venidos de la izquierda (algunos de ellos ex alumnos universitarios del propio Reina) con el objetivo de ampliar sus bases de apoyo para su campaña presidencial y conformar un grupo de trabajo de cara a una eventual gestión gubernamental¹⁷. Este acercamiento es posible de explicar no solo porque existían afinidades entre el programa de gobierno de Carlos Roberto Reina con las preocupaciones sociales y políticas de este futuro grupo de asesores, sino también por el hecho de que primó en estos profesionales cierto pragmatismo político de época, dada la crisis de los regímenes comunistas y de los metarrelatos socialistas que hacían inviable pensar en una alternativa autónoma desde la izquierda; por lo que estaba la creencia de que ocupando posiciones claves en este partido, en el gobierno y en instituciones del Estado se podían llevar a cabo los cambios que el país requería (incluso si para ello hubo que aliarse con el ala derechista del partido liderada por Carlos Flores Facussé, cuando este fue candidato en 1997 y presidente del país entre 1998 y 2002).

Sin embargo, este grupo de asesores compartía también una cierta predisposición “ideológica” –moldeada por el ambiente revolucionario de los ochenta y reactivada con los procesos sociales y políticos que han caracterizado a la primera década de este siglo en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela– que posibilitaría tender puentes valóricos, conceptuales y políticos con los discursos de los mandatarios de dichos países al igual que lazos entre los objetivos de gobierno y las políticas desarrolladas por los gobernantes de la ALBA y entre las medidas implementadas por estos ejecutivos y la lectura realizada a la hora de enfrentar los obstáculos políticos y económicos comunes. Por lo tanto, no es ninguna coincidencia que el acercamiento del gobierno de Zelaya a la ALBA se realizara en el contexto de la vigésimo octava celebración de la Revolución Sandinista, llevada a cabo en Nicaragua en julio de 2007, oportunidad en que Manuel Zelaya y Patricia Rodas acompañaron al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, en los festejos. En este sentido, el rol jugado por Los Patrios puede enmarcarse dentro de un fenómeno general en la política de América Latina de la última década: la presencia de una generación de militantes políticos

y activistas sociales que participaban en las luchas antidictatoriales y en los movimientos revolucionarios de liberación nacional en los años sesenta y setenta (en el Cono Sur) y ochenta (en América Central) y que ahora forman parte de los gabinetes y administraciones de los gobiernos de izquierda y/o progresistas en el continente, siendo el caso de los ex montoneros en la administración de Néstor Kirchner un ejemplo paralelo de estas trayectorias.

Será a partir de 1993 que esta generación de jóvenes políticos inicie su “marcha por las instituciones”, derrotero que les permitirá ocupar lugares por los cuales incidir en la orientación programática e ideológica del partido y del gobierno. Este camino institucional los entroncará con la figura de Manuel Zelaya, quien desde la administración de Carlos Roberto Reina –y esto también cabe como una hipótesis de trabajo– ocupará cargos públicos que lo irán vinculando con representantes del movimiento popular y de la denominada sociedad civil, lo que incidirá en un conocimiento más cercano de la realidad social, modificando con ello sus matrices ideológicas y su discurso político. El nombramiento como director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en 1994 permitirá a Zelaya ejecutar programas gubernamentales de promoción social, lucha contra la pobreza y descentralización de las administraciones locales. Ya para entonces el futuro mandatario vertió críticas a las condiciones impuestas por el FMI para acceder a una línea de crédito, las cuales hizo extensibles al ajuste liberal impuesto al presidente Carlos Roberto Reina. A pesar de lo anterior, estableció un diálogo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual permitió financiar los proyectos del FHIS. Alabado su desempeño por estas instituciones, no extraña que fuera designado vicepresidente de la Red Social de América Latina y el Caribe (REDLAC) en 1996, la cual agrupa fondos de inversión social o de emergencia de los países del continente y cuyo propósito es poner en ejecución programas y proyectos que permitan mejorar la eficiencia, eficacia y equidad de las acciones sociales. Confirmado en el nuevo gabinete de gobierno por el entrante presidente liberal Carlos Flores Facussé, la catástrofe provocada por el paso del huracán Mitch en octubre de 1998 permitió que su experiencia técnica en materia social fuera considerada para integrar el Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional instituido al mes siguiente de la crisis. Aquel año tomó asiento también en el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), un marco en el que representantes del Estado y de la sociedad civil debatían las diversas políticas nacionales¹⁸.

La influencia del pensamiento liberal progresista y de una visión particular de izquierda puede observarse en el programa de gobierno del Manuel Zelaya denominado “Visión del poder ciudadano para transformar Honduras”, dado a conocer en noviembre de 2005, así como en la puesta al día de los estatutos de este instituto político y que lleva por título “Declaración de Principios, Estatutos y Plan de Acción Política”, firmado el 28 de mayo del mismo año. Teniendo como objetivo común la promoción de un “poder ciudadano” –bandera que expresa la necesidad de empoderar y acercar el Estado a la ciudadanía–, esta propuesta es una expresión ecléctica de las credenciales liberales y leninistas que conviven tensamente en sus promotores. Lo anterior se observa en las propias palabras de Patricia Rodas escritas en la hoja de presentación de este último documento:

Fieles a nuestro compromiso de renovación permanente, los principios y objetivos que configuran a la organización de nuestro Instituto Político consolidan su misión de vanguardia de la sociedad hondureña a través del fortalecimiento de todas las formas de representación y de la necesaria construcción de una cultura de participación, transparencia y rendición de cuentas, atributos paradigmáticos del proyecto del Poder Ciudadano que con firmeza y dignidad dirige nuestro presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales. El cuerpo de ideas, derechos y obligaciones aquí plasmados debe orientar la conducta de todos los militantes y el accionar orgánico de nuestro glorioso Partido Liberal de Honduras hacia la unidad granítica de todas sus fuerzas y la absoluta articulación de todos sus esfuerzos. En la profundidad de su conocimiento y en su correcta interpretación y aplicación debemos alcanzar con lealtad la perfección de nuestros actos y cumplir sin demora la tarea de encaminar nuestro destino hacia la plenitud del desarrollo y la vida digna y fecunda para todo nuestro pueblo.¹⁹

No obstante, la explícita intención de combatir la corrupción en tanto principal mal de la sociedad hondureña permite señalar que el programa de gobierno de José Manuel Zelaya Rosales se inspiró, en un primer momento, en un discurso afín a la socialdemocracia y difundido por los organismos internacionales sobre las estrategias políticas y administrativas necesarias para que las democracias latinoamericanas recuperaran la legitimidad cuestionada a raíz del costo social de las reformas económicas y por la reproducción de prácticas corruptas en los Estados neoliberales, estrategias que giran en torno de los términos “transparencia”, “acceso a la información” y “rendición de cuentas” (accountability). En estos términos se cruzan dos conceptualizaciones: una tecnocrática, que limita su significado a la obligación estatal de informar a la sociedad sobre las acciones y decisiones gubernamentales para hacer más eficiente el gobierno, y otra, comprometida con un proyecto participativo, que los visualiza como herramientas para ampliar la democracia y realizar derechos económicos y sociales²⁰.

En el discurso programático de Zelaya, la noción de rendición de cuentas terminó por ocupar un lugar estratégico por ser considerada no solo como una herramienta para hacer más efectiva la gestión pública y estatal, sino como un instrumento clave en el combate al círculo de corrupción formado por las actividades privadas, instituciones públicas y el sistema político. En este sentido, si la corrupción es responsable de la debilidad institucional, minar toda estrategia y/o programa de desarrollo, propiciar un desigual trato ante la ley y, por lo tanto, de incrementar la inequidad social y debilitar las bases de toda ciudadanía, la promoción de la contraloría ciudadana o accountability fue visualizada como el pilar político por el cual se otorgaría sustento al proceso de desarrollo económico y democratización política y social en Honduras²¹.

Considerando la baja participación ciudadana en las elecciones de 2005, que bordeó apenas el 50% del padrón electoral (y la aun menor cantidad de votos que recibió el propio Manuel Zelaya), es evidente que esta convocatoria no tuvo un impacto inmediato en elevar las expectativas sociales y generar adhesión ciudadana. Si bien también es cuestionable el real alcance que pudo tener la implantación de esta propuesta y todo el programa de gobierno, el mero hecho de poner en circulación la idea de una “contraloría ciudadana” constituía –sin embargo– un potencial conflicto en el sistema político hondureño en la medida en que dejaba en evidencia el principio negativo con el cual se erige la arquitectura del mismo: la ausencia de mecanismos de control hacia la “cla-

se política” por parte de la “sociedad civil”. Del mismo modo, la intención de combatir las prácticas que favorecen la evasión fiscal, la corrupción administrativa o la impunidad criminal constituyó otro escenario de posibles tensiones al alimentar un discurso que identificaba la degradación de la democracia con el poder de los grupos dominantes, la corrupción institucional con la de los intereses privados, la de la clase política con los altos negocios. En consecuencia, al propiciar la acción y el activismo social, legitimar el empoderamiento ciudadano y fomentar un programa de anticorrupción, la administración de Zelaya creó una veta política e ideológica que otorgó carta de legitimidad a las diversas movilizaciones ciudadanas existentes, al tiempo que explícitamente conectó e identificó a la clase política y a los poderes fácticos como los principales responsables de los males que aquejan al país centroamericano²². Patentado con la oposición empresarial y parlamentaria a las propuestas de reformas social y política emanadas desde el Ejecutivo y por el apoyo brindado por los mismos actores al golpe de Estado de junio de 2009, ambas acciones evidenciaron el carácter antidemocrático, corrupto y elitista con el cual opera el sistema político en este país.

A la luz de estos antecedentes, el acercamiento hacia los sectores populares y al bloque de países denominados bolivarianos no puede ser explicado tan solo por un imperativo pragmático para salir del aislamiento político o escapar a la crisis energética (aun menos si se asume la convencional tesis sobre la “conspiración chavista” y “orteguista” que habría penetrado en el seno del gobierno), sino porque del encuentro de Zelaya con el grupo de los Patricios nació un discurso político basado en una recuperación selectiva del liberalismo progresista hondureño y de ideas (socialdemócratas) de gobernanza democrática (como “ciudadanía”, “rendición de cuentas” y “contraloría ciudadana”) que fueron combinadas con las imágenes gloriosas y heroicas de la revolución sandinista de la década de los ochenta. Esta amalgama de discursos e imágenes, que a los ojos del observador externo podría parecer difuso e incluso incoherente, logró interpelar a los sectores populares organizados al vincularse con la promesa de una Reforma Constitucional orientada a reformular las reglas del juego político y abrir el campo político hondureño a la participación ciudadana.

Corolario

Visto retrospectivamente, es posible observar un conjunto de factores que modificaron al sistema político de Honduras entre 1998 y 2009, posibilitando que Manuel Zelaya y su gabinete impulsaran una propuesta para cambiar las reglas del juego político en su país. De estos factores destacamos los impactos de mediano plazo del huracán Mitch, la violencia social y el desborde de la criminalidad organizada, que evidenciaron la ineficiencia de las instituciones de Estado, los obstáculos políticos y económicos de su administración para acceder a recursos en el mercado internacional, el aislamiento en que esta quedó frente a la clase política y empresarial del país, la presión social en ascenso y los niveles más bajos de legitimidad del sistema político y sus actores desde que hace más de un cuarto de siglo se iniciara el periodo democrático.

Pese a los cambios provocados por estos factores, las tensiones que provocaron las acciones del gobierno liberal en el sistema político hondureño, como en los grupos empresariales del país –que llevaron finalmente al golpe de junio de 2009–, también expresan el carácter limitado que tuvieron las modificaciones en la estructura de oportunidades políticas, las cuales no afectaron las relaciones de fuerza entre los principales grupos sociales. En este sentido, el no reconocer a tiempo el reducido margen de maniobra que los poderes fácticos le habían concedido o el hecho de sobrevalorar el peso de los apoyos políticos y materiales externos, así como las posibles alianzas internas para dotar de viabilidad política a su gobierno, fueron algunos de los condicionantes cuya errónea lectura costó a Manuel Zelaya la presidencia.

Es probable que la correlación de fuerzas a favor de los sectores oligárquicos y militares en este país sea resultado de una trayectoria política y de procesos sociales que les otorgaron mayores cuotas de poder al momento de la transición política; sobre todo si lo comparamos con lo acontecido en otras realidades centroamericanas. Lo anterior explicaría tanto la rigidez del sistema político como la pública intolerancia ideológica de estos grupos a cualquier asomo de cambio en las reglas consagradas del juego político. Consecuencia de un movimiento popular débil, desarticulado nacionalmente, cooptado y diezmado en la década de los ochenta cuando Honduras era la base de la contrarrevolución nicaragüense, la ausencia de una oposición política fuerte, con bases sociales propias y con capacidad de impulsar un cambio de las reglas del juego político por la vía militar –como en mayor o menor medida aconteció en El Salvador, Guatemala y Nicaragua– implicó que las fracciones más conservadoras de este país no tuvieran la necesidad de reconvertirse o adaptarse políticamente tras el fin de las guerras civiles o de la guerra fría.

Este marco restrictivo posibilitó la conformación de un “sistema bipartidista estable” (Klesner) en el cual la polarización social no podía expresarse en el espacio político formal. Por el contrario, fue invisibilizada por la adhesión de los sectores populares a una de las dos grandes fuerzas partidistas, por la fragmentación de los movimientos sociales anti-gubernamentales y la marginación política en la que terminó la izquierda hondureña. Sin embargo y como corolario de toda esta problemática, la fuerte reacción social al golpe cívico-militar y el llamado a la “rebelión” por parte del ex mandatario han impulsado un reagrupamiento de actores en el espacio político, lo cual –a mediano plazo– podría dar paso no solo a una ruptura del bipartidismo y a la aparición de una contra élite, o una nueva fuerza partidista, sino también ser una oportunidad para la emergencia y fortalecimiento de nuevos liderazgos sociales y de un movimiento popular de alcance nacional (actores políticos que habían estado ausentes hasta estos momentos).

En este sentido –y finalmente– para explicar el porqué de la mayoritaria reacción social en contra del golpe militar, no es sostenible argüir que fuera resultado solamente de una defensa popular a favor del gobierno de Zelaya (sobre todo si recordamos la baja –si bien creciente– popularidad que tenía el propio presidente al momento de su destitución), como tampoco cabe circunscribirla a una respuesta coyuntural en la cual un vasto sector de la sociedad se movilizó en contra de una opción autoritaria (en un país que es conocido por la aparente apoliticidad de la mayoría de su población); por el contrario, tal reacción hay que enmarcarla en un

proceso lento pero progresivo de “construcción de ciudadanía” en diversos segmentos de la población como resultado de las sucesivas crisis acontecidas en Honduras a partir –a lo menos– del paso del Huracán Mitch, las cuales activaron desde las múltiples defensas sectoriales un imaginario político crítico al orden formal y fáctico, pero propositivo en términos de la noción de democracia que las hondureñas y los hondureños aspiran a tener para un futuro inmediato. En consecuencia, el abstencionismo “activo” en los comicios presidenciales de noviembre de 2009, como la masiva concurrencia a las manifestaciones del primero de mayo de 2010, deben ser vistas no solo como expresiones de la resistencia social a los intentos de “naturalizar” las relaciones de fuerza surgidas del golpe, sino que constituyen, a la vez, expresiones de una conciencia ciudadana que ha venido madurando desde algún tiempo a la fecha.

Bibliografía

- Agencia ACAN-EFE 2007 “Organizaciones populares de Honduras protestan contra alza de precios” en *La Primerísima* <www.radiolaprimerisima.com/noticias/20366>, 12 de octubre. Consulta en marzo de 2010.
- Argenpress 2007 “Con movilizaciones en todo el país, hondureños exigen derogación de la Ley de Minería” en *No a la mina. Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el no a la mina* <www.noalamina.org> 11 de marzo, sección “Minería en Latinoamérica”, página 276. Consulta en marzo de 2010.
- Castellanos, Julieta 2006 “Honduras: gobernabilidad democrática y sistema político” en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) marzo, edición especial.
- CNRP, CUTH y CGT 2007 “Honduras: Demandas de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) al gobierno” en *La Vía Campesina*, disponible en <<http://viacampesina.org>>. 9 de septiembre, sección “Noticias de las regiones”. Consulta en marzo de 2010.
- COFADEH s/f “Se conforma movimiento amplio por la dignidad y contra la corrupción” en *Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)* <www.cofadeh.org/html/noticias/conforman_movimiento_amplio.htm>. Consulta en abril de 2010.
- Comunicación Comunitaria 2006 “Licitación de combustibles no lleva como propósito expropiar a transnacionales” en *ALAI. América Latina en Movimiento*, disponible en <<http://alainet.org>>, 12 de septiembre, subsección “Recursos Naturales” de “Economía”. Consulta en marzo de 2010.
- Dagnino, E. et al. 2006 “Introducción: Para otra lectura de la disputa por la construcción democrática en América Latina” en Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto J. y Panfichi, Aldo (coords.) *La disputa por la construcción democrática en América latina* (México: FCE/CIESAS/Universidad Veracruzana).
- Durand, Francisco 2006 “El vuelo de los cóndores. Despliegues etnonacionalistas y temores empresariales” en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 202, marzo-abril.

- EcoPortal.net* s/f "Honduras: el 31% del territorio hondureño en poder de las compañías mineras" en *EcoPortal.net. El directorio ecológico y natural*, disponible en <<http://www.ecoport.net/content/view/full/42926>> 19 de marzo de 2005. Consulta en marzo de 2010.
- El Heraldo* 2009 "Gobierno de Honduras se reúne hoy con los empresarios" en *El Heraldo* (Honduras: PUBLYNESA) disponible en <www.elheraldo.hn/content/view/full/67295>, 11 de noviembre. Consulta en marzo de 2010.
- Garretón, Manuel Antonio 2002 "La transformación de la acción colectiva en América Latina" en *Revista de la CEPAL* (Santiago de Chile: NU) N° 76, abril.
- Klesner, Joseph L. 2006 "El año electoral decisivo de América Latina" en *Foreign Affairs en Español* (México: ITAM) Vol. 6, N° 2, abril-junio.
- La Prensa* 2006 "Gobierno emprende plan de protección de bosques" en *La Prensa* (San Pedro Sula: OPSA) disponible en <www.laprensa.hn>, 31 de enero, sección "País", edición anterior del 1 de febrero. Consulta en mayo de 2010.
- Moreno, Ismael 2007 "El Presidente en su laberinto (o en su 'patastera')" en *Revista Envío* (Managua: UCA) N° 305, agosto.
- Moreno, Ismael 2009 "Mal comenzó el último año de Zelaya" en *Revista Envío* (Managua: UCA) N° 324, marzo.
- Murillo Pinales, Álvaro 2006 "Cómo Honduras enfrenta crisis energética" en *El Nuevo Diario* (Managua), disponible en <www.elnuevodiario.com.ni>, sección "Opinión", 21 de julio.
- National Climatic Data Center* del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, disponible en <<http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/reports/mitch/mitch.html>>. Consulta en mayo de 2010.
- Partido Liberal de Honduras s/f "Declaración de Principios, Estatutos y Plan de Acción Política", disponible en la sección "Estatutos" de su página web: <www.partidoliberaldehonduras.hn>.
- Pineda, Norma 2010 "Honduras: Homicidios diarios ahora son 14" en *La Prensa* (San Pedro Sula: OPSA) 20 de enero, sección "Apertura". Consulta en marzo de 2010.
- Pion-Berlin, David 2008 "Militares y democracia en el nuevo siglo. Cuatro descubrimientos y una conclusión sorprendente" en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 213, enero-febrero.
- Salomón, Leticia "Políticos, empresarios y militares: Protagonistas de un golpe anunciado" en *Artículos sobre el golpe de estado en Honduras*, Boletín Especial N° 92 editado en septiembre de 2009 por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH).
- SIERP s/f "Visión del poder ciudadano para transformar a Honduras" en *Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (SIERP)* (Tegucigalpa: SEDP) disponible en <www.sierp.hn>, subsección "Otros" en "Biblioteca y Documentos".
- Tarrow, Sidney 1997 *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza Editorial).
- Torres Calderón, Manuel 2003 "Honduras: ¿Transición hacia dónde?" en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 185, mayo-junio.

Torres Calderón, Manuel 2009 “La lucha popular más prolongada desde los 69 días de la huelga bananera. 70 y más días de resistencia contra el golpe y la sumisión” en Salomón, Leticia y Torres Calderón, Manuel (coords.) *Artículos sobre el golpe de estado en Honduras* (Tegucigalpa: CEDOH) Boletín Especial N° 92, septiembre.

Notas

1 Una revisión de la producción académica, política y periodística permite constatar la ausencia de esta pregunta básica. Es el caso de los importantes artículos escritos por Leticia Salomón en esta coyuntura, pero a quien le debemos algunas de las primeras contribuciones académicas para entender el golpe de Estado. Al respecto véase Salomón, 2009.

2 La información corresponde al *National Climatic Data Center* del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, disponible en <<http://wlf.ncdc.noaa.gov/oa/reports/mitch/mitch.html>>. Consulta en mayo de 2010.

3 Dos tercios de la capacidad energética instalada en Honduras son generados térmicamente con petróleo importado, lo que incide en que este sistema sea vulnerable a los altos y volátiles precios del crudo.

4 Léase La Prensa (31 de enero de 2006).

5 Previo a la asunción de Zelaya Rosales, el gobierno del presidente Ricardo Maduro declaró una “emergencia energética” cuando el barril de crudo rondaba –en septiembre de 2005– los 65 dólares y el de diesel los 92 dólares. Este aumento significó que la factura petrolera del país pasara de 637 millones de dólares en 2004 a 904 millones en moneda estadounidense en 2005. Ante el alza de los precios internacionales, el gobierno se vio en la necesidad de aumentar en 19,7% los precios de las gasolinas y en 7,9% los de los demás combustibles. Como consecuencia de estas medidas, una protesta de 5 mil taxistas paralizó Tegucigalpa y obligó al Congreso de Honduras a aprobar dos decretos para derogar los aumentos y ratificar “medidas compensatorias”. Además, el parlamento nombró la Comisión de Notables, cuya función fue “revisar y supervisar permanentemente los mecanismos de fijación del precio de los derivados del petróleo y explicar a la ciudadanía sobre su funcionamiento y conclusiones, así como hacer recomendaciones sobre los mismos”. Dos fueron las recomendaciones principales que emanaron de este informe y que serían consideradas por el futuro presidente: 1) la licitación internacional para la adquisición de combustibles, mecanismo que permitiría romper el mercado oligopólico de importación y posibilitar un ahorro de entre 46 y 76 millones de dólares al país; y 2) abrir un segundo concurso para la construcción de una terminal de almacenamiento con capacidad de 2,5 millones de barriles de carburantes, como primer paso para la construcción de la primera refinería del país con capacidad de almace-

namiento de 300 mil barriles por día. Léase Murillo Pinales, 2006.

6 *Ibídem.*

7 Cabe señalar que frente a la fuerza social que activó este movimiento huelguístico, el entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, acusó a los fiscales de “subvertir el orden constitucional”. Léase “Se conforma movimiento amplio por la dignidad y contra la corrupción” en Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) <www.cofadeh.org/html/noticias/conforman_movimiento_amplio.htm>. Consulta en abril de 2010.

8 Citado en Moreno (2009). La falta de credibilidad de los partidos y de la clase política ha sido constatada en múltiples encuestas. Ya en el año 2001, una encuesta realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción otorgó a la clase política una credibilidad por debajo de las fuerzas armadas. Además, otro estudio señaló que los políticos ocuparon el último lugar en la percepción ciudadana sobre las diversas élites de Honduras, encuesta que fue elaborada por el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2002. Véase Castellanos (2006).

9 El concepto de estructura de oportunidades políticas fue acuñado por el sociólogo Sidney Tarrow para explicar la emergencia de los movimientos sociales dentro de un sistema político. Véase Tarrow (1997).

10 Es interesante observar, retrospectivamente, la distancia política que existía entre el gobierno de Zelaya y las organizaciones sociales convocantes en los inicios de su mandato, organizaciones que en 2009 fueron las principales voceras para su restitución. Las palabras del secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y dirigente de la CNRP, Juan Barahona, son esclarecedoras. “[El gobierno de Zelaya] no ha querido controlar los precios para favorecer al pueblo, sino que el Ministerio de Comercio únicamente se ha dedicado a avalar todos los precios que imponen los empresarios”, aseveró este dirigente gremial, para concluir que “estos gobiernos neoliberales que elige el pueblo no deciden nada si no es a través de la consulta con la embajada de Estados Unidos o con los organismos financieros”. Léase Agencia ACAN-EFE (2007).

11 Léase Argenpress (2007: 276). De hecho, un estudio elaborado por la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONONG) cuyo título es

"Estudio. Industrias Extractivas: Minería y Petróleo" afirma que bajo las actuales leyes cerca del 31% del territorio hondureño, de 112.492 km², está en poder de transnacionales mineras por vía de concesiones. Léase EcoPortal.net (19 de marzo de 2005).

12 Cabe señalar que la demanda de los obreros en esas negociaciones era por un incremento del 30% al salario. Sin embargo, fue el gobierno el que fijó un aumento superior al 60%. De esta manera el salario mínimo mensual para el área rural se elevó a 4.055 lempiras (unos 211 dólares con la tasa de cambio de marzo de 2010) y para el sector urbano a 5.500 (aproximadamente 287 dólares). Léase El Heraldo (11 de noviembre de 2009).

13 En cierto sentido, una situación parecida experimentó Argentina entre los años 2001 y 2003. La crisis integral del país del Río de la Plata dio paso a un cuestionamiento y a una redefinición de los parámetros doctrinarios seguidos desde la era de Menem. La estructura de oportunidades políticas que se les presentó a Eduardo Duhalde primero y a Néstor Kirchner después pasó en primer término por una reinterpretación política de la economía en clave neoliberal y no por un ajuste técnico, como lo había conceptualizado el gobierno de Fernando de la Rúa; en segundo lugar por una modificación en las alianzas nacionales, dado el alto grado de descrédito de la clase política y en tercer término por una reorientación estratégica en la agenda social y política, en concordancia con la inflexión ideológica regional que se percibía en los inicios del siglo XXI.

14 Zelaya Rosales fue electo con el 49,9 % de los votos válidamente emitidos en las elecciones de noviembre de 2005, en la cual solo participó el 50,34% de los inscritos en el padrón electoral; sin embargo, este porcentaje baja a un 23% si contabilizamos los votos nulos y blancos y a todos aquellos que se abstuvieron en esa oportunidad. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2003 en Argentina, Néstor Kirchner obtuvo una votación de tan solo el 22,24%, siendo el segundo mejor votado por detrás de Carlos Saúl Menem, que recibió el 24,45% de los sufragios.

15 Desde su fundación en 1891, el Partido Liberal de Honduras (PLH) ha sido una de las fuerzas dominantes de la política hondureña en conjunto con su rival más a la derecha, el Partido Nacional. Entre 1933 y 1957 los gobiernos autoritarios nacionalistas (siendo el más prolongado y arquetípico el dirigido por el dictador Tiburcio Carías Andino) mantuvieron al PLH en la oposición. De manera análoga al Partido Liberal de Colombia, el PLH está integrado por múltiples facciones dentro de las cuales ha predominado una postura regional integracionista (de raigambre morazanista), antimilitarista (en razón de su exclusión política tanto por las dictaduras personalistas como por las corporativas) y socialdemócrata (ya en 1932, bajo el liderazgo de José Ángel Zúñiga Huete, esta orgánica partidaria se declaró como un partido de izquierda democrática).

16 Tras la muerte de Modesto Rodas en julio de 1979, Roberto Suazo Córdova se erigió en candidato a la presidencia del PLH en las elecciones programadas para noviembre de 1981 (las primeras tras dieciocho años de gobierno militar). Su triunfo electoral en gran medida fue resultado de la capacidad de traspasar para sí las simpatías electorales que despertaba Rodas.

17 Antes de ser electo presidente, Carlos Roberto Reina Idiáquez fungía de magistrado del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos al tiempo que encabezaba la facción Movimiento Liberal Democrático Revolucionario, de tendencia centroizquierdista y antimilitar, dentro del Partido liberal.

18 Con anterioridad, durante su primer mandato como diputado nacional, José Manuel Zelaya Rosales participó en las comisiones legislativas de Recursos Naturales y Petróleo en el Congreso de su país.

19 Citado de la "Declaración de Principios, Estatutos y Plan de Acción Política" del Partido Liberal de Honduras, disponible en la sección "Estatutos" de su página web <www.partidoliberaldehonduras.hn>. Énfasis propio.

20 Como señalan Dagnino et al. (2006), un rasgo particular del período actual es la pugna entre actores que defienden proyectos políticos opuestos —de manera esquemática, uno democrático-participativo, uno neoliberal y uno autoritario— por dominar los procesos de construcción de la democracia en la región y que utilizan los mismos términos y conceptos. La dificultad reside entonces en saber identificar los distintos e incluso opuestos significados que conceptos como "democracia", "participación ciudadana", "transparencia" o "rendición de cuentas" adquieren al ser apropiados por dichos actores.

21 El programa de gobierno señala específicamente: "La corrupción campea en nuestra sociedad con carta de ciudadanía, para transformarse en elemento arraigado y común en las relaciones de nuestros semejantes. [...] La corrupción es un flagelo que envenena cualquier estrategia de reducción de la pobreza y/o plan de desarrollo y pone en precario el derecho de cualquier ciudadano. [...] La política actual de represión del individuo por el delito común calla con desfachatez frente a la escandalosa impunidad de los delitos cometidos por parte de individuos de cuello blanco, como fraudes y evasión tributaria, malversación de caudales públicos, quiebras fraudulentas de entidades financieras y compras gubernamentales adulteradas, así como contratos y concesiones amañadas por los íntimos del poder". Citado de "Visión del poder ciudadano para transformar a Honduras" en Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (SIERP) (Tegucigalpa: SEDP) <www.sierp.hn>, subsección "Otros" en "Biblioteca y Documentos".

22 En paralelo a la campaña electoral de Zelaya en 2005, la candidatura a la presidencia de Michelle Bachelet en Chile tuvo entre sus objetivos el promover "un gobierno ciudadano" que posibilitara reencontrar

a los votantes de la Concertación de Partidos por la Democracia con la política y los políticos. En un escenario económico de superávit fiscal y de grandes ganancias empresariales, pero con desiguales niveles de inversión social y de redistribución en los ingresos, esta convocatoria no solo tuvo como efecto elevar las expectativas ciudadanas sino también –y de manera no prevista por sus patrocinadores– relegitimar el derecho a la movilización social (como fueron las huelgas de los trabajadores forestales y de los obreros subcontratistas de la estatal minera cuprífera CODELCO, y las movilizaciones de los estudiantes secundarios en

todo el país, que desembocaron en graves conflictos entre su gobierno y estos sectores organizados). En este sentido, al alentar con su discurso la participación, movilización y organización social, la convocatoria para construir “un gobierno ciudadano” contribuyó –sin proponérselo– a desnudar y cuestionar las bases autoritarias y los marcos antidemocráticos sobre los que está construida la estabilidad institucional y la gobernabilidad política en el Chile post dictatorial, bases y marcos que los propios partidos del ahora ex conglomerado de gobierno consensuaron con la derecha política y militar en 1990.

Desastre natural y acción colectiva de los sectores populares en Chile

Los saqueos en Concepción tras el 27/F

MARTÍN SANZANA CALVET

Magister en Desarrollo Urbano (PUC). Director del Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano.

Resumen

A partir del registro de acciones y datos oficiales el artículo analiza los hechos de violencia social ocurridos tras el terremoto del 27 de febrero pasado en la segunda mayor ciudad chilena. El objetivo es relacionar la acción social y acción estatal con niveles de conflicto a escala de la formación social chilena, en el marco de un neoliberalismo maduro y en el instante del traspaso del gobierno desde la coalición de la Concertación hacia un presidente de derecha.

Abstract

From press records and official data, the article analyzes the social violence in Chile's second city after the 27 February earthquake. The aim is to link state and social action with conflict in the Chilean social formation, in a context of mature neoliberalism and at the moment of the handover from the Concertación coalition to a right-wing president.

Palabras clave

Conflicto social, violencia, saqueos, terremoto, neoliberalismo

Key words

Social conflict, violence, pillage, earthquake, neoliberalism

Cómo citar este artículo

Sanzana Calvet, Martín 2010 "Desastre natural y acción colectiva de los sectores populares en Chile: los saqueos en Concepción tras el 27/F" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Introducción

El presente artículo corresponde al avance de una investigación en curso sobre acción social y desastres naturales en Concepción, Chile, tras el sismo de 8.8 puntos en la escala Richter del 27 de febrero de 2010. El estudio analiza las dinámicas sociales que se desataron tras el terremoto, específicamente las acciones disruptivas del orden social normal, como los “saqueos” y los grupos de “autodefensa” y la recuperación del control social por las fuerzas del orden estatal. El foco principal de la investigación se centra principalmente en el período comprendido desde el terremoto hasta la toma de posesión del presidente Sebastián Piñera el 11 de marzo. A partir de la sistematización de las acciones se busca problematizar el significado social de los hechos de violencia, de los cuales existen varias interpretaciones vigentes que versan sobre lo que pasó y por qué, sin que los hechos sociales hayan sido suficientemente levantados y analizados.

Las fuentes principales de datos son tres: a) para cifras y estadísticas, la información institucional de organismos estatales como las policías, las fuerzas armadas, la fiscalía regional y el Ministerio del Interior; b) para cifras y percepciones, la prensa escrita regional, en especial los diarios *El Sur* y *La Estrella* (ambos del grupo editorial *El Mercurio*) y c) para relatos y valoraciones, entrevistas y *focus groups*. Para la presente etapa, de la cual emana esta comunicación, se trabajan datos del nivel institucional y de la prensa.

Específicamente, en cuanto a la información oficial, se analizan en este artículo las estadísticas de la policía de Carabineros sobre denuncias de delitos y detenciones entre el 27 de febrero y el 13 de marzo de 2010, comparándolas con las del mismo periodo del año anterior.

¿Explosión lumpenproletaria o rebelión popular?

Entre las interpretaciones más difundidas existen dos que han cobrado mayor relevancia. La primera y más extendida es la imagen de una explosión social generada por turbas de lumpenproletarios o “flaites” (jóvenes marginales), que aprovechan la “noche”, es decir, la caída del Estado, para delinquir y atentar en particular contra la propiedad y el orden. Esta imagen fue ampliamente difundida por los medios televisivos y contribuyeron a ella las propias imágenes de los saqueos, unidas a las declaraciones de desesperación de la alcaldesa de Concepción y del alcalde de Hualpén, quienes exigieron el arribo de las fuerzas militares y el estado de sitio, y las declaraciones de los habitantes de la zona, quienes por todas partes denunciaban la existencia de turbas saqueadoras que amenazaban su propiedad y su seguridad personal.

Uno de quienes han formulado esta idea es Nicolás Ibáñez, controlador junto a Wal Mart de los Hipermercados Líder, quien con uniforme militar y en compañía de fuerzas militares observó en persona el saqueo de uno de sus locales en Talcahuano:

“Está muy claro que predominó lo que llamamos el lumpen, gente tremendamente agresiva, violenta. La mayoría de las dueñas de casa con las que yo estuve no se han dejado llevar por la necesidad y han mantenido la cordura, la calma y el orden. Vimos gente absolutamente desquiciada,

que existe en todas las sociedades del mundo, para lo cual existen las leyes, la fuerza pública y una cierta ética que favorece el orden. En Chile, la figura de la autoridad se ha ido menoscabando paulatinamente en la última década” (Nicolás Ibáñez, en entrevista a *La Segunda*, de Santiago de Chile, del 4 de marzo de 2010).

Otra interpretación es la de Gabriel Salazar, destacado historiador chileno y premio Nacional de Historia, quien observa en los saqueos la caída de los mitos de opulencia de la sociedad chilena neoliberal y la continuidad de la acción histórica de franjas de trabajadores precarios, peones nómades que alternaban trabajo esporádico con bandidaje. Salazar ve en las acciones de esta masa marginal una acción profundamente política:

“Una rebelión popular semi-delictual, que estamos viendo al día de hoy y que va a continuar. Lo más notable hoy es que la rebelión de las masas marginales o mejor dicho de los de empleo precario ha sido más virulenta, extendida y desafiante que nunca y eso hay que examinarlo.” (Gabriel Salazar, en entrevista a *El Ciudadano*, de Santiago de Chile, el 29 de abril de 2010).

El neoliberalismo a la chilena

Es prudente partir por la genealogía del panorama social chileno al momento del terremoto. Al 2010, en Chile han pasado casi 40 años desde el golpe de estado de 1973, más de 30 años desde la instauración de las reformas neoliberales y 20 años de gobierno civil ininterrumpido a manos de la alianza de centroizquierda de la Concertación. Está consolidado el carácter del régimen político y las reformas neoliberales han madurado como en ningún otro país en Latinoamérica, donde ni la crisis financiera global ni las autocríticas de sectores de la Concertación han alterado la hegemonía del gran capital sobre la política y la sociedad. En ese contexto, las discontinuidades provocadas por el terremoto representan la oportunidad de sondear la solidez de la cohesión social y los mecanismos de dominación del orden social hegemónico.

Más allá de los evidentes cambios políticos y económicos, la formación social chilena ha sufrido profundas transformaciones sociales y culturales en el período descrito. Han surgido nuevos estratos y fracciones sociales, en particular en el campo del trabajo, con el aumento notable de trabajadores subcontratados en un régimen de empleo precario y flexible. En el ámbito de las capas medias han emergido nuevas fracciones vinculadas a los servicios empresariales. De manera general, la capacidad de consumo de bienes y servicios de la población chilena se ha acrecentado notablemente, más que por el crecimiento promedio del ingreso, por el acceso y ampliación del crédito y la capacidad de endeudamiento de las familias.

En el plano cultural, la dictadura militar de Pinochet, la transformación de la estructura social y la hegemonía capitalista neoliberal han modificado sustantivamente las pautas y valores culturales de los chilenos y chilenas. Luego de un período largo de disciplinamiento por el terror, los valores de la solidaridad y la cooperación han cedido espacio al individualismo, al consumismo y de manera general al espíritu “emprendedor” del capitalismo, que en esta formación social se asemeja bastante a un “todo vale” para la sobrevivencia en la selva de la competencia neoliberal. De manera general, la organización social colectiva se ha retraído.

do a espacios microsociales: la familia, el club de fútbol o la actividad criminal. El acceso a internet ha crecido notablemente y en determinados estratos etéreos y económicos se ha vuelto una herramienta imprescindible de comunicación. Se ha incrementado la penetración de los patrones culturales de los países centrales, en especial de EEUU y Japón.

Si la transición a la democracia se forjó sobre la base de la derrota electoral de Pinochet en el plebiscito de 1988, su carácter se definió por los acuerdos y negociaciones entre la cúpula militar, la derecha política y los gobiernos civiles, cimentados ante la ausencia de la izquierda y el licenciamiento del movimiento popular. Curiosamente, el vacío social que dejó ese retraimiento de las formas conocidas de acción colectiva no parece haber sido llenado hasta recientemente por nuevas formas, vinculadas en su mayoría a la redes sociales por internet.

Desde 1990 al presente han existido innumerables movilizaciones, huelgas y acciones de protesta colectiva localizadas y parciales, de carácter espontáneo u organizado, la mayoría de las cuales no ha cobrado gran impacto nacional. En cuanto a las grandes movilizaciones de masas, propias del periodo previo al golpe y presentes en las etapas de mayor oposición a la dictadura, desde 1990 a la fecha solo se puede citar a 1997 y 2006 como años de potentes movilizaciones sociales y momentos de alza de la confrontación social. En 1997 (año del retiro de Pinochet de la comandancia en jefe del Ejército) se generaron simultáneamente grandes huelgas de los trabajadores de la salud, los estudiantes universitarios y el resurgimiento del conflicto mapuche en la opinión pública, y en las elecciones parlamentarias de ese año hubo una histórica alza de los votos nulos. El 2006, inicio del mandato de Michelle Bachelet, estuvo marcado por fuertes huelgas de los trabajadores subcontratados del cobre, por las de los trabajadores de la industria del salmón y sobre todo por la revolución pingüina, una rebelión estudiantil que se extendió a todas las regiones y paralizó a Chile.

La metropolización del gran Concepción

El caso de estudio corresponde a una ciudad ubicada en la costa de la Región del Bio Bio, al centro-sur de Chile. Esta "Área Metropolitana de Concepción" (AMC) comprende 10 comunas: Talcahuano, Tomé, Penco, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Coronel, Lota, Hualqui, Santa Juana y Concepción (Capital Regional), y tiene una población superior al millón de habitantes. El AMC es el principal polo industrial y portuario del Sur de Chile, concentrando las industria del acero, petroquímica, termoeléctrica, pesquera y forestal, y servicios portuarios, producto de las políticas de industrialización promovidas por el Estado en el marco del periodo desarrollista, estrategia que aceleró el crecimiento urbano y demográfico de la zona.

Con el Golpe de 1973 se destruyó la capacidad política de la zona, con la destrucción de los movimientos sociales y populares, el acallamiento a la sociedad civil y la eliminación social, exilio, prisión y asesinato de gran parte de los mejores cuadros de las jóvenes generaciones de luchadores y profesionales. A partir de los años ochenta, con las privatizaciones y la apertura exterior, el AMC comenzó a recibir flujos de capitales provenientes de las transacciones propias del modelo primario exportador neoliberal que se consolidó en la zona y que ha

vinculado estrechamente esta región a la dinámica económica de los mercados del océano Pacífico. Estos flujos posibilitaron una expansión considerable de los servicios empresariales en el área, al mismo tiempo que las nuevas modalidades de explotación capitalista precarizaban el empleo y creaban nuevas formas de pobreza urbana.

Los indicadores sociodemográficos de esta zona son particularmente deficientes: se ha mantenido durante décadas entre las mayores tasas de pobreza y sus comunas suelen encabezar los indicadores nacionales de desempleo. Producto de la creciente desigualdad socioespacial, conviven en el AMC áreas de altos desarrollo e ingreso relativo con zonas altamente deprimidas. Demográficamente las comunas de carácter residencial crecen explosivamente en patrones suburbanizadores, mientras que las comunas industriales, mineras y portuarias decrecen y la comuna central mantiene su población.

El terremoto y la acción social

Cuadro 1. Cronograma de la emergencia

Fecha	Suceso
27 de Febrero	- Terremoto de 8.8 puntos y maremoto. - Cortes de luz, agua y teléfono. - Saqueos.
28 de Febrero	- Saqueos. - Control militar y toque de queda. - Ochocientos militares destinados.
1 de Marzo	- Saqueos. - Ampliación del toque de queda. - Mil trescientos militares desplegados.
7 de Marzo	- Disminución del toque de queda. - Ocho mil militares desplegados.
11 de Marzo	- Réplica de 7.2 puntos y alerta de tsunami. - Asume la presidencia Sebastián Piñera.

Fuentes: diarios *El Sur* y *La Estrella*, 2010.

El terremoto provocó el inmediato corte de luz, agua y teléfono en el Gran Concepción y la destrucción de viviendas, instalaciones, edificios y vías públicas. Particularmente grave resultó la destrucción del puente de mayor antigüedad sobre el río Bio Bio, la inhabilitación del segundo puente más antiguo y la caída de un tramo en el acceso al puente más reciente, así como daños que inhabilitaron el puente ferroviario. El maremoto que alcanzó la costa en las siguientes horas se encargó de destruir y dañar la infraestructura portuaria y los astilleros, la industria pesquera, los balnearios, las caletas de pescadores y el centro de la ciudad de Talcahuano. Como resultado de lo anterior, la movilidad se dificultó enormemente y prácticamente toda la ciudad estuvo varios días sin luz ni teléfono y, por ende, sin televisión ni internet. Solo una estación local de radio transmitía para quienes pudieran captarla desde la radio del auto o en equipos a pila.

Desde la radio se emitieron los llamados de las autoridades a mantener la calma, descartando la existencia de un alerta de maremoto, aun cuando en algunos casos este ya se había producido. Durante varios días no se comunicaron instrucciones prácticas de ayuda sino relatos de los vecinos sobre pérdidas materiales y humanas, y saqueos y amenazas de turbas pilladoras. A medida que llegaba la electricidad, los medios televisivos y la información de internet reforzaban las imágenes de la tragedia y el caos por los saqueos, amplificando el temor social y desarticulando la acción colectiva. Así, la caracterización de los hechos expresada por los medios de comunicación analizados se refería constantemente a la situación como “caos”, “anarquía”, “desórdenes” y “terremoto social”, más que a “desastre natural” o “catástrofe”.

Dada la fuerza de ese estado de cosas nos abocamos en primer lugar a comparar la cuenta global de los delitos (violación, homicidio, hurto, robo con fuerza, robo con violencia, lesiones, violencia intrafamiliar, ley de drogas, incendio, desórdenes, amenazas) del año 2010 con el mismo periodo del 2009 (27 de febrero a 13 de marzo). El resultado es a primera vista algo desconcertante, ya que la cuenta global de delitos desciende, precisamente cuando la exposición mediática y la percepción social de los delitos en ese período asciende a niveles máximos de la escala social. ¿Y en cuánto desciende el nivel de denuncias registradas? En un 50%.

Cuadro 2. Denuncias de delitos a Carabineros en el AMC

	2009	2010	Disminución
Total	2092	1048	50%

Fuente: Carabineros de Chile, 2010.

Sin embargo, si los delitos totales disminuyeron, no así aquellos relacionados específicamente con la categoría de “robo con fuerza”, la más cercana al carácter de los saqueos, y efectivamente se constata un sustancial incremento de las denuncias de saqueo en el Área Metropolitana de Concepción en el período analizado.

Cuadro 3. Denuncias por robo con fuerza en el AMC

	2009	2010	Incremento
Total	317	455	44%

Fuente: Carabineros de Chile, 2010.

Hasta el momento no es posible estimar con precisión el número de saqueos al conjunto de establecimientos comerciales, aunque hay mayor seguridad en cuanto a las cifras de los establecimientos grandes y centrales que con respecto a los comercios pequeños y medianos. De modo referencial podemos indicar los siguientes números, desde la fuente de prensa.

Cuadro 4. Cantidad de saqueos

Establecimiento	Cantidad
Supermercados e hipermercados	16
Grandes almacenes y sus bodegas	5
Grandes industrias y sus bodegas	4
Molinos y sus bodegas	1
Bancos y cajeros automáticos	4
Farmacias	15
Estaciones de servicio o bencineras	12
Tiendas	Indet.
Pequeños mercados y comercios	Indet.
Pequeñas industrias y talleres	Indet.
Viviendas particulares	Indet.

Fuentes: diarios *El Sur* y *La Estrella*, 2010.

La mayoría de los saqueos se realiza a fuentes de provisiones, medicamentos, combustible y bienes de consumo, y se registran cuatro incendios intencionales de gran magnitud, tres a supermercados y uno a una multitienda. Con respecto a la información de saqueos y asaltos a tiendas y pequeños establecimientos hay cifras contradictorias y muchos relatos sin cifras determinadas. Para el caso, considerando además la observación directa es posible inferir sin temor a equivocarse que los saqueados hayan sido varios cientos de locales comerciales pequeños o medianos en el conjunto del Área Metropolitana de Concepción. Por el contrario, en cuanto a los saqueos a viviendas particulares, la información es particularmente vaga, ya que las únicas referencias aparecen en las secciones de opinión o en relatos de testigos, adjetivizadas como “muchos”, “algunos”, “demasiados”, sin que se expongan casos concretos.

Sobre la localización de dichos saqueos de acuerdo a la información de prensa, Concepción tendría la mayor cantidad de acciones, seguida de la comuna suburbana de San Pedro de la Paz.

Cuadro 5. Localización de los saqueos principales

Comuna	Cantidad
Concepción	33
San Pedro de la Paz	13
Coronel	3
Talcahuano	6
Hualpén	2
Otras	indet.
Sin información	indet.

Fuentes: diarios *El Sur* y *La Estrella*, 2010.

Los datos de la policía resultan más precisos en cuanto a las denuncias y la tendencia presentada es coherente con la prensa. Aunque Concepción registra la mayor cantidad de denuncias, los incrementos más significativos se registran en las comunas suburbanas, mientras que las periurbanas reducen sus denuncias. La situación de la comuna de San Pedro de la Paz requiere una observación particular: allí no hubo maremoto y el daño estructural principal se constató en los puentes que unen esa comuna a Concepción, más que en viviendas o comercios.

Cuadro 6. Denuncias de robo con fuerza

Comuna	2009	2010
Concepción	180	181
San Pedro de la Paz	52	102
Talcahuano	31	43
Chiguayante	5	32
Hualpén	26	26
Penco	18	37
Coronel	22	68
Lota	11	55
Otras	11	13

Fuente: Carabineros de Chile, 2010.

Por otra parte, quienes ejecutan la acción estatal represiva son los efectivos de las fuerzas armadas, la policía civil y la policía de Carabineros. Las dos primeras jornadas las fuerzas de orden contaban con pocos cientos de efectivos, la mayoría policías, dado que gran parte de la dotación de marinos disponibles se encontraba reparando los daños en la base naval. Esa situación se revirtió con el transcurso de los días, hasta el establecimiento de un control militar efectivo.

Cuadro 7. Despliegue de militares en AMC

Fecha	Cantidad
27 de febrero	0
28 de febrero	1.000
1 de marzo	3.000
5 de marzo	5.000
11 de marzo	6.000

Fuentes: diarios *El Sur* y *La Estrella*, 2010.

En cuanto a las acciones represivas, aparte de la disuasión y control de la movilidad, los resultados principales son las detenciones y la muerte de un civil por una golpiza de una patrulla de la Armada durante el toque de queda en Talca-

huano. En cuanto a los detenidos, la información policial arroja un incremento en las detenciones.

Cuadro 8. Detenciones por robo con fuerza en el AMC

	2009	2010	Incremento
Total	35	102	191,00%

Fuente: Carabineros de Chile, 2010.

En comparación con los reportes de prensa, los datos son algo contradictorios, ya que estos indican casi doscientas detenciones para los primeros tres días. Al paso de una semana se habla de ciento diez detenciones totales, al paso de un mes autoridades hacen referencia a 260 personas en prisión preventiva. ¿Qué pasó? En primer lugar, en los primeros días la información de prensa era más imprecisa y las detenciones se realizaban *in situ*. Al correr una semana la información entre la prensa y la policía concordaba, y al mes, producto de la creciente persecución judicial a los saqueadores, se verificaron nuevas detenciones en un contexto de normalización. Así el número de condenados había pasado de cero a ciento sesenta y siete. También se habían recuperado dos mil especies y objetos robados, muchos de ellos devueltos por quienes los sustrajeron y se habían incautado más de sesenta vehículos presuntamente utilizados en los saqueos. La información policial al respecto es coherente en lo global pero deja varias interrogantes. En primer lugar, en cuanto a la baja relación entre saqueos y detenciones. Si los participantes fueron efectivamente decenas de miles, ¿cómo el número de detenciones es tan bajo? La respuesta tiene al menos dos componentes: en primer lugar, las fuerzas policiales existentes las primeras 24 horas mayoritariamente no realizaron detenciones o confrontaciones en situaciones de masas; y posteriormente el control militar se hizo efectivo cuando la mayor parte de los saqueos ya se había realizado, e implicó una disuasión efectiva.

En cuanto a la localización de las detenciones, el registro de prensa indica que hubo acciones de represión y detenciones en las comunas centrales y suburbanas, y la ausencia de información al respecto en las comunas más periféricas. La información policial en un punto no es suficientemente coherente con el registro de prensa: comunas donde la prensa declara que hubo detenciones aquí aparecen como si no las hubiera habido.

Si bien no se disponen aún de datos completos que permitan determinar con precisión quiénes fueron los saqueadores (sexo, edad, clase social, etc.), sí es posible establecer cuál es la representación social dominante que recogen los medios de comunicación sobre la figura del saqueador: antisociales, delincuentes, flaites, desconocidos, hordas, ladrones, lumpenproletarios, muchedumbre o multitud, extraños, pillos, saqueadores, supervivientes, vándalos, zombies. Por otra parte, se puede comparar esta imagen con la representación de la figura de quienes defienden su propiedad y seguridad: habitantes, pobladores, propietarios, sociedad civil, vecinos. Las menciones hacia quienes saquean los caracterizan en primer lugar

como colectivos sociales, de corte delictual y ajenos a la comunidad. Quienes se defienden son caracterizados básicamente como residentes de un sector, propietarios de algo y miembros integrados a la sociedad.

Cuadro 9. Detenidos por robo con fuerza

Comuna	2009	2010
Concepción	20	24
Talcahuano	4	0
San Pedro de la Paz	2	3
Chiguayante	3	0
Hualpén	1	13
Penca	1	15
Coronel	1	42
Tomé	0	2
Lota	2	3
Otras	1	0

Fuente: Carabineros de Chile, 2010.

En relación a cuántos fueron los saqueadores, nuevamente chocamos con la ausencia de datos disponibles, fiables y estandarizados pero, de manera indirecta, tomando en consideración la información de prensa analizada, podemos estimar ciertas cantidades. Se señala que la cantidad de participantes en los saqueos de supermercados, hipermercados, multitiendas, industrias y bodegas fue de miles por cada sucursal. En el caso del molino, se estima en cinco mil personas, y en el caso de tiendas, estaciones de servicio y pequeños comercios, de cientos por cada establecimiento. Vinculando esa estimación únicamente con los saqueos principales que tenemos establecidos serían no menos de treinta mil participantes y ello sin considerar los saqueos a tiendas y comercios medianos y pequeños, de lo cual no hay datos.

Con respecto a la identidad de los detenidos y procesados, la información disponible nuevamente es insuficiente, pero hay un dato relevante: la casi totalidad no tenía antecedentes policiales previos. Del total de condenados, además, la prensa ha destacado los procesamientos y condenas por saqueo de siete bomberos, ocho militares, dos profesionales y una pobladora. Si asumimos que los detenidos son una muestra relativamente representativa del total de saqueadores, hay una discordancia entre ese perfil y la representación dominante del saqueador como delincuente de clases populares.

En relación al otro fenómeno social significativo, el surgimiento de las auto-defensas de vecinos organizados, la falta de confiabilidad nos lleva a centrarnos más bien en la existencia de las acciones de autodefensa en sí mismas, no así en sus eventuales enfrentamientos con terceros. Los reportes indican la presencia de grupos de autodefensa en todas las comunas del Área Metropolitana, excepto en

dos de carácter periurbano. Las fuentes exponen un sinnúmero de descriptores para estas autodefensas vecinales; sin embargo los elementos comunes de todos ellos radican en: a) la instalación de barreras u obstáculos que cercan un perímetro barrial determinado; b) la existencia de turnos o guardias de vigilancia vecinal sobre los puntos de entrada-salida del perímetro; c) la presencia de armas de fuego y objetos improvisados como armas (palos, cuchillos, etc.) y d) el surgimiento de una organización vecinal espontánea que regula los turnos y gestiona la provisión de víveres obtenidos desde las fuentes oficiales, la solidaridad o los propios saqueos.

Finalmente, llama la atención que se registre en la prensa lo que podemos denominar la categoría de “cooperación entre carabineros y saqueadores”, situaciones en las cuales la policía facilita el ingreso y salida de las personas que saquean a fin de evitar la destrucción del local y lograr una repartición equitativa de los bienes y limitada a los productos de primera necesidad, la cual se repite en cinco menciones para el caso de saqueos a supermercados o hipermercados en Concepción, Hualpén y San Pedro de la Paz.

Consideraciones finales

Del análisis de las acciones se destacan tres hechos sociales esenciales. Primero, los saqueos como ofensiva de “los que no tienen”, o de quienes “quieren tener”, bienes y estatus. Segundo, la defensa de “los que tienen”, bajo el temor de que los otros les quiten a ellos su propiedad privada. Tercero, la acción del Estado neoliberal, que incapaz de prevenir o gestionar la catástrofe prioriza su acción histórica de defender la sociedad colonizada (esta vez por el neoliberalismo) ante las amenazas reales o imaginarias de lo que Salazar denomina “bajo pueblo” (Salazar, 1990: 64) y controlar y castigar a quienes infringen el orden social.

“...hasta el momento no hay ningún indicio serio de que turbas hayan atacado viviendas particulares y pese a ello los grupos armados de autodefensa se multiplicaron explosivamente por toda la ciudad para defenderse de esas hordas marginales”

La hipótesis que de aquí emerge es que no se trataría propiamente de una explosión lumpenproletaria ya que, como se ha visto, en las representaciones de los saqueos aparece con mucha más fuerza que en los hechos el actor popular marginal. Aunque eventualmente ese sujeto pueda haber sido mayoritario en el fenómeno, hay bastantes indicios de que franjas no menores de capas medias participaron en dichas acciones. Además, hasta el momento no hay ningún indicio serio de que turbas hayan atacado viviendas particulares y pese a ello los grupos armados de autodefensa se multiplicaron explosivamente por toda la ciudad para defenderse de esas hordas marginales. De lo anterior se desprende una primera afirmación: el campo del conflicto se encuentra en la propia sociedad y al menos una porción de esta ya tiene identificado y caracterizado a su “enemigo”.

Alain Touraine (1987: 91) afirma que “el conflicto no es contradicción ni revuelta, sino forma social de la producción de la historicidad, de la producción de la sociedad por sí misma”. Ello parece apropiado en este caso, en el cual el conflicto parece ser el reflejo fiel de la sociedad que lo produce, a la vez que la reproduce. Cada grupo social parece temer a su propia sombra social, siempre más baja en la escala social. ¿En qué medida no prima aquí el miedo a caer en la *underclass* (Bauman, 2006)? Es decir, el temor a perder los bienes y estatus que asignan determinada posición, y a causa de ello, asemejarse a la clase desposeída.

Si hacemos una analogía de estos hechos con los disturbios en Los Ángeles de 1992, descritos por Davis (2001: 7), cabe esperar un incremento de los criterios de seguridad y segregación en el urbanismo de la reconstrucción, un urbanismo carcelario que se vuelve a la vez un instrumento de control social y un nicho de rentabilización de las inversiones inmobiliarias, donde la base de todo el edificio social es el miedo. Sobre ello, podemos citar a Wacquant (2007: 317) cuando indica que frente a la marginalización la respuesta predominante del poder es el giro hacia el *Estado penal*, la criminalización de la pobreza “por medio de la contención punitiva de los pobres en los barrios decadentes más aislados y estigmatizados donde están recluidos”. Asimismo, Foucault (2000: 28) considera que el mecanismo del poder es esencialmente *la represión*; y el poder es *la guerra proseguida por otros medios*.

Por otra parte, Tironi (1990: 25) ha planteado que la violencia aparece asociada “a debilidades en la capacidad de integración al sistema político”. En este caso, habría que verificar en qué medida esta violencia social es indicador del discutido agotamiento del pacto político de la transición chilena y sus mecanismos de reproducción de la coerción y el consenso y en qué medida se corresponde a procesos de mayor duración en cuanto a la constitución de las clases populares y las capas medias.

Además, el examen de los resultados sugiere tal vez más preguntas que respuestas. La primera pregunta que queda formulada se refiere a la profundidad de la acción militar: dado que aún no se accede al registro de acciones de las fuerzas armadas en el período de toque de queda, queda la duda de si existió una acción estatal significativa de represión y control que esté velada, en particular enfrentamientos y detenciones en cantidades que configuren hechos sociales relevantes.

La siguiente pregunta es en cuanto al ciclo histórico: en una reciente investigación sobre conflictos ambientales en el AMC (Sanzana, 2010) concluyo que entre 2006 y 2009 se observa un ciclo de descenso y reflujo en la lucha de clases en Chile, que culmina con la elección de un multimillonario de la derecha chilena como presidente. ¿Esta combinación de terremoto y explosión social ha alterado sustancialmente ese ciclo?

Como se decía anteriormente, la hipótesis de investigación que estamos elaborando rechazaría la idea de una simple explosión lumpenproletaria. Ahora bien, tampoco la idea de una rebelión del bajo pueblo parece plenamente satisfactoria, por cuanto hace descansar en ese agrupamiento social la iniciativa de la acción social y le asigna un valor positivo, cuando no está claro en qué magnitud ese movimiento respondió a una acción de descontento sistémico o histórico, impulsado por la escasez y la incertidumbre, que aprovechó espacios de libertad, y en

qué medida primaban franjas movidas por una voluntad de poseer y consumir mercancías individualmente y satisfacer así plenamente las necesidades que el propio capitalismo instala en el sentido común de la capas subalternas. Lo que parece cierto es que el terremoto generó vacíos sociales y políticos y reactivó la profunda fractura existente en la formación social chilena, a través de una lucha urbana en la cual los actores también respondieron a una determinada configuración histórica y espacial producto de los procesos recientes de neoliberalización y metropolización.

Esta cuestión a lo menos refuerza la necesidad de avanzar en incorporar el sentido de la acción para los actores y las representaciones sociales en la próxima etapa investigativa.

Última pregunta: ¿constituyen estos hechos escaramuzas para reforzar el orden y el control social? O, parafraseando a Marín (2007: 29), ¿en qué medida estos hechos pueden estar indicando “una situación de guerra” a nivel de la formación de clases de las cuales no tenemos clara conciencia?

Bibliografía

- Bauman, Zygmunt 2006 *Confianza y temor en la ciudad: vivir con extranjeros* (Barcelona: Arcadia).
- Carabineros de Chile 2010 *Informe estadístico de delitos. 27 de febrero al 13 de marzo* (Concepción: CDCH).
- Davis, Mike 2001 *Control urbano: la ecología del miedo* (Barcelona: Virus).
- El Ciudadano* 2010 (Santiago de Chile) 29 de abril.
- Foucault, Michel 2000 *Defender la sociedad* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- La Segunda* 2010 (Santiago de Chile) 4 de marzo.
- Marín, Juan Carlos 2007 *Los hechos armados* (Buenos Aires: PICASO).
- Salazar, Gabriel 1990 *Violencia política popular en las ‘grandes alamedas’: 1947-1987* (Santiago de Chile: Ediciones SUR).
- Sanzana Calvet, Martín 2010 “Conflictos ecológicos en el área metropolitana de Concepción”, Ponencia aprobada para la Conferencia Internacional Waterlat, San Pablo, 25 al 27 de octubre.
- Tironi, Eugenio 1990 *La invisible victoria. Campañas electorales y democracia en Chile*. (Santiago de Chile: Ediciones SUR).
- Touraine, Alain 1987 *El regreso del actor* (Buenos Aires: Eudeba).
- Wacquant, Loïc 2007 *Los condenados de la ciudad* (Buenos Aires: Siglo XXI).

Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad política

El movimiento social
haitiano en 2010

SABINE MANIGAT

Socióloga y politóloga; profesora e investigadora en la Universidad Quisqueya de Haití.

Resumen

La autora realiza un análisis de las perspectivas de reconfiguración e incidencia política de los movimientos sociales en Haití ante la coyuntura de las próximas elecciones legislativas a finales de 2010. Enfocando el terremoto que devastó buena parte del país el 12 de enero de 2010 como el último parteaguas en la vida política haitiana, se presenta una retrospectiva del papel histórico de los movimientos sociales, haciendo hincapié en su auge durante el período inmediato posterior a la caída de la dictadura duvalierista y en su cooptación e instrumentalización en la era aristidiana. Así, se llega a un panorama de la situación al momento del terremoto y se estudia su importancia luego del desastre natural, ante las carencias e incluso ausencia total del Estado.

Abstract

The writer examines the perspectives of reconfiguration and political incidence of social movements in Haiti in the context of the legislative elections to be held towards the end of 2010. By focusing on the devastating earthquake of January 12, 2010, the latest turning point in Haiti's political development, a retrospective review of the historical role of social movements is presented through its peak during the period that immediately followed the fall of dictator Jean Claude Duvalier, to being co-opted and operationalized during Aristide's rule. Thus a picture of circumstances before the earthquake is conveyed and then its importance after the natural disaster, in the face of scarcity and even absence of government control, is estimated.

Palabras clave

Sociedad civil, sociedad política, movimiento campesino, clientelismo, instrumentalización, reconstrucción, ayuda externa

Keywords

Civil society, political society, peasants' movement, cronyism, operationalization, reconstruction, foreign aid

Cómo citar este artículo

Manigat, Sabine 2010 "Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad política. El movimiento social haitiano en 2010" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Una pregunta central se plantea después del seísmo del 12 de enero de 2010: ¿Qué papel puede desempeñar el movimiento social en la recomposición del paisaje político –una etapa impostergable hacia la recuperación de la nación–?

Se entiende aquí, pragmáticamente, que el movimiento social remite a las dinámicas colectivas con inspiración y/o contenido social que expresan los intereses y las ideologías dentro del cuerpo social en momentos determinados. Se entiende asimismo que, más allá de las particulares expresiones que puede asumir una fracción o una fase de un movimiento social determinado, este entraña demandas y/o proyectos que *dicen* las fuerzas sociales y, por ende, las clases sociales que le dan vida y sentido.

En Haití, el movimiento social acarrea una herencia histórica de populismo y de clientelismo, pero también una tradición de representación de los excluidos contra "los de arriba"¹, que hacen a su perfil a menudo radical y siempre de amenaza directa contra el orden vigente. Por lo general, no ha conllevado una propuesta de convocación nacional sino más bien una perspectiva ante todo opositora.

La historia: surgimiento, auge y ocaso del movimiento social haitiano

Lejos de haber sido relegadas de la definición de las aspiraciones democráticas, las problemáticas de las clases sociales, del Estado y su contenido permean toda la evolución política del país hasta el día de hoy. El por qué de este perfil atípico para la región nos remite a elementos de tipo histórico y sociológico.

Durante los primeros 180 años de su evolución, las contradicciones sociales en el seno del movimiento social se manifiestan de modo privilegiado bajo la forma de movimientos populares más o menos politizados, esporádicos y discontinuos. La dirigencia de esos movimientos reviste a menudo un carácter carismático y ostenta –o explota– una visión dicotómica de la sociedad y del conflicto social. Esos movimientos han sido objeto de varios estudios monográficos pero fueron poco estudiados de manera sistemática². En general, el componente populista llama la atención de los autores, lo mismo que su instrumentalización política por los grupos oligárquicos que se disputan el poder.

En suma, y en comparación al resto del continente, al iniciarse el periodo post duvalierista Haití es un Estado atrasado en cuanto a servicios básicos, nivel de urbanización y de industrialización y grado de organicidad de las relaciones sociales y políticas. Además de la débil tradición organizacional conviene subrayar el muy bajo desarrollo del sistema de educación, un aspecto sin duda insoslayable en la constitución de los sujetos políticos, individuales y colectivos.

Es a partir de 1986 cuando el movimiento social haitiano experimenta un desarrollo estelar. Todas las aspiraciones y los proyectos confinados durante treinta años de dictadura son desatados y se plasman en un abanico completo de formas

organizacionales: comités de barrio, grupos eclesiales de base, asociaciones de jóvenes, de mujeres, de profesionales, estudiantiles, ecológicas, partidos políticos... Se distinguen tres tipos de organizaciones que, durante una primera fase que va de 1986 a las elecciones de diciembre de 1990, que llevan a Jean Bertrand Aristide a la presidencia, se desempeñan como un amplio flujo aparentemente unánime, con reivindicaciones propias de las salidas de dictadura y predominio de reclamos de libertades: son organizaciones por los derechos cívicos y políticos y por la libertad de expresión, que opacan el desarrollo de sectores más clásicos –gremiales y sindicales–, sin embargo presentes dentro del movimiento. Empero, atrapado por una politización extrema del escenario en esa coyuntura de escasos cuatro años, fragilizado por la falta de tradición organizativa que lo torna dependiente de grupos y partidos políticos, el movimiento social cae en una espiral de enfrentamientos con los gobiernos de turno y competencia por el poder que lo pone a la zaga de la clase política, hasta llegar a la presidencia de Aristide. Allí termina el gran auge del *unanimismo* que, si bien resultó contra-productivo en la conquista de derechos y posiciones específicos, sí contribuyó a romper en forma definitiva con ciertas formas de la exclusión social mediante logros como la libre expresión, el acceso a la información y la generalización del uso del primer idioma nacional, el *kreyol*. Por lo demás, la llegada de Aristide al poder señala el ocaso del movimiento social con su cooptación y luego instrumentalización al servicio del régimen aristidiano.

Siguen diez años de instrumentalización y de desnaturalización, cuando no de marginación. En efecto, la recuperación aristidiana del ala popular del movimiento social da lugar a un proceso de gangsterización de múltiples grupos convertidos en verdaderas tropas de choque del régimen³. El breve renacimiento de un movimiento social –apodado GNB– encabezado por jóvenes profesionales y universitarios logra congregarse dentro de la sociedad civil una fuerza que está en el origen directo del derrocamiento de Aristide. Este intermedio termina lamentablemente entre confusión y absorción, en el marco de la “experiencia 184”⁴. Todo ello afecta definitivamente la legitimidad del perfil social radical que ostentó el movimiento social haitiano desde sus albores. Una suerte de desconfianza inmediata parece afectar los movimientos de protesta y las manifestaciones callejeras aparentemente sin norte y con improbable liderazgo.

Empero, en vísperas del terremoto del 12 de enero de 2010, la coyuntura, marcada por la actualidad política y la proximidad de las elecciones legislativas, propicia una vitalidad renovada de las asociaciones llamadas de la sociedad civil: mujeres, derechos humanos, organizaciones barriales o regionales, todas entran de nuevo a implicarse o a posicionarse respecto de la política. Es que cada coyuntura de crisis social, humanitaria o política despierta en el momento impulsos políticos que polarizan y a veces modifican incluso el movimiento social. Vuelve a sobresalir entonces el problema nodal de las mediaciones. Partidos y sindicatos parecen cobrar una existencia propia, desligada de los grupos sociales y/o sectoriales cuyos intereses tienen la vocación de representar. Esas formaciones no se ven más allá de sus cuadros y la población no se identifica explícitamente con ellas incluso cuando votan a su favor, si lo hacen. Asimismo, los dirigentes de asociaciones o grupos cívicos, tales como la *Initiative pour la Société Civile* (ISC) son

tratados como otros tantos líderes políticos, y aparentemente asumen ese perfil sin mayores reticencias.

El resultado de esta distancia consolidada entre las organizaciones con vocación de representación y los grupos sociales que en principio representan es la persistencia de una dinámica dicotómica en las coyunturas de movilización y de luchas sociales. El caso emblemático más reciente es sin duda el de la batalla por el salario mínimo durante el verano de 2009. Precedido por el eslogan del 1º de mayo, "Patrones y obreros juntos para el desarrollo", ese debate evidenció las dimensiones del control ejercido por el sector privado sobre toda la vida económica del país, en especial sobre las condiciones de trabajo y de reproducción del trabajador, aspectos claves que condicionan, entre otros factores fundamentales, las dimensiones y el nivel de calificación del mercado de trabajo. Fijado en 70 gourdes (1,8 dólares estadounidenses) desde 2003, el salario mínimo tendría que haber sido revisado, por ley, cada año, en función del costo de vida. A la hora de modificarlo el pasado verano, las discusiones y los debates, ampliamente dominados por los intereses privados y bajo la amenaza siempre latente de un lock-out patronal⁵, nunca contaron con un protagonismo fuerte de los sindicatos. El debate fue ante todo parlamentario y de prensa y las pocas manifestaciones obreras durante el mes de julio fueron enseguida calificadas de violentas y nunca contaron con la simpatía de la opinión pública. En suma, el movimiento social haitiano enfrenta una disyuntiva: manifiesta históricamente un ímpetu reivindicativo frente a un interlocutor estatal inexistente y asume un papel propositivo más que reivindicativo al ser limitado con débiles mediaciones partidarias y organizacionales.

Un Estado en ruinas, un pueblo de pie

El terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter que golpeó a Haití el 12 de enero pasado afecta significativamente a regiones y ciudades particularmente pobladas y socialmente activas. Resulta parcialmente destruida la región capitalina, donde está concentrada la mayor cantidad de gente (alrededor de dos millones de habitantes). Dentro de Puerto Príncipe, son muy afectados los barrios populares más densamente poblados (Site Letenel a la salida sur de Puerto Príncipe, Carrefour al Sur) y los barrios con mayor tradición de movilización social (Bel Air, que colinda con el palacio nacional, Carrefour Feuille, al sureste de la capital). Esta primera circunstancia, de coincidencia entre niveles de destrucción y tradición anterior de movilización social de los barrios, condiciona al menos dos fenómenos: la toma y ocupación de los principales espacios públicos más importantes de la región capitalina, y particularmente el Champs-de-Mars frente al palacio nacional; y la temprana y sólida organización de los sitios de refugiados en comités de gestión que recuerdan sin duda los comités de barrios o de vigilancia de los años ochenta y noventa. De hecho, las principales víctimas del terremoto pertenecen a dos categorías socioeconómicas: la clase media que, en Haití, representa un estrecho segmento de un 20 por ciento de la población a lo sumo, ubicada esencialmente en las ciudades y en especial en Puerto Príncipe; y los sectores populares, de lejos mayoritarios en la población, muchas veces de inmigración reciente a la ciudad y con arraigo todavía fuerte en el campo. La combinación de esos factores da lugar

a una pronta ocupación organizada de los espacios públicos por parte de damnificados esencialmente de origen popular y migración reciente. Esta población, que representa, según estadísticas compiladas por las Naciones Unidas, alrededor de un millón doscientas mil personas, se organiza de dos maneras distintas y complementarias: por una parte, la organización de verdaderos *campamentos* espontáneos con sus comités responsables de la recepción y distribución de la ayuda, la seguridad y la limpieza; y por otra, el éxodo hacia las ciudades de origen, en especial de las mujeres y los niños. O sea, los damnificados movilizan su capital social y sus lazos comunitarios primarios para sobrevivir. Ambos movimientos merecen un examen detenido en la medida en que indican la existencia de resortes que hacen al potencial —o a las modalidades— de un movimiento social hoy día parcialmente vivo o en estado de latencia.

“Los primeros equipos de salvamento, los primeros auxilios, las primeras brigadas de retiro y evacuación de cadáveres los constituyeron los jóvenes de los barrios populares de Puerto Príncipe...”

Regresando a los primeros días, se manifestó primero la fuerza de las solidaridades primarias en un contexto de falta de referencias y de canales de expresión. Un poco al estilo de México en septiembre de 1985, fue evidente en las primeras horas que había mucho pueblo y poco Estado. Los primeros equipos de salvamento, los primeros auxilios, las primeras brigadas de retiro y evacuación de cadáveres los constituyeron los jóvenes de los barrios populares de Puerto Príncipe y se puede comprobar una correspondencia interesante entre capacidad de organización de los trabajos y presencia anterior de organizaciones de base, barriales y populares, en diversas partes de la ciudad⁶. Los equipos internacionales de rescate reclamaron después haber salvado unas 131 vidas. Solo en la universidad Quisqueya, la noche del 12 de enero fueron sacados de los escombros, con vida, más de veinte alumnos. Más allá de cualquier estadística de mérito⁷, lo que se subraya aquí es la eficiencia de la movilización popular, y de los jóvenes muy particularmente, en los momentos más dramáticos de la catástrofe. Esa movilización es la misma que lleva a la pronta organización de la población para recibir la ayuda internacional. Es importante, en efecto, subrayar el hecho de que la esperanza generalizada de la población desde las primeras horas fue la fe en la rápida llegada de la solidaridad internacional. La idea era por lo tanto preparar la llegada de dicha asistencia para que pudiera ser rápida y eficazmente repartida. En ese primer momento la población reacciona por lo tanto de manera organizada y concentra sus esfuerzos en la sobrevivencia. Lo que se ha celebrado desde entonces como una especial capacidad de resiliencia de la población haitiana, y que sociólogos haitianos han observado y analizado como una alta capacidad de autorregulación social de las comunidades, permitió evitar todos los riesgos sanitarios y sociales mayores anticipados en la circunstancia.

Se puede hablar también de un repunte de movilización de la sociedad civil en ese contexto. Al lado del papel de las organizaciones barriales conviene señalar

el de varias organizaciones sectoriales, ciudadanas o de derechos humanos, que se han movilizado al lado de los jóvenes de los barrios para trasladar heridos, distribuir agua, repartir alimentos. Más allá de esas acciones de primer auxilio, desempeñan el papel de caja de resonancia de las necesidades populares dentro de ese contexto de urgencia humanitaria. Las organizaciones llamadas de la sociedad civil, o sea, las asociaciones y organizaciones de corte cívico (derechos humanos, ecología) o sectorial (mujeres, jóvenes) monitorean de hecho, y publicitan, la distribución de la ayuda humanitaria y opinan sobre la calidad y la transparencia de las operaciones de distribución. En el mismo acto esas organizaciones desempeñan un papel de observador crítico de las acciones gubernamentales, de la ONU, o de las innumerables ONG que llegan al país en ocasión del seísmo. Van a constituirse de este modo en el sucedáneo más próximo a un movimiento social desde el terremoto. Nuevas organizaciones surgen así en las huellas de esta experiencia, entre las cuales se cuenta una plataforma de mujeres para la justicia social, conocida como *la Plateforme*.

“...el caso del movimiento campesino es tal vez el más significativo, a la vez que el más específico, de un movimiento social pujante pero atrapado entre la sociedad civil y la sociedad política”

Hay que contar, por cierto, con los efectos perversos de la ayuda humanitaria: dependencia, competencia, anomia, caracterizan también a gran parte del cuerpo social, más allá de las masas de damnificados. Se sabe incluso de grupos numerosos de familias, radicadas en barrios populares no afectados por el temblor, que han abandonado sus casas para instalarse en las aceras de las ciudades, con la esperanza de beneficiarse con distribuciones de agua y víveres. El peso de las debilidades estructurales, de la miseria que confina a la indigencia y de las tradiciones clientelistas se hace sentir.

Dicho lo anterior, hechos relevantes contradicen algunos prejuicios difundidos por la prensa internacional, entre ellos, las acusaciones de control de los sitios de refugiados por ex miembros de las pandillas aristidianas y, por lo mismo, la estigmatización de esos sitios como zonas de extrema inseguridad. Un estudio basado en un diagnóstico de terreno, realizado en marzo y abril de 2010, establece por el contrario que los interesados consideran que los lazos con el barrio alrededor influyen considerablemente el factor seguridad. “Cuando la comunidad dentro del sitio es, ella misma, estable (la mayoría de sus miembros siendo originarios del mismo barrio), la seguridad es bastante buena [...] parece que el temblor generó un grado de solidaridad considerable en el seno de la sociedad haitiana. [...] En Delmas 60 [...] los habitantes han descrito un ‘sentimiento de familia’⁸. “Los comités y las brigadas de seguridad organizados por la población han sido a menudo señalados como elementos de garantía de la seguridad y de la buena gestión de los sitios de refugiados. Son interlocutores muy valiosos [...]”. Y el reporte concluye que “[...] la cohesión en el seno de las comunidades en los sitios de damnificados, y entre ellos y la comunidad más amplia, es fundamental” en materia de seguri-

dad. Estas consideraciones son reforzadas por el reporte del Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) que, para el mismo periodo, apunta acerca de la seguridad: “Varios campamentos son manejados por comités que aseguran, en la medida de lo posible, la coexistencia cotidiana. [...] Desempeñan una tarea enorme. La seguridad dentro de los campamentos es proporcionada por la PNH (policía nacional) [...]. Paralelamente, los comités de gestión de los campamentos han organizado brigadas de vigilancia encargadas de proveer a la población la seguridad adentro de los sitios”. La contraparte de esta situación son, en cambio, las quejas sistemáticas de la población afectada acerca de la ausencia de las autoridades.

No ha sido suficientemente resaltado el impacto de esta alta capacidad organizativa de la población haitiana. Por supuesto ha sido invocado su gran instinto de *resilience*, resistencia. No cabe duda de que las debilidades históricas del Estado haitiano como proveedor de los servicios más básicos y de los elementos constitutivos de la gobernabilidad –seguridad básica de la población, gestión demográfica y territorial– han acostumbrado a la población, por así decirlo, a resolver sus problemas sin mayor guía. Esta capacidad de autorregulación, productora de fuertes lazos de solidaridad primaria, es ante todo responsable de la hasta ahora innegable serenidad de los damnificados y, en general, de la tranquilidad social que prevalece en el país. No se ha resaltado lo suficiente el hecho de que Haití ha vivido con un contingente nacional de menos de diez mil policías, sin soldados, y ello antes del despliegue de la misión de la ONU encargada desde hace seis años de *estabilizarlo*. El conocimiento de esas circunstancias plantea sin duda nuevas preguntas referidas al potencial de la sociedad haitiana para encarar la reconstrucción del país y, de un modo más general, un futuro autónomo y soberano.

El movimiento social haitiano en 2010: entre latencia y explosión

Hoy por hoy, algunos sectores se han manifestado, resultado de algunos de los problemas que afligen a una sociedad severamente golpeada físicamente y políticamente acosada por la masiva intervención multiforme de la comunidad internacional en un contexto de debilidad institucional y gubernamental. El sector sindicalizado de los transportes urbanos se ha movilizó en dos oportunidades, en mayo y recientemente en agosto, la primera vez para protestar contra las condiciones de circulación en las calles, con la lentitud de los trabajos de levantamiento de escombros y el atascamiento provocado por la ocupación de las calles por los damnificados. La segunda vez el movimiento tomó la modalidad de una huelga, la cual fue parcialmente observada a nivel de la región metropolitana de Puerto Príncipe. Dentro del panorama de debilidad estructural del movimiento sindical haitiano, el sector de los transportistas ha dado muestra de una vitalidad persistente a lo largo de los últimos treinta años. El transporte urbano e interurbano es mayoritariamente privado y reiterados intentos de las autoridades públicas para fortalecer un sector público en contrapeso con el gremio han fracasado. La manifestación de este gremio en el contexto actual de desencanto general hacia la movilización social atestigüa la terca sobrevivencia de un sector sindical que ha sido históricamente mantenido en la más estricta contención, y que enfrenta la hostilidad combinada

del sector empresarial y del Estado. Empero, el caso del movimiento campesino es tal vez el más significativo, a la vez que el más específico, de un movimiento social pujante pero atrapado entre la sociedad civil y la sociedad política.

Amén de sus manifestaciones históricas tradicionales⁹, el movimiento campesino haitiano tiene una trayectoria contemporánea de mucha autonomía y de innegable poder de convocatoria. A partir de 1987¹⁰ ha sido un actor relevante en lo social, en lo económico y también, inevitablemente, en lo político, aunque nunca permaneció infeudado a una corriente o una organización política específica. Desde el terremoto de enero, el movimiento campesino se ha manifestado en dos oportunidades importantes. La primera atañe al éxodo masivo de más de medio millón de damnificados fuera de la capital y hacia los departamentos no afectados. En dicha oportunidad, las principales organizaciones¹¹ campesinas son las primeras en llamar la atención sobre los problemas planteados por esos desplazamientos de poblaciones: el aumento de las personas –muchas veces refugiadas en sus familias y/o su comunidad de origen– produce el agotamiento de la reservas de cosechas y de las semillas; además, se da una competencia de facto de la ayuda humanitaria con la producción nacional. Las organizaciones abogan a favor de una política de apoyo a la producción nacional. Esta posición es inmediatamente retomada por el Consejo Nacional para la Seguridad Alimenticia (CNSA) y luego por las agencias internacionales, pero con resultados modestos en el mejor de los casos.

La segunda manifestación con relevancia nacional del movimiento campesino está relacionada con la ayuda humanitaria que entró de manera más o menos desordenada en el país. Ligada al tema más global de su impacto en la producción nacional, una denuncia, que degeneró en polémica, surgió a raíz de la donación por la empresa multinacional Monsanto de toneladas de semillas sospechosas de ser genéticamente modificadas. La campaña anti Organismos Genéticamente Modificados (OGM) es lanzada inmediatamente y desborda rápidamente el marco de la polémica inicial entre el Ministerio de Agricultura y el Mouvement Peyizan Papay (MPP). Organizaciones ciudadanas, de derechos humanos y asociaciones alter mundialistas se unen a la protesta. Ello desemboca en grandes manifestaciones en el departamento del Centro con llamados a rechazar las donaciones de semillas y quemas de cientos de sacos de semillas ya distribuidas. El Ministerio de Agricultura aseguró en reiteradas oportunidades que las semillas donadas no eran OGM sino de especies híbridas. A la postre, la polémica salió de la agenda política y el ministerio se mantuvo firme pero el MPP también, con las consecuencias que se pueden vislumbrar sobre las modalidades de la modernización agrícola anunciada por el gobierno y anhelada por ambas partes. *Last but not least*, hay que reconocer que la fase humanitaria de distribución masiva de ayuda alimenticia, así como el aumento que, a pesar de las importaciones humanitarias, ha experimentado el costo de la vida, han militado hasta ahora en contra de una convergencia consistente entre los sectores populares urbanos –principales consumidores de la ayuda internacional y de las importaciones de cereales competidoras con la producción nacional– y las organizaciones campesinas portadoras de un proyecto con acentos a veces paseístas¹² pero, visto desde otra perspectiva, también en línea con problemáticas muy actuales que se vislumbran en el futuro, como la seguridad alimenticia y la preservación de la naturaleza.

El demonio político siempre presente

Hoy día y a pesar de los apremios de lo cotidiano para los cientos de miles de personas sin techo, y de acuerdo a una lógica que solo tiene de absurdo lo que contiene de contradicciones internas a la gobernabilidad del país, Haití entra de nuevo en una coyuntura marcada por el predominio de la política y, más precisamente, de las elecciones. Estas circunstancias que se presentan con regularidad, aquí como en todos los países, acarrearán, aquí y hoy, reminiscencias y reflejos espontáneos dentro del cuerpo social y que afectan específicamente al latente movimiento social y a sus perspectivas de reactivación. Las elecciones planificadas para fines del año 2010 traen consigo una serie de retos y disyuntivas entre las cuales tres merecen especial atención para con el movimiento social: el momento con respecto a la catástrofe de enero; las justificaciones y los apoyos a dicho objetivo y a su calendario; y el espectro político de los sectores y los candidatos implicados.

El momento no ha sido escogido ya que se deriva del calendario electoral constitucional. Su carácter oportuno es, en principio, indiscutible dado que varias instituciones nodales del Estado están actualmente caducas (la Cámara de Diputados ha concluido su mandato y la Legislatura ha sido cerrada) o incompletas (el Senado está reducido a dos tercios de sus miembros). Finalmente, el mandato presidencial no renovable se termina el 7 de febrero de 2011. Ahora bien, tampoco ha sido escogida la fecha del terremoto y nadie discute que ha sido una catástrofe mayor que delimita un antes y un después en todos los órdenes de la vida nacional. La pregunta referida al momento se relativiza ipso facto y las diferentes propuestas formuladas por múltiples sectores de la sociedad civil ganan en legitimidad. Algunas organizaciones políticas pero también cívicas llamaron en efecto muy temprano a una gran convergencia nacional para constituir un gobierno de Salud pública, acorde con las urgencias del momento. Se lee aquí una vez más el ímpetu participativo y propositivo de una sociedad sedienta de organización y compromiso pero falta de liderazgo y de instancias de mediación política. Decidir el momento remite por lo tanto a una opción clara de seguir *by the book* con el proceso de normalización política del país sin tomar en cuenta ni pensar la manera de potencializar el despertar solidario y organizacional dentro del país en circunstancias excepcionales. Significa también, y de manera más clara que en las coyunturas anteriores, que el régimen de turno, que es una derivación del movimiento Lavalas posterior al regreso al orden constitucional de 1994, ha optado por el afianzamiento de la instrumentalización de las reglas del juego político, para conservar el poder con exclusión de todos los otros sectores, próximos u opuestos a él. De allí las crecientes críticas que, recientemente, se convirtieron en abiertas manifestaciones¹³ en contra del régimen inaugurado por la primera presidencia de Préval y rescatado por la comunidad internacional a partir de 2004.

Las justificaciones y los apoyos a dicho objetivo y a su calendario provienen de los círculos cercanos al poder y sus instituciones, pero también de determinados sectores de la sociedad civil. Típicamente, grupos del sector empresarial, pero también algunas formaciones políticas legalistas o tradicionales, y una parte de la opinión pública que solo ve la posibilidad de un cambio de gobierno vía elecciones. Por lo tanto el escenario está montado para volver a activar los resortes del clientelismo como manera de imprimir un sello participativo y legítimo a los

próximos comicios. No se puede soslayar, en este contexto, el papel de la comunidad internacional que no solamente apoya y financia las operaciones, sino que ha delimitado claramente dos terrenos de acción: uno, social y económico que remite directamente a las exigencias de la reconstrucción pero es asignado al gobierno (a pesar de que gran parte de la justificación del aumento desmesurado de la presencia internacional en Haití hoy es la ayuda para la reconstrucción); y otro, el de la estabilización política, que comanda elecciones y reformas institucionales, y que el sector internacional prioriza y financia desde hace más de seis años. Más aun, ni las muy discutibles leyes¹⁴ votadas recientemente por el gobierno y que han sido en parte la causa del creciente descontento social, ni los evidentes atropellos a las mismas reglas constitucionales y legales¹⁵ —a la buena gobernabilidad, por lo tanto— han hecho variar las posiciones totalmente convergentes de los actores externos en el proceso político haitiano. Todo parece indicar que, incluso con la indiferencia o las críticas de los más diversos sectores sociales, la dinámica electoral va a imponerse sobre las diferentes urgencias nacionales y que el movimiento social permanecerá en latencia.

El tercer nudo problemático tiene que ver con el espectro político de los sectores y los candidatos implicados. Es importante resaltar que a nivel de las candidaturas presidenciales el grupo de contendientes está dividido en tres: primero están los que se disputan los favores de los sectores otrora aristidianos y luego allegados a Préval, en ausencia de la clara elección de un sucesor designado por parte del presidente de turno; segundo, hay un grupo de candidatos que se podrían llamar de la clase política tradicional, con perfiles disímiles pero definición partidaria clara; y finalmente los *outsiders*, desconocidos o estelares, que desorganizan, felizmente de acuerdo a algunos análisis pero, por ende, toman folklórica la vida política y las elecciones haitianas. Porque, más allá de su carácter espectacular, la gran incógnita que plantean es: ¿qué traen de nuevo esas candidaturas con respecto a los problemas estructurales del país, que solo han empeorado desde el 12 de enero?

Dos nudos siguen definiendo el potencial para el renacimiento de un movimiento social dinámico, como interlocutor no solo válido sino insoslayable. Primero, el de su organización como fuerza reivindicativa y autónoma, capaz de empujar hacia los cambios deseados sin caer en las trampas de reemplazar las estructuras de mediación que les sirven de correa de transmisión y a la vez las protegen. Y el de la capacidad transformadora que se insinúa a través de las recientes manifestaciones de solidaridad y de movilización colectiva consecutivas al terremoto. Empero, el dilema de la representación de intereses sigue siendo el reto mayor para un movimiento social que, por falta de disponibilidad de *intelectuales orgánicos*, es puesto ante la necesidad —la tentación— de hacer, cuando su vocación es más bien la de formular, demandar, exigir incluso, y controlar. La manera en que se plasme esta disyuntiva en el debate político de hoy decidirá el futuro del movimiento social por muchos años porque, de consolidarse el actual sistema clientelista-instrumentalizador, el movimiento social seguirá confiscado por la sociedad política sin haber podido desarrollarse en una moderna sociedad civil, precisamente por falta de estructuras organizativas consolidadas. Dos ejemplos recientes ilustran a la vez la necesidad organizativa y los peligros de

las demandas no canalizadas. El primero es el de las manifestaciones religiosas dentro del movimiento social. Las iglesias protestantes han optado desde hace un decenio ya por una representación partidaria y existen dos partidos políticos declaradamente confesionales. En cambio, los practicantes del rito vudú han emprendido desde 1986 un proceso de estructuración y de representación unitaria de naturaleza cívico-religiosa. Acaban de pronunciarse sobre la coyuntura política en términos elocuentes: “No queremos partidos políticos, queremos un representante nuestro”, proclaman al culminar su congreso nacional este 10 de agosto. Afirman querer adscribirse a un papel reivindicativo y estarán atentos a todos los discursos políticos para apoyar a quien mejor represente sus intereses. Estos intereses están claramente definidos en términos de los derechos básicos y ciudadanos de los actuales damnificados que duermen en la calles.

“...el dilema de la representación de intereses sigue siendo el reto mayor para un movimiento social que, por falta de disponibilidad de *intelectuales orgánicos*, es puesto ante la necesidad de hacer”

El segundo ejemplo tiene acentos de advertencia a pesar de su formulación eminentemente cívica. Ya en mayo, y aun hasta principios de agosto, la población de varios de los sitios que agrupan a las familias sin techo, en especial en los barrios populares de Fort National-Bel Air y Petionville han salido a manifestarse en contra de la inercia gubernamental para con su suerte; reclaman un techo decente y subrayan que su movimiento es y permanecerá pacífico y ordenado. Pero esas poblaciones son claramente presas potenciales para los grupos políticos de toda clase, y la legitimidad de sus demandas las hace tanto más vulnerables a las manipulaciones politiqueras. Porque la multitud es una fuerza que puede levantar montañas, como también puede desatar potencias destructoras a imagen del torrente devastador que representó Lavalas en la historia del movimiento social haitiano.

Notas

1 Salvo, en cierta medida, bajo la primera ocupación norteamericana, cuando los componentes nacionalista y antiimperialista se juntan mas allá de esta característica más bien polarizada del movimiento social haitiano. Incluso en la época reciente en que el grupo 184 quiso hablar de un pacto nacional policlasista (entre 2003 y 2006), el discurso tuvo que remitir a la exclusión como eje del quehacer del grupo. Ver más adelante.

2 El historiador Michel Héctor ha emprendido un estudio sistemático de los movimientos sociales y los movimientos populares, en especial para el período anterior a 1915.

3 Conocidas como *chimè* y agrupadas en pequeñas células denominadas *tifanmi*, esos grupos han sido responsables de innumerables exacciones entre las cuales se pueden señalar los ataques a candidatos

electorales en el 2000, el saqueo e incendio de locales y residencias de dirigentes políticos de oposición, en diciembre de 2001; la destrucción de todas las antenas de radiotelecomunicación en diciembre del 2002 y, sobre todo, tras el derrocamiento de Aristide en febrero del 2004, el lanzamiento de la campaña de terror, con secuestros y asesinatos anónimos, autodenominada *Operación Bagdad* por sus hechos. El carácter nítidamente político de esos hechos quedó claro con su rápida puesta bajo control por las tropas de la ONU una vez tomada la decisión política, en el verano de 2007.

4 Este episodio se inscribe en el marco de la búsqueda de un consenso social post-Aristide. Liderado por un grupo de profesionales, intelectuales y miembros del sector privado, cohesiona paulatinamente su componente social y popular para convertirse en

una especie de caricatura del unanimismo que había fungido a finales de los ochenta.

5 Los empresarios del sector de reexportación en especial argumentaron que de fijarse el nuevo salario mínimo a 200 gourdes (5 dólares) *tendrían que cerrar sus fábricas*, además de advertir que el capital extranjero que debe ayudar al crecimiento y la creación de empleos se orientaría hacia países más baratos.

6 Es el caso, entre otros, de los barrios de Carrefour Feuille, Fort National (que colinda con Bel Air) o Martissant en la comuna sureña de Carrefour.

7 Una semana después del terremoto y ante los persistentes rumores de caos, impotencia, desorden y brotes de epidemia, la ONU tuvo que reconocer, por la voz de la responsable de asuntos humanitarios y también por la Cruz Roja internacional, que el pueblo haitiano había dado muestras de un sentido de organización tal que la mayoría de las vidas habían sido salvadas por la movilización nacional antes de la intervención internacional.

8 *Joint Security Assessment*, documento circulado por las Naciones Unidas, mimeo, marzo de 2010.

9 Como se apuntó más arriba, el movimiento social haitiano fue durante mucho tiempo eminentemente campesino. El movimiento campesino contemporáneo surge de manera organizada después de 1986. Influenciado claramente, en un primer momento, por las comunidades eclesiales de base de

la iglesia católica, ha conquistado y mantenido una autonomía que es a la vez su fortaleza y su irreductible peculiaridad dentro del panorama nacional.

10 Año del primer congreso nacional campesino celebrado en la céntrica localidad de Papaye.

11 Tèt Kole, una organización basada en el Norte; Mouvman Peyizan Papay, en los departamentos del Centro y del Norte.

12 La promoción, a veces la exaltación misma, de la producción y de la comida (cultura culinaria) nacionales caracteriza en efecto al discurso del MPP y de las organizaciones campesinas en general.

13 Esas manifestaciones conciernen a varios sectores que no necesariamente convergen. Son más bien el indicio de la difusa pero real oposición que enfrenta hoy el gobierno Préval-Bellerive, oposición que, por falta de canales y de recursos para expresarse eficazmente, parece más débil e irrelevante de lo que realmente es frente a la fuerza de las prácticas clientelistas viejas y nuevas.

14 La ley de abril de 2010 que extiende la situación de emergencia por dieciocho meses; y el comunicado que modifica el mandato del consejo electoral.

15 El consejo electoral acaba de eximir a los candidatos a la presidencia de la exigencia constitucional de presentar una descarga de responsabilidades cuando han sido encargados del manejo de fondos públicos.

Entrevista

**Horizontes de la movilización
popular en México y América Latina.
Entrevista con Armando Bartra**

Massimo Modonesi

Horizontes de la movilización popular en México y América Latina

Entrevista con Armando Bartra

MASSIMO MODONESI

Resumen

La entrevista aborda los saldos del ciclo de luchas populares durante la última década en América Latina, planteando la hipótesis del agotamiento del paradigma desarrollista como consenso articulador. Así, se describe a la actual crisis no solo como la del mero neoliberalismo sino como la del progreso mismo en tanto que horizonte. Además, mira hacia los acontecimientos recientes en México y realiza una lectura del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, observando su relación y articulación –o confrontación– con otras luchas del campo popular. Las elecciones federales de 2012 se toman como espacio donde se juega la hegemonía neoliberal en uno de los últimos países aún plegados al consenso de Washington.

Abstract

In the interview the outcome of the cycle of popular struggles over the past decade in Latin America is examined and the demise of a purely economic development standard is postulated. This is how the current crisis is described, not one that merely hit neoliberalism but also affected progress itself. In addition, the interview provides a reflection on recent events in Mexico, and its own interpretation of the movement led by Andrés Manuel López Obrador by studying its relationship and connection –or confrontation– with other community struggles. The 2012 federal elections are seen as an element of risk for the neoliberal hegemony in one of the few countries still aligned with Washington.

Palabras clave

Posneoliberalismo, posdesarrollismo, crisis de paradigma, movimiento ciudadano, fraude electoral, autoritarismo

Keywords

Post-neoliberalism, postdeveloppment, paradigm crisis, citizen movement, electoral fraud, authoritarianism

Cómo citar este artículo

Bartra, Armando 2010 "Horizontes de la movilización popular en México y América Latina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Armando Bartra es un punto de referencia indispensable para pensar y tratar de descifrar, desde una perspectiva crítica, el escenario político mexicano marcado por el enfrentamiento entre la ofensiva de un gobierno de derecha y la resistencia organizada por las clases subalternas. Aunque desde hace algunos años Bartra es docente del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, su trayectoria y su formación intelectual son estrictamente militantes. *Rara avis* en el mundo intelectual izquierdista tendencialmente cobijado por el academicismo y agazapado en las universidades públicas, Bartra no tiene títulos ni camisetas disciplinarias definidas, es muy historiador y bastante sociólogo, algo de economista y un poco filósofo. Sigue reivindicando el marxismo, en su vertiente crítica y humanista que rescata en su libro más reciente. En la tensión entre el análisis de la reproducción de la estructura capitalista y la intervención creadora de las clases subalternas en las luchas sociales, Bartra opta por el papel de las subjetividades, apuesta por el valor inestimable de la resistencia, el antagonismo y los anhelos de emancipación, aun cuando sean simplemente recursos defensivos para evitar que el mundo sea peor de lo que ya es, para frenar la catástrofe.

Conocido y respetado por sus estudios y sus vínculos con los movimientos campesinos, Bartra dirige actualmente "La Jornada del Campo", un suplemento mensual del periódico *La Jornada*. Campesinólogo y campesinista muy versátil, intelectual militante, de mirada amplia como sus ensayos publicados regularmente en la revista *Memoria*. Sus libros recorren diversas pero interconectadas temáticas: incursionan en la historia de la revolución mexicana, destacando el aporte del anarquismo magonista, profundizan en la historia de una de las regiones más conflictuales del país, se abren hacia grandes reflexiones sobre la naturaleza del capitalismo y sus límites y, en un libro publicado este año, se centran en la dialéctica y el papel del pensamiento crítico (ver Bibliografía al final).

Después de haber participado en distintas experiencias políticas y acompañado movimientos campesinos desde los años setenta, su compromiso más reciente es con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como parte del grupo de intelectuales que elaboraron el borrador de proyecto de país que el propio López Obrador presentó en el Zócalo de la Ciudad de México el 25 de julio. De este movimiento, de la realidad mexicana actual, pero también de temas más generales como desarrollismo y posdesarrollismo, antineoliberalismo y anticapitalismo, marxismo crítico y socialismo posible, trata esta entrevista.

Pantanos posdesarrollistas

El primer tema que quiero que abordemos se relaciona con el tiempo presente latinoamericano. Ya pasamos la primera década del siglo, la cual –a contracorriente de las dos anteriores– ha sido marcada por un ciclo de luchas y por el renovado protagonismo de los movimientos populares. ¿Sientes que este ciclo se agotó, que se está agotando, que entramos en una etapa de estabilización político-institucional? ¿O al contrario, que se mantiene, que fue el anuncio de algo más amplio, significativo y eventualmente radical, que fue una experiencia de acumulación de fuerzas que no se desvanece simplemente en una reconfiguración institucional? ¿Cómo visualizas históricamente al momento actual y sus perspectivas?

En el mediano plazo, en los últimos diez años, por poner números redondos, se fue cerrando un ciclo que tenía veinticinco o treinta años de vida, un ciclo que tenía que ver con un modelo que se daba en llamar *neoliberal*, una forma de capitalismo salvaje o capitalismo rapaz, y que en el caso de América Latina había producido una serie de transformaciones específicas. Yo creo que ese modelo se agotó, que las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y el llamado Consenso de Washington –que de algún modo sintetizaron ideas que venían desde antes y que estaban en todas partes– no se podrán recuperar. En este sentido, creo que los últimos diez años son el fin de un ciclo, el fin de esta etapa de capitalismo y, en otro sentido, una etapa de apertura a experiencias de gobiernos que se ha dado en llamar de izquierda, centro-izquierda o centro cuando menos. Quizás la novedad más relevante, para mí, en una perspectiva mayor, es que la búsqueda se orienta a la renovación de paradigmas después de la crisis de la idea de que el mercado nos hará libres, el mercado nos hará justos, el mercado nos hará prósperos, el mercado generará crecimiento, el crecimiento será redistributivo en algún momento, la estabilidad social dependerá del crecimiento, el crecimiento será incluyente y no excluyente, de que esperemos un tiempo suficiente y empezaremos a ver los resultados del modelo, etcétera. Esas promesas incumplidas y las realidades pagadas al contado por los pueblos no solo provocaron la caída de algunos gobiernos, sino que estimularon la búsqueda de paradigmas alternativos. Hoy tenemos un debate en torno a si estamos volviendo o queremos volver a un desarrollismo cepalino tal cual o si nos orientamos hacia un neodesarrollismo posneoliberal o un posdesarrollismo. En todo caso, me parece que este debate no es solo un debate intelectual, ni es solo un debate de las izquierdas que reflexionan sobre los proyectos estratégicos, sino que hay un cuestionamiento de fondo que va más allá del simple modelo neoliberal y que plantea que este fue la última gran promesa del desarrollismo, en su expresión más cruda y desalmada, en su expresión menos populista, menos incluyente y menos democrática, que es la vía del mercado, del repliegue del Estado, de la privatización. Esa promesa del desarrollo neoliberal es la última gran promesa del desarrollismo. Podríamos leer lo que está sucediendo como un retorno al desarrollismo cepalino, al desarrollismo originario. Hay una vuelta a la beligerancia del Estado, una vuelta a la recuperación de los recursos nacionales y estratégicos por parte de los gobiernos, una preocupación por ciertos compromisos sociales del Estado, fundamentalmente servicios y cierta formación de capital humano que pueden leerse en términos estrictamente cepalinos. Pero yo creo que no, yo creo que esto es más bien la vieja metáfora de un círculo que apunta hacia un nivel distinto en la espiral. Yo creo que el hecho de que el tema de la descolonización interna haya cobrado la fuerza que cobró en países de la zona andina es sintomático de que no estamos solo dirimiendo las cuestiones que tienen que ver con las últimas tres décadas del neoliberalismo, sino que estamos dirimiendo un asunto que tiene que ver con quinientos años de un modelo que pasa de la colonialidad inicial a formas superiores de colonialidad, tanto la interna como la externa, pero que no se ha modificado en su esencia. No creo que se pueda revivir el desarrollismo, aunque sí sus recetas, mas no la esperanza que en otro tiempo las acompañó.

Y sin embargo, fundamentalmente en el triángulo Bolivia-Ecuador-Venezuela, aparece no solo un discurso que recupera al nacionalismo y a la intervención estatal, sino también una práctica que parece tener cierta eficacia concreta y despertar ciertas esperanzas de justicia social. Una forma de desarrollismo nacional-popular que quiere o pretende ser la contraparte del ascenso de los movimientos, de demandas y reivindicaciones de lo público, a veces incluso de demandas más autonomistas, traducidas ahora en términos de respuestas, no quiero decir asistencialistas –porque no forzosamente hay que cargarle una connotación negativa– pero sin duda de redistribución de la riqueza –más que del poder– operada desde la racionalidad y el aparato estatal. En este retorno, se olvida toda la crítica al desarrollo capitalista y al capitalismo de Estado que se dio, no casualmente, en la época de auge del fordismo y del Estado de Bienestar, cuando al interior del movimiento marxista, socialista y comunista existía una mirada crítica, a contracorriente del mecanicismo del desarrollo “de las fuerzas productivas”, una crítica de la explotación, de la alienación, de la acumulación de agravios que se producían en ese proceso de expansión capitalista.

Completamente de acuerdo, pero digamos que ese es el pantano en el que nos movemos. Vivimos el fin de la gran ilusión del desarrollo, y eso no quiere decir que estemos ya en el camino del posdesarrollo ni que yo tenga claro qué es el posdesarrollo. Me parece muy difícil que se vuelva a reconstruir como paradigma, no que desaparezcan las recetas porque las recetas ahí están y la capacidad de volver a ellas ahí está, lo que no creo es que sea posible volver a reconstruir la ilusión. No creo que pueda volverse a construir algo que fue en verdad, en términos de los sujetos, de la subjetividad, una bandera creíble.

¿No será que con la crisis del desarrollo como paradigma también viene una crisis de la democracia como fenómeno de masa? No tanto de la idea de democracia como forma institucional, como procedimiento de toma de las decisiones a partir del principio de mayoría, sino la democracia en un sentido amplio, substancial, como participación popular, como vector de la irrupción en escena de las clases subalternas, como expresión de un protagonismo epocal o coyuntural, que impulsa o frena el progreso o el desarrollo. Porque eso podría ser preocupante, no que se desfonde el simulacro de la democracia, sino que se desmonten la dinámica y los mecanismos de la democracia real, fundamental, de la activación, de la participación de las clases subalternas o, más bien, de sus sectores movilizados, organizados y politizados. ¿Te parece que estamos en esta pendiente riesgosa? Porque solo en América Latina hemos tenido oleadas recientes de democratización substancial que nos oxigenaron, pero si uno va viendo otras partes del mundo, encontramos el predominio de democracias formales que promueven la despolitización y la desmovilización, que desdemocratizan las relaciones sociales.

Así es. Yo sí creo que hay un riesgo. La modernidad es una universalidad, es un universalismo y un universalismo excluyente, abstracto, de los privilegiados, de la desigualdad. Pero es un universalismo. En principio, este reconocimiento de que formamos parte de un género más allá de si somos ricos, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres, etcétera, es una parte de este discurso de la modernidad que creo que no deberíamos permitir que se fuera con el agua sucia. Es decir, esta idea

simplificada de que la modernidad era una simple gran ilusión, de que el progreso era un gran engaño, es riesgosa porque me parece que las preguntas de la posmodernidad o del poscapitalismo no pueden plantearse sin olvidar cierto nivel civilizatorio. Lo digo de otra manera. Esta universalidad, que podía ser mediterránea en algún momento, y que hoy es global, claramente global, hoy es claramente una gran nave en la que vamos todos. Es decir, la globalidad ha hecho que esta universalidad no sea simplemente un concepto filosófico o político, sino que sea una realidad. Nadie está a salvo si alguien se hunde, si este barco se hunde en términos ambientales, nos hundimos todos con él. No debemos hacer la crítica de la modernidad y de la globalidad fomentando los particularismos, que a lo mejor en América Latina todavía no se están dando pero en otros lugares del mundo sí. Ciertos modelos de balcanización pueden ser feroces.

“...la globalidad ha hecho que esta universalidad no sea simplemente un concepto filosófico o político, sino que sea una realidad”

Seguramente seguiste el debate sobre el pachamamismo en Bolivia. ¿Cómo ves esa contradicción entre el pachamamismo como nuevo paradigma y la persistencia del desarrollismo en el discurso y las prácticas del gobierno boliviano? ¿Qué está pasando? ¿Hay un cortocircuito entre un nuevo paradigma emergente que no acaba siendo y al mismo tiempo una práctica y un modelo que no acaban de morir?

No digo que sea una falsa disyuntiva, porque es un tema que vamos a tener que discutir, pero no podemos tener un choque de fundamentalismos, es decir, hablando de Bolivia, litio sí/litio no, el litio es la salvación/el litio es la maldición. El litio es un medio, el litio está ahí. ¿Hay un mercado para el litio? Parece que sí. Evidentemente, depende del curso que sigan la historia y la humanidad. Depende de las decisiones tecnológicas y de una serie de cosas. Si uno hace proyecciones, puede decir “el litio va a ser un insumo fundamental en términos de un nuevo modelo energético y, bueno, nosotros tenemos litio, ¿qué vamos a hacer con el litio que tenemos?” Alguien podría decir “cualquier cosa que tú plantees hacer con el litio que tienes es utilizar una palanca extractiva, es inadmisibles”. Bueno, yo no creo que así sea. El tema no es el litio/no litio, el tema es cuál es el proyecto, quién manda aquí.

En la última década se reactivó una intención o una voluntad anticapitalista. No es casual, me parece, que más que darle un contenido positivo a la búsqueda de alternativas a la que te referías se tiende a, por lo menos allí donde hay radicalización, a definirse como “anti”, marcando una raya, una separación, una escisión. Podríamos decir que en distintos momentos de la historia hubo distintas definiciones anticapitalistas. En el siglo XX tendieron a definirse en términos de socialismo y comunismo. Hoy, a reserva de que se resignifique el proyecto socialista, decirse anticapitalista parece quedarse en la negatividad de la dialéctica, en la negación de la negación.

La negación de la negación es un momento en una dialéctica que parte de la negación de lo que te niega. El mundo te niega, tú niegas este mundo que te niega, y para llegar a este mundo que te niega no basta con la nihilización de lo que te niega, sino que tienes que apostar a otra cosa. En la mayor parte del siglo XIX, y casi todo el siglo XX, hasta los últimos treinta años del siglo XX, la gran ilusión, la gran alternativa era la alternativa *poscapitalista*, era alguna modalidad de socialismo y, bueno, desde principios del siglo XX, tenías *el* socialismo científico, que era el único socialismo que en verdad leía el futuro de manera sensata en la realidad presente. Es decir, que el marxismo fue la gran esperanza, y el socialismo realmente existente, ese modelo de modernidad otra, fue la gran ilusión. Yo creo que esta es la que se desfondó. No creo que se pueda tirar todo a la basura. Creo que la cuestión es saber por qué se topó con la pared, por qué reaparece el Estado como el aparato político de la alienación y reaparece la economía como el fetiche, en este caso en el nombre del desarrollo de unas fuerzas productivas que lo van a hacer ingresar en la abundancia y por lo tanto en la equidad. Esta cuestión te plantea de nueva cuenta que el *no* tiene que ser mucho más radical. Yo diría que un buen ejemplo de esto en términos intelectuales, y que no ha tenido tantos seguidores, es John Holloway. “No hay que liberar al trabajo, hay que negar el trabajo. Hay que recuperar el *hacer*. Y toda vivencia es alienante, y toda modalidad estatista es alienante”. Hay una demanda de radicalización de la dialéctica en Holloway que solo se explica porque está reaccionando a un mundo del cual tiene los elementos, del cual posee información suficiente. Pero también porque siente –creo que muchos sentimos– la necesidad de un *no* mucho más radical para poder construir una verdadera dialéctica positiva. Yo creo que se derrumbó la ilusión del progreso, que era también socialista y no solo capitalista. No es lo mismo, no creo que todos los gatos sean pardos. No creo que la heroica lucha por la equidad, la lucha contra una burguesía rapaz, no creo que nada de eso, que ninguna de las luchas del siglo XX sean ni por mucho absurdas y que fuimos engañados y conducidos por miserables traidores. Ni tampoco que andábamos haciendo revoluciones fuera de tiempo y que no nos dimos cuenta de que debíamos esperar a que maduraran las condiciones para hacer la revolución. Creo que la humanidad dio durante el siglo pasado una serie de batallas extraordinarias, desarticulando imperios, reconstruyendo sociedades, creando realidades nuevas. Creo que la radicalidad del *no* es más feroz ahora, porque ya vimos que con un *no* tibio, un *no* que no iba a fondo, que no atacaba la totalidad del mal, se regeneró el cáncer. El *no* tiene que ser más radical, y el que en este momento sea un *no* tajante, a secas, un *no* en el sentido de anticapitalismo, me parece muy sensato. Tenemos que hacer una suerte de plano, de diseño, de la sociedad pura, y ponernos de acuerdo y construirla. Pero construir la sociedad futura no es como construir una casa, no es como hacer un edificio, no es como hacer un puente, es un proceso de convivencia social, es pasar por la construcción y reconstrucción de las subjetividades. Creo que la ruptura de la fetichización de la economía, de la fetichización de la planeación por lo tanto, de la fetichización del aparato, de la fetichización de las fuerzas productivas, de la fetichización de la ciencia, te coloca en una situación muy delicada, porque entonces empiezas a negar toda tecnología, tiendes a negar toda ciencia, tiendes a negar todo aparato, tiendes a negar al Estado, tiendes a negar al mercado. Pero

sí, en efecto, sí es verdad que estamos en una crisis que es sistémica pero que además es epocal y es civilizatoria; es lógico que estemos intentando radicalizar el *no*, porque lo que nos niega era mucho más profundo o estaba en muchos más ámbitos y espacios de lo que nos habíamos percatado, o creemos que así es. Pero no podemos darnos el lujo de estar en el *no* indefinidamente. Mientras tanto seguimos viviendo, y la vida continúa. Y ¿cómo continúa? Continúa en un terreno que se parece mucho al desarrollismo. Pero es que el desarrollismo era dos cosas. Era el papel de la técnica, de la técnica económica, de la técnica en la planeación, de la técnica en la asignación de recursos, de la contabilidad social, de la ingeniería social. Son instrumentos, herramientas a las que no podemos renunciar. Y era también la fetichización de esos instrumentos. Negamos el fetiche pero no tenemos por qué negar la técnica. El riesgo del fundamentalismo para mí es equivocarse la respuesta a si la crisis del desarrollismo es la crisis también de los instrumentos del desarrollo y de los técnicos del desarrollo. No puede ser. Hay una novela de Fiodor Gladkov que se llama *Cemento* y que se escribió en la primera década después de la Revolución Rusa en la que se cuenta la historia de un drama amoroso y una familia de activistas revolucionarios bolcheviques, el marido y la mujer. Se rompe la estructura tradicional de familia por el hecho de la militancia, y finalmente se separan. Pero además, el problema es que no pueden echar a andar una fábrica porque ya tomaron el poder pero no tienen la capacidad técnica, no tienen los conocimientos, no tienen el *know how*. Entonces el bolchevique revolucionario tiene que ir a buscar al ingeniero que era el administrador de la fábrica y decirle “oye, pues échanos una mano para que pongamos a caminar la fábrica”. Bueno, salvando las diferencias, creo que no podemos tirar al ingeniero. Eso no quiere decir que no haya que crear nuevos ingenieros y nuevas fábricas, pero no podemos tirar al ingeniero. Entonces no me angustia que García Linera diga “hay tres vías de desarrollo, de modernización, en Bolivia: la vía de la empresa grande, industrial, puede ser de Estado, puede ser privada; la vía de la pequeña y mediana producción, medio artesanal; y la vía de la comunidad agraria y de la producción campesina. Y estas tres vías no conducen al capitalismo. Nuestra apuesta es que van a fortalecerse esta y esta otra vía. Pero, en este momento, estas son las tres vías de modernización. Y por eso estamos en el capitalismo.” ¿Cómo entiendes esta discusión sin acusaciones de que lo que pasa es que simplemente ya claudicó? No, lo que yo creo es que estás situado en el terreno de lo pragmático, de lo posible, de la ingeniería social, que es una tarea que asumes en tanto eres gobierno y, por otro lado, estás en la apuesta de la historia.

¿Pero no será también que así como hay temporalidades de la historia, hay también distintas temporalidades de la política? Entonces hay una política que se juega en la construcción desde abajo, en las subjetividades y la construcción de movimientos populares que se asientan lentamente y una política que se juega a otro ritmo, el ritmo de las políticas públicas y las elecciones, pero también de la irrupción de la protesta, del conflicto social.

Lo que te diría García Linera es “en el tiempo corto no confíes en los movimientos, en el tiempo corto confía en los aparatos. Bueno, nosotros somos aparato. Se puede desinflar el movimiento, pero nosotros vamos a seguir como aparato.

Pero si ese movimiento no vuelve a subir de nuevo y no nos empuja otra vez, ya se acabó”.

Es una vieja idea que justifica la necesidad del partido como cristalización que sostiene la lucha en los momentos de repliegue de la movilización.

Fetichizamos al partido, fetichizamos a los sindicatos y a los gremios, y ahora fetichizamos a una cosa que llamamos movimientos sociales y que no siempre está muy claro qué son. Lo único de lo que sí estoy claramente convencido es de que estamos en una etapa en la que de nueva cuenta la construcción de las subjetividades no puede ser delegada a estos grandes actores cuyos cuarteles generales, cuyas vanguardias esclarecidas, cuyos comités centrales o cuyas dirigencias podían encabezar por una razón básica, porque terminas en el providencialismo. Tú solo puedes apostarle a las vanguardias cuando crees honestamente que hay ciertas capacidades intelectuales y ciertas capacidades adquiridas, individuales o colectivas, que te permiten leer en las entrañas de la sociedad el curso y el futuro. Y entonces estos señalan el camino, porque son como el guía indio que huele y le mete el dedo a la caca del bisonte y sabe cuánto tiempo hace que pasó la manada. Esta visión de que la historia puede ser leída, que hay un futuro predeterminado y que puede ser leído e interpretado, y que para eso es científico el socialismo, te lleva finalmente a pensar que hay unos que deben ser conducidos y hay otros que son conductores. Pero que esta exterioridad está dada no por aquello de *mandar obedeciendo*, que sería la fórmula para recuperar esto, sino que estás mandando porque tú tienes la capacidad de leer las señales del camino, que los demás no pueden leer. Este mando no es instrumental. Es que básicamente hay un camino y alguien descubrió ese camino. Marx y Engels descubrieron ese camino e hicieron que el socialismo utópico, que era muy bien intencionado, fuera científico. Marx y Engels leyeron en las entrañas del monstruo. Entonces, si en verdad aceptamos que no estamos amarrados a otra cosa más que a la libertad –y no estoy hablando de los individuos solamente–, la gestión del proyecto, la gestión de la subjetividad y la marcha en la que todos estamos involucrados es mucho más un diálogo social que el descubrimiento del curso a seguir por parte de vanguardias iluminadas. Por lo menos en mi experiencia, mi preocupación por ser vanguardia iluminada, radicaba en eso. Algunos tenemos o adquirimos, nos esforzamos por adquirir, por nuestro espíritu de servicio y abnegación, nos esforzamos por adquirir los instrumentos, que pueden ser el socialismo científico, y el leninismo en su momento, o el maoísmo o el trotskismo o cuanto haya en su momento; que son los instrumentos que, puestos al servicio del proletariado y de las masas populares, les van a permitir encontrar su camino en este bosque confuso en que las luchas espontáneas topan contra la pared y no marchan y no acumulan. La intención no es mala, yo no creo que haya que exaltar la espontaneidad, la dispersión, la desarticulación, los particularismos, no creo en eso. Yo creo que hay que buscar las convergencias, hay que buscar los consensos, hay que buscar la unidad en torno a un proyecto, se requieren liderazgos. Pero sí estoy claramente convencido de que había un factor fetichizante en el modo de entender la vanguardia iluminada, y que si ya destruyes este concepto de vanguardia iluminada, el modo de construir el proyecto y las dirigencias va a ser otro.

México: autoritarismo gubernamental y movimiento popular

Pasemos a México, pero pensando en las mismas coordenadas. ¿Cuál es el momento histórico? ¿Cuáles los sujetos de la posible transformación?

En México, la alternancia resultó más de lo mismo, en todos los sentidos, es una alternancia por la derecha, no hemos tenido una alternancia por el centro o hacia la izquierda. En todo caso, el problema con México es que lo que se está desfondando es lo que podía ser un ejemplo de modernidad con participación social, una modernidad incluyente, porque hubo —entre otras cosas— una reforma agraria, probablemente la más extensa de América Latina, en cuanto a la cantidad de tierras entregadas y repartidas. México de algún modo fue precursor en una serie de procesos de modernización y fue modelo incluso en algún momento para ciertos planteamientos cepalinos. Dejó de serlo, pero su ruptura ha sido como en cámara lenta, seguimos sintiendo que estamos en una transición, si es que la palabra *transición* quiere decir algo. Entonces, creo que el caso de México es un caso complicado en el cual no podemos, parece claro, pensar en el futuro sin una nueva reflexión sobre el pasado. Es decir, el siglo XX es parte del debate. Lo que está a discusión son las lecciones del siglo XX mexicano. En Bolivia están repensando la reforma agraria de 1952, están pensando lo que fue el Estado boliviano nacionalista revolucionario de la segunda mitad del siglo pasado. México vivió el siglo XX como un siglo de reformas, como un siglo de modernización socialmente incluyente, de procesos de transformación con participación de las masas, todavía en la primera mitad del siglo. En México podías decir con seguridad de no equivocarte en casi cualquier familia “yo vivo mejor que mis padres y mis hijos vivirán mejor que yo” y eso era razonablemente cierto. Esto se acabó. Es decir, hoy en la visión de futuro la gente piensa que no, que sus hijos van a tener menos posibilidades de conseguir empleo o que si era un campesino, si creyeron en que el café los iba a volver ricos, sus hijos se van a tener que ir a Estados Unidos. Es decir, hay una crisis de expectativas, el siglo XX terminó de manera particularmente catastrófica, la caída es más brutal porque la altura alcanzada fue mayor.

Este pesimismo alimenta la rabia y la protesta, pero también, o sobre todo, formas de conservadurismo, de egoísmo social, del “sálvese quien pueda”. Este clima social permitiría entender cuáles fueron las razones de la derrota de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Porque te acordarás que estuvimos en reuniones juntos en donde se planteaba “si se atreven a dar un golpe tan fuerte, se les viene encima el país”. Y eso no pasó. ¿La coyuntura de la crisis económica jugó en sentido desmovilizador? ¿Cómo te explicas que lograran llevar adelante el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro y de su sindicato?

Así es. No sucedió lo que todos esperábamos. Pero hubo dos grandes movilizaciones de apoyo al SME de más de 100 mil personas. Y otras dos o tres que tuvieron del orden de 30, 40 mil. La lucha lleva varios meses, dos de huelga de hambre. Sigue habiendo un buen tercio, si no es que entre 30 y 40 por ciento del total de los trabajadores que no se han quebrado. Los cercaron por todas partes, les quitaron los fondos de asistencia al sindicato, les cerraron todas las puertas. Y sin embargo, el movimiento sigue. ¿Por qué podemos decir que es una derrota? Porque un movimiento como este, de un gremio, tiene por un lado una apuesta

política y por otro lado una apuesta gremial. La apuesta gremial es “vamos a negociar”. Es decir, “no podemos aceptar que nos quiten el trabajo, pero podemos quizás aceptar que cambie la institución que nos contrata, pero no quedarnos sin trabajo”. Estaban dispuestos, siguen estando dispuestos a negociar. No han encontrado interlocución para negociar nada. Qué tanta fuerza tiene el movimiento social en estos momentos en México no lo podemos medir por los resultados, lo tenemos que medir más bien por el despliegue de fuerzas puesto en relación con un gobierno, el gobierno actual, que es el único gobierno que yo recuerdo en la historia posrevolucionaria de México que no tiene preocupación alguna por la legitimidad democrática.

“La vía contra el narco no es una vía de legitimación democrática, sino una vía de legitimación autoritaria...”

En el análisis político aparece con frecuencia una disyuntiva a la hora de caracterizar al gobierno de Calderón: ¿es débil o es fuerte, es torpe o actúa con calculada dureza? A veces la confusión surge de la combinación de los factores y, sin embargo, hay que distinguir el rasgo principal para pensar y diseñar una estrategia alternativa, de respuesta y contraofensiva social.

En los gobiernos de la revolución hecha gobierno, que eran gobiernos sexenales, en los cuales el PRI gobernaba siempre, la gran familia revolucionaria seguía en el poder pero cambiaba, era hereditaria. Tenían el problema de la continuidad y existía la preocupación del gobierno saliente por mantener cierta legitimidad democrática. Salinas, que no era menos brutal que Calderón, tenía una seria preocupación, llegó por medio de un fraude electoral, con una ilegitimidad mayor todavía quizás o igual que la de Calderón, en una situación semejante, y lo primero que hace Salinas es un trabajo sistemático por recuperar su legitimidad democrática. Comprando intelectuales, seduciendo, ofreciendo, entregando. Y lo consiguió, logró terminar el sexenio con una aprobación a su persona –no necesariamente a su política– muy alta. Calderón empieza muy bajo y se podía pensar que iba a trabajar por ganar una legitimidad democrática a posteriori, que era fácil porque podía apoyarse en un sector de izquierda domesticada y moderna al interior del PRD. La corriente de Nueva Izquierda se imaginaba “bueno, ya perdimos, ahora vamos a encontrar espacio dentro de este gobierno, que precisamente porque es débil e ilegítimo, va a necesitar abrimos cancha”. Pero el gobierno no buscó ni busca alianzas legitimadoras.

Por la vía de la guerra contra el narco buscan otro mecanismo de legitimación.

La vía contra el narco no es una vía de legitimación democrática, sino una vía de legitimación autoritaria, es decir, Calderón quiere que tú lo apoyes porque es un duro que está golpeando a los narcotraficantes, que son enemigos de la patria, y está matando a muchos jóvenes mexicanos que se fueron por el mal camino. O sea, lo que trata de vender es que va a castigar, a matar a todos aquellos que se

atrevan a ser narcomenudistas, porque esos narcomenudistas son mexicanos *masiosares*, que el himno nacional dice que es “el extraño enemigo”. Esa idea de que hay que perseguir a los narcos, que son enemigos de la nación, que son traidores a la patria, esa idea es la que legitima la mano dura del gobierno de Calderón.

Una elección de policía y no de política, para usar la distinción de Rancière.

Así es, y una catástrofe política. Lo que busca Calderón no es que se aplaquen los del SME, sino que caigan en una provocación. Lo que busca no es que se olviden de López Obrador los del movimiento ciudadano, sino que rompan un vidrio. Su apuesta fue legitimarse por la vía de la mano dura y no por la vía del consenso. Yo no sé qué cálculos tenía, pero en todo caso que podía legitimarse por la vía de ser un gobierno exitoso, en términos de crecimiento económico, en términos de generación de empleo, que eran sus promesas iniciales. Si las tenía, se dio cuenta que no las iba a poder cumplir.

Y además Fox ya había quemado el capital político de ser el presidente de la transición institucional, del post priismo histórico.

Entonces estamos en una situación excepcional de un gobierno que ya perdió las elecciones de hace un año, las elecciones de medio término, con la victoria del PRI. Entonces, ¿qué le queda a Calderón? La única apuesta de Calderón es quedar como un presidente firme, valiente, decidido... como un Díaz Ordaz.

¿Y en 2012?

En 2012 hay que tratar de poner ante la ciudadanía el hecho de que lo que está en juego son los destinos del país. Eso no quiere decir que vas a ganar o vas a perder, pero cuando menos que quede claro que lo que está en debate es la disyuntiva entre dos grandes caminos. Me explico. La fuerza del movimiento social en los años recientes hay que medirla no solo en relación con sus éxitos o sus fracasos, sino que hay que medirla en relación con sus contrapartes. El problema es que esta es una izquierda social. Una izquierda social está conformada en este caso, en gran medida, por gremios o por ciudadanos que luchan por demandas específicas. Movimientos que buscan algún cambio, que son de inicio negociadores, buscan crear correlaciones de fuerzas que les permitan negociar y conservar su fuerza y crear una nueva subjetividad en la sociedad. Pero no tienes posibilidad de negociar, con este gobierno no se puede negociar nada. Por ejemplo, con Fox, en el 2003 hay un movimiento campesino, “El campo no aguanta más”, y el 31 de enero hay una movilización de 100 mil campesinos y el 10 de febrero –no sé, estoy poniendo fechas arbitrarias– ya están sentados los campesinos discutiendo con el secretario de Gobernación, avalados por el presidente y con participación de los diputados. Es decir, él sí inició un proceso de negociación; para bien o para mal, te sientas con el presidente a negociar y luego se firma un acuerdo nacional en Palacio. Calderón no se sienta a negociar. Una parte del movimiento campesino, una parte del movimiento sindical –diríamos la Unión Nacional de Trabajadores, etcétera– están en esa lógica de abrir puertas para sentarse a la negociación. Diríamos, si yo soy gobierno de derecha, pues yo quisiera que esa parte del gremialismo opositor leal se sentara conmigo. Entonces es una situación excepcional y

excepcionalmente mala. Yo creo que está colocando al movimiento social en una situación muy difícil en la que no estuvo ni con Fox. No solo porque sea represivo, que lo es, sino porque no hay espacios de diálogo. Y lo que tienes que plantear es que “lo único que nos queda es el cambio político”.

Pero la polarización actual también tiene sus ventajas. Primero porque no divide, la idea de la apertura y de la negociación siempre tiende a fracturar el campo popular pero, ante tan poco margen de maniobra, los defensores de la moderación y el pacto están de bajo perfil. Parece haber una sola vía para hacer oposición, para plantear reformas sociales. Ahora bien, me parece que hay dos hipótesis solo aparentemente opuestas para sopesar la fuerza del movimiento obradorista. La primera es que, frente a la situación particularmente negativa, incluso la propia dimensión política del movimiento en torno a López Obrador mantiene una fuerza notable visto lo que ocurrió, visto que en el 2006 no se pudo, visto que hubo una serie de golpeteos represivos, de cierres mediáticos e institucionales. Diríamos incluso que aparece sorprendentemente sólido un núcleo duro o una telaraña básica que se sostiene y se refuerza en el tiempo. Entonces diríamos que el balance es positivo. La otra hipótesis es más problemática. Aun asumiendo lo anterior, esa base de movimiento, de resistencia, de dignidad, no deja de ser minoritaria. Festejamos y exaltamos las luchas pero no siempre sabemos reconocer que cuando son minoritarias no logran modificar substancialmente la correlación de fuerza, no permiten pensar en un cambio de rumbo. Entonces, digamos, el horizonte de 2012 se nos presenta con esa ambivalencia. Va a ser muy fuerte el movimiento, la indignación, la resistencia, pero no necesariamente lo suficiente.

Yo en eso estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál es la opción? Aclarar que efectivamente hay una opción, nada más. No que es la opción ganadora, no “vamos a postular al candidato que ahora sí va a ganar”. Es el planteamiento actual de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que el de su movimiento es “ahora sí va a ganar”. Yo creo que su planteamiento personal, y así lo dice, no lo estoy poniendo en su boca ni es que me hable al oído, es que nuestra tarea es poner ante el país que hay dos caminos y que ningún ciudadano ignorante, culto, pobre o rico, urbano o rural, pueda decir que no le dijeron cómo estaba el asunto. Que quede claro que hay dos caminos, este es uno, este es el otro. Tú decides. Que vamos a tener tiempo suficiente, fuerza suficiente, capacidad suficiente y organización suficiente, quién sabe, probablemente no. Lo que no podemos dejar de hacer –porque además la coyuntura es coyuntura, es decir, en el 2012 se decide el destino nacional– es un trabajo que es más bien de educación política. Lo que se ha logrado con el movimiento del 2006 pero también desde antes, desde la campaña, desde el intento de sacar de la jugada a López Obrador, que lo catapultó en lugar de hundirlo. Vimos al que se apuntaba como el candidato natural de la izquierda institucional, por ser el gobernante de la capital. Tratan de descalificarlo y él –históricamente, nunca nadie lo había hecho desde la época de Cárdenas, y por otras causas– llama a movilizaciones. Creo que empieza a establecerse una polarización del país entre derecha e izquierda. La derecha es el PRI y el PAN y la izquierda es López Obrador. De pronto queda razonablemente claro, definido, en torno a una elección. López Obrador decide que lo único que puede hacer si

quiere mantenerse vivo políticamente es mantener esta polarización, mantener la idea de que hay dos caminos. Y esto había que construirlo al margen del PRD. Yo creo que se ha construido razonablemente porque el intento de privatización del petróleo permitió polarizar, porque otras causas más o menos importantes lo permitieron (la postura ante el SME, la postura ante los incrementos de la gasolina, los impuestos, etcétera). Esto sirve, esto ayuda. Pero eso no está construyendo una fuerza social desde abajo, porque una fuerza social desde abajo se construye, creo yo, desde una convergencia de movimientos, desde un diálogo de los diferentes actores sociales. Y esto está bastante limitado. El modelo de los Diálogos Nacionales, al que algunos le apostaron mucho, parecía ser la otra cara de la moneda. Desde la pluralidad de sindicatos, corrientes políticas, desde los más radicales, los menos radicales, etcétera, se puede ir construyendo una plataforma, una confianza. Pero con el golpe al SME desarticularon este tipo de encuentros.

De repente se necesitan coyunturas que se presten para la movilización, o sea, escenarios de crisis política. En los tiempos normales se va tejiendo la correlación de fuerzas, pero se modifican substancialmente cuando cuajan grandes movimientos en función de crisis, de acontecimientos más que de procesos.

Entonces, yo creía y sigo creyendo que no se puede, si no es desde la sociedad, ir construyendo este polo alternativo, este bloque histórico a partir del cual en un momento puedas distinguir, por una parte, el pueblo y la izquierda y, por la otra, la derecha representada por la clase política, por el PRI, el PAN y los modernos del PRD. Pero esa tarea es una tarea de los sindicatos, de las organizaciones campesinas, de los movimientos sociales, de las ONG comprometidas, de los intelectuales. Pero el papel de López Obrador no podía ser ese. Lo que podía hacer creo que es lo que ha venido haciendo, crear, dar estructura a lo que él llama "movimiento ciudadano". Hay una confusión muy rara, porque por un lado está el movimiento amplio en defensa de la economía popular, el petróleo, la soberanía; y por otro lado está el Gobierno Legítimo, el obradorismo propiamente dicho. Más allá de las confusiones de qué es una cosa y qué es la otra, yo diría que el movimiento popular defiende tales y cuales derechos adquiridos, tales y cuales patrimonios populares, tales y cuales espacios, contra formas de represión, de violencia, etcétera, etcétera. Y esto se da de manera continua y no va a terminar en 2012; ha ido creando una fuerza reactiva, te quitan algo y peleas por conservarlo. Lo otro es un movimiento ciudadano que lucha por libertades democráticas, por la democracia real, por un proyecto de país. Que es lo que ha estado tratando de crear con cierta eficacia López Obrador y es lo que no había; digamos, era un espacio vacío.

Yo creo que más que una identidad ciudadana hay una recuperación de la noción de lo popular contrapuesto a lo oligárquico.

Popular ciudadano, no popular gremial. Te pueden decir "yo soy pueblo y soy campesino, yo soy pueblo y soy obrero, yo soy pueblo y soy sindicalista, yo soy pueblo y soy colono, yo soy pueblo y soy... lo que sea. Y yo soy pueblo y soy del movimiento de López Obrador, que es un movimiento ciudadano, etcétera, etcétera".

En la Argentina del 2001-2002 decían “soy vecino”, porque era lo territorial lo que los agrupaba, era el barrio, más que una ciudadanía negada. Era una forma de recuperar una identidad fincada en una materialidad, no desde la abstracción del derecho conculcado, negado en los hechos.

En México hay gente que cree que lo que hay que hacer es luchar por que no se haga la presa de La Parota y hay gente que cree que lo que hay que hacer es luchar por que salgan de la cárcel los presos de Atenco, y hay gente que cree que hay que pelear por que les devuelvan su materia de trabajo a los del SME y que lo que hay que hacer es pelear porque todo esto es legítimo y lo apoyamos. López Obrador y su movimiento plantean que hay luchas justas que hay que apoyar. Pero le decimos a la gente hasta dónde podemos llegar con esta serie de luchas, tratando de negociar. Necesitamos un cambio, y este es un cambio general, es un cambio político, es una regeneración del país, es una regeneración moral. Es un cambio político. Quienes estén de acuerdo con esto, que se organicen con nosotros. Y quienes no, bueno, los apoyamos porque están luchando por un pedazo de tierra o están luchando contra la carestía o porque les quieren cobrar de más por la electricidad. Entonces además de ser obreros, amas de casa, campesinos, o lo que fuere, son *ciudadanos* que apuestan por un cambio trascendente, político, en nuestro país. Yo creo que por ahí va. Y en ese sentido, si lo quieres definir de algún modo, es un *movimiento ciudadano*. Un movimiento ciudadano es mucho más limitado que un movimiento campesino que se despliega en forma organizada en el tiempo. Un movimiento ciudadano, ¿lo estructuras como partido o qué? ¿En un momento dado vas a participar en elecciones o no vas a participar? Es decir, funciona mucho en torno al 2012 porque nace como un movimiento ciudadano que era de apoyo a López Obrador como jefe de gobierno y futuro candidato. Lo querían sacar de la jugada, era de apoyo al López Obrador candidato; después de apoyo al López Obrador candidato defraudado, es decir, presidente legítimo. Ahora es un movimiento ciudadano por un cambio profundo que encabeza López Obrador. Eso lo define. Tiene relaciones fraternas pero no se confunde con una asociación campesina, con asociaciones sindicales. Yo he estado en las reuniones. Llegan organizaciones campesinas y le dicen: “simpatizamos con tus planteamientos y creemos que... pues estamos de acuerdo con lo que tú dices”. Y Andrés Manuel les contesta: “ustedes están luchando por eso, y yo los encomio a que luchen, a que sigan luchando por eso, por los precios, por esto, lo otro. Pero que tomen en cuenta que toda esta lucha, que es muy importante, no va a conducir a nada si no se hace la revolución”. Y además lo plantea como revolución, como regeneración, no en el sentido de ganar las futuras elecciones.

Porque plantea la ruptura más allá de lo gubernamental, respecto a un régimen de mafias del poder, una estructura de poder político-económico que tiene que ser derribada.

Exacto.

El movimiento obradorista se plantea como un nivel de articulación política. Otro proyecto de articulación es La Otra Campaña, que generó cierta animadversión desde 2006 por ciertas actitudes sectarias pero que no deja de ser una corriente

fundamental. ¿Cuál es el papel que pueden jugar La Otra Campaña y el zapatismo, llamémosle civil –no el zapatismo de la selva lacandona, de las comunidades indígenas, que tiene definido su papel histórico–? La Otra Campaña se proyecta como una opción más radical, declaradamente anticapitalista, a la izquierda del obradorismo, criticándolo y denunciándolo. ¿Tú crees que La Otra Campaña entró en una involución irreversible, que el zapatismo civil requerirá ser revitalizado por otro lado o encarna todavía una fuerza viva del país, que juega o podrá jugar un papel importante de crítica radical?

“...fue un error del EZLN pensar que ya la gente no creía en una opción electoral en el 2006 y lanzarse a La Otra Campaña para que no voten porque todos son iguales...”

Lo que me queda claro y además hay evidencias de ello es que los grupos de *La Otra Campaña*, de base, regionales, que están en batallas específicas –por ejemplo, el problema del no pago de la luz, del no pago de las cuotas exorbitantes– se encuentran con el movimiento lopezobradorista y marchan juntos. Es decir, en el terreno de las reivindicaciones sociales, hay convergencia. En términos de los presos, por ejemplo, hay convergencias, hay encuentros. Lo único que quiero decir es que la gente, los militantes de base de estos movimientos están en la resistencia cotidiana, y en la resistencia cotidiana hay otras expresiones del sectarismo. A lo mejor tú no te vas a juntar para nada con el vecino de al lado porque lo conoces, sabes que le pega a su señora y yo con él no voy ni a la esquina. Pero el hecho de que él sea de *La Otra Campaña* y tú seas obradorista no es la bronca. Entonces, a nivel de los movimientos sociales ha habido encuentros. En torno al asunto de Atenco, López Obrador ha apoyado, en torno a la lucha del SME, aunque se tardaron, los zapatistas finalmente apoyaron. Ahí hay encuentros. Lo que sucede es que no ha habido una confluencia que llevara al triunfo electoral, y yo creo que podríamos imaginar que si le hubieran reconocido el triunfo a López Obrador en 2006 entonces sería un gobernante que podía ser legítimamente cuestionado desde la izquierda social y desde la izquierda política, donde seguramente estaría el EZLN, porque no era todo lo radical que podía ser o que se podía esperar que fuera. Ese sería un escenario que no fue. Si esto no fue, ¿qué es lo que queda? Yo creo que fue un error del EZLN pensar que ya la gente no creía en una opción electoral en el 2006 y lanzarse a *La Otra Campaña* para que no voten porque todos son iguales y este que es el menos igual de todos es también igual. Fue una apuesta muy equivocada, yo lo he dicho muchas veces, fue un error de apreciación. El descreimiento en la opción electoral es mucho mayor hoy todavía que en 2006, y hay razones para ello. Entonces hay una situación en la que hoy sería más fácil para *La Otra*... decir “¿y todavía ustedes creen en las elecciones?, ¿cuántos ejemplos necesitan?”. Pero el problema es que López Obrador, pienso yo, va a ofrecer una opción. Electoral y no solo electoral, alguna combinación, y el EZLN no va a poder ofrecer nada sino volver a decir “y todavía no aprenden, y todavía siguen generando ilusiones”. ¿Pero qué otra cosa proponen aparte de esa ilusión?

Y, por otra parte, la radicalización de López Obrador cubrió un espacio importante de la izquierda.

Las ideas de izquierda van dominando en López Obrador. Te pongo un ejemplo. En la definición del programa, que es una labor de equipos, López Obrador plantea ciertas orientaciones. Lo último que ha dicho es “no se anden con medias tintas, no se anden con matices, no se anden con posiciones tibias. Hay que ser radicales, porque si no, no nos vamos a deslindar. No le podemos decir a la gente, bueno, sí, nosotros lo haríamos un poco distinto”. Creo que López Obrador está endureciendo su posición no porque se enojó, se desesperó y ahora se volvió un ultra, sino porque está claro que la coyuntura nacional es una coyuntura de deslindes. Perdieron credibilidad las opciones tibias, intermedias, de la izquierda racional, de la derecha democrática, de la vuelta de la izquierda priísta. Es una tarea de todo el movimiento plantear que en efecto vivimos una encrucijada nacional, que no se resuelve en un día votando, pero sí es una encrucijada nacional que coincide con una próxima elección.

El neocardenismo tenía su ambigüedad y tendió a buscar el máximo de consensos posibles incluyendo sectores de dudosa procedencia. El mismo López Obrador también intentará, como lo hizo en 2006, ampliar lo máximo posible el frente a la hora de las elecciones. Habrá que ver dónde queda la esencia del proyecto, y eso depende de cómo se resuelva una disputa interna al obradorismo. Al mismo tiempo, en 2006 podían tener un Lula en este país, pero la oligarquía no quiso tener un Lula y entonces López Obrador radicalizó su discurso.

Cuando López Obrador discute de política latinoamericana, él asume una posición menos equilibrada que la mayor parte de los gobiernos, digamos, progresistas; no porque su gobierno tuviera que ser necesariamente un gobierno a lo Chávez, en lo absoluto, sino porque en este momento no puedes andar diciéndoles “no se espanten”. Es el momento de decir “espántense, piensen que si en el 2012 eligen a Peña Nieto no se la van a acabar. Bueno, piénsenlo seriamente. Espántense”.

Los términos de la primera llamada, el lema de la campaña del 2006, era: “Por el bien de todos, primero los pobres” y era un mensaje claro: “¿Quieren mantener cierta cohesión y cierta unidad que les permita hacer negocios? Pues se requiere atender el problema de los pobres”. Ahora se está formulando de manera un poco más fuerte...

Sin duda, creo que aquí no estamos acostumbrados a que haya una disputa en términos de proyecto de país. Rápidamente, el proyecto de país pasa a ser un debate entre economistas. El espíritu del proyecto que este movimiento promueve está mucho más cerca de la idea de la regeneración espiritual, de la regeneración moral, de la recuperación de la dignidad. Esa dimensión que le supo dar el EZLN en un momento dado a las demandas de los pueblos indios. La conciencia de que está desmoralizado este pueblo, que nos da vergüenza ser mexicanos, que no tenemos confianza en el futuro, que nuestros hijos ya no quieren vivir aquí. De allí que se hace necesaria una regeneración moral. Yo creo que una de las cosas que nos han mostrado las nuevas revoluciones en América Latina es el aura, o sea, estas revoluciones tienen aura. No son revoluciones con proyectos de país muy sólidamente elaborados, sino son revoluciones con aura, con alma...

Gramsci decía "reforma moral e intelectual" para mostrar el alcance civilizatorio de la revolución social.

Para Sorel era el mito. No es la descripción científica con pelos y señales, hecha por tecnócratas. Yo creo que un contenido mitológico puede mover a la gente en torno de un proyecto que tiene que ver con el pasado y con el futuro. Por eso me parece que jugaron bien en Bolivia el componente incaico, con todo el fundamentalismo que tenía en sus orígenes lo transformaron en un elemento identitario para una convocatoria descolonizadora. Yo creo que en el caso de la historia de México la convocatoria tiene que ver con la recuperación de la historia.

Libros de Armando Bartra

- Bartra, Armando 1986 *Los herederos de zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México 1920-1980* (México: Era) Colección Problemas de México, 164 pp.
- Bartra, Armando (prólogo, selección y notas) 1991 *Regeneración 1900-1918. La corriente más radical de la revolución mexicana de 1910 a través de su periódico de combate* (México: Era) Colección Problemas de México, 5ª reimpresión, págs. 13-66.
- Bartra, Armando 1999 *1968: el mayo de la revolución* (México: Ítaca) 148 pp.
- Bartra, Armando 2000 *Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande* (México: Era) 178 pp.
- Bartra, Armando (comp.) 2000 *Crónicas del Sur. Utopías campesinas en Guerrero* (México: Era) 428 pp.
- Bartra, Armando (coord.) 2002 *Mesoamérica, los ríos profundos. Alternativas plebeyas al Plan Puebla Panamá* (México: Ediciones Casa Juan Pablos/El Atajo/Instituto Maya A. C.) 396 pp.
- Bartra, Armando 2002 *Economía política del Plan Puebla Panamá* (México: Ítaca).
- Bartra, Armando 2003 *Cosechas de ira: economía política de la contrarreforma agraria* (México: Ítaca/Instituto Maya) 131 pp.
- Bartra, Armando 2006 *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida* (México: UACM/ CEDRSSA/Ítaca) 382 pp.
- Bartra, Armando 2008 *El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital* (México: UACM/UAM/Ítaca) 213 pp.
- Bartra, Armando 2010 *Tomarse la Libertad. La dialéctica en cuestión.* (México: Ítaca) 232 pp.

Aportes del pensamiento crítico latinoamericano

Traducción y nacionalización del marxismo en América Latina. Un acercamiento al pensamiento político de René Zavaleta

Hernán Ouviaña

**La burguesía incompleta
Ni piedra filosofal, ni *summa* feliz**

René Zavaleta

Traducción y nacionalización del marxismo en América Latina

Un acercamiento al pensamiento político de René Zavaleta

HERNÁN OUVIÑA

Licenciado en Ciencia Política y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; investigador del CONICET y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.

Resumen

En el artículo se traza una biografía intelectual y política del sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, en la cual se hace hincapié en su insistencia de recrear un marxismo autóctono y en focalizar en la especificidad del Estado latinoamericano, caracterizado de "aparente" por la exclusión étnica que hace de los pueblos originarios, lo que ocasiona un conflicto que se intenta resolver mediante el Estado plurinacional.

Abstract

The article provides an intellectual and political biography of Bolivian sociologist René Zavaleta Mercado and focuses on his insistence that a native Marxism should be recreated and that the specificity of the Latin American state should be targeted, described as "apparent" given the ethnic exclusion of indigenous peoples. The multinational state is an attempt to resolve this conflict.

Palabras clave

Poder dual, sociedad abigarrada, Estado plurinacional, momento constitutivo

Keywords

Dual power, heterogeneous society, plurinational state, constitutive moment

Cómo citar este artículo

Ouviña, Hernán 2010 "Traducción y nacionalización del marxismo en América Latina. Un acercamiento al pensamiento político de René Zavaleta" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

“No es una exageración escribir que la difusión de las discusiones estatales es una verdadera medida del grado de proximidad de una clase con relación al poder.”

René Zavaleta

Las siguientes son solamente algunas reflexiones que no pretenden ser más que apuntes provisorios –o hipótesis de carácter no sistemático– teniendo por objeto, en principio, ordenar ciertas ideas originales en torno a la realidad latinoamericana esbozadas por el marxista boliviano René Zavaleta Mercado. Nos proponemos, por lo tanto, revisar críticamente los núcleos centrales de su pensamiento teórico-político haciendo especial hincapié en sus análisis centrados en la especificidad histórica tanto de la génesis como del devenir de las formaciones estatales en nuestro continente, así como en la original revisión del marxismo que efectúa durante su intensa vida intelectual. En tal sentido, nuestro objetivo principal será analizar la vigencia y potencialidad de su *corpus* conceptual tanto para la elaboración de una teoría marxista del Estado latinoamericano como para desentrañar ciertas dimensiones de la realidad política contemporánea en la región.

No obstante, antes de remitirnos a los aportes que ha efectuado al marxismo latinoamericano, cabe señalar una serie de características que lo hacen distintivo y casi excepcional: en primer lugar, podemos mencionar que estamos en presencia de una vida por demás intensa, truncada por una muerte relativamente precoz; asimismo, su antidogmatismo –entendiendo al marxismo no como un sistema cerrado y escolástico, sino en tanto teoría subversiva en constante enriquecimiento y complejización, basada en una dialéctica del cambio– y su humanismo socialista son producto no solo de su vertiginosa formación intelectual sino también de su aguda experiencia política, a lo que habría que sumarle el haber intentado contribuir a la difusión del marxismo cálido en –y desde– América Latina, caracterizando a la revolución en este continente a la vez como socialista y anti-imperialista. Por último, al igual que otro intelectual olvidado como es el argentino José María Aricó, Zavaleta constituye uno de los más originales lectores del pensador italiano Antonio Gramsci, en la medida en que ha tenido a lo largo de su obra una afición permanente por “traducirlo”, más allá de la acepción filológica del término, a la realidad latinoamericana, poniendo en juego y recreando sus categorías más fructíferas. Comenzaremos, pues, detallando de forma sintética lo que consideramos constituyen tres grandes momentos en su recorrido político-intelectual, para luego avanzar en el estudio de algunas categorías e interpretaciones esbozadas por Zavaleta, en especial durante la última década de su vida, que consideramos contribuyen a enriquecer el pensamiento crítico ligado a una vocación emancipatoria de reinención de la política.

Biografía en tres actos: breve itinerario de su derrotero político-intelectual¹

René Zavaleta Mercado nace en 1937 en Oruro, una hermosa ciudad boliviana caracterizada históricamente por su fuerte ligazón a los grandes centros mineros de la región andina. Hacía solo dos años de finalizada la cruenta guerra del Chaco,

en la cual Bolivia había resultado derrotada por Paraguay. Durante 1954, a la temprana edad de 16 años, publica sus primeros artículos periodísticos, entre los que cabe mencionar “El porvenir de América Latina”, que en su propio título deja traslucir un profundo interés por el destino de nuestro continente. En su serpenteante itinerario biográfico-intelectual, este será el momento a partir del cual comience a abrazar poco a poco, en la clave de actos que proponemos a modo de ordenamiento, el nacionalismo revolucionario como tendencia ideológico-política, desde una perspectiva que algunos autores han denominado “culturalismo telúrico” debido al rol sustancial que le otorga a las élites culturales como fuerza motriz de la redención histórica de las naciones oprimidas².

En los años sucesivos se dedicará a estudiar Derecho, abocándose simultáneamente a la actividad periodística en diferentes medios nacionales y extranjeros. Ello no le impedirá desempeñarse como Agregado Cultural de la Embajada de Bolivia en Uruguay (1958-1960), diputado nacional (1962-1963) y finalmente ministro de Minería durante 1964, en la última etapa del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Tras el golpe de Estado en noviembre de ese año decide exiliarse en Montevideo, donde se vuelca nuevamente a la producción periodística e intelectual, publicando en 1967 su primer libro importante, *La formación de la conciencia nacional*. A partir de una radicalización de su pensamiento nacionalista, en él plantea la necesidad de distinguir entre la “nación fáctica” y la “nación para sí”, momento en el cual acudiendo al socialismo aquella deja de ser un simple dato de la realidad y se elige a sí misma. Ya entre 1969 y 1971 redactará una serie de escritos en torno a las iniciativas de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia que evidencian su simpatía –si bien teñida de agudas críticas– con aquella cercenada experiencia guerrillera. Es en esta coyuntura de agudización de la lucha de clases a escala continental que tendrá un progresivo acercamiento al marxismo como teoría de análisis de la realidad latinoamericana.

Desde comienzos de 1970 cabe por lo tanto hablar de un segundo acto en su derrotero, ligado a un *marxismo ortodoxo* sumamente curioso, que no dejará de ser molesto para el pensamiento de la izquierda dogmática de aquel entonces, en especial la estalinista. Quizás no sea del todo errado calificarlo como un personaje heterodoxo que produce y habita en los márgenes internos de la ortodoxia. Será este un momento sumamente prolífico de producción intelectual y contacto directo con procesos revolucionarios inéditos en América Latina, como el del Chile de Salvador Allende (donde vivirá entre 1971 y 1973) y la Bolivia de la Asamblea Popular, ambos truncados por cruentos golpes de Estado, que lo obligan una vez más a exiliarse, esta vez asumiendo sin saberlo un camino sin retorno hacia la patria mexicana.

No obstante, de la interpretación rigurosa de esas experiencias anómalas de construcción socialista saldrá a la luz en 1974 el libro *El poder dual*, en donde a partir de la recuperación crítica de las enseñanzas de Lenin y Trotsky alrededor de la situación de “dualidad de poderes” analizará las similitudes y diferencias entre ambos proyectos políticos. También durante este año y 1975 se preguntará por las posibilidades de un conocimiento científico en una sociedad “atrasada”, recuperando para ello el pensamiento del joven Lukács, para quien el proletariado cuenta con un punto de vista que le permite, por su condición social específica,

tener un horizonte de visibilidad más amplio. Artículos como “Movimiento obrero y ciencia social” o “Clase y conocimiento” esbozan de forma magistral este planteo, que postula la crisis de toda formación social como una escuela de (auto) conocimiento integral.

Ya a partir de la segunda mitad de los años setenta la matriz de intelección de Zavaleta pasará lentamente del eje Marx-Lenin al par Marx-Gramsci, y aquí comienza en forma progresiva un tránsito hacia la producción de un *marxismo latinoamericano original*, como tercer e inconcluso acto en su devenir biográfico. Este proceso de apropiación, traducción y recreación crítica de las mejores corrientes del marxismo occidental –Georg Lukács, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Louis Althusser, Herbert Marcuse, Nicos Poulantzas, Ralph Miliband, Edward P. Thompson y John Holloway, por nombrar solo a los más relevantes– encontrará a Zavaleta en una ardua polémica, si bien no exenta de diálogos enriquecedores, con las tradiciones teóricas gestadas desde nuestra realidad latinoamericana, como el desarrollismo y la teoría de la dependencia, lo que redundará en una genuina nacionalización del marxismo. Su estancia en México lo encontrará abocado a la difusión del pensamiento crítico, irradiando sus reflexiones más allá de esa tierra que lo acogió. Allí funda la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de la cual supo ser su primer director entre 1976 y 1980, dictando en ella y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diversos cursos y seminarios sobre el pensamiento de Marx, en el marco de los cuales llegará a delinear una concepción de la democracia en tanto que autodeterminación de masas que escandalizaría a más de un politólogo. En 1984, teniendo solo 47 años, fallece en México. Dos años después se publicará en el país azteca su inconcluso ensayo *Lo nacional-popular en Bolivia*, en el que se encontraba trabajando cuando lo asaltó de imprevisto la muerte.

El ejercicio de traducción y nacionalización del marxismo a la realidad “anómala” latinoamericana

Puede resultar paradójico que a pesar de constituir una referencia ineludible para (re)pensar desde una perspectiva crítica al marxismo latinoamericano, la figura de René Zavaleta Mercado se encuentre prácticamente ausente en los libros y documentos que se refieren a él. Sin embargo, su espectro sobrevuela las experiencias más emblemáticas de construcción política alternativa surgidas en nuestro continente, y el corpus teórico que llegó a desarrollar en su inconclusa obra resulta de una potencialidad casi inigualable a la hora de intentar analizar estos procesos y su contradictorio vínculo con lo estatal.

Quizás esta ambigua presencia espectral se deba a que a lo largo de su búsqueda intelectual Zavaleta supo tomar distancia de los dos flagelos –o tendencias opuestas pero paradójicamente coincidentes– que al decir de Michael Löwy (1980) desde un comienzo signaron el derrotero del pensamiento político y filosófico en nuestro continente: por un lado el exotismo, que absolutizaba la especificidad de América Latina (su cultura, su historia, su estructura social, etc.) acabando por enjuiciar al propio marxismo como doctrina exclusivamente europea; por el otro el europeísmo, que tendía a trasladar mecánicamente a esta

realidad –y sobre la base de una concepción unilineal de la historia– los modelos de desarrollo económico y social occidentales en su “evolución” histórica, intentando encontrar de cada aspecto de la realidad europea su equivalente en Latinoamérica. Parafraseando a José Carlos Mariátegui, podemos decir que más que un itinerario preconcebido o una Filosofía de la Historia, para Zavaleta el marxismo –en tanto que filosofía de la praxis– constituía una frágil brújula para orientar el análisis y la transformación en nuestro continente desde una óptica propia. Así pues, un rasgo de honestidad intelectual era reconocer sin tapujos el “hueco” teórico existente en las reflexiones de Marx y Engels alrededor de Nuestra América. Menosprecio o indiferencia son los adjetivos que utiliza por ejemplo José Aricó para dar cuenta del vínculo que establecieron los fundadores del materialismo histórico frente a la naturaleza específica de las sociedades latinoamericanas. Su carácter “atípico” era visto por ellos como transitorio; coyuntural desvió respecto del derrotero inevitable delineado a partir del “modelo clásico” descrito en *El Capital*³; y si bien existen textos y borradores redactados por ambos en sus respectivos períodos de madurez que resultan un notable aporte para entender ciertas sociedades de la periferia capitalista, tales como los materiales escritos en torno al problema irlandés o a la comuna rural rusa⁴, ellos no suplen la necesidad de edificar un pensamiento anticapitalista de raigambre autónoma, que pueda dar cuenta de los problemas y desafíos presentes en nuestro continente, sin acudir –por más herético y “revolucionario” que se nos presente– a modelo enlatado alguno.

“De ahí (...) que Zavaleta haya intentado generar una confluencia creativa entre pensamiento crítico y realidad latinoamericana...”

De ahí que a contrapelo de aquellos dos vicios invariantes de la izquierda durante el siglo XX, Zavaleta haya intentado generar una confluencia creativa entre el pensamiento crítico y la realidad latinoamericana, postulando que si bien el marxismo nunca ha producido una revolución en estas tierras sí ha cumplido un rol descollante como acicate de ella en aquellos casos en que *supo leer en cada historia nacional la formación o génesis subterránea de un cambio social radical*, aportando así a la configuración de una praxis genuinamente latinoamericana, que al decir de José Carlos Mariátegui no fuera “calco ni copia”. Es que el análisis de nuestra realidad amerita despojarse de la matriz colonial que desde los tiempos de la conquista subsume toda reflexión a la óptica occidental europea, porque como gustaba de decir Zavaleta, *lo concreto y lo específico es la manera de ocurrir de los hechos sociales*, por lo que no se resguarda al marxismo generalizando su uso sino haciendo explícitos sus márgenes de aplicabilidad (Tapia, 2002b). En este sentido, para él la labor del pensamiento crítico radica en realizar un constante ejercicio de traducción y recreación del marxismo que permita dar cuenta de sus límites en tanto “modelo de regularidad”, sobre la base de la dimensión propiamente local que supone una síntesis específica, imposible de universalizarse en términos de leyes y teorías suprahistóricas.

Desde esta perspectiva, en su póstumo *Lo nacional-popular en Bolivia* expresará que “es la propia necesidad la que hace que cada modo de ser convoque a una forma de conocimiento, con lo que cual será discutible hablar de un método de conocimiento general a todas las sociedades”. Antes bien, esta “resulta al menos una posibilidad tan remota como la de una teoría general del Estado” (Zavaleta, 1986). Será esta misma matriz de intelección la que le permitirá afirmar en un texto previo y de forma un tanto provocativa que “en último término la teoría del Estado, si es algo, es la historia de cada Estado” (Zavaleta, 1990b). A ello aludía precisamente Antonio Gramsci (1999) al definir a la filosofía de la praxis como historicismo *absoluto*, Louis Althusser (1982) al hablar del marxismo en los términos de una teoría *finita* o José Carlos Mariátegui (1975) al expresar sin tapujos que “no es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales”. Este ejercicio de constante traducción, recreación y “nacionalización” de la teoría crítica marxista requiere según Zavaleta de la composición desaxiomatizada de originales fórmulas conceptuales y verbales que permitan aprehender y dar cuenta de una realidad irreductible, que se nos muestra difícil de asir y siempre escamotea la generalización y mera reproducción de esquemas preestablecidos.

América Latina ante la dualidad de poderes: inventamos o erramos

Tal como comentamos en la breve reseña biográfico-intelectual, René Zavaleta escribió el ensayo *El poder dual* durante su segundo momento teórico, ligado al marxismo de raigambre clásica aunque tendiente a su recreación bajo un prisma crítico y profundamente condicionado por la agitada coyuntura política que se vivía entre 1969 y 1973 en Chile y Bolivia, de manera tal que –como relata Horst Grebe López en el prólogo a la tercera edición de esta obra en el país andino– “representa una fase de tránsito intelectual y político, donde se salda cuentas con la militancia previa en el MNR y se preparan las bases para la posterior afiliación al Partido Comunista de Bolivia”. Su eje es, por lo tanto, el estar adherido a esta inusitada realidad latinoamericana en curso, signada por una fase ascendente de la lucha de clases, que encuentra a Zavaleta analizando de cerca los procesos de configuración de sujetos políticos encarnados por un lado en la revolución de 1952 y en la práctica de la Asamblea Popular de 1971 en el país andino y, por el otro, en el triunfo de la Unidad Popular en 1970 en Chile. Lo interesante del ejercicio teórico que realiza es que, si bien recupera los debates clásicos en torno a la dualidad de poderes generados en Rusia, lejos de intentar encontrar equivalencias y aplicar mecánicamente las reflexiones de Lenin y Trotsky a estas experiencias apunta a dar cuenta de sus respectivas particularidades y diferencias, vale decir, a lo que hay de específico e irreductible en ellas. Esto lo distancia de intérpretes del marxismo que –como el trotskista boliviano Guillermo Lora– tienden a la aplicación del materialismo histórico más que a desarrollarlo teóricamente (Tapia, 2002b).

A partir del análisis de las reflexiones de Lenin y Trotsky⁵, Zavaleta retoma las características distintivas de toda situación de dualidad de poderes, a saber: el hecho de ser una fase transitoria por definición, que supone la emergencia, en el marco de un proceso revolucionario, de dos poderes con vocación estatal, uno

de carácter principal, el otro embrionario y surgido desde abajo a partir de la iniciativa de las masas, ambos alternativos e incompatibles entre sí, donde lo que debía producirse sucesivamente en términos temporales –revolución democrático-burguesa primero, revolución socialista tiempo después– acontece de una manera paralela, generando por lo tanto una dinámica de contemporaneidad cualitativa de lo anterior y lo posterior. Sin embargo, cabe aclarar que lejos de pensar como idénticas a las conjeturas de los líderes de la Revolución Rusa, Zavaleta intenta dar cuenta de sus contrastes. De ahí que, rescatando el planteo de Gramsci en sus notas carcelarias –donde describe a “Bronstein” como cosmopolita, es decir, superficialmente nacional, por contraste a “Ilich”, quien era en cambio profundamente nacional– postule que mientras para Trotsky la dualidad de poderes constituye una inevitable ley social transtemporal, que no se vincula a ningún tipo específico de revolución, sino que es propio de todo “episodio característico de la lucha entre dos regímenes”, para Lenin resulta un hecho anómalo y excepcional, producto de la especificidad de la realidad rusa y “sin precedentes en la historia”.

Según Zavaleta (1987), el meollo de la diferencia entre ambos se sitúa en “la especificidad o localismo de Lenin y el alocalismo y universalidad de Trotsky en cuando a sus visiones acerca de la dualidad de poderes”, que él define respectivamente como la lógica del *lugar* (que remite a la peculiaridad de la historia de cada sociedad) y la del *mundo* (lo comparable de la historia a escala planetaria). Ciertamente es que, al decir de Zavaleta, las situaciones en la realidad concreta son más complejas e impuras de lo que puede caber en una frase. No obstante, frente a estas dos maneras de interpretar e intentar transformar una sociedad específica, para el autor de *El poder dual* “la lógica del lugar suele derrotar a la lógica del mundo”. Con esta contundente expresión pretende afirmar la necesidad de explicar los rasgos distintivos de las sociedades latinoamericanas –en este caso la boliviana y la chilena– sin desechar la teorización más general presente en los clásicos del marxismo, aunque sí poniendo en cuestión las lecturas ortodoxas que subsumen la historia viva y única de cada sociedad al patrón mundial del sistema capitalista que las condiciona, licuando de esta forma todo rasgo distintivo.

Frente a esta tentación, Zavaleta nos propondrá en sus sucesivos textos relativizar los márgenes de validez de lo que denomina “modelo de regularidad”. El conocimiento de aquello que se pretende transformar requerirá por lo tanto de un complejo proceso de apropiación crítica o “nacionalización” del marxismo en función de la lógica del lugar, es decir, del territorio específico en el cual se lucha. No otro ejercicio propusieron a su modo tanto Gramsci como Mariátegui al plantear la necesidad de *traducir* y adecuar la estrategia global formulada por la Internacional Comunista durante la primera mitad de la década del veinte a la realidad específica de cada sociedad y región, encontrando equivalentes sin omitir particularidades ni desestimar elementos novedosos. El inconcluso estudio *La cuestión meridional* y los *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* pueden ser leídos como originales respuestas, en Italia y Perú respectivamente, a este desafío teórico-político que Zavaleta definirá como “producción de conocimiento local”.

De manera análoga, en su libro *El poder dual* intentará pensar las experiencias boliviana y chilena no en tanto que réplicas autóctonas de la situación vivida en

Rusia en 1917 sino bajo el prisma del desarrollo específico de los sujetos políticos y de la “ecuación particular” entre Estado y sociedad que cada país supone, aunque sin aislarlo de la coyuntura continental y mundial. Lo que expresaron ambas situaciones revolucionarias fue más bien el *germen* de un poder dual, sin que este llegara a desarrollarse en los términos antes mencionados de una fase por definición transitoria de constitución de un poder diferenciado y antagónico al del Estado capitalista. Si en 1952 se había logrado destruir al ejército –verdadera “síntesis” del Estado, al decir de Zavaleta– pero tendió a predominar la ideología burguesa en el seno de la clase obrera boliviana, durante 1971 ocurrió algo inverso: la enorme potencialidad de irradiación de la hegemonía proletaria y del programa que encarnaba la Asamblea Popular tropezó con el poder del brazo armado del Estado. En ambos casos lo que existió fue un *esbozo* y no la figura misma del poder dual. En cuanto al Chile de la Unidad Popular –que combina la paradoja de un almacén estatal altamente desarrollado con una formación económica endeble y subdesarrollada– lo que acontece en buena medida tiene lugar dentro de la estructura legal del Estado –coexistencia y tensión entre dos fuerzas beligerantes en su interior– y no por fuera de ella, más allá de la importancia de los incipientes cordones industriales y los comandos comunales.

“...un primer elemento a tener en cuenta es el retraso socio-económico producto del rol ‘asignado’ a América Latina por parte de los países industrializados en la división internacional del trabajo”

Esta lectura crítica no le impedirá aventurar, en un postfacio escrito tras el golpe de Pinochet, que “la cuestión del fracaso-éxito del sistema político de Allende se continúa en una obra de magnitud más ancha y compleja. A saber, la de si el proyecto socialista puede desarrollarse de un modo completamente externo a la democracia burguesa, es decir, a la sociedad burguesa desarrollada en su forma moderna”, concluyendo que sin un grado de interioridad con relación a ella –léase, en tanto parte integrante y a la vez negación de esta sociedad– resulta imposible siquiera pensar en la organización de los trabajadores como clase antagónica. Pero simultáneamente, una de las enseñanzas principales de estos procesos latinoamericanos trancos es la necesidad de apuntar a lo que Zavaleta definirá como “acumulación en el seno de la clase”⁶, en donde al calor de la construcción de una correlación de fuerzas cada vez más favorable los sectores subalternos vayan conquistando una creciente autonomía ideológica y política –el “espíritu de escisión” del que hablaba Gramsci– respecto de la burguesía y el Estado que es garante de sus privilegios. En suma: todo movimiento revolucionario deberá cabalgar sobre la dialéctica que se despliega en este proceso contradictorio condensado por un lado en luchas por reformas cotidianas y por el otro en una estrategia de radical cambio global que las oriente, de forma tal de ser lo suficientemente interno a la realidad que se pretende transformar de raíz y “lo suficientemente externo –a ella– como para dejar de pertenecerle”.

El Estado como fuerza productiva y la simultaneidad entre base y superestructura

Si bien en forma embrionaria y dispersa, el análisis de la génesis de los Estados en Europa occidental ha sido planteado por Marx y Engels en diversos textos. Ahora bien, en particular durante su última década de vida, Zavaleta formula como problema invariante el siguiente interrogante: ¿qué ocurre con aquellas formaciones económico-sociales que, como la “latinoamericana”, no cumplieron el ciclo que va –aunque contradictoriamente– del esclavismo al feudalismo y de este hacia sociedades de tipo burguesas? En estos casos, el análisis precedente resulta cuanto menos insuficiente, en la medida en que la emergencia de un aparato estatal de carácter nacional va a estar ligado, en particular en nuestra región, con guerras independentistas contra un poder colonial ejercido por dos potencias extranjeras –España y, en menor grado, Portugal–, ambas en franca decadencia.

Por ello, un primer elemento a tener en cuenta es el retraso socio-económico producto del rol “asignado” a América Latina por parte de los países industrializados en la división internacional del trabajo. De acuerdo a René Zavaleta, esta debilidad estructural –anclada en el fuerte condicionamiento del mercado mundial constituido– ha implicado que sea el Estado quien se hiciera cargo, en gran medida, del desarrollo capitalista y de la producción de una identidad colectiva. En este sentido, la conformación de clases sociales en términos nacionales no fue un proceso acabado como en Europa. De ahí que en el caso de nuestro continente no pueda considerarse al Estado una mera entidad “superestructural”, tal como la define cierto marxismo esquemático, sino en tanto verdadera fuerza productiva, es decir, “como un elemento de atmósfera, de seguro y de compulsión al nivel de la base económica” (Zavaleta, 1988a). “La peor vulgarización –dirá en el breve escrito titulado sugestivamente *La burguesía incompleta*– es la que supone que el Estado puede existir solo en la superestructura, como si se colgara al revés. Sin una acción extraeconómica, es decir, estatal de algún modo, es poco concebible la destrucción de las barreras que hay entre hombres y hombres, entre partes de un territorio sin embargo continuo (es decir, potencialmente ‘nacional’), etcétera. Aquí tenemos un reverso de lo anterior: no la nación como asiento material del Estado nacional sino el Estado como constructor de la nación”. En efecto, lejos de otorgarle un rol secundario y de simple “reflejo” del nivel de lo económico, Zavaleta le adjudica al Estado un papel central en la estructuración de nuestras sociedades, debido a que “las burguesías latinoamericanas no solo no se encontraron con esas condiciones resueltas *ex ante* sino que no existían ellas mismas o existían como semillas. En gran medida, se puede decir que tuvieron que ser construidas desde el hecho estatal”.

Más que grandes centros manufactureros e industriales, lo que se consolidó fueron, al menos en el transcurrir del siglo XIX, sociedades con un claro predominio agrario, salvo escasas (y parciales) excepciones. Es por ello que la dependencia con respecto al capital extranjero, de la cual deriva el debilitamiento de la estructura económica, es esencial como eje problemático a los efectos de entender la diferencia entre los Estados “centrales” y los “periféricos”. Tal como dirán en la misma línea de Zavaleta Pierre Salama y Gilberto Mathias (1986), en los países subdesarrollados “la aparición y la extensión del modo de producción capitalista

no han sido en general resultado del desarrollo de contradicciones internas. Ese modo de producción no ha surgido de las entrañas de la sociedad, sino que, de alguna manera, ha sido lanzado en paracaídas desde el exterior". Como consecuencia de este proceso, la intervención estatal ha suplido, al menos en sus inicios, a la frágil iniciativa privada⁷.

Esto es algo que al decir de José Aricó supo anticipar teóricamente el propio Gramsci desde sus notas de encierro. En efecto, en uno de sus primeros Cuadernos de la Cárcel, el teórico de la hegemonía civil postula a la evidente incapacidad de autoconstitución de la sociedad como uno de los rasgos que han caracterizado al proceso de configuración de los estados latinoamericanos⁸. De acuerdo a Aricó (1983) "forzado por el perfil fuertemente antihegeliano que adoptó polémicamente su consideración del Estado moderno, Marx se sintió inclinado a negar teóricamente todo posible rol autónomo del Estado político, idea esta que sin embargo constituía el eje en torno al cual se estructuró su proyecto inicial de crítica de la política y del Estado. Al extender indebidamente al mundo no europeo la crítica del modelo hegeliano de un Estado político como forma suprema y fundante de la comunidad ética, Marx debía ser conducido, por la propia lógica de sus análisis, a desconocer en el Estado toda capacidad de fundación o de 'producción' de la sociedad civil y, por extensión y analogía, cualquier influencia decisoria sobre los procesos de constitución o fundación de una nación.

Asimismo, "constreñida por su visión societalista a colocar siempre en un plano casi excluyente de los demás a la estructura de clases y las relaciones que de allí arrancan, la izquierda de tradición marxista se rehusó a reconocer y admitir la funcionalidad específica de un Estado —el latinoamericano— que, en ausencia de una clase nacional, operaba como una suerte de Estado 'puro', arrastrando a la sociedad al cambio y fabricando desde la cúspide a la clase dirigente". Desde la óptica de Zavaleta y Aricó, las originales reflexiones de Gramsci en torno a los llamados "Estados periféricos" (dentro de los que se encontraban Italia, Portugal, España y Polonia) brindarían pistas para problematizar la "anomalía" de las formaciones sociales en América Latina. Para el autor de *La cola del diablo* no hay medias tintas: en nuestro continente "son el Estado y la política quienes modelan a la sociedad" (Aricó, 1988).

Podríamos entonces afirmar que en nuestra región el Estado ha sido quien en buena medida sobredeterminó y estructuró a la propia sociedad en su etapa fundacional, aunque la determinación en última instancia haya corrido, a escala global, por parte del mercado mundialmente constituido⁹. Esto llevará a Zavaleta a replantear, en un plano más general, la relación entre la dimensión política y la económica en una clave más dinámica y dialéctica, de mutuo condicionamiento y estructuración, despojándonos de todo esquematismo simplón y concibiendo a la sociedad en los términos de una "totalidad orgánica". En dos de sus textos más lúcidos —"Las formaciones aparentes en Marx" y el borrador titulado "Formas de operar del Estado en América Latina"— formulará una interesante interpretación de la famosa metáfora arquitectónica esbozada en el prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, afirmando que la relación entre estructura y superestructura implica una triple "simultaneidad": cronológica, topológica y causal (Gil, 1994). Mientras la primera implica que la dimensión estructural no

precede a la superestructura, sino que son co-constitutivas, lo cual rompe con “la falacia de suponer que la economía existe antes” (Zavaleta, 1988b), la segunda postula la imposibilidad de escindir a ambas esferas, salvo en un plano estrictamente analítico, debido a que “la sociedad en el capitalismo ocurre como una totalidad esencialmente orgánica” (Zavaleta, 2006). A su vez, la tercera simultaneidad establece la interdeterminación de la estructura y la superestructura, lo que puede leerse bajo la óptica de un mutuo juego de acciones y reacciones, donde lo estatal cumple un rol activo y particularizado, tal como el que ejemplificamos con la génesis de las clases sociales y la configuración de las naciones durante el siglo XIX en nuestro continente. Esto lo lleva a afirmar que “cuando existe el acto económico o la relación productiva, existen a la vez dentro de ellos, y no como un mero rebote, las relaciones estatales y los episodios de representación social”. En efecto, de acuerdo a Zavaleta “no solo no hay una correspondencia inmediata entre ambas –estructura y superestructura– sino que la manera misma de la correspondencia, según cuál sea la forma superestructural, puede ser crítica o sucesiva”. Así, tomando distancia de lo que considera es una interpretación dogmática y errónea de la clásica Introducción redactada por Marx en 1859, concluirá que “la superestructura puede obedecer a varios órdenes o determinaciones que ocurren en tiempos diferentes, que vienen de la sociedad civil y puede, además, tener diferentes capacidades de respuesta a tales determinaciones”, por lo que “la fuerza de la determinación –léase: la llamada base material– resulta tan importante como la sensibilidad o la receptividad de la superestructura determinada”.

Como complemento de esta relectura crítica del marxismo, Zavaleta (1990b) construye la categoría de “momento constitutivo”, que remite al acto originario donde se plasman o bien se refundan las características y rasgos más destacados de una determinada sociedad por un tiempo relativamente prolongado (la configuración de un determinado bloque histórico nacional, al decir de Gramsci), “un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son”. Además de la acumulación originaria como ejemplo típico y fundante, Zavaleta menciona a la Revolución Mexicana iniciada en 1910, al proceso insurreccional vivido en Bolivia durante abril de 1952 o, en el caso argentino, a 1880 –y en un plano más reciente, a los acontecimientos en torno al 17 de octubre de 1945–, todos ellos entendidos como episodios epocales que suponen, además de una articulación específica entre el Estado y la sociedad, la creación de un tipo particular de intersubjetividad u horizonte de sentido¹⁰.

Asimismo, otros dos conceptos elaborados por él para entender la especificidad de cada sociedad, en particular en América Latina, son los de “forma primordial” y “determinación dependiente”, como pares contrarios y combinables que en cierta manera remiten a la dialéctica entre la lógica del lugar y la unidad del mundo descriptas anteriormente. Si la primera permite dar cuenta de la *ecuación* existente entre Estado y sociedad al interior de un territorio y en el marco de una historia local, definiendo “el grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de su separación o extrañamiento” (Zavaleta, 1990b), la segunda refiere al conjunto de condicionamientos externos que ponen un límite (o margen de maniobra) a los procesos de configuración endógenos. Es que de acuerdo a Zavaleta (1986) “cada sociedad, incluso la más débil y aislada, tiene siempre

un margen de autodeterminación; pero no lo tiene en absoluto si no conoce las condiciones o particularidades de su dependencia. En otros términos, cada historia nacional crea un patrón específico de autonomía pero también engendra una modalidad concreta de dependencia”.

“Abigarramiento social” y “Estados aparentes”: de los movimientos sociales a las sociedades en movimiento

Junto con el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla¹¹, René Zavaleta fue uno de los pocos intelectuales que supo dar cuenta –partiendo del conjunto de categorías antes descritas– de la especificidad de ciertas sociedades latinoamericanas, como la boliviana, la ecuatoriana, la peruana, la guatemalteca y la mexicana, caracterizadas por diferentes grados de “abigarramiento”. En ellas se superponen, sin confluencia alguna, mundos, culturas, memorias, temporalidades e historias diversas, por lo que podríamos decir que existe, no sin un dejo de ironía, desarrollo desigual aunque sin combinación, esto es, no articulándose sino en su momento más formal. Este tipo de países, de acuerdo a la lúcida actualización que de los planteos de Zavaleta realiza Luis Tapia (2002a), serían a diferencia de Argentina –donde el genocidio indígena, si bien no fue total, resultó por demás extensivo– multisociales, en la medida en que cobijarían en su interior varias civilizaciones, ni plenamente disueltas ni del todo integradas, sino más bien subsumidas bajo un único patrón colonial basado en el mestizaje “castellano hablante e individuado” propio de las élites urbanas (García Linera, 2003).

Como consecuencia de este apartheid político-cultural de hecho, los Estados que allí se han configurado deben ser considerados según Zavaleta como “aparentes”, debido a la conjunción de mecanismos de exclusión étnica que desde su génesis han desplegado a nivel cotidiano, que van desde la imposición del español como único idioma oficial¹², al desconocimiento total de las maneras de organización comunitaria, formas locales de autoridad y toma colectiva de decisiones que ejercen los pueblos originarios en sus territorios ancestrales. Lo que emerge entonces es “un poder político jurídicamente soberano sobre el conjunto de un determinado territorio que no tiene relación orgánica con aquellas poblaciones sobre las que pretende gobernar” (Tapia, 2002b), que implica que buena parte de los habitantes solo se sienten parte de esa sociedad por la fuerza de las circunstancias, lo que redundaría en que se está en presencia de “esqueletos estatales” sin nación, entendida esta en tanto que arco de solidaridades que cohesiona y contiene a la totalidad de la población. Producto de este mestizaje inestable y temporal, en las sociedades abigarradas existe una yuxtaposición no solamente de diferentes “modos de producción”, tal como define cierto marxismo clásico a las formaciones económico-sociales, sino también de diversidad de tiempos históricos incompatibles entre sí, como el agrario estacional condensado en los ayllus andinos (en tanto comunidades pre-estatales endógenas) y el homogéneo que pretende imponer y universalizar la ley del valor. Una característica central de los “Estados aparentes” es, por tanto, la posesión parcialmente ilusoria de territorio, población y poder político, a raíz de la persistencia de civilizaciones que mantienen –si bien en conflicto y tensión permanente con la lógica mercantil que tiende a contami-

narlas— dinámicas comunitarias de producción y reproducción de la vida social, antagonicas a las de la modernidad capitalista.

Partiendo de esta caracterización, diversos autores como Luis Tapia, Raúl Prada y Álvaro García Linera han hecho notar que en este tipo de configuraciones territoriales, donde prima una dominación sin hegemonía¹³, más que frente a movimientos sociales estamos en presencia de verdaderas sociedades en movimiento, vale decir, movimientos societales o civilizaciones que —emergiendo desde lo más profundo de aquellos países imaginarios y mestizos delineados por las élites urbanas— se encuentran oprimidas por un Estado “monocultural” homogeneizante, aunque sin haber sufrido un desmembramiento total de sus formas de vida, culturas, temporalidades rurales, lenguas, tradiciones y dinámicas de producción comunitarias¹⁴. El crisol de resistencias indígenas, campesinas y populares que hoy circunda buena parte de la región, y que ha llegado a desplegar prácticas insurreccionales en varios países, remite precisamente a esta subalternidad superpuesta y en constante antagonismo que subyace a ese complejo entramado de abigarramiento social antes descrito.

Al margen de sus notables aportes, Zavaleta dejó abierto un interrogante alrededor de estas sociedades abigarradas. ¿Con qué sustituir a aquellos “Estados aparentes” que encarnan no solo las clásicas relaciones de explotación y dominio, sino también simultáneamente formas descarnadas de homogeneización cultural, racismo y segregación? La noción de “Estado plurinacional”, si bien no es teorizada por él, sí resulta una consigna guía levantada por muchos de los movimientos indígenas y campesinos de la región andina, amazónica y mesoamericana. Frente a esta propuesta, el boliviano Luis Tapia (2002a) advierte que “si se configura un Estado multinacional, este tendría que contener las formas políticas de las varias naciones asociadas en cogobierno o ser una nueva síntesis con el material político de las naciones que se unen, más la novedad o la necesidad de creación de los elementos nuevos para hacer posible el cogobierno multinacional. En este sentido, un Estado multinacional es más factible con alguna forma federal de gobierno, que implica descentralización, localización o raíces locales y una dimensión de autogobierno”. Lejos de toda respuesta facilista, las rebeliones y los procesos de constitución de sujetos políticos plebeyos en Nuestra América deberán afrontar creativamente este desafío en los senderos que caminen, sin perder su vocación anticapitalista y “viendo al mundo como problema y no como conjunto de verdades reveladas”, tal como supo expresar Zavaleta en sus últimos años.

Bibliografía

- Althusser, Louis 1982 “El marxismo como teoría finita” en AAVV *Debatir el Estado. Posiciones frente a una tesis de Louis Althusser* (México: Folios).
- Antezana, Luis 1991 *Dos conceptos en la obra de René Zavaleta Mercado* (Universidad de Maryland).
- Aricó, José María 1983 *Marx y América Latina* (Buenos Aires: Catálogos).
- Aricó, José María 1988 *La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina* (Buenos Aires: Punto Sur).
- García Linera, Álvaro 2003 “Autonomías regionales indígenas y Estado pluricultural” en AAVV *La descentralización que se viene* (La Paz: Plural).

- Gil, Mauricio 1994 *Zavaleta Mercado. Ensayo de una biografía intelectual* (Cochabamba: UMSS).
- Gramsci, Antonio 1999 *Cuadernos de la Cárcel* (México: Era).
- Löwy, Michael 1980 *El marxismo en América Latina* (México: Era).
- Mariátegui, José Carlos 1975 *Ideología y Política* (Lima: Amauta).
- Prada, Raúl 2004 *Largo octubre* (La Paz: Plural).
- Salama, Pierre y Mathias, Gilberto 1986 *El Estado sobredesarrollado* (México: Era).
- Tapia, Luis 2002a *La condición multisocietal. Multicultural, pluralismo, modernidad* (La Paz: La Muela del Diablo).
- Tapia, Luis 2002b *La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta Mercado* (La Paz: La Muela del Diablo).
- Zavaleta, René 1967 *Bolivia: el desarrollo de la conciencia nacional* (Montevideo: Diálogo).
- Zavaleta, René 1983 *Bolivia, hoy* (México: Siglo XXI).
- Zavaleta, René 1986 *Lo nacional-popular en Bolivia* (México: Siglo XXI).
- Zavaleta, René 1987 *El poder dual. Problemas de la Teoría del Estado en América Latina* (La Paz: Los Amigos del Libro).
- Zavaleta, René 1988a "La burguesía incompleta" en *Clases sociales y conocimiento* (La Paz: Los Amigos del Libro).
- Zavaleta, René 1988b "Las formaciones aparentes en Marx" en *Clases sociales y conocimiento* (La Paz: Los Amigos del Libro).
- Zavaleta, René 1990a "Problemas de la determinación dependiente y la forma primordial" en *El Estado en América Latina* (La Paz: Los Amigos del libro).
- Zavaleta, René 1990b *El Estado en América Latina* (La Paz: Los Amigos del Libro).
- Zavaleta, René 2006 "Formas de operar del Estado en América Latina" en Aguiluz Iburguen, Maya y Ríos Méndez, Norma (comps.) *René Zavaleta Mercado: ensayos, testimonios y re-visiones* (Buenos Aires: Miño y Dávila).

Notas

1 Para un desarrollo de esta caracterización véase Antezana (1991), Gil (1994) y Tapia (2002b).

2 Es interesante mencionar a esta como una de las tantas "afinidades electivas" de René Zavaleta con respecto al pensamiento del joven Gramsci, quien profundamente influenciado por la corriente vialista de Giovanni Gentile y Benedetto Croce otorgará un rol similar al elemento cultural en el devenir histórico.

3 En el Prólogo a su segunda edición Marx llegó a expresar que "el país industrialmente más desarrollado no hace más que mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro" (*El Capital*, Buenos Aires: Siglo XXI). Quizás sea este uno de los párrafos al que aludió Gramsci al caracterizar a la Revolución Rusa de 1917 como una "revolución contra *El Capital*", denunciando que el libro escrito por Marx contenía "algunas incrustaciones positivistas" que hicieron posible una lectura etapista y burguesa del

cambio social en aquel país. Para un contrapunto con este tipo de interpretaciones dogmáticas de la obra de Marx véase el intercambio epistolar que este realiza en sus últimos años de vida con diversos populistas rusos, incluido en Shanin, Teodor (ed.) 1990 *El Marx tardío y la vía rusa* (Madrid: Revolución).

4 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes compilaciones de textos de Marx y Engels: *Imperio y Colonia: escritos sobre Irlanda y El porvenir de la comuna rural rusa*, ambos editados en México a instancias de José Aricó, en el marco de los impresionables Cuadernos de Pasado y Presente.

5 Véanse los textos "Las tesis de abril" y "La dualidad de poderes" redactados por Lenin en 1917 y el capítulo "La dualidad de poderes" de *Historia de la Revolución Rusa*, escrito por Trotsky en 1930.

6 En "Las masas en noviembre", uno de sus últimos textos antes de su fallecimiento, Zavaleta (1983) intentará despegarse –con claras resonancias thompsone-

nianas— de las acepciones más deterministas del concepto de *clase*, aseverando que “la propia experiencia vital dice que la clase es su colocación estructural o económicamente estratégica más su propia historia, intimidad o acumulación, es decir que debe constituirse aun para ser lo que ya es en potencia, construir su acto”. Asimismo, en su póstumo *Lo nacional-popular en Bolivia* complementará esta relectura crítica con una revalorización del campesinado en tanto sujeto revolucionario, llegando a afirmar que “la idea del campesinado como clase receptora y del proletariado como clase donante [...] no sigue sino un lineamiento dogmático. En realidad, todo indica que el campesinado tenía su propia acumulación de clase y también, si se quiere, su propia historia de clase dentro de la historia de las clases” (Zavaleta, 1986).

7 Si bien esta especificidad es crucial, igualmente relevante es analizar la emergencia de los Estados en la región sin desligarla totalmente del conjunto de Estados-nación que componen al sistema inter-estatal, social y económico mundial.

8 Véase Gramsci, Antonio 1999 *Cuadernos de la Cárcel* (México: Era) Tomo I.

9 Es importante aclarar que esta lectura no implica negar la centralidad de lo estatal en la configuración de las sociedades capitalistas en Europa occidental, como queda evidenciado, por ejemplo, en el capítulo XXIV de *El Capital*.

10 Respecto de la experiencia fundante del peronismo, Zavaleta (1990a) dirá que “engendra o expresa (esto es algo a precisar) una nueva sociedad y también un nuevo canon estatal”. Para utilizar una bella metáfora esbozada por Luis Tapia (2002b) y que se aplica por demás al caso argentino, “el momento constitutivo es como un gran horno en el que participa casi toda una sociedad, unos más activamente que otros, en la elaboración del pan que van a comer por un largo tiempo”.

11 El aporte realizado por Bonfil Batalla al pensamiento crítico latinoamericano, desde una perspectiva que intenta subvertir la mirada eurocéntrica para

analizar nuestra compleja realidad continental, es algo que aún resta desandar. Entre sus obras merecen destacarse *Utopía y revolución: el pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina*, editada en México y en 1981 por Nueva Imagen, y *México profundo: una civilización negada*, en la misma ciudad en 1987 por Grijalbo.

12 A modo de ejemplo cabe mencionar el caso emblemático de Bolivia, donde existen por lo menos treinta idiomas y dialectos regionales y dos idiomas que son la lengua materna de al menos el 37% de la población, el *quechua* y el *aymara*, a lo que se suma el hecho de que más del 55% se identifica con algún pueblo originario (García Linera, 2003).

13 En *Lo nacional-popular en Bolivia*, Zavaleta (1986) llega a postular que históricamente en Bolivia la burguesía resulta burguesa solamente en ciertos aspectos muy específicos, como en cuanto a su riqueza, mas no en los términos de un proyecto hegemónico de alcance nacional. Este rasgo lo lleva a afirmar, con una evidente matriz gramsciana, que en buena parte de América Latina “existe una anorexia hacia la soberanía por parte de las clases dominantes”. Este planteo ha resultado premonitorio respecto de la actitud asumida en los últimos años por parte del empresariado cruceño boliviano, que ha desechado la posibilidad de dar una disputa hegemónica a escala *nacional*, optando por replegarse y demandar la “autonomía” de los departamentos de la llamada “Medialuna”.

14 Además del caso emblemático de Bolivia pueden mencionarse como ejemplos de este abigarramiento social a Ecuador, país en el cual la existencia de múltiples civilizaciones se evidencia en la sigla misma de la *Confederación de Nacionalidades Indígenas* del Ecuador (CONAIE), o incluso al sur de México, en donde la constitución de una Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante el proceso insurreccional de 2006, no hizo más que ratificar este carácter plural propio de los territorios multisociales.

La burguesía incompleta

Ni piedra filosofal ni *summa* feliz

RENÉ ZAVALETA

La burguesía incompleta¹

Es Marx quien recomienda tener en cuenta “como primera fuerza productiva a la colectividad misma”. Por consiguiente, es obvio que una forma determinada de colectividad es superior a otra forma de colectividad en cuanto a su eficiencia como fuerza productiva. Pues bien, si nos referimos a la relación entre el nacionalismo (que es una suerte de forma tardía de encarar la cuestión nacional) y el desarrollo económico, lo que en verdad estamos planteando es el problema de una forma de colectividad como condición para el desarrollo de las fuerzas productivas de tipo capitalista porque se supone que, al hablar de desarrollo económico, aquí el problema no radica en los resultados del desarrollo del capitalismo sino, al revés, en el escaso desarrollo del capitalismo y aun, en ciertos aspectos, en la claudicación de las posibilidades del capitalismo como desarrollo cualitativo.

El mejor escenario para el desarrollo del capitalismo es, se sabe, el Estado nacional. En su propio origen, el capitalismo es o el agente para la disolución de la antigua unidad productiva, que era la aldea, o es el resultado de una disolución endógena de la vieja unidad productiva. En esto figuran actos políticos voluntarios y circunstancias objetivas *de facto*, o se suman ambos. No siempre la disolución entre el productor y el medio de producción se hizo por la violencia; en otros casos, como cuando la peste negra o el avance de los glaciares, simplemente se hizo imposible la ratificación del viejo modo productivo y de su perspectiva. Pero a lo que nos referimos es a la continuidad mercado interno-Estado nacional-democracia burguesa. El Estado nacional es el resultado de la existencia del mercado interno en tanto que la democracia burguesa, como superestructura “ideal” del modo de producción capitalista, es a su turno lo que califica la coherencia de esta construcción, ya la conclusión de un proceso de unificación que tiene varias caras.

Si bien la nación es un producto del capitalismo y se puede decir, además, que en el sentido que ahora damos al término, no han existido naciones sino cuando ha existido a la vez el capitalismo, es obvio que ella, la nación, es la base material

que sirve de fundamento a una clase de Estado, que es lo que llamamos Estado nacional. Ahora bien, no toda nación genera un Estado nacional y, por el otro lado, es natural que exista el hecho estatal aun antes de que se haya concluido la formación de la nación. Sencillamente, el encuentro entre ese conjunto de hechos objetivos que llamamos nación y esa forma de poder político no es algo que se dé en todos los casos y, por el contrario, lo que comentamos, pensando en América Latina, es precisamente la manera en que esa fusión no atina a lograrse.

“...las burguesías latinoamericanas (...) en gran medida tuvieron que ser construidas desde el hecho estatal”

Es interesante analizar la más famosa definición de nación, la de Stalin, que en gran parte fue tomada de Kautsky (como, por lo demás, tantos aspectos desarrollados después por el marxismo ruso). Si la “nación es una comunidad estable, históricamente formada, de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología manifestada en la comunidad de la cultura”, lo que obtenemos es una descripción pero no un proceso. Es decir, es una definición que se refiere al punto en que concluye un proceso y no a la manera común que ha tenido que suceder.

Un aspecto de la definición condiona, hace posible u obstruye al otro. Por ejemplo, ¿qué importancia puede tener la comunidad de territorio si está obstruida o segmentada por el modo de la economía? Francia era una comunidad de territorio pero el río Loira estaba interrumpido por 200 peajes (en vísperas de la Gran Revolución). Lo mismo se puede decir en cuanto a lo del idioma. Aparte de que se debe distinguir entre el idioma hablado y el escrito (que tienen un muy distinto efecto en cuanto a la unificación estatal), ¿cómo omitir, por ejemplo, el papel de Lutero en la unificación dentro del mismo alemán? O sea que la unificación no solo se refiere a la unificación entre diferentes lenguas sino incluso a la propia unificación interna de un idioma, que es parte, como hay que repetirlo, de un proceso de unificación mucho más vasto. ¿Acaso no es suficientemente expresivo que la Marsellesa fuera cantada primero por los alsacianos y que el verdadero unificador del moderno territorio estatal francés fuera Napoleón, que fue un separatista corso en su juventud? Entonces, lo que importa es la tendencia generada por el modo de producción y no el accidente con que se nacionaliza.

Si una burguesía se encontrara con esas condiciones ya dadas, ya concluidas (nos referimos a las que integran la nación, según Stalin), su tarea sería por demás sencilla. Es metafísico suponer que ya hay una “vida económica común” antes del capitalismo, o sea, antes del mercado o, si se quiere ser preciso, antes de que se instale la forma dinero del valor. Por la opuesta, en rigor, la construcción de la nación no concluye ni siquiera cuando se ha unificado la clase dominante o las fracciones que la componen, sino cuando se han unificado los modos de producción en uno solo. Por eso es legítimo decir que ni siquiera la mera circulación capitalista garantiza la verdadera existencia de la nación.

Pero aquí se omite además el papel del Estado como fuerza productiva; no del Estado como repercusión superestructural, sino del Estado como fuerza producti-

va, es decir, como un elemento de atmósfera, de seguro y de compulsión al nivel de la base económica. La peor vulgarización es la que supone que el Estado puede existir solo en la superestructura, como si se colgara al revés. Sin una acción extraeconómica, es decir, estatal de algún modo, es poco concebible la destrucción de las barreras que hay entre hombres y hombres, entre partes de un territorio sin embargo continuo (es decir, potencialmente “nacional”), etcétera. Aquí tenemos un reverso de lo anterior: no la nación como asiento material del Estado nacional sino el Estado como constructor de la nación. ¿Por qué no iba entonces a llamársele nacional si ya se hacía portador consciente de su objetivo nacional, aunque este no se halle ya del todo obtenido?

Ahora bien, las burguesías latinoamericanas no solo no se encontraron con esas condiciones resueltas *ex ante* sino que no existían ellas mismas o existían como semillas. En gran medida, se puede decir que tuvieron que ser construidas desde el hecho estatal. Con todo, este es el caso en que el mercado mundial ya existe de una manera muy avanzada. Chocan entre sí la fase superior del Estado nacional de los países centrales y países que no han completado ni su proceso nacional ni han adquirido una forma estatal burguesa. Lo primero viene a imposibilitar lo segundo.

Tampoco se puede derivar inmediatamente de ello que el desarrollo de las fuerzas productivas se haya cortado del todo y que eso señale la existencia de una “época revolucionaria”. En realidad, los hechos demuestran la paradoja de que, al mismo tiempo que se entraba en la realización de aquel conjunto de tareas burguesas nacionales (aunque se disfracen de las argucias más chauvinistas, como la del subimperialismo, el indigenismo o lo que se quiera), que engloban desde la igualdad jurídica hasta la autonomía relativa del Estado, no por eso deja de producirse cierta acumulación deforme de las fuerzas productivas. Para decirlo de un modo más directo, el desarrollo de las fuerzas productivas no está interrumpido en su aspecto cuantitativo sino en el cualitativo y Marx, al identificar la era revolucionaria con el estancamiento de las fuerzas productivas, no podía pensar en esto segundo.

Hay desarrollo económico pero no de aquella manera que conduce a la construcción del conjunto de características que suma la formación económica social capitalista. En esto, lo de la soberanía, siendo tan importante, no es, sin embargo, más que un rebote. El solo hecho de que estas burguesías no realicen la soberanía (que es el carácter del Estado moderno) nos demuestra que no son verdaderamente burguesas, es decir, en su ultimidad. No basta con percibir plusvalía para ser una efectiva burguesía; corresponde también cumplir las tareas históricas de la clase. Pero en esto actúan como en todo. Hacen la apariencia de las cosas para huir de la verdad de las cosas. Por eso la cuestión nacional nos muestra en una localización del problema, de qué manera mientras estos países no podrán ser nunca auténticamente burgueses, por lo menos en la forma clásica, en cambio ello no afecta sino de manera secundaria la formación del proletariado, que sí puede desarrollar la plenitud de su ser como clase, sea que se enfrente a una burguesía de su propia nación o a una extranjera dentro de su nación, incluso en una sociedad que no llegará a completar su formación como “colectividad capitalista”, es decir, como nación y como Estado nacional.

Ni piedra filosofal ni *summa* feliz²

Es siempre peligroso opinar sobre Carlos Marx que fue una suerte de síntesis superior de la especie humana. Su personalidad misma y no solo su pensamiento siguen produciendo pasiones de una gran intensidad. De otro lado la densidad de sus ideas y el tipo de exposición de ellas permiten varias lecturas que no se prestan a una visión unívoca de ello. Por último, si de lo que se trata –por el lugar y los hombres ante los que hablamos– es de una conmemoración militante, no sacralizante, hemos de ver también algunos de los resultados políticos de Marx como hombre y como pensador; porque se trató, en efecto, del modo más paradigmático, de un pensamiento con consecuencias.

No intentamos, pues, hacer un resumen y ni siquiera una acotación general de un cuerpo de ideas que es relativamente bien conocido. Pero es a la vez un pensamiento con el cual se cometen algunas injusticias, en general por la vía de su retorcimiento o abuso vulgar, que es casi lo mismo que su desperdicio por la vía de una glorificación panfletaria. Si tomamos, por ejemplo, la cuestión del valor, *petitio principii* del marxismo, está claro cuán desconocido está Marx a las mismas horas en que grandes masas del mundo lo aclaman. Pues bien, sin el principio del valor no se habría obtenido jamás la noción de sustancia social, o al menos no en términos verificables, y por consiguiente no podríamos conocer las raíces materiales de la intersubjetividad que es propia de ese tiempo. Sin eso, tampoco se podría avanzar hacia el análisis de las grandes totalizaciones de lo actual, lo cual va desde la clase social en su contenido presente a la nación.

Lecturas literales, supuestos precipitados

Es también injusto tratar de trasladar nuestras propias imposibilidades a supuestos vacíos en la exposición de Marx. Uno podría preguntarse, por ejemplo, siguiendo lo anterior, si un análisis cualquiera sobre la democracia –tema palpitante si los hay– es posible sin arrancar del concepto de hombre libre u hombre en estado de desprendimiento como unidad de medida de todos los acontecimientos sociales de la época. Es, pues, con Marx que se sabe que lo que tiene nuestra época de cognoscible es lo que tiene de democrática y que las sociedades no verificables son las sociedades no democráticas. Está a la vista que es insolvente la aseveración de que Marx habría pensado poco en la cuestión democrática.

Lo mismo podría decirse de otros núcleos en este planteamiento. Se ha dicho, por ejemplo, que Marx escribió muy poco acerca del Estado y de las clases sociales. Resulta en verdad asombroso que puedan sostenerse tales cosas, aunque es cierto que sus puntos de vista sobre una cosa y la otra no pueden entenderse con una lectura meramente literal de sus obras. Marx, es cierto, fue muy lejos y a veces de un modo un tanto contradictorio a propósito de lo que se llama el trabajo productivo. Sin embargo, la noción misma de trabajo productivo resulta incompleta si no se la asocia a otro supuesto teórico del propio Marx que es el concepto de fuerza de masa. Aquí radica, por cierto, el principio de constitución de la multitud o medio compuesto, sin lo cual no se puede comprender, prácticamente, nada de la historia moderna. Es lógico que esto no será entendido por aquellos que so pretexto de Marx niegan en cuanto se les ocurre lo que se ha llamado la centralidad proletaria, sin esbozar la menor interpretación marxista de los textos de Marx.

Otro tanto se podría afirmar de muchos otros aspectos que circulan como por rutina en una órbita demasiado abrumada por las últimas noticias teóricas. En todo caso, si al análisis del Estado Moderno no se lo remite al desdoblamiento de la plusvalía, o la formulación del capitalista total a la totalización hegemónica, si la cuestión nacional misma no gira en torno al equivalente general entendido en términos no meramente económicos y si no se conecta con la uniformación de la tasa de ganancia y el ritmo de rotación, entonces será verdad que las clases y las naciones están ausentes. Con todo, en medio de esta interminable oferta de núcleos de razonamiento, ¿acaso no es verdad que la propia noción de la autonomía relativa del Estado, enunciada primero por Marx antes de cualquiera, es el fundamento del análisis de todo el “capitalismo organizado”, es decir, del carácter central del capitalismo en gran parte del mundo actual? Esto para no mencionar sino algunos aspectos resaltantes en los que no se hace justicia a Marx, a veces desde el propio terreno del marxismo.

“Es también injusto tratar de trasladar nuestras propias imposibilidades a supuestos vacíos en la exposición de Marx”

Antropocentrismo y teoría revolucionaria

Nosotros quisiéramos aprovechar estos minutos para hacer hincapié en un aspecto específico de las ideas de Marx, en el concepto de apropiación del mundo o antropocentrismo. Una idea que está como subyacente a lo largo de toda su obra es el concepto de la concentración del tiempo histórico, es decir, la revelación del nuevo tiempo humano. La concentración del tiempo es a la vez un resultado de la concentración espacial que está en la lógica de la fábrica y la abolición de la distancia, así como de la aplicación de la fuerza de masa al acto productivo. En realidad es como si se nos diera el privilegio de vivir varias vidas allá donde los hombres del pasado no podían vivir sino una sola. La ruptura del tiempo clásico o tiempo agrícola es lo que permite la expropiación del tiempo por el hombre, o, si se quiere, la humanización del tiempo. Es la concentración, por tanto, la que asigna preminencia al horizonte de la clase obrera porque la lógica de la fábrica favorece el acontecimiento de la testificación y por consiguiente la transformación de la materia se convierte en un acto racional.

Tenemos entonces que la testificación organizada es el fundamento de la cognoscibilidad de la época; pero conocer el mundo es ya casi transformarlo. Es aquí donde radica lo que podemos llamar el optimismo cósmico de Marx acerca del destino del hombre. Toda teoría revolucionaria, en consecuencia, no es otra cosa que el desarrollo de esta visión de la apropiación del mundo por el hombre, lleva a los términos del poder y la autotransformación de la masa.

Nos parece entonces que en el razonamiento de Marx son decisivos los conceptos de colocación u origen, por un lado, y de selección o finalidad, por el otro. En otros términos, no se conocen sin causa y se conoce hacia algo. Se conoce por tanto desde una determinada época (el privilegio epocal) y desde un determinado

horizonte de visibilidad o cosmovisión (aquí se privilegia el de la clase obrera). El fordismo, en efecto, puede haber alterado la presencia demográfica o cuantitativa de la clase obrera, lo cual es parte de un proceso más amplio de control del mercado político por el Estado moderno, pero no reemplaza este papel constitutivo en la formulación actual del conocimiento. Esto, que no debe absolutizarse, no dice sino que la implantación obrera es la que está más próxima como inserción estructural a una visión racionalista, materialista y antropocéntrica del mundo, o sea, que la clase obrera tiene el carácter que Bacon asignaba a la época entera.

La verdad como selección práctica en el seno del pueblo

Nos parece que en estos términos Marx indicó del modo más explícito que no toda época produce un conocimiento antropocéntrico, es decir, del hombre para sí mismo; y también, de otro lado, que es una falacia o ensoñación suponer que el pueblo considerado en su generalidad es portador por sí mismo de la verdad como historia. En otros términos, lo que sostenía es que la historia avanza a su propio costo y que la verdad no es un hecho espontáneo que surge como revelación en el pecho del pueblo, sino que es una selección práctica en el seno del pueblo y por consiguiente la constitución de un tipo u otro de masa en torno a una selección o finalidad.

También Hitler constituyó a una masa. El pueblo mismo, entonces, es portador de herencias contradictorias y contiene a la vez memoria de sus incorporaciones democráticas y de su carga servil; en el fondo, es el que transporta la memoria de su propia servidumbre. Por consiguiente, la selección de la herencia popular desde un punto de vista proletario-antropocéntrico es por fuerza algo que debe realizarse en cada circunstancia y en cada escenario. La selección de otro lado no existe si la práctica social no la adquiere como un carácter de la masa. La consecuencia es que sería una contradicción en la sustancia suponer que el problema estuviera resuelto a partir del marco general, si bien admirable, que nos entregaba Marx.

Nos parece, camaradas, que de aquí proviene el carácter polémico y se diría necesariamente cruento en lo ideológico de la herencia de Carlos Marx. Es poco serio entonces hablar de la crisis de algo que ha elegido no existir sino críticamente. Es como si supusiéramos que alguna vez no estuvo en crisis. Y esto que vale para el mundo del pensamiento ocurre de un modo mucho más drástico en la práctica social, por ejemplo, con las revoluciones mismas. Ellas, se sabe, son algo que puede prepararse pero solo en cierta medida. La revolución es quizá el acontecimiento más profundo que pueda ocurrir a los hombres, por cuanto supone un relevo general de lealtades y creencias, pero es a la vez algo que sucede con hombres de carne y hueso. Por eso dijo Marx una vez que la historia avanza por su lado malo: se podría decir mejor que el lado malo de la historia envuelve a su lado bueno. Pero ningún acontecimiento puede significar la llegada última de los hombres a una suerte de Ciudad de Dios.

Ni piedra filosofal, ni mesianismo

Sí, la historia avanza fracasando y de algún modo el fracaso de los hombres con relación a su utopía es la única manera que han inventado de apoderarse del mundo. Para dar otro ejemplo, la propia opción entre selección democrática o lucha factual de masas o aun de la violencia revolucionaria como episodio de consti-

tución de la masa no es sino una elección posible de un modo limitado, porque por lo general la existencia de una fase dictatorial o de una fase democrática está determinada en gran medida por causas estructurales. Uno puede elegir una cosa o la otra, pero en realidad lo que debería hacer es leer lo que está en la realidad. Se podría, por ejemplo –no está prohibido hacerlo–, preferir una solución gradualista y democrático-representativa para la crisis nacional general que se vive en El Salvador de hoy, pero la guerra estaba ya escrita en la historia de esta sociedad y a ella se llega con lo que se ha acumulado, democrático o no.

Por eso, camaradas, están equivocados los que creyeron que con el marxismo se había encontrado una suerte de piedra filosofal, o que cada revolución significa el fin de la historia, su *summa* feliz, y los que juzgan que con ambas cosas habíamos llegado a una conclusión. Marx, hay que decirlo, no habría deseado esta suerte de mesianismo practicado en su nombre.

Marx demostró que el mundo podía ser conocido dentro de ciertas condiciones y que el hombre podía apropiarse del mundo. Pero para hacerlo, se necesita reducir cada realidad a su significación material-racional y a su sentido histórico. Marx, con el fuego de su pensamiento poderoso, ha iluminado después de él a todas las revoluciones. Pero el marxismo como tal no ha producido nunca una revolución. Ello ha ocurrido, en cambio, cuando el marxismo ha leído en la historia nacional la formación subterránea de la revolución.

Estos son hechos que todos conocemos. Yo he querido recordarlos porque nos hace bien a los marxistas cuando recordamos a este espíritu que es el más alto que ha producido nuestro tiempo.

Notas

1 Tomado de *Clases sociales y conocimiento* en sus Obras Completas 1988 (Cochabamba: Los Amigos del Libro).

2 Tomado de *El Estado en América Latina* en sus Obras Completas 1990 (Cochabamba: Los Amigos del Libro).

Memoria latinoamericana

**La Unidad Popular y las elecciones
presidenciales de 1970 en Chile: la batalla
electoral como vía revolucionaria**

Rolando Álvarez Vallejos

La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en Chile

La batalla electoral como vía revolucionaria

ROLANDO ÁLVAREZ VALLEJOS

Académico de la Universidad de Santiago de Chile.

Resumen

Una de las discusiones sobre el proceso de la Unidad Popular, encabezado en Chile por Salvador Allende, se ha centrado en torno al carácter revolucionario o no de la vía escogida para intentar la construcción de una sociedad distinta al capitalismo, con perspectiva socialista. En este artículo, por medio del análisis de la coyuntura creada por la elección presidencial que condujo en 1970 al triunfo de Allende, se propone una mirada que realza la importancia del pragmatismo de la izquierda chilena y de los eventos electorales en la construcción de una alternativa política al capitalismo. De esta manera, la ingeniería política de los partidos de izquierda, que crearon los Comités de la Unidad Popular como órganos de campaña, unida al discurso nacional-popular de Allende, fueron los artífices que permitieron el inicio del experimento revolucionario chileno.

Abstract

One of the discussions on the process of the Unidad Popular, headed in Chile by Salvador Allende, has been centered on if there was a revolutionary character in the route selected to try the construction of a society different from capitalism, with socialist perspective. In this article, by means of the analysis of the conjuncture created by the presidential election that led in 1970 to the triumph of Allende, we suggest a glance which heightens the importance of the pragmatism of the Chilean left and the electoral events, in the construction of a political alternative to capitalism. This way, the political engineering of the left parties, that created the Committee of the Unidad Popular like organs of campaign, together with the national-popular speech of Allende, were the creators who allowed the beginning of the Chilean revolutionary experiment.

Palabras clave

Revolución, reforma, elecciones, izquierda

Keywords

Revolution, reform, elections, left

Cómo citar este artículo

Álvarez Vallejos, Rolando 2010 "La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en Chile: la batalla electoral como vía revolucionaria" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Desde que Luis Emilio Recabarren fuera despojado de su cargo de diputado en 1906, los partidarios del socialismo en Chile intentaron ocupar cargos de elección popular para difundir sus posturas críticas al orden dominante. Recién en 1921 el Partido Obrero Socialista logró que sus candidatos Luis Víctor Cruz y Luis Emilio Recabarren fueran electos, ratificando la importancia de la lucha electoral en el desarrollo político y programático de la izquierda chilena (Pinto y Valdivia, 2002). Desde aquella época, los procesos electorales se convirtieron en instancias que ayudaron a configurar la cultura política de este sector político. Definidas como una tribuna para denunciar los abusos del capitalismo y herramienta que permitía llevar a la práctica una pedagogía política hacia un pueblo sumido en la ignorancia y embrutecido por los vicios del sistema, poco a poco las elecciones fueron dando a la izquierda voluntad de poder (Pinto Vallejos, 2007; Álvarez Vallejos, 2008). Así, convertida la izquierda en una alternativa realmente competitiva desde el punto de vista electoral a partir de la década del treinta, las elecciones se convirtieron en el arma característica en donde se desplegó la lucha política de la izquierda chilena durante gran parte del siglo XX. Hitos como el triunfo de Pedro Aguirre Cerda en 1938 o la recuperación de la legalidad del Partido Comunista en 1958, gracias a la conformación del amplio acuerdo electoral conformado por el "Bloque de Saneamiento Democrático" constituyen momentos estelares para el avance de las posiciones y planteamientos de la izquierda en Chile.

En este contexto, las cuatro campañas presidenciales encabezadas por el líder socialista Salvador Allende en los años 1952, 1958, 1964 y 1970 se convirtieron en el corolario de la trayectoria de la izquierda durante el siglo XX chileno. Tanto en la decisión de asignarles un papel estratégico para el proceso de cambio que se estimaba necesario para el país como por la forma de organizarse, por sus contenidos y su accionar en terreno estas campañas presidenciales contornearon de manera decisiva las definiciones políticas de la izquierda. La de 1952, eminentemente testimonial, representó la importancia de abrir un camino propio ante la irrupción populista y el agotado centro radical; la de 1958 sorprendió a todos y permitió pensar que era posible el triunfo; la de 1964, a pesar de la derrota y de la crítica que esta produjo al interior de la coalición de izquierda que la había levantado, ratificó la convicción del camino electoral para la conquista del poder; finalmente, la de 1970 cristalizó un sueño largamente esperado.

Las campañas presidenciales realizadas durante el siglo XX en Chile han sido investigadas enfatizando las coaliciones que se enfrentaron, el contenido de sus programas, los discursos de los candidatos, las cifras arrojadas y los contextos históricos en que se desarrollaron (Millar, 1982; San Francisco y Soto, 2005). Alejándonos de estas perspectivas, en este artículo, por medio del análisis de la campaña de la Unidad Popular (UP) durante la elección presidencial de 1970,

intentaremos indagar sobre la cultura política de la izquierda en Chile y a través de ella comprender las tensiones no resueltas que caracterizaron a los llamados “mil días” de administración allendista (Álvarez Vallejos, 2007a).

El régimen de la Unidad Popular ha sido investigado desde diversas aristas, destacando especialmente el conflicto existente en su interior, resumido en la conocida dicotomía de aquella época: ¿reforma o revolución? La viabilidad de la llamada “vía chilena al socialismo”, es decir, el intento de sustituir al capitalismo por un nuevo orden social sin la necesidad de mediar una guerra civil, fue el debate que cruzó a la izquierda chilena durante el gobierno de Salvador Allende (Pinto Vallejos, 2005). En esta línea de discusión se ha señalado que el gobierno de la Unidad Popular desplegó una política militar para contener las posibles intenciones golpistas de las fuerzas armadas, rechazando el supuesto reformismo genético de la coalición izquierdista (Garcés, 1992; Valdivia, 2005; Smirnow, 1976).

Es posible detectar las divisiones de la coalición de izquierda en el transcurso de la propia campaña electoral de 1970. De hecho, la propia designación del candidato único de la Unidad Popular fue objeto de fuertes disputas internas en el Partido Socialista, del cual Allende era miembro fundador. Pero en el transcurso de la campaña, es decir de enero a septiembre de 1970, se desarrollaron dos fenómenos políticos en los que era posible apreciar los rastros de la futura división. Por un lado, la particularidad de la campaña de 1970, simbolizada por la creación de los Comités de la Unidad Popular (CUP). Entroncados con la cultura política tradicional de la izquierda chilena, en donde la actividad electoral era una instancia de agitación y lucha de masas, la decisión sobre qué hacer con ellos luego del 4 de septiembre abrió el debate: ¿los CUP debían ser el embrión del “poder popular”, de la “revolución desde abajo”, que, desde fuera de la institucionalidad, abriría camino a la revolución chilena? Esto ha sido afirmado por analistas que consideran el fin de los CUP como el símbolo del carácter reformista e inviable de la Unidad Popular (Rojas, 1974: 137; Marini, 1976: 86; Harnecker, 2003). Por otra parte, en un debate que va más allá de la propia izquierda, se ha discutido el carácter del programa y de las medidas económicas de la Unidad Popular. En pocas palabras, la problemática se resume en si el programa y las medidas del gobierno de Allende fueron continuadoras de políticas anteriores (“nacional-populares”) o destinadas a sustituir el capitalismo (“revolucionarias”) (Salazar y Pinto, 2002: 47). En el caso de la historiografía conservadora, ha sido relevante intentar demostrar este carácter “revolucionario”, opuesto a las medidas reformistas, con lo que se intenta justificar el golpe de estado de 1973 (San Francisco, 2005: 347).

En este marco, estimamos que el seguimiento de la campaña presidencial de 1970 permite apreciar que la contradicción reforma/revolución es una simplificación que no logra terminar de explicar el proyecto histórico de la izquierda chilena ni su cultura política. En primer lugar, los Comités de la Unidad Popular, nacidos como órganos electorales producto de las enseñanzas dejadas por las elecciones presidenciales anteriores, no se podrían haber convertido nunca en expresiones del “poder popular”, porque quienes los crearon y dirigieron, los partidos políticos de izquierda, no compartían dicha definición. Los CUP, masivos y numerosos, no nacieron espontáneamente desde las masas, como ha sido insinuado (Guillaudat y Mouterde, 1998: 43), sino como parte de la experiencia y la relación de décadas

entre los partidos de izquierda y los sectores populares, caracterizada por asociar lo electoral con las luchas sociales. En segundo lugar, al seguir los discursos de Salvador Allende en los meses de campaña, es posible apreciar que esta se caracterizó por la combinación de propuestas “nacional-populares” con otras de corte rupturista. De acuerdo a nuestro planteamiento, esto ayuda a explicar la amplitud y la alta votación de una propuesta radical, radicalidad que también explica no haber obtenido mayoría absoluta. Es decir, la capacidad de la izquierda de hacerse parte de las problemáticas cotidianas y corrientes de la ciudadanía le permitió penetrar en ella junto con su discurso más radical.

En el presente artículo describiremos el sentido y papel de los CUP durante las elecciones de 1970 y el discurso de Salvador Allende en sus recorridos por el país. Por medio de ellos queremos demostrar que el triunfo electoral del 4 de septiembre de la Unidad Popular debe explicarse, en parte, tanto por una táctica política de larga tradición en la cultura política de la izquierda chilena, basada en la centralidad de las batallas políticas electorales conectadas a las luchas en el mundo social, como por su distancia del dogmatismo teórico, que le permitió generar un discurso cercano a la realidad de amplios sectores de la sociedad chilena.

Los Comités de Unidad Popular: ¿activismo electoral o embrión del poder popular?

A los pocos meses del triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970, el español Joan Garcés, uno de los más cercanos asesores del entonces presidente de Chile, reconocía que este triunfo se había producido gracias al esquema tripolar en el que se desarrolló. En este sentido, la profundización de las diferencias entre la derecha y el centro se consideraba un factor clave para la conformación de la fórmula a “tres bandas” en 1970 (Garcés, 1971: 67). Esta explicación, en lo fundamental, ha sido aceptada por diversos investigadores, particularmente producto de que las cifras obtenidas por la coalición del Frente de Acción Popular en 1964 (38%) fueron incluso porcentualmente mayores a las de la Unidad Popular en 1970 (36%). Es decir, en 1970 la coalición de izquierda logró retener su votación, pero el resultado varió al de seis años antes, producto de la división entre la derecha y el centro (Valenzuela, 1989; Moulian, 1993). Si bien compartimos el fondo de esta tesis, es necesario destacar que en un contexto tripolar como el de 1970 resultaba razonable esperar una mayor dispersión de las votaciones, producto de la existencia de tres candidaturas competitivas. Además, como ha sido señalado, el programa de Radomiro Tomic, ubicado a la izquierda del saliente presidente Eduardo Frei Montalva, significaba una real posibilidad de fuga de votos de centro-izquierda. Todo esto, unido a un clima político polarizado, hacía que las elecciones de 1970 fueran muy competitivas para la izquierda. Por ello, el 36% obtenido por Allende posee un valor distinto al 38% de 1964, cuando la coyuntura política del país era menos radicalizada que seis años más tarde (Jocelyn-Holt, 1998; Moulian, 2006).

La existencia de este clima político es fundamental para entender el carácter de la campaña electoral de la Unidad Popular en 1970. Ubicados en la cresta de la ola de una serie de movimientos sociales que ponían en jaque a la administración de

Eduardo Frei, como el de los pobladores y los campesinos, la izquierda chilena profundizó su tradicional estrategia para enfrentar las elecciones: la combinación de lo electoral con la agitación social (Álvarez Vallejos, 2007a). En efecto, aun antes de lograr la nominación del candidato único, los partidos de la UP dieron a conocer el documento "Conducción y estilo de campaña". En él se encontraban las definiciones tradicionales que las elecciones tenían para la izquierda: su carácter "pedagógico" ("la campaña debe ser el medio para educar políticamente a las masas sobre la base del Programa"), su preocupación por las demandas cotidianas de la población ("Partiendo desde las necesidades concretas e inmediatas de las mayorías hay que imprimir a sus luchas un sentido más general, hasta llegar a articularse con los grandes objetivos del Programa") y como factor que permitiera alentar la movilización social ("Contra las máquinas publicitarias y propagandísticas de las candidaturas reaccionarias, el Movimiento Popular dará la batalla en el terreno de la lucha social y de los problemas concretos", *El Siglo*, 28 de diciembre de 1969).

Pero junto con estos aspectos de continuidad respecto a experiencias anteriores, la campaña de 1970 traía algunas novedades. Primero, la creación de los Comités de Unidad Popular (CUP), organismos de base que estarían coordinados por un Comando Político a nivel nacional. Este, presidido por Rafael Tarud, de la Acción Popular Independiente (API), quedó compuesto por tres representantes de cada uno de los seis partidos que integraban la Unidad Popular (*El Siglo*, 27 de enero de 1970). Estos órganos de campaña, junto con el ya mencionado énfasis en su inserción local y su capacidad de agitación social, reemplazarían la anterior forma de organizar la campaña presidencial. A diferencia de 1964, solo en el frente de mujeres y jóvenes se crearían comandos paralelos de campaña, descartándose en las organizaciones de trabajadores y pobladores. Su multiplicación, según se explicaba, burocratizaba la campaña: "en la práctica, ello significaba que se montaban frondosos aparatos en la cumbre marginados de la base. Sin contacto con la gente de su frente, su participación real solo servía para justificar el no hacer nada en la campaña [...], ahora se ha resuelto que los dirigentes sindicales nacionales, por ejemplo, sean distribuidos en las comunas para que ayuden al trabajo hacia las industrias, servicios y centros de trabajo. [...] Esto significa ir donde está la masa, como quien dice, al hueso..." (*El Siglo*, 8 de febrero de 1970)¹. El trato especial a las temáticas juveniles y de la mujer tenía que ver con consideraciones electorales. Como es sabido, la votación de la izquierda tradicionalmente era minoritaria entre las mujeres. Por ejemplo, en la presidencial de 1964, 744.423 sufragaron por Frei y solo 375.776 por Allende (Gazmuri y Góngora, 2005: 331). Por ello, como una forma de revertir esta tendencia histórica del electorado femenino, la Unidad Popular articuló una campaña específica hacia la mujer. Las constantes alusiones a ellas realizadas por Allende, seguramente se relacionaban con esta situación. Por su parte, el crecimiento demográfico del país, en donde casi el 20% de la población tenía menos de 25 años y el supuesto de que los jóvenes eran mayoritariamente proclives a las posiciones "progresistas", también significó una preocupación especial para la izquierda chilena. Es necesario recordar que en esa época, a nivel mundial, tanto las mujeres como los jóvenes irrumpían masivamente en las esferas sociales y políticas, en un hecho inédito en la historia. El movimiento "hippie", la reforma universitaria, la "liberación" de la mujer, representaron un

nuevo desafío epistemológico para la izquierda chilena, tradicionalmente obrerista y masculina. En todo caso, estas consideraciones especiales por los jóvenes y las mujeres no implicaron una necesaria comprensión y sintonía con los cambios sociales y culturales que Chile estaba viviendo. Esto se explica por el componente de conservadurismo y rigidez de la cultura política de la izquierda chilena, en constante tensión con la incorporación de los cambios que estaban ocurriendo en aquella época (Álvarez Vallejos, 2007b).

La segunda novedad que tuvo la definición de las características de la campaña de la izquierda en 1970 se relacionó con el papel que tendrían los CUP. Tal como ha sido señalado, el Programa de la Unidad Popular, si bien en lo fundamental recogió la tesis comunista de la “revolución por etapas” –es decir, no la inmediata construcción del socialismo–, idea puesta en boga a mediados de los sesenta por los teóricos de la dependencia, tuvo significativas incorporaciones. Las alusiones “con vistas al socialismo” eran señal de las concesiones teóricas y políticas del Partido Comunista (PC) ante sus aliados socialistas (Moulian, 1983). En este cuadro se debe entender la amplia y confusa definición del papel de los Comités de Unidad Popular. Por una parte, como dijéramos más arriba, existía el consenso de que no debían ser solo un comité captador de votos, sino que tendrían que estar insertos en las luchas sociales. Sin embargo, el punto de llegada hacia el cual debían transitar no estaba claro. El documento oficial de la UP “Conducción y estilo de campaña” planteaba que los CUP debían “ir convirtiéndose en el curso de la campaña en expresiones germinales del poder popular que conquistaremos en 1970, comenzando aun antes de la victoria a concretar aspiraciones reivindicativas de las masas y transformándose una vez obtenida en factores dinamizadores y de dirección local de los procesos de cambios revolucionarios” (*El Siglo*, 28 de diciembre de 1969). Sin embargo, para el Partido Comunista –sector moderado de la coalición– excluía toda alusión al poder popular en relación a los CUP, o desmerecía que les cupiera alguna función una vez finalizada la campaña, enfatizando en cambio su papel de dinamizador de la movilización social durante ella (*El Siglo*, 7 de febrero de 1970). En todo caso, el enunciado citado del documento oficial de la Unidad Popular era lo suficientemente ambiguo como para dejar abierto qué se entendía por “poder popular”. ¿Significaba que triunfando el día 4 se obtendría el poder popular, o más bien que este se conformaría desde fuera de los órganos estatales? En este sentido, ¿qué papel jugarían los CUP una vez finalizadas las elecciones? ¿Se incorporarían a “las tareas de la revolución” por dentro o por fuera del aparato estatal? La redacción del párrafo citado aseguraba que estas preguntas no pudieran ser contestadas con certidumbre.

Ante este evidente matiz, seguramente por consideraciones electorales, se inhibió el debate público entre los partidos políticos sobre el papel de los CUP en la coyuntura política de la época. Superada la traumática elección de Salvador Allende como candidato único de la Unidad Popular, y luego de una década de los sesenta que conoció la radicalización del Partido Socialista y la aparición de la “izquierda revolucionaria”, la Unidad Popular privilegió la unidad en la acción durante la campaña de 1970. Es por ello que una vez constituidos, los CUP, por la inercia de las probadas maquinarias electorales de los partidos mayoritarios de la UP –el Partido Socialista (PS) y el PC–, se ciñeron a cumplir su doble tarea: elec-

toral y de agitación social. Si se convertirían o no en órganos de “poder popular”, requería de un debate político y teórico que las urgencias de la campaña hacían imposible realizar. El privilegio del accionar concreto de las masas –tal como era costumbre en la izquierda chilena– se priorizó por sobre la preeminencia de la teoría. Así, la existencia de los CUP como supuestos embriones del “poder popular” quedó solo como un enunciado general, como letra muerta, al no haberse efectuado una discusión de fondo dentro de la UP sobre este crucial punto.

De esta manera, incluso desde antes de la nominación de Salvador Allende como el candidato de la UP –ocurrida el 22 de enero de 1970–, los CUP comenzaron a surgir a lo largo de todo Chile. En agosto, a pocos días de la elección, la dirección de la Campaña de la UP informaba que a nivel nacional se habían cumplido las cuotas establecidas sobre el número de comités de unidad popular provinciales y locales (*El Siglo*, 18 de agosto de 1970)². La prensa de izquierda, a lo largo de los meses de campaña, informó periódicamente sobre la constitución de nuevos comités. Las noticias –no siempre detalladas– sobre quiénes conformaban su directiva dejaban establecido el papel decisivo de los partidos de izquierda. Al igual que en el Comando Nacional, las mesas ejecutivas de cada CUP –mediante la cuota correspondiente– buscaban asegurar la representatividad de todos los partidos de la coalición izquierdista. Así, los comités imitaban la estructura de su ente coordinador, con base en tres representantes por partido político. Este era el caso del CUP de Las Condes, cuya presidencia sería rotativa: “correspondiéndole la presidencia al API y la secretaría general al Partido Radical, en este primer mes y el mes de marzo le corresponde la presidencia al Partido Socialista y así sucesivamente” (*El Siglo*, 4 de febrero de 1970). En el caso del CUP juvenil de Concepción, la presidencia rotativa se iniciaría siendo encabezada por el representante socialista y la secretaría general por el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU); en la mesa del CUP de La Cisterna quedaron representados el PS, el PC y el MAPU; en San Miguel, no podía ser de otra manera, el CUP comunal quedó encabezado por el alcalde socialista Tito Palestro (*El Siglo*, 14 de febrero de 1970). Los CUP independientes evidentemente fueron minoritarios, ya que en Santiago, liderados por el médico Lisandro Cruz Ponce, superaron los 140 a mediados de junio, cifra muy inferior a los organizados por los militantes (*El Siglo*, 20 de junio de 1970).

Con candidato único e iniciado el proceso de constitución de los CUP, en el verano de 1970 el presidente del Comando Nacional de la Unidad Popular, Rafael Tarud, en cadena voluntaria de radioemisoras, comunicaba al país los elementos básicos en torno a los que se articularía la campaña presidencial de su sector. Estos se desglosaban en tres puntos básicos: el énfasis en la difusión del acuerdo político-estratégico de la Unidad Popular, expresado en el *Programa Básico de la UP*, el carácter unitario de la campaña y la demostración de confianza en las fuerzas de las organizaciones sociales populares.

La importancia del Programa radicaba, según Tarud, en que representaba una alternativa real para solucionar los problemas del país, ya que ni la derecha ni el centro lo habían podido hacer. Por ello, decía Tarud, contra la demagogia de estos sectores, la palabra de la izquierda debía ser la de la transformación social y el mejoramiento concreto de las condiciones de vida de la población. En su discurso no mencionó el nombre de la nueva sociedad que la Unidad Popular construiría,

aludiendo vagamente a la realización de transformaciones profundas que pondrían a Chile “en marcha hacia una integración socialista de su sociedad” (*El Siglo*, 10 de febrero de 1970). Esta alusión general al socialismo era tanto expresión de la carencia de un punto de vista común acerca de cómo sería la nueva sociedad como de una estrategia electoral que pretendía ampliarse hacia el centro. Para ello, era necesario distanciarse de discursos radicales y de verse ligado a la imagen tradicional que se tenía de los socialismos reales en Europa del Este, aspecto profusamente empleado por la Campaña del Terror de la derecha. Este hecho explicaba la insistencia de la campaña de la UP respecto a que realizaría una revolución, pero con “vino tinto y empanadas”, o sea, basada en un fuerte componente nacional.

La centralidad del Programa buscaba mostrar a los electores la cohesión y capacidad de hacer gobierno de la izquierda, uno orientado “verdaderamente” en beneficio de los desposeídos del país. En este sentido, durante la campaña el Comando de la Unidad Popular enunció las llamadas *Primeras 40 medidas inmediatas del Gobierno Popular*, las que apuntaban a reforzar este objetivo, es decir, establecer que el de la Unidad Popular sería un gobierno totalmente distinto a los anteriores, caracterizado por privilegiar los intereses de la mayoría de la población (Labarca Goddard, 1971: 368). Por otra parte, las palabras de Tarud referidas al respeto de la chilenidad por parte de la UP eran la forma de responder a la Campaña del Terror de la derecha. En 1964 esta había sorprendido al Frente de Acción Popular (FRAP), pero en 1970 la izquierda diseñó esta estrategia discursiva para hacerle frente. Asimismo, por medio de sus órganos de prensa afines, atacó y descalificó a Jorge Alessandri Rodríguez, el candidato de la derecha. Así, en medio de un clima político polarizado, la izquierda de todas maneras aparecía con un discurso que invitaba a soñar en un mundo mejor que estaba allí, a la vuelta de la esquina; bastaba votar por Allende y organizarse para vencer a las centenarias fuerzas que por siglos habían oprimido a la inmensa mayoría de los chilenos. La factibilidad de la utopía, el mesianismo colectivo, el optimismo histórico y el tono épico de la campaña, reflejado en su lema (“venceremos”), fueron temáticas repetidas a lo largo de los casi siete meses de batalla por los sufragios.

Si las alusiones a la unidad buscaban alejar la imagen de una coalición sin capacidad de ponerse de acuerdo para gobernar, el discurso que apuntaba a la “confianza en el pueblo” pretendía capitalizar la presencia mayoritaria de las fuerzas de izquierda entre las organizaciones sociales populares. Es decir, la “confianza en las fuerzas del pueblo” significaba apostar a que la existencia de un mayor número de organizaciones sociales “desde abajo” se traduciría en un mayor respaldo para el candidato de la Unidad Popular. Esto era particularmente marcado entre las organizaciones sindicales, en donde la UP tenía una amplia mayoría, y entre las de los pobladores, disputadas palmo a palmo con la Democracia Cristiana, tal como ocurría también entre las organizaciones campesinas. El respaldo y agitación de sus demandas sería un factor diferenciador con las otras candidaturas. La unión de lo social y lo político partiría, siguiendo las tradiciones históricas de la izquierda chilena, apoyando primero las demandas más sentidas de la población. Por ejemplo, Rafael Tarud destacaba el papel de los parlamentarios de la UP para aprobar una ley que favorecía a los jubilados y montepiados, así como el haberse jugado por hacer cumplir la ley que se comprometía a pagar los reajustes salariales a los

funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas (*El Siglo*, 10 de febrero de 1970). En este plan general de campaña, los CUP tenían el papel de ser el eje articulador, la verdadera espina dorsal que dinamizaría la cuarta campaña presidencial de Salvador Allende. Producto de su presencia en los organismos de base, podrían unir a las fuerzas sociales y políticas en un solo movimiento reivindicativo destinado a lograr satisfacer la demanda popular a través del triunfo electoral de Allende; única manera, según se decía, de alcanzar la transformación definitiva de Chile en un país más justo e igualitario (*El Siglo*, 10 y 11 de febrero de 1970).

“La factibilidad de la utopía, el mesianismo colectivo, el optimismo histórico y el tono épico de la campaña, reflejado en su lema (‘venceremos’), fueron temáticas repetidas a lo largo de los casi siete meses de batalla por los sufragios”

De esta manera, en los inicios de la campaña presidencial de 1970, la Unidad Popular definía su forma de lucha de acuerdo a su tradicional intento de articular lo político con lo social aprovechando las coyunturas electorales. La creación de los CUP enfatizó el trabajo de base, en desmedro de campañas anteriores, excesivamente burocratizadas. Este hecho, ocurrido en un momento político especialmente radicalizado, en donde la llamada “revolución de las expectativas” promovía la participación ciudadana, provocó que los comités tuvieran un papel destacado en los meses de campaña, tanto difundiendo el programa del candidato de la UP como promoviendo y solidarizando con la movilización social popular durante aquellos meses. La conciencia entre sus integrantes de la posibilidad real del triunfo de Allende –como lo señalaban las encuestas de la época– alentaba la esperanza de que la batalla electoral de 1970 culminaría con la primera mayoría para el candidato de la UP. Esta fue la motivación fundamental de los CUP, antes que las posibles discusiones sobre su papel como instancias de “poder popular”.

La campaña en terreno de la Unidad Popular se caracterizó por sus actos de masas en la base y por intentar hacerse eco de las demandas específicas de cada sector en donde se desplegaba la campaña. En este sentido, las fuerzas de izquierda, dejando de lado la retórica más revolucionaria e ideologizada, rectamente realizaban campaña tratando de responder a demandas locales, no vinculadas necesariamente a las “transformaciones profundas” de las que hablaba el *Programa Básico de la Unidad Popular*. El pragmatismo de la izquierda significaba reconocer la dificultad de llegar con un discurso “duro” de cambio y transformación social. De ahí que la campaña fuera un ejercicio de pedagogía social, en donde tenía cabida la lucha por la reivindicación específica, pero en la que el activista del CUP debía explicar que la única manera de resolver definitivamente esta y otras demandas era respaldando a Salvador Allende el 4 de septiembre. El asistencialismo de la campaña izquierdista se multiplicó durante los meses de campaña, dejando en claro el rostro más tradicional y cotidiano de la forma de hacer política de la izquierda chilena. Este estilo, tildado de “reformista” por sus críticos de izquierda, lo consideramos una de las claves que explica la alta competitividad electoral de

una izquierda que no fue socialdemócrata, como el APRA peruano, ni populista, como el "justicialismo" argentino.

Pero el accionar de los CUP no se quedaba en recoger las demandas desde la base y darlas a conocer. Durante los meses de la campaña de 1970 la movilización social no cesó y en ella se intentaron insertar los activistas electorales de la UP. Especialmente activos estuvieron los movimientos de pobladores y campesinos. Sobre el primero se ha planteado que la coyuntura electoral de 1970 generó un "campo de oportunidades políticas" que permitió fortalecer la demanda por la vivienda. Es decir, los meses de la campaña coincidieron con un alza del movimiento reivindicativo de los pobladores (Garcés Durán, 2005: 62-63). Por su parte, las movilizaciones campesinas también se activaron durante 1970. De acuerdo a las estadísticas, ese año 57.210 personas estuvieron involucradas en movimientos huelguísticos, en un total de 476 huelgas, convirtiéndose en el año en que más campesinos y campesinas participaron en este tipo de movilizaciones (Pizarro, 1986: 154). Explotando la tímida aplicación de la ley de reforma agraria por parte del gobierno de Eduardo Frei, la Unidad Popular diseñó un conjunto de propuestas especialmente para el sector agrícola, contenidas en las "20 medidas inmediatas" para dicho sector y participó en movilizaciones campesinas y tomas de predios (*El Siglo*, 30 de agosto de 1970). De esta manera, los partidarios de la UP, por medio de sus órganos de prensa, lograban dar consistencia a la política de llevar a cabo una campaña electoral con agitación social, protagonizadas por diversos actores sociales. En el caso del movimiento de pobladores y campesinos, era especialmente perjudicial para la candidatura de Radomiro Tomic, que a pesar de su discurso marcadamente reformista aparecía como el continuador de las políticas del saliente presidente Frei.

Una situación similar a la anterior se produjo en el movimiento sindical. Las 1.303 huelgas y las 387.711 personas que las protagonizaron convirtieron al año de 1970 en uno de aquellos con mayor actividad huelguística de la historia de Chile (Pizarro, 1986: 155). Si bien las movilizaciones fueron numerosas, el clímax lo marcó el paro general convocado por la Central Única de Trabajadores (CUT) para el 8 de julio de 1970. Su realización se fundamentó principalmente en la demanda de una bonificación compensatoria para todos los trabajadores, que buscaba paliar los efectos de la alta inflación. Como suele ocurrir con la evaluación de este tipo de movilizaciones, el gobierno de Frei la calificó como un fracaso, mientras que la izquierda la consideró muy exitosa (*El Siglo*, 10 de julio de 1970)³. Lo que nos interesa recalcar son los esfuerzos de la candidatura de Allende para enmarcar su campaña en un contexto de movilización social, respondiendo a las acusaciones de ser solo "electoralista". De esta manera, movilizando a pobladores, campesinos y trabajadores, la Unidad Popular intentaba convertir en capital electoral su presencia en el movimiento social.

Como decíamos más arriba, las mujeres y los jóvenes fueron focos de especial atención durante la campaña allendista de 1970. En el caso de la juventud, el análisis de la Unidad Popular partía constatando el hecho del aumento del número de jóvenes en el país (*El Siglo*, 9 de agosto de 1970). Por ello, este grupo etario se convirtió en uno de los nichos electorales más disputados de la campaña. El discurso de la UP se basaba en denunciar la demagogia de Jorge Alessandri, el candidato

de la derecha, que bajo el cartel de 'independiente' ocultaba su compromiso y vínculos con las empresas capitalistas que explotaban a los jóvenes. Por su parte, se remarcaba el incumplimiento de las promesas de cambio social realizadas por Frei durante la campaña presidencial de 1964 (*El Siglo*, 9 de agosto de 1970). Al igual que en el caso de los adultos, la conformación de los CUP fue la tarea prioritaria de la juventud de la Unidad Popular. Junto con el activismo universitario y territorial, los jóvenes partidarios de Allende se destacaron por el trabajo de propaganda. La aparición de las brigadas muralistas *Ramona Parra* y *Elmo Catalán*, pertenecientes a los partidos comunista y socialista, agregaron una nueva mística a la campaña de la UP, creando una gráfica que caracterizó a la propaganda de masas de la izquierda chilena en ese periodo (*El Siglo*, 24 de agosto de 1970).

En el caso de la mujer, la batalla por disputarle votos a la derecha era ardua, pues como decíamos más arriba, históricamente había sido esquivada para la izquierda. Para explicar esta situación la Unidad Popular se remontaba a las condiciones de vida generadas por el sistema capitalista, que condenaba a la opresión a la mujer, aletargándola y generando una mentalidad subalterna. Si bien aún la izquierda estaba lejos de comprender la temática femenina más allá de la perspectiva de clase —que predominaba en los análisis— se entregaban algunos elementos de una visión más particularizada de la problemática de género (*El Siglo*, 31 de julio de 1970). De esta manera, la izquierda buscaba penetrar en un nicho esquivo, apelando a despertar el repudio a prácticas conservadoras en el país. En todo caso, la propia izquierda no se zafaba de ellas, reproduciendo muchas veces en su práctica cotidiana las lógicas patriarcales de dominación de género (Álvarez Vallejos, 2007b).

Repetiendo el modelo de las "medidas inmediatas" utilizadas tanto a nivel nacional como para la problemática agraria, la Unidad Popular planteó cuatro "exigencias inmediatas" de la mujer: fin de las alzas de precios, la creación del ministerio de protección a la familia, la ley de centros de madres y el fin a la violencia que cotidianamente golpeaba a la mujer chilena (*El Siglo*, 29 de julio de 1970). Las medidas tenían un acento económico en desmedro de las demandas propiamente de género, siguiendo la línea de vincular los problemas más cercanos de las personas con la política nacional. El discurso de la Unidad Popular hacia la mujer, junto con enfatizar la supuesta demagogia de las candidaturas de Alessandri y Tomic —en el sentido de que ellos representaban a los responsables de la situación desmejorada en que se encontraban— explotaba, al igual que la campaña a nivel nacional, las necesidades básicas de la mujer sin adentrarse en una dimensión más global de las relaciones de género. Una izquierda que no se caracterizó por un gran vuelo teórico, que por el contrario destacó más en la práctica política concreta y en intentar captar y mimetizarse con el sentido común de la gente, no escapaba del reduccionismo clasista del marxismo en uso en esa época.

En todo caso, la dura confrontación política de 1970 obligó a los partidos de la UP a perfilar con mayor nitidez la táctica y el proyecto político de la izquierda chilena. En este sentido, la campaña del terror de la derecha, siempre a la expectativa de utilizar las críticas y diferencias con los sectores de izquierda que no integraban la Unidad Popular, fue un factor decisivo en ello. La estrategia derechista contra Allende no escatimó palabras y argumentos para descalificarla: desde la llegada de los tanques soviéticos —al estilo de la invasión a Checoslovaquia en 1968— hasta

la 'reforma urbana' (repartición de las viviendas), fueron los tópicos de la campaña del terror, que indudablemente utilizó las formulaciones clásicas de la guerra psicológica, en donde afirmaciones falsas intentaban convertirse en verdades. Por otra parte, la derecha utilizó ampliamente el discurso del líder cubano Fidel Castro, en el que reconocía la incapacidad del Estado socialista de Cuba de cumplir la meta impuesta para la zafra de ese año. Se decía que demostraba el fracaso del socialismo para construir una sociedad que resolviera los problemas de las personas (Labarca Goddard, 1971: 304). Por otra parte, las acciones de propaganda armada del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante 1969 y sus críticas a lo que denominaban "el reformismo" (es decir gran parte de la Unidad Popular, especialmente los comunistas y los radicales), también alimentaron la campaña del terror de la derecha. Especial difusión tuvo la toma del campamento "26 de enero", encabezada por el dirigente mirista Víctor Toro. Las noticias sobre la creación de "milicias populares" que resguardaban el orden interno del campamento obligaron a la Unidad Popular a pronunciarse críticamente, con el fin de diferenciarse de los métodos y planteamientos de este sector de la izquierda (Labarca Goddard, 1971: 277).

Las respuestas de la Unidad Popular a estas acusaciones de lado y lado son interesantes al mirarlas desde la perspectiva de la cultura política de la izquierda chilena. Representan la confirmación de una tradición política que nació con el siglo XX y que terminó cristalizada en la campaña presidencial de 1970 como la "Vía chilena al socialismo". Es decir, la novedosa tesis de construir una sociedad alternativa al capitalismo hundía sus raíces en el antiguo proceso de politización y concientización del movimiento obrero a principios de siglo. ¿Cuál era el componente común que conectaban ambas experiencias?: la inserción en el tejido social, conocido en el lenguaje de la época como "trabajo de masas". Por ello, especialmente por parte del PC, era inflexible la crítica a las colectividades de izquierda que, según ellos, la dejaban en segundo plano. Contra los métodos armados, la Unidad Popular contraponía la "lucha de masas", es decir una estrategia que descartaba la guerra civil para alcanzar el poder. Esta era, en lo esencial, la estrategia que había levantado el movimiento popular chileno desde los tiempos de Luis Emilio Recabarren (Cruzat y Devés, 1986).

De esta manera, confirmando su táctica de "basificación" de la lucha electoral para conectarla con los movimientos sociales, concretada a través de la multiplicación de los CUP y eludiendo a su vez las acusaciones de la derecha y de la izquierda que no estaba en su coalición, la Unidad Popular articuló una campaña electoral que tuvo la virtud de mantener su votación presidencial anterior pero dentro de un esquema en extremo polarizado. En este marco, la existencia de los CUP fue la expresión de la importancia que tenía para la UP la lucha electoral y social, más que futuros órganos de un poder popular todavía difusamente enunciado.

La palabra de Allende en la campaña: ¿reforma o revolución?

En 1970 Salvador Allende Gossens lograba un hecho inédito en la historia de Chile al convertirse por cuarta vez consecutiva en candidato a la presidencia de la República. Con una amplia experiencia en campañas para diputado y senador,

existe consenso entre los especialistas en señalar que Allende era un político de gran oratoria, en tiempos en que esta constituía una herramienta fundamental para transmitir el mensaje político (Puccio, 1985). Por ello es que la de 1970 –que sería la última como candidato– fue una campaña en donde se combinaron las experiencias anteriores de Allende con una coyuntura política que permitió abrir espacio a un discurso que sintonizó con un importante segmento de votantes del país. Es decir, la vinculación de base de la izquierda y su estrecha relación con las organizaciones sociales, unida a la desilusión provocada por Frei Montalva –expresada en las movilizaciones campesinas y de pobladores más arriba reseñadas–, generaron las condiciones particulares de la elección presidencial de 1970.

Desde nuestro punto de vista, esta particularidad consistió en que el año de 1970 abrió la oportunidad política de posicionar un discurso programático radicalizado, que hablaba de cambios estructurales y “vista al socialismo”, que se matizó con la práctica electoral tradicional de la izquierda chilena, pragmática y preocupada por obtener soluciones concretas a los problemas de las personas. Es por ello que el mérito del 36% obtenido por Salvador Allende en 1970 radica en que logró retener su votación en un esquema tripolar y con un discurso más radical que el de 1964. Ya no bastaba un simple programa reformista, porque el gobierno demócrata-cristiano había agotado en parte el capital político de esa opción, obligando a las fuerzas de la Unidad Popular a posicionarse más a la izquierda (Faúndez, 1993; Álvarez Vallejos, 2007a y 2007b).

Dentro de este marco, el papel que le cupo a Salvador Allende en tanto abanderado de la Unidad Popular consistió en representar dicha amalgama entre la tradicional cultura política de la izquierda chilena y los nuevos aires radicalizados que caracterizaron al país en la coyuntura presidencial de 1970. Considerado un político tradicional, acostumbrado a las sesiones parlamentarias, las negociaciones y la transacción, encabezó el movimiento político y social más amplio y numeroso de la historia de Chile, cuyo programa implicaba transformaciones sustanciales al régimen de dominación capitalista, incluido el tema de la propiedad privada (Gómez, 2004; Jocelyn-Holt, 2008). Por ello, el discurso de campaña de Salvador Allende en 1970 expresó esta suma de experiencias y nuevas adquisiciones, lo que explica que la fórmula “¿reforma o revolución?” se volviera excluyente e insuficiente para definirla. Fue la superación de esta dicotomía lo que hizo singular la experiencia de la Unidad Popular, ya que esta, por medio de una combinación de medidas reformistas y otras revolucionarias, intentó construir lo que en ese tiempo se llamó “el Chile nuevo”.

La campaña de Salvador Allende, como era costumbre en las colectividades de izquierda, se caracterizó por las visitas del candidato a los lugares en donde estaban los posibles adherentes de la campaña. Junto con ello, se privilegiaron los actos de masas, tanto en Santiago como en las provincias. El listado de lugares visitados físicamente por Allende es muy extenso, y comprende poblaciones, sindicatos, industrias, universidades, plazas y ciudades de todo tamaño. En ellos, Allende ponía en funcionamiento la tradicional estrategia de la izquierda de utilizar las elecciones como un espacio de pedagogía social, con el objetivo de concientizar a la población. En el caso del discurso de Angol, Allende, en referencia al respaldo popular que recibía en sus visitas a terreno, indicaba algo que repitió constante-

mente a lo largo de la campaña: "...y se han volcado familias enteras a trabajar por el triunfo, no de un hombre, sino de una concepción integral que hará un gobierno popular..." (*El Siglo*, 19 de junio de 1970). Es decir, Allende le explicaba a sus posibles electores que su candidatura no era una aspiración o un capricho personal, sino que representaba una idea, un proyecto. Tal como lo había dicho a los pocos días de ser proclamado, el éxito de la UP "no será la victoria de un hombre, ni siquiera la victoria solo de los partidos populares. Será la victoria de las masas, del campesino, del maestro, de la madre proletaria, del trabajador, del pequeño comerciante e industrial, del empleado público y particular" (*El Siglo*, 23 de enero de 1970). Es decir, el empeño de Allende fue mostrarse como representante de un anhelo nacional, pluriclasista, encarnado en las tradiciones de lucha del pueblo, por años sometido a la dominación. Por eso el discurso de Allende fue optimista, portador de "buenas nuevas" para un pueblo que se describía desamparado (*El Siglo*, 24 de agosto de 1970).

"...queremos la revolución, que la entendemos como un proceso general de cambio social y económico destinado a reemplazar una clase social egoísta y parasitaria, llevando al pueblo al poder..."

Junto con reiterar la convocatoria pluriclasista –pues nunca se definió como el candidato "obrero"– pugnaba con sus rivales por convertirse en el verdadero representante del "pueblo", tópico que fue permanente de la campaña. De esta manera, el candidato izquierdista enunciaba la tesis que su sector político había levantado por décadas: la posibilidad del cambio social se produciría mediante la participación en los espacios que el propio sistema político chileno tenía. Así, el llamado allendista para las elecciones de 1970 se podía resumir en que existía la oportunidad histórica de apoyar un proyecto de país que, a través de traspasar el protagonismo político a las mayorías postergadas, construiría una nueva sociedad. Por este motivo, cuando el médico socialista improvisó su discurso el 5 de septiembre en la madrugada para celebrar la primera mayoría relativa obtenida, insistió en el optimismo histórico: "...les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria..." (Allende, 5 de septiembre de 1970).

Salvador Allende no fue un teórico ni un dirigente caracterizado por dejar escritos sus pensamientos y principales tesis políticas. Su fortaleza era la tribuna pública, en donde explicaba sus planteamientos. En el caso de la campaña de 1970, Allende se preocupó de explicar en qué consistía la novedad de la "vía chilena al socialismo". En un discurso en la ciudad de Arica explicaba cómo entendía al proceso político chileno: "...queremos la revolución, que la entendemos como un proceso general de cambio social y económico destinado a reemplazar una clase social egoísta y parasitaria, llevando al pueblo al poder..." (*El Siglo*, 1 de marzo

de 1970). ¿Cómo iba a ocurrir esto? El propio candidato lo establecía, ahora en un discurso ante trabajadores en Santiago, respondiendo a la campaña del terror de la derecha: “El Dr. Allende dijo que la Unidad Popular llegará al poder por la vía legal, y precisando la posición de este movimiento en torno al Ejército dijo ‘El Ejército es el pueblo vestido de uniforme’” (*El Siglo*, 14 de agosto de 1970).

El sujeto revolucionario no sería “la clase obrera” a secas, sino un conjunto de actores sociales. En sus discursos, Allende los nombraba frecuentemente: “saludo fraternalmente a los obreros, campesinos, estudiantes, pensionados, pequeños propietarios, mujeres, intelectuales y jóvenes...” y los conminaba a cobrar presencia nacional “para ejercer los deberes y derechos irrenunciables que les corresponden dentro de la construcción de la nueva sociedad chilena y como principales protagonistas del Poder Popular...” (*El Siglo*, 2 de mayo de 1970). Con todo, el propio Allende dejaba establecido que los trabajadores serían los principales actores del movimiento, porque ellos “han adquirido conciencia de que en nuestro país es indispensable que se opere una sustitución del sistema político, económico y cultural que hasta hoy se mantiene vigente, sobre la base que los trabajadores adquieran la preeminencia que les corresponde como fuerza enormemente mayoritaria, motor de nuestro desarrollo nacional” (*El Siglo*, 2 de mayo de 1970).

Como la forma (o “vía” en el lenguaje de la época) para sustituir el capitalismo sería sin mediar una guerra civil, sino que copando el aparato de Estado capitalista y desde él impulsar el proceso revolucionario, era fundamental contar con un activo respaldo popular. Esto explica que Allende repitiera durante la campaña que en su gobierno serían fundamentales el protagonismo y la participación popular: “...la lucha nuestra es para que ustedes, los trabajadores, sean gobierno. Que ustedes puedan participar en las empresas en que trabajan a través del Consejo de Economía” (*El Siglo*, 14 de agosto de 1970). Siendo más explícito en su propuesta, y diferenciándose del programa de “promoción popular” del gobierno de Frei, Allende afirmaba tajantemente que “no habrá participación popular, como ofrecen las otras candidaturas, porque el pueblo será el que gobernará directamente, sin intermediarios” (*El Siglo*, 9 de junio de 1970). De esta manera, Allende anunciaba su concepción del poder popular, consecuente con la “vía” elegida para la transformación de la sociedad, consistente en respaldar las medidas del “gobierno popular” y los espacios obtenidos dentro del aparato estatal. Así, estuvo alejada del discurso de Allende una visión del poder popular como instancia paralela al Estado, que lo confrontara y destruyera desde fuera de la institucionalidad. Como ha sido señalado, este énfasis en la participación popular era el mecanismo para diferenciarse de los regímenes de capitalismo de Estado o “populismo”. Es decir, para la izquierda gradualista y el propio candidato de la UP, el “poder popular” significaba que la participación de los trabajadores “estaba llamada a agregar al poder parcial del gobierno, la fuerza de las organizaciones de masas populares [...]; significaba creatividad ‘desde abajo’, pero con disciplina laboral” (Samaniego, 2004).

Obviamente que Allende ocupó buena parte de sus discursos de campaña para explicar en qué consistía su programa. Sobre la política de nacionalizaciones, ante las denuncias de la derecha, el candidato de la UP aclaraba que estas afectarían

“solo a una minoría poderosa a la cual el pueblo no va a perseguir pero a cuyos desmanes pondrá atajo. El gobierno de la UP va a herir los intereses de solo un 4 o 5 por ciento de la población para defender a los restantes 96 a 95 por ciento de los chilenos” (*El Siglo*, 3 de junio de 1970). Es importante para entender los planteamientos de Salvador Allende, que su perspectiva, a pesar de su discurso “clasista”, era nacional, dirigida a la mayoría de la población. Por eso es que en el caso de las nacionalizaciones, resaltaba que serían un bien común, y no solo para “la clase obrera”. De hecho, el propio Allende repitió el papel fundamental que tendrían que jugar los sectores medios en su gobierno: “...estas nacionalizaciones permitirán influir en los procesos económicos y disponer de los recursos para detener la inflación, desarrollar la economía, eliminar la cesantía, dar estabilidad a los pequeños y medianos empresarios, orientar la producción nacional hacia los artículos que el pueblo requiere...” (*El Siglo*, 3 de junio de 1970).

Junto con la parte más programática del discurso de Allende durante la campaña, especial importancia tuvo el demostrar conocimiento de la realidad concreta de los sectores populares y ofrecer medidas específicas para solucionar los problemas de las personas. La dimensión “nacional-popular” del discurso allendista, con su énfasis en la construcción de una mayoría social y la apelación pluriclasista, tuvo su correlato en esta faceta que conectaba al candidato con la vida cotidiana de sus posibles electores. La importancia de este aspecto del discurso de campaña de Allende se manifiesta en que lo repetía incesantemente. En el fondo, hacer una campaña en terreno estaba estrechamente relacionado con demostrar tanto conocimiento de la realidad como capacidad de propuesta. Unido al mensaje de esperanza y alegría por el futuro mejor que se venía para Chile, la capacidad de proponer soluciones sensatas y concretas a la población fue la otra gran fortaleza de la campaña presidencial de la izquierda en 1970.

En un clima donde las tomas de terrenos se producían con regularidad, Allende se refería frecuentemente al problema de la vivienda, de las ferias libres, de la reforma agraria, entre decenas de otros temas (*El Siglo*, 20 de febrero y 15 y 19 de junio de 1970). En la ciudad de Calama, polemizando con el candidato demócrata-cristiano Radomiro Tomic, Allende sacaba a relucir sus condiciones de “hacedor”: “...los hospitales de Antofagasta y Calama llevan mi firma en el proyecto que los creó, y allí no está la firma de Tomic. La Universidad del Norte corresponde a una iniciativa mía, y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales nos pertenecen. Yo puedo decir que no conozco ninguna Ley que proteja a la madre y la familia que lleve la firma de Tomic...” (*El Siglo*, 17 de agosto de 1970). Como en toda campaña, Allende no estuvo exento de ofrecer la resolución de todo tipo de problemas, cayendo en la tentación del “tejo pasado” típico de este tipo de elecciones. Algunas eran medidas concretas, como la disolución del “Grupo Móvil”, ente perteneciente a Carabineros especializado en la represión de las movilizaciones sociales; otras, evidentemente, no dependían solo del poder ejecutivo o eran problemas a resolver a largo plazo, pero igualmente eran “ofertadas” al electorado: el alcoholismo, alza de las pensiones, la casa propia, entre otras medidas ofrecidas al calor de la campaña (*El Siglo*, 2 de septiembre de 1970).

Hemos querido mencionar estos ejemplos porque nos parece que para explicar la fortaleza electoral de la izquierda chilena se debe tener en cuenta que, durante

décadas, una parte de las “promesas” electorales se hicieron realidad a través de iniciativas de leyes aprobadas en el parlamento o ejecutadas en los municipios. Es decir, las fuerzas de la Unidad Popular podían demostrar su capacidad “realizadora”, por lo que las promesas electorales de Allende en 1970 tenían un respaldo histórico. En este sentido, hay que relativizar lo que se ha planteado respecto a la izquierda chilena, en el sentido de que solo una vez que controlara parte del aparato estatal capitalista —el poder ejecutivo— empezaría a construir la nueva sociedad (Moulian, 2000). En realidad, sin una definición teórica detrás, la izquierda chilena, a su manera, sí comenzó a vivir la nueva sociedad sin haber accedido nunca al poder ejecutivo, ya que por medio del conjunto de leyes y control de gobiernos municipales vastos sectores de la población habían experimentado o se habían visto influidos por las políticas de este sector. Indudablemente el contorno social que el país tenía hacia 1970 estaba influido —se podría discutir cuánto— por las políticas de la izquierda. Esto se traducía en que en los tiempos analizados en este artículo votar por Salvador Allende no representaba un salto hacia un futuro desconocido sino respaldar a un sector político con tradición y experiencia legislativa y de poder local.

En consonancia con el diseño general de la campaña, Salvador Allende se preocupó de incluir a los jóvenes y a las mujeres en sus discursos de campaña. En el caso de estas últimas, el candidato de la UP las caracterizaba como las sostenedoras del hogar popular, por lo tanto aguerridas y luchadoras. Consciente de la dificultad de la penetración de la izquierda en este nicho electoral, el candidato de la UP, junto con su mensaje de optimismo que caracterizó a toda la campaña de 1970, no vacilaba en señalar que las mujeres y los niños serían los sectores más favorecidos durante su gobierno (*El Siglo*, 5 de agosto de 1970). Por su parte, los jóvenes fueron el otro sector de la sociedad interpelado por Allende. Si en el caso de la mujer la promesa era de mejorar sus condiciones materiales de existencia y una vaga idea de terminar con “toda discriminación”, en el caso de los jóvenes la invitación allendista era a convertirse en protagonistas en la construcción de la nueva sociedad. Para los jóvenes, el llamado era a la acción, a construir, lo que se conectaba directamente con el mensaje optimista de la campaña, portadora de una subjetividad social en donde la realización del sueño de una sociedad más justa aparecía a la vuelta de la esquina.

En esta perspectiva, en una multitudinaria manifestación juvenil hacia el término de la campaña, Allende “llamó a la juventud a una grande y maravillosa tarea histórica, a una tarea digna de la juventud, a construir la plena independencia de Chile...”. De acuerdo a la crónica, “...de manera vibrante, Allende llamó a la juventud a formular una promesa de honor ante su conciencia y ante la historia, de hacer realidad el legado de O’Higgins, de luchar contra el imperialismo y sus aliados internos, de terminar con el latifundio agrario y minero, de luchar por la liberación del hombre y por la construcción del socialismo [...]. La promesa fue respondida por con un mayúsculo ¡Sí! por toda la juventud presente...” (*El Siglo*, 21 de agosto de 1970). Este llamado, con marcado acento épico y mesiánico, asignaba a los jóvenes la tarea histórica que tradicionalmente un sector de la izquierda asignaba a “la clase obrera”, de liberar a las grandes mayorías sociales del yugo de la dominación. Esta dimensión ética, de principios, aglutinó a una generación

de jóvenes que creyeron ver con el triunfo de Allende en 1970 un largo sueño cumplido por las generaciones anteriores. Los jóvenes estaban convocados a ir en la cresta de la ola del proceso de la Unidad Popular.

La centralidad de la mujer y de los jóvenes en la campaña de 1970 quedó reflejada en ocasión del discurso que Allende hizo desde el balcón del edificio perteneciente a la FECH en la madrugada del 5 de septiembre de 1970. Emocionado, exaltó desde sus primeras palabras la importancia del papel de la juventud y su valor simbólico en el triunfo obtenido: "...nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia. Porque todos lo sabemos. La juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo...". Sobre la importancia que le cabría a la mujer en el proceso que comenzaba –más allá de que nuevamente en 1970 el voto para el candidato izquierdista fue minoría entre ellas– se manifestó en las cuatro alusiones que hizo de ellas durante este "discurso de la victoria". Así, en el momento de agradecer el respaldo recibido, Allende destacó tanto a los jóvenes como a las mujeres: "...para los que están en la pampa o en la estepa, para los que me escuchan en el litoral, para los que laboran en la precordillera, para la simple dueña de casa, para el catedrático universitario, para el joven estudiante, el pequeño comerciante o industrial, para el hombre y la mujer de Chile, para el joven de nuestra tierra, para todos ellos, el compromiso que yo contraigo ante mi conciencia y ante el pueblo –actor fundamental de esta victoria– es ser auténticamente leal en esta gran tarea común y colectiva..." (Allende, 5 de septiembre de 1970).

De esta manera, en las palabras que eran la bisagra entre dos momentos políticos distintos, la campaña y la proclamación por el Congreso Pleno en octubre, Salvador Allende resumía el carácter heterodoxo, desde la lógica del marxismo en uso en la época, de la "vía chilena al socialismo"; el carácter pluriclasista de su apelación de masas, como por la validación de la táctica gradualista para llevar a cabo un programa de transformaciones estructurales del sistema político, económico, social y cultural del país. Allende, a lo largo de los meses de campaña, sin negar el carácter radical de su programa, al señalar que el objetivo final era "el socialismo" y la lucha contra las poderosas minorías nacionales y extranjeras, supo acompañarlo de tres aspectos que lo aproximaron a los votantes: primero, una convocatoria amplia, que incluía a la inmensa mayoría de los chilenos, haciendo difuso el discurso clasista más duro de la izquierda; segundo, ofreció un conjunto de medidas concretas, sentidas por la población y que le permitían sintonía con ella; tercero, buscó aproximarse a sectores reacios tanto a participar en las elecciones (jóvenes) como a votar por la izquierda (mujeres), lo que tonificó la campaña con un discurso político de carácter nacional; cuarto, todos estos elementos se vieron empapados de un mensaje de optimismo histórico, con propuestas concretas para iniciar "la revolución chilena", la que era hecha aparecer como una inminencia histórica. Así, en manos de un sujeto histórico amplio y diverso –que podríamos denominar "vanguardia compartida", en oposición al clásico papel hegemónico de la "clase obrera"– quedaba la misión de obtener la "Segunda Independencia" de Chile.

Esta parte discursiva de la campaña estuvo acompañada de un amplio des-

pliegue territorial, de la mano de los CUP, que cumplieron la misión de agitar y difundir las propuestas de la Unidad Popular, pero que también funcionaron como órganos que canalizaban la protesta social. Los CUP significaron una sistematización superior de una práctica tradicional de la izquierda, consistente en visualizar como un conjunto la lucha electoral y la promoción de la movilización social. Es decir, el espíritu revolucionario de la militancia y de los simpatizantes de izquierda no debía verse disminuido por participar en los torneos electorales. La “vía chilena al socialismo”, en su definición más de fondo, implicaba una concepción de camino revolucionario original y parte sustancial de esta originalidad radicaba en la superación de la dicotomía reforma/revolución como caminos excluyentes.

“La ‘vía chilena al socialismo’ (...) implicaba una concepción de camino revolucionario original y parte sustancial de esta originalidad radicaba en la superación de la dicotomía reforma/revolución...”

En el caso de la Unidad Popular, de la mano de la reforma, es decir, de las soluciones concretas, del discurso “nacional-popular”, del alejarse del “obrerismo” clasista, se daría paso a los cambios revolucionarios, a lo que Allende denominaba “el cambio del sistema político y económico”. Con el control del poder ejecutivo, la Unidad Popular iniciaría un proceso transformador que modificaría la estructura que consagraba la explotación y la desigualdad social como sistema de vida en Chile.

Sin embargo, debajo del entusiasmo y optimismo de una campaña presidencial polarizada y confrontacional como lo fue la de 1970, el escepticismo de sectores de izquierda dentro y fuera de la Unidad Popular estaba latente. La singularidad de la “vía chilena al socialismo”, sus guiños “reformistas” y apelaciones a las clases medias eran vistos como una renuncia a una verdadera vocación revolucionaria. Con todo, como la guerra civil dentro de la izquierda aún no se declaraba, la Unidad Popular y su candidato lograron transmitir la imagen de unidad y alegría, y ser los portadores de las verdaderas soluciones a los problemas que desde siempre aquejaban a la mayor parte del país. Los CUP y el discurso de Allende fueron el vehículo de esta buena nueva. Un poco más de un tercio del país respaldó este sueño. El desafío posterior fue intentar ganar la mayoría absoluta. De ello, tal como lo demostraron los hechos posteriores, dependería la suerte de la “vía chilena al socialismo”.

Bibliografía

Allende, Salvador 1970 “Discurso en los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en la madrugada del 5 de septiembre” en <www.archivochile.com/entrada.html>, acceso el 7 de julio de 2010.

Álvarez Vallejos, Rolando 2007a “¿Reforma o revolución?: lucha de masas y la vía no armada al socialismo. El Partido Comunista chileno. 1965-1973” en Concheiro, Elvira; Modonesi, Massimo y Crespo, Horacio (coords.) *El comunismo: otras miradas desde América Latina* (México: UNAM).

- Álvarez Vallejos, Rolando 2007b "La tarea de las tareas. Luchar, unir, vencer. Tradición y renovación en el Partido Comunista de Chile 1965-1990", tesis para optar al grado de Doctor en Historia, Universidad de Chile.
- Álvarez Vallejos, Rolando 2008 "La herencia de Recabarren en el Partido Comunista de Chile: Visiones comparadas de un heredero y camarada del 'maestro'. Los casos de Orlando Millas y Salvador Barra Woll" en Álvarez, Rolando; Samaniego, Augusto y Venegas, Hernán (eds.) *Fragmentos de una historia. El Partido Comunista en la historia de Chile. Democratización, clandestinidad y rebelión (1912-1994)* (Santiago de Chile: Ediciones ICAL).
- Cruzat, Ximena y Devés, Eduardo 1986 *Recabarren. Escritos de prensa* (Santiago de Chile: Editorial Nuestra América) 4 tomos.
- Faúndez, Julio 1993 *Izquierdas y democracia en Chile, 1932-1973* (Santiago de Chile: Bat Ediciones).
- Garcés, Joan 1971 *1970. La pugna política por la presidencia en Chile* (Santiago de Chile: Editorial Universitaria).
- Garcés, Joan 1992 (1976) *Allende y la experiencia chilena* (Santiago de Chile: Bat Ediciones).
- Garcés Durán, Mario 2005 "Construyendo 'las poblaciones': el movimiento de los pobladores durante la Unidad Popular" en Pinto, Julio *Cuando hicimos historia* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Gazmuri, Cristián y Góngora, Álvaro 2005 "La elección presidencial de 1964. El triunfo de la Revolución en Libertad" en San Francisco, Alejandro y Soto, Ángel *Camino a La Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile 1920-2000* (Santiago de Chile: Instituto de Historia-PUCCh/Centro de Estudios Bicentenario).
- Gómez, Juan Carlos 2004 *La frontera de la democracia* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Guillaudat, Patrick y Mouterde, Pierre 1998 *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Harnecker, Marta 2003 "Reflexiones sobre el gobierno de Allende. Estudiar el pasado para construir el futuro" en *Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory* (Londres: Brill) Vol. 11, N° 3.
- Jocelyn-Holt, Alfredo 1998 *El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar* (Santiago de Chile: Planeta).
- Jocelyn-Holt, Alfredo 2008 "Allende, el último republicano" en Fundación Salvador Allende (ed.) *Salvador Allende. Fragmentos para una historia* (Santiago de Chile).
- Labarca Goddard, Eduardo 1971 *Chile al rojo. Reportaje a una revolución que nace* (Santiago de Chile: Universidad Técnica del Estado).
- Marini, Ruy Mauro 1976 *El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile* (México: Ediciones Era) Serie Popular.
- Millar, René 1982 *La elección presidencial de 1920* (Santiago de Chile: Editorial Universitaria).
- Moulian, Tomás 1983 *Democracia y socialismo en Chile* (Santiago de Chile: FLACSO).
- Moulian, Tomás 1993 *La forja de ilusiones. El sistema de partidos 1932-1973* (Santiago de Chile: UARCIS/FLACSO).

- Moulian, Tomás 2000 *Socialismo del siglo XXI. La quinta vía* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Moulian, Tomás 2006 *Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973)* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Pinto Vallejos, Julio (coord.) 2005 *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Pinto Vallejos, Julio 2007 *Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923)* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Pinto, Julio y Valdivia, Verónica 2002 *¿Revolución proletaria o querida chusma? Alessandrismo y socialismo* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Pizarro, Crisóstomo 1986 *La huelga obrera en Chile, 1890-1970* (Santiago de Chile: Ediciones Sur).
- Puccio, Osvaldo 1985 *Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado Osvaldo Puccio* (Santiago de Chile: Editorial Emisión).
- Rojas, Robinson 1974 *Estos mataron a Allende. Reportaje a la masacre de un pueblo* (Barcelona: Ediciones Martínez Roca).
- Salazar, Gabriel y Pinto, Julio 2002 *Historia Contemporánea de Chile III. La economía: mercados, empresarios y trabajadores* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Samaniego, Augusto 2004 "El 'poder popular', lo social y lo político en el Chile de la Unidad Popular" en *Revista de Historia y Ciencias Sociales* (Santiago: Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la UARCIS) N° 2.
- San Francisco, Alejandro 2005 "La elección presidencial de 1970" en San Francisco, Alejandro y Soto, Ángel (eds.) *Camino a La Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000* (Santiago de Chile: Instituto de Historia-PUCCh/Centro de Estudios Bicentenario).
- San Francisco, Alejandro y Soto, Ángel 2005 *Camino a La Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000* (Santiago de Chile: Instituto de Historia- PUCCh/Centro de Estudios Bicentenario).
- Smirnow, Gabriel 1976 *La revolución desarmada. Chile. 1970-1973* (México: Ediciones Era) Serie Popular.
- Valdivia, Verónica 2005 "'Todos juntos seremos la historia: Venceremos'. Unidad Popular y Fuerzas Armadas" en Pinto Vallejos, Julio (coord.) *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular* (Santiago de Chile: Lom Ediciones).
- Valenzuela, Arturo 1989 *El quiebre de la democracia en Chile* (Santiago de Chile: FLACSO).

Notas

1 Intervención del integrante de la Comisión Política del Partido Comunista José Oyarce, en el pleno de febrero de 1970 del comité central del PC.

2 La meta eran 5 mil comités en todo el país, de los cuales 2 mil estarían en Santiago.

3 Esa era la opinión de la Unidad Popular en el editorial de *El Siglo* de ese día. La jornada enturbió aun más el clima político de la época, al ser asesinado por disparos de carabineros el joven de 16 años y militante comunista Miguel Ángel Aguilera.

Reseñas bibliográficas

El Estado. Campo de Lucha

Fernando Munguía Galeana

**La revolución en el bicentenario.
Reflexiones sobre la emancipación,
clases y grupos subalternos**

Armando Chaguaceda Noriega



El Estado

Campo de Lucha

ÁLVARO GARCÍA LINERA, RAÚL PRADA,
LUIS TAPIA Y OSCAR VEGA CAMACHO
La Paz, Muela del Diablo,
Comuna y CLACSO, 2010

FERNANDO MUNGUÍA GALEANA

Licenciado en Sociología; miembro del Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del OSAL.

Nuevos horizontes estatales en Bolivia: de la colonialidad a la plurinacionalidad

“Los historiadores ven a los países desde la perspectiva del presente y no yerran por fuerza en ello porque la cosa se conoce en su remate; pero cada país, en cambio, se ve a sí mismo con los ojos de su memoria.”

René Zavaleta, *Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (1932-1971)*

En los primeros años del siglo XXI, el ciclo de luchas socio-políticas que protagonizaron las masas populares en Bolivia, que iniciara en 2000 con la “guerra del agua” y que se prolongara hasta el año 2005 con el primer triunfo electoral de Evo Morales, logró llevar adelante una transformación sin precedentes en la historia del país que trastocó en sus cimientos más hondos la estructura dominante, alcanzando márgenes de autodeterminación hasta el punto de poner fin a la hegemonía neoliberal, impuesta ahí desde 1985, y a las estructuras de explotación y dominación que se venían reproduciendo sistemáticamente desde la conquista y la colonia. La *memoria* entrelazada de siglos de resistencia de los subalternos se combina ahora en el *presente* en una nueva fuerza instituyente que se va materializando sobre todo al ritmo de la politicidad de la multitud y de sus organizaciones

y que encuentra una forma concreta en los logros alcanzados y promovidos por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Inmersos en la praxis y en el debate político nacional, como lo han estado desde sus primeros documentos conjuntos, los miembros del grupo Comuna nos ofrecen en esta nueva obra el abordaje a uno de los problemas más acuciantes y decisivos en el proceso boliviano actual, a saber, la forma específica que asume el Estado en estos años de conflictos permanentes y de cara a los nuevos horizontes que ya han quedado indicados en el texto constitucional de reciente aprobación.

Abrevando de diversas corrientes de pensamiento social y político, entre las que destaca sobre todo el marxismo y en particular la influencia local de René Zavaleta, cada uno de los cuatro ensayos que componen este volumen reflexiona y problematiza algunos de los principales pilares conceptuales que sostienen a la idea del Estado-nación como una construcción societal arquetípica de la modernidad. La apuesta es incluso mayor: a partir de la realidad propia, de las diversas socialidades y proyectos políticos que se han expresado durante estos diez años decisivos y que se extienden por todo el territorio, los autores sostienen que se está configurando un nuevo orden estatal que se separa radicalmente de su antecesor y que prefigura la incorporación de una multitud de sujetos que dotan de contenido crítico a esta conformación estatal emergente que por primera vez en su historia responde a la pluriculturalidad que le es propia.

De alguna manera, estas reflexiones parten de una matriz en común, si bien encuentran su propio camino en aras de aportar elementos para esta discusión sobre el Estado-nación y las lógicas de poder que le dan sentido. Siguiendo a Zavaleta, parten de la categoría de *crisis*, entendida como método de conocimiento de la diversidad, en tanto que es el momento en que se puede apreciar la escisión o ruptura de lo viejo al tiempo que se hacen perceptibles las posibilidades inéditas contenidas en la *condición abigarrada* de la historia boliviana y desde ahí es que nuestros autores, si consideramos sus aportaciones hechas a este libro en conjunto, abordan la realidad actual del Estado-nación en general como producto de la modernidad occidental y en particular la fractura del *Estado aparente* y del *Estado colonial* que era propio de Bolivia hasta hace muy poco tiempo.

Vistos en lo singular, los ensayos reflejan ciertos matices que nos hablan de la trayectoria intelectual y política de los autores, lo cual no es un dato menor considerando el papel desempeñado por el grupo Comuna en estos años en los que han acompañado desde el gobierno, las instituciones y los movimientos al proceso de transformación mismo y que, en opinión de algunos de ellos, está todavía en curso.

Si ordenamos la discusión teórica que se encuentra en estos trabajos en la perspectiva de un diálogo entre ellos, podríamos comenzar por los argumentos vertidos por Raúl Prada en su ensayo "Umbrales y horizontes de la descolonización", que en cierto sentido abren el conjunto de temas y problemas que se plantean en el libro y que, a lo largo de su recorrido, se va complejizando con la intervención de cada uno de los participantes.

El punto de partida de Prada se encuentra en la crítica de la modernidad como proyecto hegemónico impulsado desde los centros imperiales de occidente y en su correlato periférico, la forma en que dicho proyecto fue impuesto a través del co-

lonialismo. Según él, esta doble ubicación material y epistémica determina desde ya la manera en la cual se expresa la relación entre el Estado y la sociedad en las formaciones abigarradas. Dos distinciones al interior de este complejo proceso de articulación resultan fundamentales en su interpretación: de un lado capitalismo y modernidad, del otro colonialismo y colonialidad. Tal como señala el autor, si bien es necesario apuntar que los ciclos del capitalismo no son idénticos a los del colonialismo, no puede perderse de vista que “la irrupción del colonialismo a escala mundial tiene inmediatamente que ver con la acumulación originaria del capital a escala mundial y con el nacimiento de la modernidad”; de ahí que sean procesos imbricados y decisivos en la conformación de las estructuras económicas y políticas en la periferia. Así pues, a la “práctica imperial de ocupación de tierras”, con el consecuente “sometimiento de las poblaciones” originarias –colonialismo–, corresponde una forma particular de “configuración de las identidades societales” –colonialidad– que se irradia al conjunto de la sociedad sometiendo a las razas, clases y etnias a la verticalidad de un Estado que expropia la soberanía de la nación para legitimar y legalizar su poder.

Con ese argumento como sustrato, el autor encamina su reflexión a la necesidad de considerar la existencia de la diversidad de naciones que integran al Estado, mismas que, a lo largo de la historia de luchas descolonizadoras, no lograron romper con la arquitectura monolítica del Estado que terminara por erigirse como la estructura suprema de ordenamiento de la vida social en un contexto colonialista que se adecuaba, siempre de forma superpuesta, a las necesidades propias del expansionismo capitalista. Esas experiencias frustradas, principalmente indígenas en el siglo XVIII, posteriormente criollo-mestizas en el XIX y nacionalistas en el XX, que buscaban recomponer el diseño de la nación y que atraviesan la historia de los proyectos políticos de los subalternos, se encontrarán, señala el autor, “en los acontecimientos de la guerra del gas en octubre de 2003”, ahora en el contexto de la globalización y de una “nueva soberanía, la del imperio”. Si la realidad nos indica que el capitalismo y todo el andamiaje cultural e identitario en el que se sustentó, es decir, la modernidad, están en crisis; si las formas de dominación y explotación con las que el colonialismo logró sostenerse por siglos, están también en declive, ¿cómo, entonces, trascender la lógica colonial de sometimiento y la falsa soberanía entre los Estados-nación de una manera que permita alcanzar la emancipación de los subalternos? Al igual que la interrogante, la posible respuesta es equivalentemente categórica: “Esta superación de la crisis del capitalismo solo se puede dar ingresando en un nuevo horizonte histórico y cultural, un horizonte que se sitúa en otro espacio-tiempo, que se encuentra más allá del mundo capitalista, más allá del mundo moderno”; un nuevo imaginario social radical, un nuevo sentido simbólico de comunidad y un mapa institucional e, incluso, una nueva episteme que emergen a partir de los movimientos de la multitud, de las diversas nacionalidades que se mantuvieron subordinadas al monoculturalismo del Estado-nación y que ahora se presentan como una alternativa frente al colapso del mundo moderno. Es el Estado Plurinacional, comunitario y autonómico que nace como producto de las luchas socio-políticas de 2000-2005 y que cobra una forma definida con la aprobación de la nueva constitución boliviana; un Estado que, en palabras de Prada, ya no es un Estado propiamente dicho, pues contempla la

diversidad, no solo de culturas, sino fundamentalmente de poderes, instituciones, socialidades e imaginarios.

En su aportación, Luis Tapia reflexiona sobre “El Estado en condiciones de abigarramiento”, remitiendo desde el título mismo a una raíz de pensamiento zavaletiana y, para lo cual, inicia un recorrido por la teoría marxista clásica para problematizar la idea de Estado como monopolio de la política y del poder. El rastreo teórico de Tapia tiene, sin embargo, un propósito ulterior que discute las posturas más economicistas y lineales del proceso de conformación histórica de los Estados; considerando la particularidad de Bolivia, el autor critica las interpretaciones y categorías que empatan el desarrollo del modo de producción con la formación de las superestructuras políticas derivando de ello una explicación casi casuística del tipo de formas de dominación política y económica.

La diferencia y la resistencia que presentan los territorios periféricos a ser clasificados con categorías ajenas a la realidad misma exigen que se considere no solo su condición de país dependiente, los mecanismos y formas concretas de explotación –subsunción real y subsunción formal–, sino sobre todo la diversidad en que estos mecanismos se reproducen y sobreponen desarticuladamente. Bolivia es entonces una formación social abigarrada porque, en efecto, el colonialismo implantó mecanismos de explotación y dominación acordes con las necesidades del sistema capitalista de la época y que se fueron refuncionalizando a lo largo de su historia republicana, pero, y esa sería una de las distinciones que ofrece esta categoría, no lograron eliminar ni las estructuras de producción ni las formas de autoridad de los pueblos originarios, que han existido paralelamente a las formas de producción y gobierno dominantes.

Estado aparente y no Estado-nación es entonces lo que se ha producido en Bolivia una vez alcanzada la independencia, porque esta no fue sino una prolongación más de la colonia; una forma de ordenamiento político, judicial e ideológico que sin embargo reclama el monopolio de la autoridad en un contexto en el que solo responde a las necesidades de regiones específicas del territorio y que en su beneficio instaura y perpetúa un “orden económico-social patrimonialista”.

Producto por excelencia del colonialismo, este poder patrimonialista fundado en el control de los medios de producción y en la relación intrínseca de sus propietarios con el aparato político con el que sostienen relaciones de filiación de diversos tipos, evidencia “que más que tratarse del monopolio legítimo de la fuerza por parte el Estado, se trata de un monopolio ejercido por la clase dominante”. La Revolución nacionalista del 52 supone un paréntesis al poder patrimonialista, un período de autonomía relativa del Estado sobre todo con la nacionalización de las minas y la reforma agraria, que sin embargo se ve nuevamente funcionalizado en beneficio de la clase dominante y de los intereses económicos transnacionales a partir de 1985, cuando, afirma Tapia, el Estado se encuentra en una situación instrumental “caracterizada por la presencia directa de los empresarios en el *continuum* de las estructuras de autoridad del gobierno”; será la etapa del *presidencialismo colonial* prolongada durante veinte años.

Una nueva fractura se da en esa lógica de poder. A partir de las victorias electorales del MAS, a nivel nacional y departamental, se constata una escisión, una falta de correspondencia entre la clase dirigente y la que todavía se erige como

la clase dominante que, sin embargo, intenta sostener su poder allá donde históricamente la relación entre el Estado y el orden patrimonialista ha sido orgánica, es decir, en los departamentos del oriente. Esta nueva organización institucional implica un conflicto de la mayor importancia que Tapia destaca atinadamente: la lucha de clases y la disputa por el poder político se está dando en la coyuntura actual por dos vías distintas: de un lado, la oligarquía no tiene partidos políticos capaces de oponer resistencia al gobierno estatal y ha delegado todo su poder en los comités cívicos que como organizaciones de la sociedad civil articulan sus intereses; las masas populares, en cambio, a través de sus organizaciones, como son los sindicatos, han logrado conformar un partido político que ha alcanzado el poder estatal por la vía electoral desplazando las viejas lógicas de explotación y dominación. Ahí está la contradicción que encierra el proceso actual y que expresa la existencia de dos proyectos antagónicos en la medida en que existe un *Estado dividido* con dos lógicas y mecanismos propios que no lograron resolverse, en opinión del autor, en el nuevo texto constitucional y que se mantienen latentes, por ejemplo, en el tema de las autonomías departamentales. De esta forma, la condición abigarrada se prolonga en los desfases existentes entre el gobierno central y los departamentales que representan a la oligarquía.

Álvaro García Linera, por su parte, aborda al “Estado en transición”, pensándolo en momentos en los que el conflicto y la crisis hacen imposible definir su forma. Partiendo de tres aristas complementarias para entender al Estado –como correlación de fuerzas, como materialidad institucional y como “sentido común de época”–, el autor propone una serie de etapas que dan cuenta de los procesos socio-políticos por los que Bolivia ha transitado a lo largo de los últimos diez años.

Así, en el año 2000 se hizo patente la *crisis estatal* cuando los sectores populares movilizados rompieron con la hegemonía neoliberal llevando sus demandas y luchas al punto del *empate catastrófico* en 2003 al diferenciarse radicalmente de la clase dominante, momento en el que se expresó con más claridad su voluntad estatal; la elección presidencial de Evo Morales supone una escalada más al conseguirse la *sustitución de élites gobernantes* que hace posible la materialización de los contenidos de lucha en el Estado y se inicia la construcción de un *nuevo bloque de poder económico* que redefine las aspiraciones del aparato estatal en función de la nueva composición socio-política que lo determina. Finalmente, la iniciativa de una nueva estatalidad o la resistencia del viejo orden ponen el proceso en un *punto de bifurcación*, que en este caso habría empezado con el *referéndum* de 2008, del que el MAS sale victorioso, prolongándose hasta la aprobación del texto constitucional.

En opinión del autor, ahí se cerró un ciclo histórico de transición y se inició el proceso de construcción del nuevo Estado que, sin embargo, abre una larga lista de interrogantes y problemas, pues más allá de que se ha dado una diferenciación clara entre sujetos y proyectos políticos lo cierto es que el conflicto sigue manifestándose de forma violenta en tanto que, como ya apuntaba Tapia, se ha dado un desfase fundamental entre el nuevo bloque político dirigente que se levanta sobre una base social amplia y heterogénea y la clase que detenta buena parte del poder económico, que se ha convertido en minoría política pero que desde sus territorios sigue oponiendo resistencia al proceso de transformación impulsado por aquel.

Las posibilidades de estabilización del nuevo régimen estatal pasan por la constatación de una serie de hechos que van consolidando su hegemonía y que permiten pensar en una prolongación de sus contenidos y proyectos: por un lado la cercanía con las Fuerzas Armadas, que destaca García Linera como parte de una estrategia que permite reafirmar el sentido de soberanía y organicidad del Estado a lo largo del territorio y la nacionalización de empresas y, por otro, el control sobre el excedente económico, que confirma la dirección del Estado y recompone la participación de los sectores económicos, nacionales y extranjeros, con lo que una parte mayúscula de la población, antes secundaria, incide directamente en el proceso productivo y distributivo de la riqueza. Sin embargo, apunta el autor, una serie de deficiencias internas al aparato estatal siguen aletargando e impidiendo que se avance integralmente en todos los espacios de acción. El sistema judicial que todavía permanece permeado de una ideología conservadora y las muchas instancias burocráticas que perviven del viejo régimen son dos de estos frenos que no han logrado desmontarse.

De cualquier forma puede decirse que en estos tiempos de transición se ha alcanzado una definitiva "victoria simbólica de las fuerzas del cambio" que ha logrado introducir duraderamente, en el campo intelectual y político nacional, una nueva agenda de temas y desafíos como la plurinacionalidad, el estatismo productivo y la desconcentración territorial del poder y, con ello, es posible afirmar que ya no existen dos proyectos de alcance nacional sino que el impulso general de transformación se enfrenta a resistencias locales que han perdido su capacidad de irradiación. Así, el punto de bifurcación actual, si bien no cancela los conflictos, los subsume a una lógica general en la que los temas centrales han quedado resueltos y lo que se pone en tensión es su velocidad y profundidad.

Oscar Vega Camacho nos entrega una reflexión en su trabajo "Al sur del Estado", en que lo asume como una condición y ubicación geográfica y epistémica que permite distinguir nuevas potencialidades, que ha traído consigo el "retorno plebeyo" que pone en entredicho la validez del Estado mismo, en tanto que en las periferias este surgió y se ha conservado siempre como una estructura superpuesta a las demandas de los pueblos originarios prolongando la colonialidad. Desde esta perspectiva, el autor resalta la necesidad de repensar al Estado-nación a partir de la emergencia de los actores que históricamente habían sido mantenidos al margen y que ahora, en tiempos de crisis, se preguntan sobre su sentido y direccionalidad. Siguiendo una línea similar que está presente en los otros ensayos que componen este volumen, Vega Camacho emprende la crítica de la teoría del Estado que se ha sustentado en el monopolio de la autoridad escindiendo al Estado mismo del conjunto de la sociedad.

La hipótesis fuerte del ensayo es que Bolivia se encuentra en el tránsito de una "sociedad colonial abigarrada" a una "sociedad democrática plurinacional" que obliga a emprender la reconceptualización del Estado, en tanto que la diversidad de sujetos que han hecho posible este cambio tiene ahora un lugar preponderante en la reorganización de la sociedad en su conjunto.

Haciendo un recorrido por el nuevo texto constitucional aprobado en febrero de 2009 es que el autor va resaltando la amplitud que tiene el proceso de cambio en el país, que por primera vez antecede a la diversidad cultural, identitaria, po-

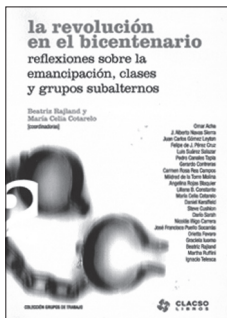
lítica y económica que lo conforma y que, a partir de ella, piensa y construye el andamiaje legal que le permite sostenerse.

Esto es, en términos concretos, la descolonización el Estado, que implica la construcción efectiva de la democracia, toda vez que con la consideración de los derechos y garantías fundamentales, con la previsión de una nueva arquitectura institucional y de una nueva responsabilidad y orientación de la tarea del aparato estatal se dibuja un horizonte inédito para que la ciudadanía, entendida como pluralidad y como consecuencia de las luchas sociales, se logre potenciar como tal, pero también para que con su participación vaya marcando el ritmo y la intensidad de los cambios operados en y por el Estado.

Así, en el contexto de una crisis sistémica a nivel mundial que supondría el colapso del capitalismo como forma hegemónica de ordenamiento de la vida social, las posibilidades inauguradas en Bolivia, en opinión de Oscar Vega, trasladan el antagonismo histórico entre el capitalismo y la democracia hacia una mucho más trascendental, suscitada entre el capitalismo y la vida misma, en el cual se privilegia la horizontalidad en las relaciones productivas y políticas en el seno de la pluralidad encarnada por los muchos sujetos que hacen parte de esta nueva encrucijada.

En definitiva, no es este el texto en el que se ofrecen elementos teóricos ni datos puntuales para dar por hecho que Bolivia haya entrado en una fase de “normalidad política”, ni siquiera en la dimensión estrictamente institucional. Las reflexiones críticas y creativas que se nos ofrecen aquí sobre el Estado invitan, antes bien, a seguir construyendo las bases teóricas y metodológicas que nos ayuden a distinguir, en la *crisis epocal* que vivimos, las contradicciones insalvables que parecen llevar en su seno el modo de producción capitalista y la formación política que le acompaña. Las apuestas de los autores, si bien con matices y posicionamientos propios, parecen inclinarse evidentemente hacia la necesidad de continuar con el proceso iniciado hace ya una década, a lo largo de la cual la politización de las masas ha sido el impulso definitivo para llevar adelante la transformación social de la que hemos sido testigos.

Recordando a Gramsci, parece advertirse en las líneas de estos ensayos lo mismo que el italiano apuntaba respecto de los momentos de “aparente victoria” en los que sin embargo, “los subalternos se encuentran en una situación de alarma defensiva”. De cualquier manera, el camino andado hasta ahora parece abrir nuevos y promisorios horizontes en Bolivia en los que efectivamente, la descolonización y la puesta en marcha del Estado plurinacional tendrán que ser tarea de aquellos mismos que han estado movilizados por todo este tiempo.



La revolución en el bicentenario

Reflexiones sobre la emancipación, clases y grupos subalternos

BEATRIZ RAJLAND Y
MARÍA CELIA COTARELO (coords.)
Buenos Aires, CLACSO, 2010

ARMANDO CHAGUACEDA NORIEGA

Miembro del Colectivo Editorial de la revista del OSAL y coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO "Anticapitalismo & Sociabilidades Emergentes".

La Revolución revisitada: balance bisecular y apuestas al futuro

En el Bicentenario del inicio del ciclo independentista hispanoamericano, numerosas miradas se dirigen sobre los fenómenos constituyentes de nuestra identidad y los procesos que marcan el pleno advenimiento de la Modernidad en el Nuevo Continente. Modernidad americana que supuso, en su dimensión explícitamente política, el triunfo más o menos consolidado de una serie de figuras abstractas –nación, pueblo, soberanía, representación, opinión– y, con ellas, la aparición de nuevas formas políticas en un proceso histórico continental cuya maduración vino emparentada con la alborada independentista y el advenimiento –en los territorios liberados– de un arcoíris de bisoñas Repúblicas. Para el estudio de estos fenómenos¹ un texto como *La revolución en el bicentenario. Reflexiones sobre la emancipación, clases y grupos subalternos*, que nos ofrece el área Grupos de Trabajo (GT) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) reúne, entre otros aciertos, la riqueza de la pluralidad temática, epistémica y contextual y la explícita preocupación por el compromiso crítico y militante de cara a los procesos políticos regionales en curso.

Para el abordaje de estos procesos una de las disciplinas más promisorias resulta la Historia Política, en tanto estudio sobre los actores, las ideas, los imaginarios, valores y prácticas políticas y culturales que encarnan las formas políticas modernas

(Guerra y Lempérieré, 1998: 6). Disciplina que, en su multiplicidad de miradas, deberá atender factores tan diversos como el quehacer de los actores políticos individuales y colectivos, la espacialidad de la política, su realización concreta en las instituciones, la reflexión política y su repercusión en los procesos de génesis y desarrollo institucional, las nuevas formas de sociabilidad, la innovación constitucional y sus repercusiones prácticas y las visiones de soberanía popular, representación y participación políticas, entre otros. Todos estos elementos conforman una especie de substrato común de esta Modernidad hispanoamericana, capaz de expresarse mediante modalidades, ritmos y “tiempos sociales” que trascienden los códigos binarios de la crónica puntual o el análisis civilizatorio de larga duración y que abrigan, en su disconía, la coexistencia de estructuras de diferente nivel y época históricos, como consecuencia de los influjos del exterior y las dinámicas de la heterogeneidad interna, social y territorial de cada país o región (Soriano, 2004: 3).

Numerosos escollos han debido superar los historiadores políticos desde aquella primera hornada de pesquisas acotadas al análisis de las ideas expresadas formalmente por las élites locales en manifiestos, cartas y proclamas; estudios precursores donde los procesos políticos y conexiones sociales parecían ausentes (Sábado, 2003: 14-15). Por suerte, se ha ido abandonando el abordaje del pasado desde una historia política episódica, desvinculada de las áreas económicas, sociales, jurídicas y culturales, para convenir en la necesidad de combinar perspectivas complementarias capaces de analizar fructíferamente la praxis política de nuestra región (Soriano, 2004: 16-19).

En esta dirección se inscribe la labor del Grupo de Trabajo de CLACSO “El Bicentenario Latinoamericano: dos siglos de revoluciones a la luz del presente”, el cual intenta problematizar los últimos siglos de historia latinoamericana, asumiendo como ejes de un análisis multidisciplinario las revoluciones, las clases y sujetos subalternos. Con una periodización que rescata la “primera independencia” contra el dominio español, el medio siglo (1904-1950) que abarca el primer centenario de las gestas y las “revoluciones nacionales” y la etapa de lucha contra el dominio de los Estados Unidos (nacida con la Revolución Cubana de 1959 y prolongada hasta el presente) este grupo asume la conmemoración del Bicentenario como marco para la indagación en torno a las posibilidades de alcanzar un proyecto latinoamericano y caribeño de integración e independencia. Apuesta a articular y compartir, en estudios específicos, preguntas, métodos y problemas útiles para la realización de un balance crítico de dos siglos de historia independiente y de los procesos de cambio social del subcontinente.

Elemento central en este libro es el replanteo de la noción de revolución. Las miradas a las revoluciones sociales, objetos de estudios complejos –y escasos– de la historia universal, son generalmente encuadradas dentro de teorías más amplias del desarrollo institucional, la acción colectiva, la lucha de clases o la naturaleza de la política. Como procesos históricos, demarcan una clara pauta de cambio sociopolítico, en tanto transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase; acompañadas –y en parte protagonizadas– por las revueltas de las clases oprimidas. Combinan un cambio estructural de la sociedad y una amalgama de transformaciones sociopolíticas y culturales, que se refuerzan mutuamente.

La coincidencia de diversos factores estructurales (crisis económicas, marginación y descontento social acumulado, fuerzas políticas enfrentadas) y contingentes (una manifestación reprimida que desencadena una revuelta, liderazgos que emergen ante la decadencia de viejas élites) hace que la senda de una revolución no pueda ser claramente delineada *a priori*. De hecho, las revoluciones “recuerdan a los embotellamientos de tráfico, que son muy diversos en cuanto a su forma e intensidad, que desaparecen de forma imperceptible para dejar paso a un flujo normal de vehículos” en tanto “la coincidencia de esos factores es tan compleja que parece casi fruto del azar” ya que “considerados por separado, cada uno de los mecanismos causantes responde a unas pautas comprensibles” (Tilly, 1993: 24-25). Sin embargo, la existencia de factores recurrentes en contextos diversos, como la extensión de pautas de desigualdad, conflicto y movilización sociales, hace que –aunque sea un despropósito especificar condiciones universales, inmutables y suficientes del cambio revolucionario– podamos identificar cómo ciertos mecanismos causales, semejantes y replicados, intervienen en un amplia gama de situaciones revolucionarias.

Siendo fenómenos relativamente escasos en la historia, las revoluciones sociales pueden estudiarse, con fines de contrastación, mediante la selección de fragmentos relevantes de diversas trayectorias nacionales. En estos estudios el método de análisis histórico comparativo “desarrolla, somete a prueba y refina hipótesis causales y explicativas de los acontecimientos y estructuras que son integrales a las macrounidades, tales como las naciones-Estado” (Skocpol, 1984: 71). Aunque este libro no ofrece una propuesta en esa dirección –lo cual es una carencia a lamentar– sí alude indistintamente a procesos históricos como las revoluciones de México (1910) y Cuba (1959) o la llamada Revolución Bolivariana, de inciertos contornos, lo cual provoca algunas reflexiones al respecto.

Cuba ofrece, en efecto, el ejemplo de una revolución radical donde el viejo régimen, deslegitimado, fue decisivamente barrido por el pueblo rebelde, y donde la confrontación interclasista interna se ligó al conflicto histórico con EEUU, acelerando y profundizando las dinámicas de cambio. La cubana pertenece a la “subclase tradicional de las grandes revoluciones, en que las divisiones son profundas, los enfrentamientos masivos, las transferencias de poder radicales y las consiguientes transformaciones de la vida social amplias y duraderas” (Tilly, 1993: 27). Por su parte, el rico legado simbólico de la gesta mexicana perdura en el tiempo, como lo demuestran la ideología nacionalista y agrarista, resignificada en los repertorios de la acción colectiva en el hermano país. Sin embargo, procesos como el venezolano, carentes de transformaciones radicales de la estructura social, generan dudas sobre la pertinencia de considerarlos revoluciones sociales. En Venezuela asistimos a un proceso de transformación sociopolítica iniciado desde el régimen de la Cuarta República, que avanza paulatinamente mediante procesos electorales y modificaciones legales, incluida la Constitución, en cuyo seno los cambios son fundamentalmente impuestos desde la presidencia, con la guía de un enorme eclecticismo teórico e ideológico, convocando el apoyo de amplios sectores, pero sin alterar radicalmente el diseño de la sociedad, el modelo económico rentista y la beligerancia de un bloque opositor en recomposición. ¿No merece debatirse *seriamente* de qué revolución estamos hablando?

Un acierto del libro es ponderar –aunque sin explotar suficientemente– la variable geopolítica para la comprensión de los casos nacionales. Las causas de las revoluciones son comprensibles a partir de interacciones específicas entre las estructuras de clase y los estados, entre acontecimientos internos e internacionales, por lo cual –si bien los detonantes y desarrollo de procesos nacionales pueden tener móviles fundamentalmente internos–, no cabe duda de que los actores contemporáneos puedan ser influidos por acontecimientos de procesos anteriores. Así, la consolidación (y los rumbos) del proceso cubano se enmarcan en las condiciones de posibilidad (y el ambiente ideológico) de la Guerra Fría, del mismo modo que la llamada Revolución Bolivariana ha recibido los soportes materiales e ideológicos del consolidado régimen de la isla. Lo mismo acaece hoy dentro del esquema de intercambio comercial, inversión económica y apoyo diplomático que liga a estos gobiernos dentro del modelo de la Alternativa Bolivariana para las Américas, por lo que se puede considerar que estos procesos de cambio, en sus posibilidades y naturaleza, se modifican a tenor de la organización de los estados y mutan con las alteraciones que puedan producirse en el sistema interestatal mundial.

En tanto las revoluciones suponen una transferencia por la fuerza del poder del Estado, para describirlas hay que tener en cuenta, entre otras cosas, cómo cambia el ejercicio de la dominación política en el tiempo, en el espacio y en el marco social y cómo los procesos sociales que se desarrollan en el entorno del nuevo Estado posrevolucionario afectan profundamente a la perspectiva y naturaleza de la revolución. La centralidad del poder (sus estructuras institucionales y grupos integrantes) nos lleva a reconocer que un resultado revolucionario supone una transferencia de poder, mediada por períodos de soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante de forma que –como recordaba Charles Tilly– cuanto mayor es el cambio que determina una revolución en la coalición gobernante, más profunda es la transformación de otros aspectos de la vida social. Este radical recambio institucional es capaz de definir, en una coyuntura crítica, los parámetros institucionales de lo *políticamente posible*.

La centralidad (aunque no la preeminencia absoluta) de lo estatal y sus implicaciones para la emancipación de las poblaciones aparecen recurrentemente en el texto, reforzando la vieja evidencia de que las revoluciones modernas, más allá de las utopías románticas que invocan “culminan en la consolidación de nuevas organizaciones de Estado, cuyo poder puede emplearse no solo para reforzar las transformaciones socioeconómicas que ya habían ocurrido, sino también para promover nuevos cambios” (Skocpol, 1984: 53). En ese sentido, sería pertinente explorar una diferenciación filosófico-política entre las nociones de *proyecto* y *poder*, donde el primero aluda a un horizonte amplio (sociocultural, simbólico, etc.) de cambio emancipador de masas generado por el proceso revolucionario y el segundo defina al armazón burocrático-institucional que se crea y refuerza para acometer, estable e integralmente, el programa concreto de transformaciones. Ello puede servirnos para desterrar los “dogmas revolucionarios” mencionados por Ernesto Guevara y entender cómo en los regímenes post-revolucionarios constituidos (de las independencias decimonónicas, la gesta mexicana o los socialismos de Estado como el cubano) el poder puede generar nuevas lógicas de dominación particulares, parciales o ampliamente desconectadas de los ideales liberadores y

de la capacidad de control y participación populares, encarnándose en nuevas élites cada vez más autónomas y autorreferentes.

En esa dirección, si analizamos cuidadosamente la historia de los siglos XIX y XX, nos percatamos de que la burocratización y/o concentración autoritaria del poder en los procesos nacidos del protagonismo popular ha sido recurrente. Es importante comprender cómo las demandas de desarrollo y redistribución de riqueza y la defensa del nuevo orden ante del acoso externo se mezclan con deformaciones del pensamiento y praxis revolucionario para generar formas de unidad regimentadas desde los aparatos de poder. Partiendo de la noción de transdominación, que se refiere al paso de un sistema de dominación a otro –mediando un triunfo revolucionario, un proyecto liberador y una praxis radical–, se hace preciso evaluar la correlación estratégica entre la persistencia de prácticas heredadas del sistema anterior o generadas por el nuevo régimen –como formas de exclusión y explotación– y el protagonismo popular de los grupos subalternos.

En los trabajos de este libro se nos propone analizar los fenómenos de la revolución desde la larga duración, considerando la relevancia de problemáticas comunes después del quiebre de la dominación colonial decimonónica en vastos espacios nacionales, atravesados todos por asimetrías sociales, culturales y económicas, sucesiva (y violentamente) incorporados al sistema-mundo. Los autores contraponen las modalidades de integración neutralizadoras de las demandas populares –típicas del populismo o de los populismos del siglo XX– con las transformaciones radicales desencadenadas por revoluciones, como la Mexicana de 1910 y la Cubana de 1959, y cuestionan las visiones tradicionales de la independencia, que las presentan como movimientos de élites meramente secundadas por masas populares, donde el protagonismo subalterno se asume como predicado de la agitación ilustrada.

En su artículo, Omar Acha nos recuerda que existe una diferencia temporal (y estructural) entre los procesos revolucionarios y las revoluciones puntuales, y cómo el análisis de los primeros debe dar cuenta de factores tales como su potencial reversibilidad, sus temporalidades dilatadas y diversas, o su afán modernizador. También apunta la valía de reconocer la inmersión de las múltiples luchas locales dentro del esquema de dominación colonial o imperialista y sus determinaciones.

Por su parte, Juan Carlos Gómez Leyton define al fenómeno revolucionario como la capacidad que poseen determinados sujetos o grupos sociales y políticos de asumir la dirección del cambio histórico con objetivos constructivos (y –apuntaríamos nosotros– simbólicamente redentores y cívicamente regenerativos) cuya complejidad se expresa –por encima de los estallidos violentos– en los procesos que cada revolución logra desencadenar. Al distinguir las revoluciones meramente políticas –limitadas a la mudanza institucional–, recurrentes en la historia regional, de la clásica revolución social acompañada de ciclos de violencia masiva y cambio total de estructuras, Leyton revela cómo el abordaje de los procesos de cambio revolucionario nos lleva por los caminos de una historia abierta donde se construyen realidades y voluntades sociales, y desemboca en los predios de la teoría y la política. El autor también apunta de forma provocadora el contraste entre las revoluciones del siglo XIX –huérfanas de una teoría política que definiera *a priori* el sujeto y las cualidades del cambio– capaces de triunfar y perdurar (si bien

degradando sus promesas redentoras) y sus émulas del XX, dotadas de un guión teórico totalizador pero a la postre fracasadas.

En ese sentido, nos sugiere, habría que considerar el balance de éxitos y descalabros de dichos procesos, en tanto el carácter nacional, liberador y antimonárquico de las independencias pudo ser encuadrado dentro de la lógica del sistema-mundo y atenuado por la asignación de funciones subordinadas a las élites de las periferias. En ese modo también los variopintos regímenes post-revolucionarios del siglo XX (como el mexicano y el cubano) fueron paulatinamente encapsulando los procesos de participación popular, apostando a dinámicas de acumulación y dirección social estadocéntricas, bajo las demandas de la inserción global y el realismo político. Estos fenómenos son enunciados por Leyton al abordar cómo las élites dominantes y dirigentes han obstaculizado desde la independencia la libertad y soberanía populares, desencadenando lógicas de cesarismo y subordinación del protagonismo popular.

Varios de los autores abordan el ejemplo icónico de la Revolución Cubana, cuyo radicalismo –en cuanto a la mudanza de las formas y estructuras de propiedad– superaría no solo a los procesos independentistas del siglo XIX sino también al aliento reformista de la Revolución Mexicana. Sin embargo, al reconocer que el proceso cubano tiene como asignatura pendiente el alcanzar un desarrollo económico sustentable que le permita pasar de la reproducción simple a la ampliada y al sostener que “el principal problema del proceso revolucionario cubano tiene que ver con la construcción de un régimen político democrático, o sea, con dos razones de toda revolución moderna: la libertad y la soberanía popular” (Leyton en Rajland y Cotarelo, 2009: 49), se intenta problematizar –sin desarrollar sus contenidos empíricos– la mirada sobre un proceso histórico frecuentemente abordado con tintes apologéticos por la izquierda académica (y militante) latinoamericana.

El valor potencial de esa visión, imprescindible para la visibilización y articulación de proyectos y solidaridades hacia la izquierda anticapitalista y antiburocrática existente al interior de nuestros procesos es enorme, y empalma de forma armónica con el reconocimiento de que la democracia formal (representativa, delegativa, electoral) imperante en las naciones latinoamericanas posee una doble condición al dar cuenta de dominaciones de viejo y nuevo cuño (con su legado de aspiraciones ciudadanas secuestradas e insatisfechas) y posibilitar procesos radicales de empoderamiento y redistribución no autoritarios del poder y la riqueza. Condiciones ambas necesarias para repensar la revolución, en formas radicalmente nuevas, en este milenio que apenas comienza.

Bibliografía

- Galeana, Patricia (comp.) 2010 *Historia Comparada de las Américas: sus procesos independentistas* (México DF: Siglo XXI Editores).
- Guerra, Francois-Xavier 1992 *Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas* (Madrid: MAPFRE).
- Guerra, Francois-Xavier y Lempérière, Annick et al. 1998 *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX* (México DF: Fondo de Cultura Económica).

- Lucena, Manuel 2010 *Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia latinoamericanas* (Madrid: Taurus Historia).
- Pérez Vejo, Tomás 2010 *Elegía criolla. Una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas* (Madrid: Tusquets Editores).
- Rajland, Beatriz y Cotarelo, María Celia (coords.) 2009 *La revolución en el bicentenario. Reflexiones sobre la emancipación, clases y grupos subalternos*. (Buenos Aires: CLACSO) Colección de Grupos de Trabajo.
- Rojas, Rafael 2009 *Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamérica* (México DF: Taurus).
- Sábato, Hilda (coord.) 2003 *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina* (México DF: Fondo de Cultura Económica/Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas).
- Skocpol, Theda 1984 *Los estados y las revoluciones sociales. Un análisis comparativo de Francia, Rusia y China* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Soriano, Graciela 2004 *Hispanoamérica. Historia, desarrollo discrónico e historia política* (Caracas: Fundación Manuel García Pelayo).
- Tilly, Charles 1993 *Las revoluciones europeas. 1492-1992* (Barcelona: Crítica/Grijalbo-Mondadori).

Nota

1 Estudios que en sus más recientes entregas reúnen miradas comparadas y particulares de los procesos nacionales (Galeana, 2010), abordajes desde

la historia política e intelectual (Rojas, 2009) y disputas en torno a las interpretaciones tradicionales de la historia oficial (Lucena, 2010; Pérez Vejo, 2010).

Lista de publicaciones recientes y recibidas

Argentina

Nueva Sociedad 2010 (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 226, marzo-abril, "Honduras, statu quo".

Tercer Sector 2010 (Buenos Aires: Fundación Del Viso) Año XV, N° 76, mayo-junio.

Bélgica

Alternatives sud 2010 (Nueva Lovaina: CETRI/Ediciones Syllepse) Vol. 17, marzo, "Le Brésil de Lula: un bilan contrasté. Points de vue du Sud".

Bolivia

AIPE, CIPCA y Fundación Tierra 2010 *Participación popular y el movimiento aymara* (La Paz: Skorpion).

Arriola, Joaquín y Vasapollo, Luciano 2010 *¿Crisis o big bang? La crisis sistémica del capital: qué, cómo y para quién* (La Paz: CIDES-UMSA).

Baudoin, Magela 2010 *Mujeres de costado. Entrevistas* (La Paz: Plural).

Bautista, Juan José 2010 *Crítica de la Razón boliviana. Elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano con conciencia colonial, moderna y latinoamericana* (La Paz: Rincón).

Campero, Fernando; Molina, Fernando y Mendieta, Gonzalo 2010 *La creación de una nueva dirigencia boliviana. Manifiesto y debate* (La Paz: Eureka).

Coria, Isidora; Calla, Andrés; Muruchi, Khantuta; Nuñez, Bethel; Paz, Eduardo y Torrico, Martín 2010 *La Despolitización de la Raza: Organizaciones Juveniles en la Ciudad de Santa Cruz* (La Paz: Observatorio del Racismo/Embajada del Reino de los Países Bajos).

- Corte Nacional Electoral 2010 *Atlas electoral de Bolivia. Elecciones Generales 1979-2009 y Asamblea Constituyente 2006* (La Paz: CNE, PNUD-Bolivia/IDEA Internacional).
- Chirino Ortiz, Fabiana 2010 *Huellas Migratorias* (La Paz: PIEB).
- Choque, Roberto y Quisbert, Cristina 2010 *Líderes indígenas aymaras. Lucha por la defensa de Tierras Comunitarias de Origen* (La Paz: IBIS/ACPD/Ivos).
- Chuquimia, René Guery; Chambi, Rubén y Claros, Fernando 2010 *La reconstitución del Jach'a Suyu y la Nación Pakajaqi: entre el poder local y la colonialidad del derecho indígena* (La Paz: PIEB).
- De la Fuente, Manuel 2010 *Descentralización, derechos humanos y ciudadanía* (La Paz: Plural/ CESU/The Graduate Institute/JACS-Sudamérica).
- De Sousa Santos, Boaventura 2010 *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde la epistemología del sur* (La Paz: CESU-UMSS).
- Del Granado, Hugo; Mokrani, Leila; Medinacelli, Mauricio y Gumucio, Jorge 2010 *Generación, distribución y uso del excedente de hidrocarburos en Bolivia* (La Paz: PIEB).
- Dermizaky, Pablo 2010 *Justicia Constitucional* (La Paz: Plural).
- Di Marzo, Juseppe 2010 *Buen Vivir para una democracia de la tierra* (La Paz: Plural).
- Fernández, Karina e Illanes, Dante 2010 *En busca de la tierra sin mal. Los derechos indígenas en territorios guaraní.* (La Paz: PIEB).
- Fundación Tierra 2010 *Reconfigurando territorios: reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia* (La Paz: Skorpion).
- Fundación Tierra e International Land Coalition 2010 *Bolivia Post-Constituyente: tierra, territorio y autonomías indígenas* (La Paz: Punto de Encuentro).
- Fundación UNIR 2010 *Informe sobre la conflictividad en Bolivia (enero a mayo de 2010)* (La Paz).
- García Linera, Álvaro 2010 *La potencia plebeya. Acción colectiva, identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia* (La Paz: Comuna/CLACSO/ Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia).
- García Linera, Álvaro; Prada, Raúl; Tapia, Luis y Vega, Oscar 2010 *El Estado. Campo de lucha* (La Paz: Muela del Diablo).
- Guaygua, Germán 2010 *La familia transnacional. Cambios en las relaciones sociales y familiares de migrantes de El Alto y La Paz a España.* (La Paz: PIEB).
- Guzmán, Juan Carlos; Crespo, María del Carmen; Genuzio, Tatiana y Santa Gadea, César 2010 *Uso productivo del excedente hidrocarburífero. Propuesta de creación del Fondo Soberano de las Regiones* (La Paz: PIEB).
- Herbas, Amparo y Patiño, Marco 2010 *Derechos indígenas y gestión territorial. El ejercicio en las TCOs de Lomerío, Mositén y Chacobo-Pacahuara* (La Paz: PIEB).
- Huanacuni, Fernando 2010 *Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales* (La Paz: III-CAB).
- Jordán, Rolando; Sandy, Heliodoro y Arano, Paola 2010 *Excedente y renta en la minería mediante determinantes del crecimiento minero 2000-2009* (La Paz: PIEB).
- Martínez, José y Tejada, Alicia 2010 *Los Derechos indígenas y su cumplimiento en el territorio indígena de Guarayos* (La Paz: PIEB).

- Movimiento de Mujeres Libertad 2010 *¡Libres! Testimonios de mujeres víctimas de dictadura* (La Paz: Plural).
- Pauwels, Gilberto y Forno, Eduardo 2010 *Tinkazos* (La Paz: PIEB) N° 27, "Contaminación ambiental".
- Portocarrero, Gustavo 2010 *Hacia el socialismo en el siglo XXI* (La Paz: Stigma).
- Revista *Umbrales* 2010 (La Paz: CIDES-UMSA) N° 20, "Hidrocarburos, política y sociedad".
- Rodas, Hugo 2010 *Marcelo Quiroga Santa Cruz. El socialismo vivido*. (La Paz: Plural).
- Roosta, Manighe 2010 *Población y desarrollo. Bolivia y los fenómenos de la migración internacional* (La Paz: CIDES-UMSA).
- Ticona, Esteban 2010 *Saberes, conocimientos y prácticas anticoloniales. El pueblo aymara-quechua en Bolivia* (La Paz: Plural/AGRUCO).
- VVAA 2010 *Ciudadanía, política y poder* (Santa Cruz: UAGRM-OPN y FBDM).
- VVAA 2010 *La construcción del Estado autonómico: elementos para el debate y la concertación* (La Paz: Red Institucional del Norte de Potosí/UAGRM/UCB/GTZ).
- VVAA 2010 *Miradas. Nuevo texto constitucional* (La Paz: UMSS/Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia/IDEA Internacional).
- Wanderley Fernanda (dir.) *Revista Tinkazos* (La Paz: PIEB) N° 28, "La participación política de las mujeres y la agenda de equidad de género en Bolivia".
- Yaksic, Fabián II 2010 *Asamblea Legislativa Plurinacional: Desafíos, organización, atribuciones y agenda legislativa* (La Paz: Muela del Diablo).

Brasil

- Silva, Carla Luciana 2009 *VEJA: o indispensável partido neoliberal (1989-2002)* (Cascavel: UNIOESTE) Vol. 7, colección Tiempos Históricos.

Chile

- Amorós, Mario 2010 "La derecha reconquista La Moneda con Sebastián Piñera" en *Rebelión* <www.rebelion.org>, 18 de enero.
- Becerra R., Mauricio 2010 "Un gabinete de gerentes" en *Rebelión*, 16 de febrero.
- Burgos, Pepe 2010 "Reforma por arriba y revolución por abajo" en *Rebelión*, 12 de enero.
- Cademártori, José 2010 "Un gabinete de excelencia para los monopolios" en *Rebelión*, 19 de febrero; "Piñera y Alessandri, diferencias y semejanzas", 1 de febrero.
- Cano Herrera, Mercedes y Ortega Fraile, Julio 2010 "El espíritu exterminador de Pinochet sigue vivo" en *Rebelión*, 6 de enero.
- Cepeda, Cristian 2010 "En Chile que gane la derecha no es sorpresa..." en *Rebelión*, 3 de febrero.
- Contreras, Eduardo 2010 "Democracia de acuerdos" en *Rebelión*, 5 de febrero.
- Coloanne, Francisco 2010 "El plan de estigmatizar a la Concertación" en *Rebelión*, 12 de enero.

- Cortés Morales, Alexis 2010 "La izquierda y la segunda vuelta" en *Rebelión*, 5 de enero.
- Corvalán Vásquez, Luis 2010 *Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en Chile* (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Raúl Silva Henríquez).
- Cuadra, Álvaro 2010 "Transición" en *Rebelión*, 2 de enero.
- Estrada, Daniel 2010 "Las dudas que trae la derecha chilena en América Latina" en *Rebelión*, 20 de febrero.
- Fazio, Hugo 2010 "Pasado y presente de la 'política de los consensos'" en *Rebelión*, 18 de febrero.
- Figuroa Cornejo, Andrés 2010 "Las precauciones del anticapitalismo" en *Rebelión*, 13 de febrero.
- Gimeno, Javier 2010 "De centros de tortura a museos del horror" en *Rebelión*, 13 de febrero.
- Herrera, Roberto 2010 "¿Qué patria queremos?" en *Rebelión*, 17 de enero.
- Lagos, Juan Andrés 2010 "Por más democracia, por el pueblo chileno, para seguir construyendo izquierda" en *Rebelión*, 16 de enero.
- Lavquén, Alejandro 2010 "Comienza la arremetida pinochetista" en *Rebelión*, 26 de enero.
- Morales, Raúl 2010 "¿El sindicalismo no tiene nada que decir?" en *Rebelión*, 8 de enero.
- Neira, Daniel 2010 "La situación política nacional: propuestas ante la nueva coyuntura" en *Rebelión*, 16 de enero.
- Ríos S., Alejandro 2010 "La derrota de la Concertación y la izquierda" en *Rebelión*, 21 de febrero.
- Roitman Rosenmann, Marcos 2010 "¿Qué será de Chile sin la Concertación?" en *Rebelión*, 5 de enero.
- Rojas, Paz 2010 *La Interminable Ausencia* (Santiago de Chile: LOM Ediciones).
- Salazar V., Gabriel 2010 "Neoliberalismo recargado" en *Rebelión*, 12 de febrero.
- Sánchez Rodríguez, Jesús 2010 "¿Elecciones de consecuencias históricas?" en *Rebelión*, 30 de enero.
- Seguel, Alfredo 2010 "Los derechos de los Pueblos Originarios frente al nuevo gobierno chileno" en *Rebelión*, 19 de febrero.
- Sepúlveda, Paloma 2010 "Mapuches y Piñera preparan sus cartas" en *Rebelión*, 15 de febrero.
- Sepúlveda, Pamela "A despenalizar la libertad de expresión" en *Rebelión*, 11 de febrero.
- Sepúlveda Ruiz, Lucía 2010 "'Ofertón' de los fiscales y montajes en zona mapuche" en *Rebelión*, 2 de febrero.
- Silva Cuadra, Esteban 2010 "La cohabitación binominal y el triunfo de la derecha" en *Rebelión*, 1 de febrero.
- Silva, Ernesto 2010 "Las elecciones chilenas: ilusión de armonía o 'la izquierda del siglo XX'" en *Rebelión*, 31 de enero.
- Soto Guzmán, Óscar 2010 "La derrota de la Concertación: una opinión" en *Rebelión*, 7 de febrero.
- Vega, Héctor 2010 *La Fortaleza Americana* (Santiago de Chile: Editorial UARCIS y CLACSO).

- Vega, Héctor 2010 "Un pueblo sin opción" en *Rebelión*, 11 de enero.
- Vega, Héctor 2010 "Un mundo político sin legitimidad" en *Rebelión*, 5 de febrero.
- Walder, Paul 2010 "Del neoliberalismo encubierto al libre mercado desatado" en *Rebelión*, 24 de enero.

Colombia

- Agudelo Aranzazu, Gretchel 2010 "Del Estado y otros mitos y epopeyas; la paz como una apuesta por la ciudadanía", tesis de la FCSH-DA-UdeA.
- Álvarez Castaño, Luz Stella; Bernal Medina, Jorge Arturo y Vallejo Rico, Astrid Helena 2010 *La exclusión social y la desigualdad en Medellín: sus dimensiones objetivas y subjetivas* (Medellín: ENS/Región/Universidad de Antioquia).
- Benjamin, Walter 2010 *Tesis sobre la historia y otros fragmentos* (Bogotá: Desde Abajo).
- Cien días vistos por CINEP/PPP* 2010 (Bogotá) N° 69, mayo.
- Controversia* 2009 (Bogotá: CINEP) N° 193, diciembre.
- Correa Restrepo, Margarita Lucía 2010 "Aquí estoy y sigo para adelante: el proceso de integración de sobrevivientes de minas antipersonal, Antioquia 2007", tesis de la FE-UdeA.
- ENS 2010 (Medellín) "Informe del Sistema de Información Sindical y Laboral –SISLAB–. Estadísticas e información laboral sistematizada a diciembre de 2009".
- ENS 2010 (Medellín) "Informe nacional de coyuntura económica, laboral y sindical en 2009 –Incluye balance de los 8 años del gobierno Uribe–".
- Espinal Restrepo, Verónica 2010 "Discursos políticos y luchas por el reconocimiento: análisis de los marcos de acción colectiva de dos organizaciones de población desplazada. Montería 1998-2008", tesis del IEP-UdeA.
- Fajardo, F. Carlos 2010 *Rostros del autoritarismo: Mecanismos de control en la sociedad global* (Bogotá: Le Monde Diplomatique).
- Fernández Sáenz, Oscar 2010 *Cómo descifrar los mecanismos ocultos tras el respaldo popular de Uribe* (Bogotá: Desde Abajo).
- Gil Ramírez, Max Yuri 2010 "Paramilitarismo y conflicto urbano: relaciones entre el conflicto armado y nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín: 1997-2005", tesis del IEP-UdeA.
- Giraldo Moreno, Javier 2010 *Fusil o Toga/Toga y Fusil* (Bogotá: Códice).
- Iturralde, Manuel A. 2010 *Castigo, liberalismo autoritario y justicia penal de excepción* (Bogotá: Siglo del Hombre/Universidad de los Andes).
- Lopera Londoño, Marcela Inés 2010 "La construcción de sujetos políticos de las víctimas del conflicto armado en Colombia: el caso de la población desplazada en el departamento de Antioquia", tesis de la FCH-UNAL.
- Ospina Duque, Jorge; Barrera Valencia, Mauricio; Ramírez Zapata, Alexandra y Ceballos Cardona, Patricia 2010 *Manual de intervención psicosocial para víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar en Colombia: teoría y practica a partir de la evidencia* (Medellín: FM-UdeA).

- Revista Cultura y Trabajo* 2010 (Medellín: ENS) N° 80, en conmemoración de sus 25 años.
- Revista Foro* 2010 (Bogotá: Foro Nacional por Colombia) N° 70, mayo.
- Ricaurte Munera, Jaime Alberto 2010 "Barrio, tiendas, tenderos e imaginario urbano en la ciudad de Medellín, comuna 3, barrios La Cruz y La Honda", tesis del DS-FCSH-UdeA.
- Ruiz Botero, Luz Dary; Hernández Martínez, Marcilis; Obando López, Luis David y Hernández Vázquez, Neila 2010 *Hasta el sol de hoy... La niñez vulnerada por el conflicto armado colombiano* (Medellín: IPC/FCD).
- VVAA 2010 *Por dentro e'soga: Una mirada social al boom petrolero y al fenómeno transnacional en Casanare* (Bogotá: Cospacc/Desde Abajo) Tomos I y II.
- Zibechi, Raúl 2010 *América Latina: contrainsurgencia y pobreza* (Bogotá: Desde Abajo).

Guatemala

- Bastos Amigo, Santiago y Brett, Rody (comps.) 2010 *El movimiento maya en la década después de la paz (1997-2007)* (Guatemala: F&G Editores).
- Casaús Arzú, Marta Elena y García Giráldez, Teresa 2010 *Las redes intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-1920)* (Guatemala: F&G Editores).
- Figueroa Ibarra, Carlos 2010 *¿En el umbral del posneoliberalismo? Izquierda y gobierno en América Latina* (Guatemala: F&G Editores/FLACSO-Guatemala).
- Lee Woodward Jr., Ralph 2005 *A Short History of Guatemala* (Guatemala: Editorial Laura Lee).
- Loarca Guzmán, Félix 2009 *Asesinato de una esperanza. La muerte de Manuel Colom Argueta y sus repercusiones políticas* (Guatemala: CEUR/Universidad de San Carlos de Guatemala).
- López Batzin, Marta Juana 2009 *Enfoques teóricos políticos en el reconocimiento del sistema jurídico maya en Guatemala* (Guatemala: Asociación Oxlajuj Ajpop).
- Mejía, Marco Vinicio (comp.) 2009 *Colom Argueta entre nosotros* (Guatemala: FCJS-USCG).
- Mujeres Mayas Kaqla 2010 *Mujeres mayas. Universo y vida* (Guatemala: Mujeres Mayas Kaqla).
- Porrás Castejón, Gustavo 2010 *Las huellas de Guatemala* (Guatemala: F&G Editores) febrero, 3ª edición.
- Rodríguez, José Mario 2010 *Los derechos humanos: Una aproximación ética* (Guatemala: F&G Editores).
- Sanford, Victoria 2010 *La masacre de Panzós: Etnicidad, tierra y violencia en Guatemala* (Guatemala: F&G Editores).
- Tischler Visquera, Sergio 2010 *Imagen y dialéctica. Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria* (ICSH "Alfonso Vélez Pliego"-BUAP/FLACSO-Guatemala/F&G Editores).

Trentavizi, Bárbara 2010 *Itinerarios del movimiento indígena americano: la Cumbre de Puno* (Guatemala: F&G Editores).

México

- Albertani, Claudio; Rovira, Guimar y Modonesi, Massimo (coords.) 2010 *La autonomía posible. Reinención de la política y la emancipación* (México: UACM).
- Álvarez Garín, Raúl 2010 *Temas militares y de seguridad. Desde la izquierda y los movimientos sociales* (México: Edición del Comité 68 Pro Libertades Democráticas).
- Bartra, Armando 2010 *Tomarse la libertad. La dialéctica en cuestión*. (México: Ítaca).
- Centro Prodh, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Comité Cerezo y Serapaz 2010 *12 presos por la defensa de su tierra. Es tiempo de su libertad* (México).
- CDHM "Tlachinollan", Centro Prodh y CEJIL 2010 *La impunidad militar a juicio. Los casos de Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García*. (México).
- Desacatos. Revista de Antropología Social* 2010 (México: CIESAS) N° 32, "La epidemia de la influenza humana".
- Estrada Saavedra, Marco y Viqueira, Juan Pedro (coords.) 2010 *Indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Microhistorias* (México: El Colegio de México).
- Isonza Vera, Ernesto y Gurza Lavalle, Adrián (coords.) 2010 *La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social* (México: Publicaciones Casa Chata/ Universidad Veracruzana).
- López Bárcenas, Francisco 2009 *San Juan Copala: dominación política y resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo* (México: UAM-X).
- López Obrador, Andrés Manuel 2010 *La mafia que se adueñó de México... y el 2012* (México: Random House Mondadori).
- López y Rivas, Gilberto 2010 *Antropología, etnomarxismo y compromiso social de los antropólogos* (México: Ocean Sur).
- Montemayor, Carlos 2010 *La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968* (México: Random House Mondadori).
- Osorio, Jaime 2009 *Explotación redoblada y actualidad de la revolución. Refundación societal, rearticulación popular y nuevo autoritarismo* (México: Porrúa/UAM/Itaca).
- Revista Mexicana de Sociología* 2010 (México: UNAM) N° 1, enero; N° 2, abril.
- Romo Cedano, Pablo y Rodríguez Yaiza, Ariana (comps.) 2010 *Desaparición forzada en México. Documentos del proceso de mediación entre el PDPR-EPR y Gobierno Federal* (México: Serapaz).

Panamá

- Azanza Telletxiki, Paco 2009 "20 aniversario de la invasión yanqui a Panamá" en *ALAI. América Latina en Movimiento* <<http://alainet.org>> 12 de diciembre.
- Beluche, Olmedo 2009 "Reseña histórica de las reformas neoliberales a la legislación laboral panameña (1971-2004)" en *Tareas* (Panamá: CELA) N° 133, septiembre-diciembre.
- Carrasquilla II, Olmedo 2009 "Inicia la Movilización Nacional, Indígena, Campesina y Popular" en *ALAI*, 18 de septiembre; "Perspectiva del ecofeminismo en Panamá", 30 de noviembre.
- Castillo C., Janio 2009 *Ruta de tránsito y la formación social panameña, 1980-1999* (Guatemala: FLACSO).
- Castillo Fernández, Dídimo 2009 *Los nuevos trabajadores precarios* (Toluca: UAEM).
- Castro Rodríguez, Manuel 2009 "Los primeros cien días del gobierno de Martinelli" en *ALAI*, 22 de septiembre.
- Clavero, Bartolomé 2009 "¿Hay genocidios pequeños? El Caso Charco La Pava" en *ALAI*, 10 de julio; "Gobierno panameño y AES Panamá en el caso Charco La Pava", 13 de octubre.
- Consejo Nacional de la Defensa de la Soberanía y la Paz (CONADESOPAZ) 2009 "El mundo debe saber" en *ALAI*, 30 de noviembre.
- Endara Hill, Héctor 2009 "Grupo Unidos por el Canal" en *ALAI*, 3 de septiembre; "Urge la delimitación de la Comarca Naso", 1 de octubre; "Lucha indígena y campesina", 8 de octubre; "Siguen las diabluras de los mineros y sus cómplices", 17 de diciembre.
- Gandássegui, Marco A., h. 2009 "Imperialismo norteamericano y la invasión a Panamá de 1989" en *Tareas* (Panamá: CELA) N° 133, agosto-diciembre; "Nueva derecha en el poder juega política" en *ALAI*, 9 de julio; "Llegó el espionaje de alta tecnología a Panamá", 17 de julio; "¿Tiene proyecto viable la izquierda?", 13 de agosto; "FRENADESO explora futuro electoral", 20 de agosto; "El futuro del PRD", 28 de agosto; "Regresará Noriega", 17 de septiembre; "Cómo erradicar la criminalidad", 24 de septiembre; "Bases ¡No! Grita el pueblo panameño", 28 de septiembre; "Universidad y el proyecto de nación", 1 de octubre; "Los primeros cien días del presidente Martinelli", 8 de octubre; "Martinelli rechazó a los pueblos indígenas", 15 de octubre; "Otro rostro para la pobreza", 23 de octubre; "Panamá anuncia que EEUU quiere 4 bases 'aeronavales'", 4 de noviembre; "El legado que construye Martinelli", 26 de noviembre; "Las protestas de la juventud panameña", 12 de diciembre; "Panamá conmemora XX aniversario de la invasión militar norteamericana", 17 de diciembre.
- González Marcó, Chevige 2009 "Martinelli, autodenominado el 'Anti-Chávez' de América y la conexión imperial-golpista" en *ALAI*, 6 de octubre.
- Garza, Fernando 2009 "Un modelo regional de nueva derecha; el caso de Panamá" en *ALAI*, 7 de septiembre.
- Herrera, Luis C. 2009 *Políticas de control en la democracia panameña (1194-2004)* (Panamá: IDEN-UP).

- Luna, Clara Inés y Sánchez, Salvador 2009 "Panamá: paraíso imperfecto" en *Revista de Ciencia Política* (Santiago de Chile: ICP-PUCCH) Vol. 29, N° 2.
- Manduley, Julio 2009 *Panamá, estructura, coyuntura, conflicto, clases y política* (Panamá: CEE).
- Ministerio de Desarrollo Social 2009 *La arquitectura del cambio institucional del MIDES, 2004-2009* (Panamá: MIDES).
- Miró G., Carmen A. 2009 *Antología. América Latina, población y desarrollo*. (Bogotá: CLACSO).
- Pérez, Eliécer 2009 "La pena de prisión en el nuevo Código Penal panameño" en *Cuadernos Panameños de Criminología* (Panamá: IC-FDCP-UP) N° 7.
- Turner, Anayansi 2009 "El derecho de huelga en el Canal de Panamá" en *Tareas* (Panamá: CELA) N° 133, septiembre-diciembre.
- Valdes, Rodelick 2009 "Políticas indígenas y el Estado panameño" en *ALAI*, 22 de octubre.
- Valdés M., Ángel T. 2009 "La dirección política del gobierno de Martinelli" en *ALAI*, 6 de octubre.
- Ventocilla, Jorge 2009 "Instantáneas de una marcha indígena y campesina" en *ALAI*, 10 de octubre.
- Yao Villalaz, Julio 2009 "Para entender la invasión de EEUU a Panamá" en *Tareas* (Panamá: CELA) N° 133, agosto-diciembre; "Discurso ante el mausoleo de los soldados de la Independencia" en *ALAI*, 2 de noviembre; "El discurso que irritó al gobierno panameño", 19 de noviembre.

Perú

- AAVV 2009 *Del hortelano su perro. Sin espacio ni tiempo histórico*. (Lima: DESCO) julio, serie Perú Hoy, N° 15.
- AAVV 2009 *Luces y sombras del poder* (Lima: DESCO) diciembre, serie Perú Hoy, N° 16.
- Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del pueblo 2009 *El derecho a la consulta de los pueblos indígenas* (Lima) Informe N° 011-2009-DP/AMASPPI-PPI, mayo.
- Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo 2009 *Actuaciones Humanitarias realizadas por la Defensoría del Pueblo con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, en las provincias de Utcubamba y Bagua, región Amazonas, en el contexto del paro amazónico* (Lima) Informe de Adjuntía N° 006-2009-DP/ADHPD.
- Alimonda, Héctor; Hoetmer, Raphael y Saavedra Celestino, Diego (eds.) 2009 *La amazonía rebelde. Perú 2009* (Lima: CLACSO/PDTG/CONACAMI/CooperAcción/UNMSM) septiembre.
- Burneo, María Luisa y Chaparro, Anahí 2009 *Dinámicas de transferencia y cambios en los usos y valoraciones de la tierra en un contexto de expansión minera: el caso de la comunidad campesina de Michiquillay* (Lima: CISEPA-PUCP/CEPES/ILC) noviembre, informe de investigación de estudio de caso.
- Castillo Castañeda, Pedro 2009 *El derecho a la tierra y los acuerdos internacionales. El caso del Perú* (Lima: CEPES e ILC) octubre.

- Chiraf, Alberto y Cornejo Chaparro, Manuel (comps.) 2009 *Imaginario e imágenes de la época del caucho. Los sucesos del Putumayo* (Lima: CAAAP, IWGIA y UPC).
- Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI) 2009 *Perú: Informe Alternativo 2009 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Versión abreviada* (Lima) octubre.
- Dourojeanni, Marc; Barandiarán, Alberto y Dourojeanni, Diego 2009 *Amazonía Peruana en 2021. Explotación de los recursos naturales e infraestructura: ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que significa para el futuro?* (Lima: ProNaturaleza, DAR, SPDA e ICAA).
- Durand, Anahí 2009 *¿Tierras de nadie? Empresas extractivas, territorio y conflictividad social en el río Cenepa* (Lima: CISEPA-PUCP, SER e ILC) informe de investigación de estudio de caso.
- García Hierro, Pedro y Surrallés, Alexandre 2009 *Antropología de un Derecho. Libre determinación territorial de los pueblos indígenas como derecho humano* (Lima: IWGIA y Alternativa Solidaria).
- Gorriti, Gustavo 2009 "Reseña de muertes" en *Caretas* (Lima) N° 2086, julio.
- Guerra García Cueva, Hernando 2009 *La reforma agraria peruana* (Lima: edición del autor) septiembre.
- López, Alfonso 2009 *Sí pues, el territorio es nuestro. Una historia ilustrada y contada por Alfonso López* (Lima: PDTG, CONACAMI, AIDSESEP) diciembre.
- Maquera, Roger 2009 *Las comunidades campesinas en la región Ayacucho* (Lima: SER); *Las comunidades campesinas en la región Puno*.
- Montoya Rojas, Rodrigo 2009 "'Con los Rostros Pintados': Tercera Rebelión Amazónica en Perú (agosto 2008 - junio 2009)" en *ALAI*, 21 de agosto.
- Noriega, Carlos 2009 "Bagua, la otra verdad. Historia no oficial de la Curva del Diablo. Hablan los Awaqun" en *La Primera* (Miraflores: Grupo Editorial Arena) Año IV, N° 1550, 29 de junio, informe especial.
- Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) 2009 *Perú: crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajun en la cordillera del Cóndor a favor de la minería* (Lima: IWGIA y GTRU), informe N° 5.
- Orge Fuentes, Daniela y Wiig, Henrik 2009 *Closing the gender land gap: the effects of land-titling for women in Peru* (Oslo: NIBR) noviembre, working paper N° 120.
- Osorio, Serafín 2009 *Las comunidades campesinas en la región Ancash* (Lima: SER); *Las comunidades campesinas en la región Junín*.
- Pacheco, Ivonne 2009 *Las comunidades campesinas en la región Huancavelica* (Lima: SER).
- Pajuelo Teves, Ramón 2009 "El país sin indígenas del Sr. Alan García" en *Idee* (Lima: IDL) N° 196, diciembre; "Bagua y los conflictos sociales: una hipótesis de trabajo" en *Cabildo Abierto. Revista de análisis político* (Puno: Asociación SER) N° 41, julio; "El Cuzco y sus protestas indígenas y 'mistis'" en *Parlante* (Cuzco: Centro Guaman Poma de Ayala) Año 24, N° 100, julio-agosto.

- Postigo, Julio C. y Montoya, Mariana 2009 "Conflictos en la Amazonía: Un análisis desde la ecología política" en *Debate Agrario. Análisis y alternativas*. (Lima: CEPES) N° 44, noviembre.
- Smith, Richard Chase 2009 "Bagua, la verdadera amenaza" en *Poder 360°* (Lima) N° 5, 20 de julio.
- Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo 2008 *Conflictos Sociales conocidos por la Defensoría del Pueblo* (Lima) N° 59, enero; N° 65, julio de 2009; N° 66, agosto; N° 67, septiembre; N° 68, octubre; N° 69, noviembre; N° 70, diciembre.
- Vladimir, Gil 2009 *Aterrizaje minero. Cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo desde la minería en Ancash, Perú* (Lima: IEP).

Venezuela

- Álvarez, Víctor 2010 *Venezuela: ¿Hacia dónde va el modelo productivo?* (Caracas: CIM).
- Aponte Blank, Carlos 2010 "El gasto público social durante los períodos presidenciales de Hugo Chávez: 1999-2009" en *Revista Cuadernos del CENDES* (Caracas) N° 73.
- Benítez, Tello 2010 "Sobre control obrero" en *Conflictove* <<http://conflictove.wordpress.com>> 25 de mayo.
- García Guadilla, María del Pilar 2010 "El movimiento estudiantil venezolano: narrativas, polarización social y públicos antagónicos" en *Revista Cuadernos del CENDES* (Caracas) N° 73.
- Las Heras, Mikel 2010 "Cuando la violencia se instala" en *Conflictove*, 28 de enero.
- Montes de Oca, Rodolfo 2010 "Apuntes y comentarios sobre la huelga de hambre" en *Debatiendo* <www.debatiendo.com.ve>.
- Moreno, Amado 2010 *Capitalismo y revolución* (Mérida: Universidad de Los Andes).
- Ojeda, Yolanda 2010 "La 'revolución' castiga a dirigentes sindicales que reclaman sus derechos" en *Conflictove*, 3 de julio.
- Perdomo Arzola, Edgar 2010 "La revolución: ¿en zona de alto riesgo?" en *La Cl@se.info* <<http://laclase.info>> sección "Movimiento obrero", 16 de julio.
- Ponce, Marco Antonio 2010 "¿Permiso para manifestar pacíficamente?" en *Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)* <<http://www.derechos.org.ve>> sección "Artículos de Opinión", 6 de febrero.
- Revista SIC* 2010 (Caracas: Centro Gumilla) N° 721, "Economía sin luz"; N° 722, "A dónde va el país"; N° 724 "Comunas sin comunidad".
- Simonetti, Enrico 2010 "El Estado y la revolución venezolana" en *La Cl@se.info*, sección "Teoría", 29 de mayo.
- Torres, Ana Teresa 2010 *La herencia de la tribu. Del mito de la Independencia a la Revolución Bolivariana*. (Caracas: Academia Venezolana de la Lengua).
- Uzcátegui, Rafael 2010 "Derecho a la huelga y movimiento obrero" en *La Cl@se.info*, sección "Movimiento obrero", 30 de junio.

